

CÓDIGO PENAL

INTRODUCCIÓN

En la eterna e incesante lucha de la sociedad en pro de la perfección jurídica y el imperio de la ley, que se inicia en los ya lejanos tiempos primitivos de la venganza privada en su forma absoluta y de la venganza pública reglamentada como paliativo al exceso de la primera, y que deviene ininterrumpida hasta los días que decurren, preconizadores del respeto a la dignidad humana, el Derecho Penal -o como quiera que se le denomine por las tendencias científicas- ha preocupado apasionantemente a tratadistas y legisladores, juristas y magistrados, catedráticos e investigadores, por la razón elocuente de que a la par que representa un poderoso instrumento jurídico para la defensa de la colectividad, incide con sus efectos, la represión, la sanción o la pena, sobre los más preciados atributos y las más íntimas afecciones del hombre: su honor y su fama, su nombre, su familia y su porvenir.

Transformada en efectiva la relación hipotética o preventiva que se establece entre el Estado y sus súbditos cuando la ley tipifica los delitos y señala las penas no como amenaza propiamente sino como advertencia y límite, se inicia de inmediato el difícil y delicado camino del proceso penal para juzgar la conducta ilícita, y el más escabroso aún de la ejecución de la sentencia condenatoria. Es cuando la trilogía integrada por el delincuente, el delito y la pena, se torna en sugestivo problema que concita la unánime preocupación de quienes participan, de una u otra manera, en la expedición de la regla jurídica, en su interpretación y aplicación, en la defensa del imputado y en la suerte del reo una vez que se pierde entre los muros, las rejas y las sombras de los establecimientos penitenciarios.

El Derecho Penal Ecuatoriano no podía dejar de lado tan complejo quehacer. Lo ha observado con atención creciente y lo ha practicado acatando las recomendaciones de la dilatada y multifacética doctrina y los sabios consejos del Derecho Comparado, siempre a medida de sus recursos y en armonía con la realidad de su ambiente.

La República del Ecuador se constituye en entidad autárquica cuando los grandes postulados de la Revolución Francesa habían influido decisivamente y por años de años sobre los derechos positivos de los pueblos regidos por el sistema de derecho Occidental o Continental, luminaria que alumbra también a Hispanoamérica, avivada con la aureola del prestigio del Derecho Romano y de la Codificación Napoleónica. Al Ecuador no le afectan los regímenes empíricos de las costumbres penales y del arbitrio judicial. Sus leyes punitivas se expiden al amparo de principios relativamente humanitarios.

Esto sin embargo, ni la Escuela Clásica cuyos postulados renovadores enseñan Francisco Carrara en su magistral "Programa" y el Marqués de Beccaria al propugnar que la pena ha de ser esencialmente pública, pronta, necesaria, proporcionada al delito, señalada por las leyes y lo menos rigurosa posible atendiendo a las circunstancias, ni la Positivista sustentada por Lombroso, Ferri y Garófalo, son recogidas por el legislador ecuatoriano en plenitud de conceptos y en oportunidad de tiempo. La legislación sustantiva penal del Ecuador, que cercano el fin del Siglo XIX, toma como modelo el Código belga de 1880, que a su vez se inspira en el francés de 1810, no puede ser considerada como fiel y completo trasunto de los principios de las escuelas penales imperantes.

Ni siquiera el Código de 1906 podría considerarse como nítida expresión de tales postulados. Con casi imperceptibles modificaciones son los mismos preceptos dogmáticos y la misma forma de tipificar el acto ilícito de los Códigos de 1872 y 1889 los que se encierran en su contexto, por mucho que el fundamento de su expedición fue el de la "inaplazable necesidad de reformar" las leyes ecuatorianas. ...

Un gran progreso, a pesar de ello, se opera en la punición. Tres años antes de que comience el Siglo XX, la bárbara e ignominiosa pena de muerte es abolida como forma de **castigar** ciertos delitos. Es justo motivo de orgullo para el Ecuador el que mientras países que se precian de aplicar la política criminal, las medidas de seguridad y los sistemas progresivos de rehabilitación del penado, mantienen la mal llamada pena, reglamentando en forma deprimente y con lujo de detalles impresionantes y macabros la forma de ejecutarla, el poder legislativo ecuatoriano, valorando lo que significa el complejo problema de la etiología del delito como resultado de factores endógenos y exógenos que el Estado no ha podido controlar, expide un histórico y libérrimo documento concebido en términos lacónicos pero de valiosísimo contenido:

"LA ASAMBLEA NACIONAL,

Decreta:

Art. 1o.- La pena de reclusión mayor extraordinaria se sustituye a la de muerte.

Art. 2o.- Quedan reformados en este sentido los artículos del Código Penal que imponen pena de muerte.

Dado en Quito, Capital de la República, a trece de junio de mil ochocientos noventa y siete.- El Presidente de la Asamblea,

A. MONCAYO.- El Diputado Secretario, Luciano Coral.- El Diputado Secretario, Celiano Monge.

Palacio de Gobierno, en Quito, a 26 de junio de 1897. EJECÚTESE.- El Vicepresidente, Encargado del Poder Ejecutivo, MANUEL B. CUEVA.- El Ministro de Justicia.- B. ALBÁN MESTANZA".

Después del Código de Alfaro, que perdura por más de treinta años, adviene el de 1938, hasta ahora vigente con indispensables y prudentes reformas. Se introducen en su estructura la condena de ejecución condicional y la liberación condicional; se abandona la infamante clasificación tripartita de las infracciones en crímenes, delitos y contravenciones, pero poco o casi nada se regulan las medidas de seguridad; la pena sigue su trillado camino, pues que ni se prevén sistemas de verdadera rehabilitación, ni se afronta la condena indeterminada. Y si bien no se adoptan decididamente las tesis de la "terza scoula", de la escuela correccionalista, de la política criminal, de las escuelas humanista y de los substitutivos penales, de la patológica, de la sociológica, de la del tecnicismo jurídico, se evoluciona lentamente, al parecer por camino firme, tanto como las posibilidades que el Estado lo permiten.

Los últimos Códigos Penales Ecuatorianos, que no pueden ser calificados como nuevos en estricto sentido doctrinario, pero que tampoco pueden ser considerados como antiguos en forma totalmente peyorativa, como alguna vez se afirmara tal vez pueden ser tenidos, en cierta manera, como humanos ...

En los días de conmoción y angustia que vive el mundo todo, en el ámbito de la actual problemática social hacen falta, ciertamente, preceptos incriminatorios que, sin llegar al campo del totalitarismo, defiendan al Estado, sus bases fundamentales y sus poderes inmanentes y protejan a los asociados de los peligros de una nueva y sorprendente forma delictual.

Y falta también una sustancial modificación de todo el sistema jurídico penal: el dogma, la incriminación y el procedimiento para juzgar al sujeto activo del delito reclaman una urgente revisión y en gran escala; el Derecho Ejecutivo Penal debe ser incorporado al Derecho Positivo Ecuatoriano sobre sólidos y nuevos criterios científicos.

Para esta ímproba labor, para esta tarea titánica requiérese de un precioso y prolongado tiempo del que por la índole de sus facultades carece la Comisión Jurídica. Ha querido, por lo menos, reorganizar tan importante Código como el presente, para entregarlo a quienes de él necesitan en el diario menester de la meditación y el estudio, el ejercicio profesional o la administración de justicia, a fin de que en sus páginas encuentren, fundidas en un todo orgánico, las normas del Código vigente y las reformas de los últimos años.

Ojalá pronto el Derecho Penal Ecuatoriano, inestable como todos los de Iberoamérica, encuentre su ruta y su destino bajo la égida de las tesis contemporáneas, para perfección del Estado y norma de civilizado convivir de los asociados.

Libro Primero

DE LAS INFRACCIONES, DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LAS INFRACCIONES Y DE LAS PENAS EN GENERAL

Título I

DE LA LEY PENAL

Capítulo Único

Art. 1.- Leyes penales son todas las que contienen algún precepto sancionado con la amenaza de una pena.

Art. 2.- Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle expresamente declarado infracción por la ley penal, ni sufrir una pena que no esté en ella establecida.

La infracción ha de ser declarada, y la pena establecida, con anterioridad al acto.

Deja de ser punible un acto si una ley posterior a su ejecución lo suprime del número de las infracciones; y, si ha mediado ya sentencia condenatoria, quedará extinguida la pena, haya o no comenzado a cumplirse.

Si la pena establecida al tiempo de la sentencia difiere de la que regía cuando se cometió la infracción, se aplicará la menos rigurosa.

En general, todas las leyes posteriores sobre los efectos y extinción de las acciones y de las penas se aplicarán en lo que sean favorables a los infractores, aunque exista sentencia ejecutoriada.

Art. 3.- Se presume de derecho que las leyes penales son conocidas de todos aquellos sobre quienes imperan. Por consiguiente, nadie puede invocar su ignorancia como causa de disculpa.

Art. 4.- Prohíbese en materia penal la interpretación extensiva. El juez debe atenerse, estrictamente, a la letra de la ley. En los casos de duda se la interpretará en el sentido más favorable al reo.

Art. 5.- Toda infracción cometida dentro del territorio de la República, por ecuatorianos o extranjeros, será juzgada y reprimida conforme a las leyes ecuatorianas, salvo disposición contraria de ley.

Se reputan infracciones cometidas en el territorio de la República:

Las ejecutadas a bordo de naves o aeróstatos ecuatorianos de guerra o mercantes, salvo los casos en que los mercantes estén sujetos a una ley penal extranjera, conforme al Derecho Internacional; y las cometidas en el recinto de una Legación Ecuatoriana en país extranjero.

La infracción se entiende cometida en el territorio del Estado cuando los efectos de la acción u omisión que la constituyen deban producirse en el Ecuador o en los lugares sometidos a su jurisdicción.

Será reprimido conforme a la ley ecuatoriana el nacional o extranjero que cometa fuera del territorio nacional alguna de estas infracciones:

1a.- Delitos contra la personalidad del Estado;

2a.- Delitos de falsificación de sellos del Estado, o uso de sellos falsificados;

3a.- Delitos de falsificación de moneda o billetes de Banco de curso legal en el Estado, o de valores sellados, o de títulos de crédito público ecuatorianos;

4a.- Delitos cometidos por funcionarios públicos a servicio del Estado, abusando de sus poderes o violando los deberes inherentes a sus funciones;

5a.- Los atentados contra el Derecho Internacional; y,

6a.- Cualquiera otra infracción para la que disposiciones especiales de la ley o convenciones internacionales establezcan el imperio de la ley ecuatoriana.

Los extranjeros que incurran en alguna de las infracciones detalladas anteriormente, serán juzgados y reprimidos conforme a las leyes ecuatorianas, siempre que sean aprehendidos en el Ecuador, o que se obtenga su extradición.

Art. 6.- La extradición se realizará en los casos y en la forma determinados por la Constitución, la ley de la materia y el Código de Procedimiento Penal.

Art. 7.-  (Sustituido por la Disposición Final Primera de la Ley 2000-24, R.O. 144-S, 18-VIII-2000).- El ecuatoriano que, fuera de los casos contemplados en el artículo anterior, cometiere en país extranjero un delito para el que la ley ecuatoriana tenga establecida pena privativa de libertad mayor de un año, será reprimido según la ley penal del Ecuador, siempre que se encuentre en territorio ecuatoriano.

Art. 8.- Cuando la ley penal hace depender del decurso del tiempo algún efecto jurídico, para el cómputo del lapso legal se contarán todos los días.

Art. 9.- Cuando dos disposiciones penales estén en oposición, prevalecerá la especial.

Título II

DE LAS INFRACCIONES EN GENERAL

Capítulo I

DE LA INFRACCIÓN CONSUMADA Y DE LA TENTATIVA

Art. 10. - Son infracciones los actos imputables sancionados por las leyes penales, y se dividen en delitos y contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar.

Art. 11. - Nadie podrá ser reprimido por un acto previsto por la ley como infracción, si el acontecimiento dañoso o peligroso de que depende la existencia de la infracción, no es consecuencia de su acción u omisión.

Art. 12. - No impedir un acontecimiento, cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo.

Art. 13. - El que ejecuta voluntariamente un acto punible será responsable de él, e incurrirá en la pena señalada para la infracción resultante, aunque varíe el mal que el delincuente quiso causar, o recaiga en distinta persona de aquella a quien se propuso ofender.

En caso de concurrir con el acto punible causas preexistentes, simultáneas o supervinientes, independientes de la voluntad del autor, se observarán las reglas que siguen:

Si el acontecimiento, que no estuvo en la intención del autor, se realiza como consecuencia de la suma de una o más de estas causas con el acto punible, el reo responderá de delito preterintencional.

Si el acontecimiento se verifica como resultado de una o más de dichas causas, sin sumarse al acto punible, no será responsable el autor sino de la infracción constituida por el acto mismo.

Art. 14. - La infracción es dolosa o culposa.

La infracción dolosa, que es aquella en que hay el designio de causar daño, es:

Intencional, cuando el acontecimiento dañoso o peligroso, que es el resultado de la acción o de la omisión de que la ley hace depender la existencia de la infracción, fue previsto y querido por el agente como consecuencia de su propia acción u omisión; y,

Preterintencional, cuando de la acción u omisión se deriva un acontecimiento dañoso o peligroso más grave que aquél que quiso el agente.

La infracción es culposa cuando el acontecimiento, pudiendo ser previsto pero no querido por el agente, se verifica por causa de negligencia, imprudencia, impericia, o inobservancia de ley, reglamentos u órdenes.

Art. 15. - La acción u omisión prevista por la ley como infracción no será punible cuando es el resultado de caso fortuito o fuerza mayor.

Art. 16. - Quien practica actos idóneos conducentes de modo inequívoco a la realización de un delito, responde por tentativa si la acción no se consuma o el acontecimiento no se verifica.

Si el autor desiste voluntariamente de la acción está sujeto solamente a la pena por los actos ejecutados, siempre que éstos constituyan una infracción diversa, excepto cuando la ley, en casos especiales, califica como delito la mera tentativa.

Si voluntariamente impide el acontecimiento, está sujeto a la pena establecida para la tentativa, disminuida de un tercio a la mitad.

Las contravenciones sólo son punibles cuando han sido consumadas.

Art. 17. - La conspiración y la proposición para cometer un delito sólo serán reprimidas en los casos que la ley determina.

Se entiende que hay conspiración cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito; y existe proposición, cuando el que ha resuelto cometerlo propone su comisión a otra u otras personas.

Si la conspiración o la proposición, aun en el caso de estar reprimida por la ley, deja de producir efectos por haber sus autores desistido voluntariamente de la ejecución, antes de iniciarse procedimiento judicial contra ellos, no se les aplicará pena alguna.

Capítulo II

DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA INFRACCIÓN

Art. 18. - No hay infracción cuando el acto está ordenado por la ley, o determinado por resolución definitiva de autoridad competente, o cuando el indiciado fue impulsado a cometerlo por una fuerza que no pudo resistir.

Art. 19. - No comete infracción de ninguna clase el que obra en defensa necesaria de su persona, con tal que concurren las siguientes circunstancias: actual agresión ilegítima; necesidad racional del medio empleado para repeler dicha agresión, y falta de provocación suficiente de parte del que defiende.

Nota:

El presente artículo fue modificado por fe de erratas (R.O. 173, 3-III-1971).

Art. 20.- Se entenderá que concurren las circunstancias enumeradas en el artículo anterior, si el acto ha tenido lugar defendiéndose contra los autores de robo o saqueo ejecutados con violencia; o atacando a un incendiario, o al que roba o hurta en un incendio, cuando son aprehendidos en delito flagrante; o rechazando durante la noche el escalamiento o fractura de los cercados, murallas o entradas a una casa o departamento habitados o de sus dependencias, a menos que conste que el autor no pudo creer en un atentado contra las personas, ya se atienda al propósito directo del individuo que escalaba o fracturaba, ya a las resistencias que debían encontrar las intenciones de éste.

Art. 21.- No comete infracción alguna el que obra en defensa de otra persona, siempre que concurren las dos primeras circunstancias del Art. 19 y que, en caso de haber precedido provocación al agresor, no hubiere tomado parte en ella el que defiende.

Art. 22.-  (Sustituido por el Art. 1 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005).- Tampoco hay infracción alguna cuando una persona mata o causa lesiones a otra en el momento de ser víctima de un delito de abuso sexual o violación.

Art. 23.- No hay infracción en los golpes que se den sin causar heridas o lesiones graves, a los reos de hurto o robo, cuando se les sorprende en flagrante delito, o con las cosas hurtadas o robadas.

Art. 24.- No se impondrá ninguna pena al que, en la necesidad de evitar un mal, ejecuta un acto que produzca daño en la propiedad ajena, siempre que sea real el mal que se haya querido evitar, que sea mayor que el causado para prevenirlo, y que no haya habido otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo.

Art. 25.- Son excusables el homicidio, las heridas y los golpes, cuando son provocados por golpes, heridas u otros maltratamientos graves de obra, o fuertes ataques a la honra o dignidad, inferidos en el mismo acto al autor del hecho, o a su cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos, o afines dentro del segundo grado.

Son también excusables las infracciones determinadas en el inciso anterior, cuando son el resultado de un exceso de legítima defensa.

Art. 26.- Son igualmente excusables dichas infracciones cuando han sido cometidas rechazando durante el día el escalamiento o fractura de los cercados, murallas, o entradas de una casa habitada, o de sus dependencias; salvo que conste que el autor del hecho no pudo creer en un atentado contra las personas, ya se atienda al propósito directo del individuo que intentaba el escalamiento o fractura, ya al efecto de la resistencia que encontrarían las intenciones de éste.

Art. 27.-  (Derogado por el Art. 1 de la Ley 106, R.O. 365, 21-VII-1998).

Art. 28.- Los motivos de excusa enumerados en los Arts. 25 y 26, no son admisibles si el culpado comete la infracción en la persona de sus ascendientes.

Art. 29.- Son circunstancias atenuantes todas las que, refiriéndose a las causas impulsivas de la infracción, al estado y capacidad física e intelectual del delincuente, a su conducta con respecto al acto y sus consecuencias, disminuyen la gravedad de la infracción, o la alarma ocasionada en la sociedad, o dan a conocer la poca o ninguna peligrosidad del autor, como en los casos siguientes:

1o.- Preceder de parte del acometido provocaciones, amenazas o injurias, no siendo éstas de las calificadas como circunstancia de excusa;

2o.- Ser el culpable mayor de sesenta años de edad;

3o.- Haber el delincuente procurado reparar el mal que causó, o impedir las consecuencias perniciosas del acontecimiento, con espontaneidad y celo;

4o.- Haber delinquido por temor o bajo violencia superables;

5o.- Presentarse voluntariamente a la justicia, pudiendo haber eludido su acción con la fuga o el ocultamiento;

6o.- Ejemplar conducta observada por el culpado con posterioridad a la infracción;

7o.- Conducta anterior del delincuente que revele claramente no tratarse de un individuo peligroso;

8o.- Rusticidad del delincuente, de tal naturaleza que revele claramente que cometió el acto punible por ignorancia;

9o.- Obrar impulsado por motivos de particular valor moral o social;

10o.- La confesión espontánea, cuando es verdadera;

11o.- En los delitos contra la propiedad, cuando la indigencia, la numerosa familia, o la falta de trabajo han colocado al delincuente en una situación excepcional; o cuando una calamidad pública le hizo muy difícil conseguir honradamente los medios de subsistencia, en la época en que cometió la infracción; y,

12o.- En los delitos contra la propiedad, el pequeño valor del daño causado, relativamente a las posibilidades del ofendido.

Art. ... (1).- (Agregado por el Art. 2 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005).- Para los delitos de trata de personas y delitos sexuales, no se considerarán circunstancias atenuantes, excepto las siguientes:

1. La contemplada en el numeral 5 del artículo 29; y,

2. Que el sospechoso, imputado o acusado colabore eficazmente con las autoridades en la investigación del delito.

Art. ... (2).- **Atenuantes en delitos de función de servidoras o servidores militares o policiales.**- (Agregado por el Art. 1 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Para la imposición de las penas por los delitos de función de servidoras o servidores militares o policiales, se aplicarán las atenuantes contempladas en este código para los delitos comunes, cuando estas circunstancias concurren en el hecho.

Art. 30.- Son circunstancias agravantes, cuando no son constitutivas o modificatorias de la infracción, todas las que aumentan la malicia del acto, o la alarma que la infracción produce en la sociedad, o establecen la peligrosidad de sus autores, como en los casos siguientes:

1o.- Ejecutar la infracción con alevosía, traición, insidias o sobre seguro; o por precio, recompensa o promesa; o por medio de inundación, naufragio, incendio, veneno, minas, descarrilamiento de ferrocarriles, armas prohibidas, u otros medios que pongan en peligro a otras personas a más de la ofendida; o empleando la astucia, el disfraz, el fraude; o con ensañamiento o crueldad, haciendo uso de cualquier tortura u otro medio de aumentar y prolongar el dolor de la víctima; o imposibilitando al ofendido para defenderse, ya sea que para esto se le prive del uso de la razón, ya se empleen auxiliares en la comisión del delito; o haberse cometido éste como medio de cometer otro; o perpetrar el acto prevaliéndose el autor de su condición de autoridad, o entrando deliberadamente en la casa de la víctima, o después de haber recibido algún beneficio de ésta;

2o.- Aprovecharse de incendio, naufragio, sedición, tumulto o conmoción popular u otra calamidad o desgracia pública o particular, para ejecutar la infracción;

3o.- Llevarla a cabo con auxilio de gente armada, o de personas que aseguren la impunidad; o tomando falsamente el título, las insignias o el nombre de la autoridad; o mediante orden falsa de ésta; o con desprecio u ofensa de los depositarios del poder público; o en el lugar mismo en que se hallen ejerciendo sus funciones; o donde se celebre una ceremonia religiosa de cualquier culto permitido o tolerado en la República;

4o.- Ejecutar el hecho punible buscando de propósito el despoblado o la noche; o en pandilla; o abusando de la amistad o de la confianza que se dispense al autor; o con escalamiento o fractura; con ganchos o llaves falsas y maestras; o con violencia;

5o.- Estar el autor perseguido o prófugo por un delito anterior; haber aumentado o procurado aumentar las consecuencias dañosas de la infracción; cometer el acto contra un agente consular o diplomático extranjero; y, en los delitos contra la propiedad, causar un daño de relevante gravedad, en consideración a las condiciones del ofendido;

6o.- (Agregado por el Art. 3 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005).- Ejecutar la infracción por motivos de discriminación, referente al lugar de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, posición económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diferencia de cualquier otra índole.

Art. ... (1).- (Agregado por el Art. 4 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005).- En el caso de delitos sexuales y de trata de personas, se considerarán como circunstancias agravantes, cuando no fueren constitutivas o modificatorias de la infracción y se aplicarán sin perjuicio de las circunstancias agravantes generales señaladas en el artículo anterior, las siguientes:

1. Si la víctima es una persona mayor de sesenta años o menor de dieciocho años de edad, persona con discapacidad o de aquellas que el Código Civil considera incapaces;

2. Encontrarse la víctima, al momento de la comisión del delito, en establecimientos públicos o privados, tales como los de salud, educación, culto, investigación, asistencia o refugio, en centros de rehabilitación social o en recintos policiales o militares, u otros similares;

3. Aprovecharse de que la víctima atraviesa por una situación de vulnerabilidad, extrema necesidad económica o de abandono;

4. Haber contagiado a la víctima con una enfermedad grave, incurable o mortal, o haberle producido lesiones que causen incapacidad permanente, mutilaciones, pérdida o inutilización de órganos, discapacidad física, perturbación emocional, trastorno psicológico o mental;
5. Si la víctima estuviere o resultare embarazada, o si estuviere en puerperio, o si abortare como consecuencia de la comisión del delito;
6. Si la víctima estuviere incapacitada física o mentalmente;
7. Tener el infractor algún tipo de relación de poder y/o autoridad sobre la víctima, o si es adoptante, tutor, curador o si tiene bajo su cuidado, por cualquier motivo, a la víctima;
8. Compartir con la víctima el ámbito familiar;
9. Conocer a la víctima con anterioridad a la comisión del delito;
10. Si el delito sexual ha sido cometido como una forma de tortura, o con fines de intimidación, degradación, humillación, discriminación, venganza o castigo;
11. Si el delito ha sido cometido por funcionarios públicos, docentes o ministros de algún culto, que han abusado de su posición para cometerlo, por profesionales de la salud y personas responsables en la atención del cuidado del paciente; o cualquier otra clase de profesional o persona que hubiere abusado de su función o cargo para cometer el delito; y,
12. Haber utilizado para cometer el delito, alguna sustancia que altere el conocimiento o la voluntad de la víctima.

Art. ... (2).- (Agregado por el Art. 2 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Son agravantes de los delitos de función de servidoras y servidores policiales, además de las circunstancias señaladas en el artículo 30, las siguientes:

1. Si el delito se comete con el uso de armas, o en grave conmoción interna; o,
2. Si el accionar produjere el fracaso de una operación policial.

Art. ... (3).- (Agregado por el Art. 2 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Son agravantes de los delitos de función de servidoras o servidores militares, además de las circunstancias señaladas en el artículo 30, cualquiera de las siguientes:

1. Si el delito se comete con el uso de armas o en conflicto armado; o,
2. Si el accionar produjere el fracaso de una operación militar.

Art. 31.-  (Sustituido por el Art. 5 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005).- Se reputará como circunstancia agravante de la infracción el hecho de ser la víctima cónyuge, conviviente, pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o ser ascendiente o descendiente del ofensor.

Título III DE LA IMPUTABILIDAD Y DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LAS INFRACCIONES

Capítulo I DE LA RESPONSABILIDAD

Art. 32.- Nadie puede ser reprimido por un acto previsto por la ley como infracción, si no lo hubiere cometido con voluntad y conciencia.

Art. 33.- Repútanse como actos conscientes y voluntarios todas las infracciones, mientras no se pruebe lo contrario; excepto cuando de las circunstancias que precedieron o acompañaron al acto, pueda deducirse que no hubo intención dañada al cometerlo.

Art. 34.- No es responsable quien, en el momento en que se realizó la acción u omisión, estaba, por enfermedad, en tal estado mental, que se hallaba imposibilitado de entender o de querer.

Si el acto ha sido cometido por un alienado mental, el juez que conozca de la causa decretará su internamiento en un hospital psiquiátrico; y no podrá ser puesto en libertad sino con audiencia del ministerio público y previo informe

satisfactorio de dos médicos designados por el juez y que de preferencia serán siquiátras, sobre el restablecimiento pleno de las facultades intelectuales del internado.

Art. 35.- Quien, en el momento de realizar el acto delictuoso estaba, por razón de enfermedad, en tal estado mental que, aunque disminuida la capacidad de entender o de querer, no le imposibilitaba absolutamente para hacerlo, responderá por la infracción cometida, pero la pena será disminuida como lo establece este Código.

Art. 36.- Cuando la acción u omisión que la ley ha previsto como infracción, es en cuanto al hecho y no al derecho, resultante del engaño de otra persona, por el acto de la persona engañada responderá quien le determinó a cometerlo.

Art. 37.- En tratándose de la embriaguez del sujeto activo de la infracción, o de intoxicación por sustancias estupefacientes, se observarán las siguientes reglas:

1a.- Si la embriaguez, que derive de caso fortuito o fuerza mayor, privó del conocimiento al autor, en el momento en que cometió el acto, no habrá responsabilidad;

2a.- Si la embriaguez no era completa, pero disminuía grandemente el conocimiento, habrá responsabilidad atenuada;

3a.- La embriaguez no derivada de caso fortuito o fuerza mayor, ni excluye, ni atenúa, ni agrava la responsabilidad;

4a.- La embriaguez premeditada, con el fin de cometer la infracción, o de preparar una disculpa, es agravante; y,

5a.- La embriaguez habitual es agravante. Se considera ebrio habitual a quien se entrega al uso de bebidas alcohólicas, o anda frecuentemente en estado de embriaguez.

Art. 38.- Las reglas del artículo anterior se observarán, respectivamente, en los casos de intoxicación por sustancias estupefacientes.

Art. 39.- Cuando un sordomudo cometiere un delito, no será reprimido si constare plenamente que ha obrado sin conciencia y voluntad; pero podrá colocársele en una casa de educación adecuada, hasta por diez años; y si constare que ha obrado con conciencia y voluntad, se le aplicará una pena que no exceda de la mitad ni baje de la cuarta parte de la establecida para el delito.

Art. 40.-  (Sustituido por el Art. 6 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005).- Las personas que no hayan cumplido los 18 años de edad, estarán sujetas al Código de la Niñez y Adolescencia.

Capítulo II

DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LAS INFRACCIONES

Art. 41.- Son responsables de las infracciones los autores, los cómplices y los encubridores.

Art. 42.- Se reputan autores los que han perpetrado la infracción, sea de una manera directa e inmediata, sea aconsejando o instigando a otro para que la cometa, cuando el consejo ha determinado la perpetración del delito; los que han impedido o procurado impedir que se evite su ejecución; los que han determinado la perpetración del delito y efectuándolo (sic) valiéndose de otras personas, imputables o no imputables, mediante precio, dádiva, promesa, orden o cualquier otro medio fraudulento y directo; los que han coadyuvado a la ejecución, de un modo principal, practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el que no habría podido perpetrarse la infracción; y los que, por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo, obligan a otro a cometer el acto punible, aunque no pueda calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho fin.

Art. 43.- Son cómplices los que indirecta y secundariamente cooperan a la ejecución del acto punible, por medio de actos anteriores, o simultáneos.

Si de las circunstancias particulares de la causa resultare que el acusado de complicidad no quiso cooperar sino en un acto menos grave que el cometido por el autor, la pena será aplicada al cómplice solamente en razón del acto que pretendió ejecutar.

Art. 44.- Son encubridores los que, conociendo la conducta delictuosa de los malhechores, les suministran, habitualmente, alojamiento, escondite, o lugar de reunión; o les proporcionan los medios para que se aprovechen de los efectos del delito cometido; o los favorecen, ocultando los instrumentos o pruebas materiales de la infracción, o inutilizando las señales o huellas del delito, para evitar su represión y los que, estando obligados por razón de su profesión, empleo, arte u oficio, a practicar el examen de las señales o huellas del delito, o el esclarecimiento del acto punible, oculten o alteren la verdad, con propósito de favorecer al delincuente.

Art. 45.- Está exento de represión el encubrimiento en beneficio del cónyuge del sindicado; o de sus ascendientes, descendientes y hermanos, o de sus afines hasta dentro del segundo grado.

Art. 46.- Los autores de tentativa sufrirán una pena de uno a dos tercios de la que se les habría impuesto si el delito se hubiere consumado. Para la aplicación de la pena se tomará necesariamente en consideración el peligro corrido por el sujeto pasivo de la infracción y los antecedentes del acusado.

Art. 47.- Los cómplices serán reprimidos con la mitad de la pena que se les hubiere impuesto en caso de ser autores del delito.

Art. 48.- Los encubridores serán reprimidos con la cuarta parte de la pena aplicable a los autores del delito; pero en ningún caso ésta excederá de dos años, ni será de reclusión.

Art. 49.- En los casos de delitos contra las personas, quedarán exentos de responsabilidad, por ocultación, los amigos íntimos y los que hubieren recibido grandes beneficios del responsable del delito, antes de su ejecución.

Art. 50.- En el caso de conocimiento limitado por enfermedad, contemplado en el Art. 35, la pena aplicable al infractor será de un cuarto a la mitad de la señalada a la infracción, de acuerdo con las circunstancias que serán debidamente apreciadas por el juez.

Título IV DE LAS PENAS

Capítulo I DE LAS PENAS EN GENERAL

Art. 51.-  (Sustituido por el Art. 1 de la Ley 2001-47, R.O. 422, 28-IX-2001).- Las penas aplicables a las infracciones son las siguientes:

Penas peculiares del delito:

- 1.- Reclusión mayor;
- 2.- Reclusión menor;
- 3.- Prisión de ocho días a cinco años;
- 4.- Interdicción de ciertos derechos políticos y civiles;
- 5.- Sujeción a la vigilancia de la autoridad;
- 6.- Privación del ejercicio de profesiones, artes u oficios; y,
- 7.- Incapacidad perpetua para el desempeño de todo empleo o cargo público.

Penas peculiares de la contravención:

- 1.- (Sustituido por el Art. 4, inc. 1, de la Ley s/n, R.O. 160-S, 29-III-2010).- Prisión de uno a treinta días.
- 2.- Multa.

Penas comunes a todas las infracciones:

- 1.- Multa.
- 2.- Comiso Especial.

Art. 52.- Toda sentencia condenatoria lleva envuelta la obligación solidaria de pagar las costas procesales por parte de todos los responsables del delito. Los daños y perjuicios serán pagados asimismo en forma solidaria por todos los responsables contra quienes se haya ejercitado acusación particular con el objeto de alcanzar tal indemnización.

Art. 53.-  (Sustituido por el Art. 2 de la Ley 2001-47, R.O. 422, 28-IX-2001).- La reclusión mayor, que se cumplirá en los Centros de Rehabilitación Social del Estado, se divide en:

- a) Ordinaria de cuatro a ocho años y, de ocho a doce años;
- b) Extraordinaria de doce a dieciséis años; y,
- c) Especial de dieciséis a veinticinco años.

Art. 54.- La reclusión menor, que se cumplirá en los establecimientos precitados, se divide en ordinaria de tres a seis años y de seis a nueve años, y en extraordinaria de nueve a doce años.

Los condenados a reclusión menor estarán también sometidos a trabajos de reeducación o a trabajos en talleres comunes; y sólo se les hará trabajar fuera del establecimiento al organizarse colonias penales agrícolas, y no se les aislará, a no ser por castigos reglamentarios, que no podrán pasar de ocho días.

Art. 55.- La prisión correccional la sufrirán los condenados en las cárceles del respectivo cantón, en las de la capital de provincia o en secciones apropiadas de las penitenciarías, debiendo ocuparse en los trabajos reglamentarios, en talleres comunes.

Art. 56.- Toda condena a reclusión mayor ordinaria o extraordinaria, o a reclusión menor extraordinaria, lleva consigo la interdicción del reo, mientras dure la pena. La interdicción surte efecto desde que la sentencia causa ejecutoria, y priva al condenado de la capacidad de disponer de sus bienes, a no ser por acto testamentario.

Los condenados a reclusión menor ordinaria, en el caso de reincidencia, o en el de concurrencia de varios delitos que merezcan pena de reclusión, quedarán también sujetos a interdicción.

El nombramiento del correspondiente guardador se hará conforme a las reglas del Código Civil para la curaduría del disipador.

Art. 57.-  (Sustituido por el Art. 5 de la Ley s/n, R.O. 393-2S, 31-VII-2008).- No se impondrá pena de reclusión al mayor de sesenta y cinco años. El que en tal edad cometiere un delito reprimido con reclusión, cumplirá el tiempo de la condena en un establecimiento destinado a prisión correccional.

Si hallándose ya en reclusión cumplierse sesenta y cinco años, pasará a cumplir su condena en una casa de prisión, conforme al inciso anterior.

Lo mismo podrán resolver los jueces respecto de las personas débiles o enfermas.

Nota:

El Art. 6 de la Ley s/n (R.O. 393-2S, 31-VII-2008), establece que se entenderá por "prisión correccional" y "casa de prisión" a lugares especializados para la rehabilitación de adultos mayores, que serán administrados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Art. 58.-  (Sustituido por el Art. 2 de la Ley 106, R.O. 365, 21-VII-1998).- Ninguna mujer embarazada podrá ser privada de su libertad, ni será notificada con sentencia que le imponga penas de prisión o de reclusión, sino 90 días después del parto.

Art. 59.- La duración de un día para computar el tiempo de la condena, es de veinticuatro horas; y la de un mes, de treinta días.

Toda detención, antes de que el fallo esté ejecutoriado, será imputada a la duración de la pena de privación de la libertad, si dicha detención ha sido ocasionada por la infracción que se reprime.

Art. 60.- Toda sentencia que condene a reclusión o a prisión causa la suspensión de los derechos de ciudadanía por un tiempo igual al de la condena; pero en los casos que determina expresamente este Código, los jueces y tribunales podrán imponer la suspensión de tales derechos, por un término de tres a cinco años, aunque la prisión no pase de seis meses.

Art. 61.- En virtud de la sujeción a la vigilancia especial de la autoridad, puede el juez prohibir que el condenado se presente en los lugares que le señalare, después de cumplida la condena; para lo que, antes de ser puesto en libertad, el condenado indicará el lugar que elija para su residencia, y recibirá una boleta de viaje, en la que se determinará el itinerario forzoso y la duración de su permanencia en cada lugar de tránsito.

Además, estará obligado a presentarse ante la autoridad de policía del lugar de su residencia dentro de las veinticuatro horas siguientes a su llegada, y no podrá trasladarse a otro lugar, sin permiso escrito de dicha autoridad, la que tiene derecho para imponer al vigilado ocupación y método de vida, si no los tuviere.

Art. 62.- Los condenados a pena de reclusión pueden ser colocados, por la sentencia condenatoria, bajo la vigilancia de la autoridad, por cinco a diez años; y si reincidieren en el mismo delito o cometieren otro que merezca la pena de reclusión, esa vigilancia durará toda la vida.

Art. 63.- Las multas por delitos pertenecen al Fisco; y serán impuestas a cada uno de los condenados por una misma infracción.

La multa se cobrará por apremio real.

Art. 64.- En la sentencia podrá el juez autorizar al condenado a pagar la multa por cuotas; debiendo fijarse el monto y la fecha de los pagos, según la condición económica del condenado.

Art. 65.- El comiso especial recae: sobre las cosas que fueron el objeto de la infracción; sobre las que han servido, o han sido destinadas para cometerla, cuando son de propiedad del autor del acto punible, o del cómplice; y sobre las que han sido producidas por la infracción misma.

El comiso especial será impuesto por delito, sin perjuicio de las demás penas establecidas por la ley; pero, al tratarse de una contravención, no se impondrá sino en los casos expresamente determinados por la ley.

Art. 66.- El trabajo es obligatorio en los establecimientos destinados a reclusión y prisión correccional, y su producto se invertirá en la forma señalada en la ley respectiva.

El producto del trabajo del penado no es susceptible de embargo ni secuestro, salvo para el pago de alimentos forzosos.

Art. 67.- La condena a las penas establecidas por este Código es independiente de la indemnización de daños y perjuicios de acuerdo con las normas de los Códigos Civil y de Procedimiento Civil. Determinado el monto de la indemnización se lo recaudará por apremio real.

Podrá el damnificado o quien ejerza su representación legal reclamar ante el fuero penal la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por el delito, mediante la correspondiente acusación particular que con tal objeto se intente. La liquidación de las indemnizaciones declaradas en sentencia firme se llevará a cabo en juicio verbal sumario, conforme prescribe el Código de Procedimiento Penal.

La recaudación se realizará por apremio real en contra del deudor o del civilmente responsable.

En caso de insolvencia comprobada, por las costas procesales no habrá apremio alguno.

Art. 68.- Cuando los bienes del condenado no fueren suficientes para pagar los daños y perjuicios, la multa y las restituciones, serán preferidas las dos primeras condenaciones; y en concurrencia de multa y costas debidas al Fisco, los pagos que hicieren los condenados se imputarán primeramente a las costas.

Art. 69.- Ninguna pena podrá ejecutarse mientras esté pendiente un recurso o aclaratoria de la sentencia.

Art. 70.- Las obligaciones civiles derivadas de las infracciones, no se extinguen por la muerte del reo.

Art. 71.- El culpado está obligado a publicar, a su costa, la sentencia condenatoria, cuando la publicación constituya el medio de reparar el daño no pecuniario ocasionado por el delito.

Capítulo II DE LA APLICACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS PENAS

Art. 72.-  (Sustituido por el Art. 3 de la Ley 2001-47, R.O. 422, 28-IX-2001).- Cuando haya dos o más circunstancias atenuantes y ninguna agravante, no constitutiva o modificatoria de la infracción, las penas de reclusión serán reducidas o modificadas de la siguiente manera:

La reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años se sustituirá con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años.

La reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años se sustituirá con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años.

La reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años se sustituirá con reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años.

La reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años se sustituirá con reclusión menor ordinaria de tres a seis años.

La reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años se sustituirá con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años.

La reclusión menor ordinaria de seis a nueve años se sustituirá con prisión correccional de dos a cinco años.

La reclusión menor ordinaria de tres a seis años se sustituirá con prisión correccional de uno a tres años.

Art. 73.-  (Reformado por el Art. 1 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Si hay dos o más circunstancias atenuantes y ninguna agravante no constitutiva o modificatoria de infracción, las penas correccionales de prisión y multa serán reducidas, respectivamente, hasta a ocho días y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América, y podrán los jueces aplicar una sola de estas penas, separadamente, o reemplazar la de prisión con multa, hasta de doce dólares de los Estados Unidos de Norte América, si sólo aquella está prescrita por ley.

Art. 74.- Cuando hubiere a favor del reo una sola atenuante de carácter trascendental y se tratare de un sujeto cuyos antecedentes no revelen peligrosidad, no habiendo agravantes no constitutivas o modificatorias de infracción, podrán los jueces apreciarla para la modificación de la pena, conforme a las reglas de los artículos anteriores.

Art. 75.-  (Reformado por el Art. 2 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Cuando exista alguna de las circunstancias de excusa, determinadas en los Arts. 25, 26 y 27, las penas se reducirán del modo siguiente:

Si se trata de un delito que merezca reclusión mayor extraordinaria de doce a diez y seis años, la pena será sustituida por la prisión correccional de uno a cinco años y multa que no exceda de treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América;

Si se trata de una infracción reprimida con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años, se aplicará la pena de prisión correccional de uno a cuatro años y multa que no exceda de diecinueve dólares de los Estados Unidos de Norte América;

Si la infracción está reprimida con reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años se sustituirá esta pena con la de prisión correccional de uno a tres años y multa que no exceda de dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América;

Si la pena señalada para la infracción es la de reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años, se reemplazará con prisión correccional de seis meses a dos años y multa que no exceda de doce dólares de los Estados Unidos de Norte América;

Si la infracción está reprimida con reclusión menor de seis a nueve años, se aplicará la pena de prisión correccional de tres meses a un año y multa que no exceda de nueve dólares de los Estados Unidos de Norte América;

Si la pena que debe aplicarse es la de reclusión menor de tres a seis años, se reemplazará con prisión correccional de uno a seis meses y multa de seis dólares de los Estados Unidos de Norte América; y,

Si se trata de un delito reprimido con prisión correccional, la pena quedará reducida a prisión de ocho días a tres meses y multa de cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América, o una de estas penas solamente.

Art. 76.- La reducción de la pena de reclusión, en virtud de circunstancias atenuantes, no impide que al condenado se le coloque bajo la vigilancia especial de la autoridad durante tres años a lo menos, y seis, a lo más.

Art. 77.- Hay reincidencia cuando el culpado vuelve a cometer un delito después de haber cometido uno anterior por el que recibió sentencia condenatoria.

Art. 78.- (Reformado por el Art. 1 de la Ley s/n, R.O. 160-S, 29-III-2010).- En las contravenciones hay reincidencia cuando se comete la misma contravención u otra mayor, en los noventa días subsiguientes a la condena por la primera falta.

La reincidencia, en el caso de la contravención establecida en el numeral 1 del artículo 607, será considerada como delito, de conformidad con el Capítulo I del Título X del Libro II de este Código.

Art. 79.- Las sentencias condenatorias expedidas en el extranjero se tomarán en cuenta para la reincidencia.

Igualmente, se tomarán en cuenta las sentencias condenatorias pronunciadas por los tribunales militares pero sólo al tratarse de delitos de la misma naturaleza; y, en este caso, solamente se considerará el mínimo de la pena que podía haberse impuesto en la primera condenación, y no la que se hubiere en realidad aplicado.

Art. 80.-  En caso de reincidencia se aumentará la pena conforme a las reglas siguientes:

1a.- El que habiendo sido condenado antes a pena de reclusión cometiere un delito reprimido con reclusión mayor de cuatro a ocho años, sufrirá la misma pena, pero de ocho a doce;

2a.- Si el nuevo delito está reprimido con reclusión mayor de ocho a doce años, el delincuente será condenado a reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años;

... - (Agregado por el Art. 4 de la Ley 2001-47, R.O. 422, 28-IX-2001).- El que habiendo sido antes condenado a pena de reclusión cometiere un delito reprimido con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, la pena será de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años; y, si el nuevo delito es sancionado con reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años, la pena será de veinticinco años, no sujeta a modificación.

3a.- Si un individuo, después de haber sido condenado a pena de reclusión, cometiere un delito reprimido con reclusión menor de tres a seis años, sufrirá la misma pena, pero de seis a nueve;

4a.- Si el nuevo delito cometido es de los que la ley reprime con reclusión menor de seis a nueve años, el transgresor será condenado a reclusión menor extraordinaria;

5a.- Si el que fue condenado a reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años cometiere otra infracción reprimida con la misma pena, será condenado a reclusión mayor de doce años;

6a.- Si el que ha sido condenado a reclusión cometiere un delito reprimido con prisión correccional, será reprimido con el máximo de la pena por el delito nuevamente cometido; y, además, se le someterá a la vigilancia de la autoridad por un tiempo igual al de la condena;

7a.- Si el que ha sido condenado a pena correccional reincidiere en el mismo delito, o cometiere otro que merezca también pena correccional, será reprimido con el máximo de la pena señalada para el delito últimamente cometido; y,

8a.- Si un individuo condenado a pena correccional cometiere un delito reprimido con reclusión, se le aplicará la pena señalada para la última infracción, sin que pueda reconocérsele circunstancias de atenuación.

Art. 81.-  (Sustituido por el Art. 5 de la Ley 2001-47, R.O. 422, 28-IX-2001).- En caso de concurrencia de varias infracciones, se observarán las reglas siguientes:

1.- Si concurren varios delitos reprimidos con penas correccionales, o uno o más de estos delitos con una o más contravenciones, se acumularán todas las multas y penas de prisión correccional y de policía; pero de manera que la multa no pueda exceder del doble de la más rigurosa; y la prisión correccional, de seis años;

2.- Cuando concorra un delito reprimido con reclusión con delitos reprimidos con prisión correccional o una o más contravenciones, se impondrá la pena señalada al delito más grave;

3.- Cuando concurren varios delitos reprimidos con reclusión, se impondrá la pena mayor.

Cuando concurren varios delitos reprimidos con reclusión mayor especial, se acumularán las penas por un máximo de treinta y cinco años;

4.- Las penas de comiso especial en virtud de varias infracciones concurrentes, serán siempre acumuladas;

5.- Cuando haya concurrencia de varias contravenciones se acumularán todas las penas merecidas por el contraventor, pero no podrán exceder del máximo de la pena de policía; y,

6.- Cuando un solo acto constituya varias infracciones únicamente se impondrá la pena más rigurosa que será hasta de treinta y cinco años, si se trata de infracciones sancionadas con reclusión mayor especial.

Art. 82.- En los casos de condena por primera vez, si es causada por delito sancionado con una pena cuyo máximo no exceda de seis meses de prisión correccional o por un delito al que sólo se aplique multa, los jueces podrán ordenar en la misma sentencia que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena. Esta decisión se fundará en el criterio respecto de la personalidad integral del condenado, la naturaleza del delito y las circunstancias que lo han rodeado, en cuanto puedan servir para apreciar dicha personalidad. Los jueces requerirán las informaciones que crean pertinentes para formar criterio.

Art. 83.- En el caso de concurrencia de infracciones, procederá la condenación condicional si el máximo de la pena aplicable al reo no excede de seis meses de prisión o fuere sólo de multa.

Art. 84.- La condena se tendrá como no pronunciada si dentro del tiempo fijado para la prescripción de la pena y dos años más, el condenado no cometiere nueva infracción.

Art. 85.- Si el condenado, durante el tiempo indicado en el artículo anterior, cometiere nueva infracción, sufrirá la pena impuesta en la primera condenación y la que corresponda al nuevo acto cometido.

Art. 86.- La condena condicional no suspende la reparación de los daños y perjuicios causados por el delito, el pago de las costas procesales, ni el comiso especial.

Art. 87.-  Todo condenado que hubiere sufrido las tres cuartas partes de la condena, en tratándose de reclusión, y las dos terceras partes, al tratarse de prisión correccional, podrá ser puesto en libertad condicional, por resolución de la autoridad correspondiente, siempre que hubiere cumplido con regularidad los reglamentos carcelarios y observado muy buena conducta, revelando arrepentimiento y enmienda, bajo las siguientes condiciones:

1a.- Residir en el lugar que se determine en el auto respectivo, no pudiendo salir de esa residencia sino con permiso de la autoridad que le otorgó la libertad;

2a.- Que, cuando obtenga dicho permiso, al trasladarse a otro lugar, dé a conocer el permiso a la primera autoridad policial de su nueva residencia;

3a.- Que acredite tener profesión, arte, oficio o industria, o bienes de fortuna, u otro medio que le permita vivir honradamente;

4a.- Que el tiempo que le falte para cumplir la pena no exceda de tres años;

5a.- Que, al haber sido condenado al pago de indemnizaciones civiles, acredite haber cumplido esta obligación, a menos de haber comprobado imposibilidad para hacerlo; y,

6a.- (Reformado por el Art. 1 del D.S. 1458, R.O. 323, 4-X-1971).- Que el Instituto de Criminología en la Capital de la República o una comisión integrada por el Ministro Fiscal de la Corte Superior de Justicia del distrito y el Jefe Provincial

de Salud, en las demás localidades del Estado, conceda informe favorable a la liberación condicional.

Nota:

Las Cortes Superiores fueron sustituidas por las Cortes Provinciales, según el Art. 178, num. 2 de la Constitución de la República del Ecuador (R.O. 449, 20-X-2008).

Art. 88.- Si el que obtuvo su libertad condicional, durante el tiempo que le falta para cumplir la condena y hasta dos años más, observare mala conducta, o no viviere de un trabajo honesto si carece de bienes, o frecuentare garitos o tabernas, o se acompañare de ordinario con gente viciosa o de mala fama, la autoridad respectiva revocará la libertad condicional, para que cumpla la parte de pena que le faltaba al obtener tal libertad, sea cual fuere el tiempo transcurrido desde ella.

Si cometiere nuevo delito, a más del tiempo que le faltaba por la primera condena, sufrirá la pena por el delito nuevamente cometido.

Art. 89.- Transcurrido el tiempo de la condena y dos años más, sin que la libertad condicional haya sido revocada, quedará extinguida la pena.

Art. 90.- Ningún penado cuya libertad condicional haya sido revocada podrá obtenerla nuevamente.

Art. 91.- Al notificar al reo la sentencia condenatoria se le leerán, en todo caso, las disposiciones contenidas en los artículos anteriores.

Art. 92.- El reo que obtenga su libertad condicional quedará sujeto a la vigilancia especial de la autoridad por el tiempo que le falte para cumplir la condena y dos años más.

Art. 93.- El descubrimiento de un delito anterior, debidamente comprobado, suspende los efectos de la condena condicional.

Capítulo III

DEL EJERCICIO DE LAS ACCIONES Y DE LA EXTINCIÓN Y PRESCRIPCIÓN DE LAS MISMAS Y DE LAS PENAS

Art. 94.- El perdón de la parte ofendida o la transacción con ésta, no extingue la acción pública por una infracción que debe perseguirse de oficio.

Art. 95.- El delito cometido en perjuicio de varias personas será reprimido aunque la acusación o denuncia sea propuesta sólo por una de ellas.

Art. 96.- La muerte del reo, ocurrida antes de la condena, extingue la acción penal.

Art. 97.- Toda pena es personal y se extingue con la muerte del penado.

Art. 98.- La acción penal se extingue por amnistía, o por remisión de la parte ofendida en los delitos de acción privada, o por prescripción.

La renuncia de la parte ofendida al ejercicio de la acción penal, sólo perjudica al renunciante y a sus herederos.

Habiéndose propuesto acusación o denuncia, en su caso, por varios ofendidos por un mismo delito, la remisión de uno de ellos no perjudicará a los demás.

Art. 99.- La amnistía no solamente hará cesar la acción penal sino también la condena y todos sus efectos, con excepción de las indemnizaciones civiles.

Art. 100.- La pena se extingue también por declaración de la Cámara del Senado, rehabilitando la honra y estableciendo la inocencia de los condenados injustamente, de acuerdo con lo que disponga la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal.

Nota:

- La Cámara del Senado fue suprimida, en su lugar asumió sus funciones el Congreso Nacional. Actualmente, de conformidad con el Art. 118 de la Constitución de la República (R.O. 449, 20-X-2008), la función legislativa es ejercida por la Asamblea Nacional.

- Por Disposición Derogatoria de la Constitución de la República del Ecuador (R.O. 449, 20-X-2008), se abroga la Constitución Política de la República del Ecuador (R.O. 1, 11-VIII-1998), y toda norma que se oponga al nuevo marco constitucional.

Art. 101.-  (Reformado por el Art. 6 de la Ley 2001-47, R.O. 422, 28-IX-2001 y por el Art. 3 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Toda acción penal prescribe en el tiempo y con las condiciones que la ley señala.

En el ejercicio del derecho que la prescripción establece, se observarán las reglas que siguen:

Tanto en los delitos de acción pública como en los delitos de acción privada se distinguirá ante todo si, cometido el delito, se ha iniciado o no enjuiciamiento.

A excepción de los casos de imprescriptibilidad de las acciones y de las penas previstas en el último inciso del número 2 del artículo 23 (80) y en el segundo inciso del artículo 31 (233) de la Constitución Política de la República, en los demás delitos reprimidos con reclusión, cuyo ejercicio de acción es pública, de no haber enjuiciamiento, la acción para perseguirlos prescribirá en diez años; tratándose de delitos reprimidos con reclusión mayor especial, la acción para perseguirlos prescribirá en quince años. Tratándose de delitos reprimidos con prisión, la acción para perseguirlos prescribirá en cinco años. El tiempo se contará a partir de la fecha en que la infracción fue perpetrada.

En los mismos delitos de acción pública, de haber enjuiciamiento iniciado antes de que aquellos plazos se cumplan, la acción para continuar la causa prescribirá en los mismos plazos, contados desde la fecha del autocabeza de proceso.

Si el indiciado se presentare voluntariamente a la justicia en el plazo máximo de seis meses posteriores al inicio de la instrucción, los respectivos plazos se reducirán a diez años en los delitos reprimidos con reclusión mayor especial; a ocho años en los demás delitos reprimidos con reclusión; y, a cuatro años en los delitos reprimidos con prisión. En estos casos, los plazos se contarán desde la fecha del inicio de la instrucción. No surtirá efecto esta regla en caso de reincidencia.

En los delitos de acción privada, la acción para perseguirlos prescribirá en el plazo de ciento ochenta días, contados desde que la infracción fue cometida.

Iniciada la acción y citado el querellado antes del vencimiento de ese plazo, la prescripción se producirá transcurridos dos años a partir de la fecha de la citación de la querrela.

La acción penal por delitos reprimidos sólo con multa se extinguirá en cualquier estado del juicio, por el pago voluntario del máximo de la multa correspondiente al delito, y de las indemnizaciones, en los casos en que hubiere lugar.

Si la prescripción se hubiese operado por la falta de despacho oportuno de los jueces, éstos serán castigados por el superior con la multa de cuarenta y cuatro a cuatrocientos treinta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América, quedando a salvo la acción de daños y perjuicios a que hubiere lugar contra dichos funcionarios, de conformidad con lo prescrito en el Código de Procedimiento Civil.

En la misma pena incurrirán los funcionarios del ministerio público y secretarios de cortes y juzgados por cuya negligencia se hubiere operado la prescripción.

De haber acusador particular, o de tratarse de querrela, la multa se dividirá en iguales partes entre la administración de justicia y el acusador. La parte de multa que corresponda a la administración de justicia será invertida por la Corte Suprema en su caso, o por la respectiva Corte Superior que hubiere impuesto la multa, en gastos generales de la administración de justicia.

Notas:

- *Por Disposición Derogatoria de la Constitución de la República del Ecuador (R.O. 449, 20-X-2008), se abroga la Constitución Política de la República del Ecuador (R.O. 1, 11-VIII-1998), y toda norma que se oponga al nuevo marco constitucional.*

- *Del Capítulo cuarto, Título IV; y, Capítulo dos, Título IX de la Constitución de la República del Ecuador (R.O. 449, 20-X-2008) se establece que la Corte Nacional de Justicia reemplace a la Corte Suprema de Justicia; y, las Cortes Superiores fueron sustituidas por las Cortes Provinciales, según el Art. 178, num. 2 de la Constitución de la República del Ecuador (R.O. 449, 20-X-2008).*

Art. 102.- Si dictada por el superior la sentencia que cause ejecutoria no es enviado el proceso al juez encargado de ejecutarla en un tiempo igual o mayor del necesario para la prescripción de la pena, los empleados o funcionarios responsables del retardo incurrirán en la sanción establecida en el artículo precedente.

Art. 103.- Las incapacidades anexas a ciertas condenas, por ley o sentencia judicial, no cesan por el indulto que se concediere con arreglo a la Constitución y las leyes, a no ser que lo consigne expresamente el decreto de gracia.

Art. 104.- Todo condenado a reclusión mayor o menor que obtenga indulto o conmutación de la pena, quedará bajo la vigilancia especial de la autoridad, hasta por el término de diez años, si el decreto de gracia no dispusiere otra cosa.

Art. 105.- La interdicción civil cesará cuando el condenado haya conseguido indulto de la pena, o cuando se haya conmutado ésta con otra que no lleve tal interdicción.

Art. 106.- La autoridad designada por la Constitución podrá perdonar, o conmutar, o rebajar las penas aplicadas por sentencia judicial ejecutoriada, sujetándose a las disposiciones especiales de la Constitución y de la Ley de Gracia.

El perdón, la conmutación, o la rebaja de la pena no se extenderán a exonerar al culpado del pago de los daños y perjuicios

y costas al Fisco, o a terceros interesados.

Art. 107.- Las penas privativas de la libertad, por delito, prescriben en un tiempo igual al de la condena, no pudiendo, en ningún caso, el tiempo de la prescripción ser menor de seis meses.

La prescripción de la pena comenzará a correr desde la media noche del día en que la sentencia quedó ejecutoriada y se imputará al tiempo necesario para la prescripción el que el delincuente hubiere estado recluso, preso o detenido por motivo del mismo delito.

Se exceptúan los casos en que fueren violadas las garantías constitucionales por parte de funcionarios o empleados públicos, conforme a lo prescrito en la Constitución Política.

Nota:

Por Disposición Derogatoria de la Constitución de la República del Ecuador (R.O. 449, 20-X-2008), se abroga la Constitución Política de la República del Ecuador (R.O. 1, 11-VIII-1998), y toda norma que se oponga al nuevo marco constitucional.

Art. 108.- Tanto la prescripción de la acción como la de la pena se interrumpen por el hecho de cometer el reo otra infracción que merezca igual o mayor pena, antes de vencerse el tiempo para la prescripción.

Art. 109.- La acción y la pena de policía prescriben en los plazos que señala el Libro III de este Código.

Art. 110.- Todo condenado a pena de reclusión que hubiere prescrito quedará, de hecho y por diez años, sujeto a la vigilancia especial de la autoridad, y no podrá residir en el lugar en que cometió el delito, si en él habitan el agraviado o sus parientes.

Art. 111.- Las penas de multa y de comiso especial prescribirán en los plazos señalados para la prescripción de las penas principales; y las condenas civiles impuestas por una infracción prescribirán según las reglas del Código Civil.

Cuando sólo se hubiere impuesto multa o comiso especial, prescribirá en un año.

Art. 112.- La prescripción correrá o será interrumpida, separadamente, para cada uno de los participantes en un delito.

Art. 113.- Por el perdón de la parte ofendida cesa la pena al tratarse de las infracciones de adulterio e injuria calumniosa y no calumniosa grave.

Si hubieren varios partícipes, el perdón en favor de uno de ellos aprovecha a los demás.

Nota:

El adulterio ya no es delito, desde que se derogaron los Arts. 503 y 504 de este Código (R.O. 511, 10-VI-1983).

Art. 114.- La prescripción puede declararse a petición de parte, o de oficio, necesariamente, al reunirse las condiciones exigidas en este Código.

Art. ... (1).- (Agregado por el Art. 1 de la Ley 04, R.O. 22-S, 9-IX-1992).- Las personas que hubieren permanecido detenidas sin haber recibido auto de sobreseimiento o de apertura al plenario por un tiempo igual o mayor a la tercera parte del establecido por el Código Penal como pena máxima para el delito por el cual estuvieren encausadas, serán puestas inmediatamente en libertad por el juez que conozca el proceso.

De igual modo las personas que hubieren permanecido detenidas sin haber recibido sentencia, por un tiempo igual o mayor a la mitad del establecido por el Código Penal como pena máxima por el delito por el cual estuvieren encausadas, serán puestas inmediatamente en libertad por el tribunal penal que conozca el proceso.

Se excluye de estas disposiciones a los que estuvieren encausados, por delitos sancionados por la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

Nota:

Mediante Res. 119-1-97 del Tribunal Constitucional (R.O. 222-S, 24-XII-1997), se suspende los efectos del último inciso de este artículo, por inconstitucionalidad de fondo.

Art. ... (2).- (Agregado por el Art. 1 de la Ley 04, R.O. 22-S, 9-IX-1992).- En uno u otro caso, el director del centro de rehabilitación social en que se encuentre el detenido, comunicará al día siguiente de aquél en que se cumplan los plazos señalados en el artículo anterior, al juez o tribunal de la causa, dicha circunstancia, para que ordene la inmediata libertad del detenido.

En caso de que no recibiera la orden de libertad emitida por el juez o tribunal dentro de las veinte y cuatro horas siguientes al aviso dado a éstos, el director del centro de rehabilitación pondrá en libertad al detenido de inmediato, lo que comunicará por escrito al juez o tribunal penal y al Presidente de la Corte Superior del distrito.

Nota:

Las Cortes Superiores fueron sustituidas por las Cortes Provinciales, según el Art. 178, num. 2 de la Constitución de la República del Ecuador (R.O. 449, 20-X-2008).

Título V

NORMAS COMUNES PARA LA APLICACIÓN DE LAS PENAS EN LOS DELITOS DE FUNCIÓN COMETIDOS POR SERVIDORAS O SERVIDORES MILITARES Y POLICIALES

(Agregado por el Art. 3 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010)

Art. ... (114.3).- **Servidora o servidor militar y policial.**- (Agregado por el Art. 3 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Se considera servidora o servidor militar al personal permanente en servicio activo que consta en los escalafones de las Fuerzas Armadas, a los reservistas incorporados al servicio activo; y los ciudadanos que cumplen el servicio militar voluntario.

Se considera servidora o servidor policial a quien haya adquirido la profesión policial y se encuentre en servicio activo.

En ningún caso las ciudadanas o ciudadanos civiles podrán ser juzgados bajo estas normas.

Art. ... (114.4).- **Delitos de función militar o policial.**- (Agregado por el Art. 3 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Delitos de función militar o policial son las acciones u omisiones tipificadas en el presente Código, cometidas por una o un servidor militar o policial en servicio activo, que se encuentre en relación directa, concreta, próxima y específica con su función y posición jurídica de acuerdo a la misión establecida en la Constitución y demás leyes aplicables, que afecten a las personas, a los bienes o a las operaciones de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Los delitos de función pueden cometerse en tiempo de paz o durante conflicto armado internacional o no internacional.

Las servidoras o servidores militares o policiales serán juzgados y sancionados con estricta observancia a los derechos y garantías constitucionales.

Art. ... (114.3).- **Operaciones conjuntas de las y los servidores militares y policiales.**- (Agregado por el Art. 3 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Cuando por motivos de conflicto no internacional o internacional, estados de excepción o cualquier otra situación excepcional debidamente establecida en la ley, operasen conjuntamente los servicios militares y policiales y se cometiere algún delito de función, se aplicará la pena que corresponda a la función o servicio encargado de responder ordinariamente en la situación.

Nota:

La numeración de este artículo se encuentra duplicada, no obstante la mantenemos por fidelidad a la publicación del Registro Oficial.

Art. ... (114.4).- **Responsabilidad subsidiaria del Estado.**- (Agregado por el Art. 3 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Para efectos de la responsabilidad subsidiaria y civil del Estado en los delitos de función cometidos por servidoras o servidores militares o policiales, se aplicarán las disposiciones generales previstas en la Constitución y la ley.

Nota:

La numeración de este artículo se encuentra duplicada, no obstante la mantenemos por fidelidad a la publicación del Registro Oficial.

Art. ... (114.5).- **Obediencia debida.**- (Agregado por el Art. 3 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Los mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán responsables por las órdenes que impartan. La obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes las ejecuten. Ningún subordinado o subordinada podrá eludir su responsabilidad penal con la obediencia prestada a su superior en la perpetración de un delito.

Es imputable a todo superior la responsabilidad por las órdenes que imparta y las consecuencias de la omisión en el cumplimiento de sus deberes

Art. ... (114.6).- **Imprescriptibilidad.**- (Agregado por el Art. 3 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Las acciones y penas previstas para los delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, o crímenes de agresión a un Estado son imprescriptibles.

Libro Segundo DE LOS DELITOS EN PARTICULAR

Título I

DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL ESTADO

Capítulo I

DE LOS DELITOS QUE COMPROMETEN LA SEGURIDAD EXTERIOR DE LA REPÚBLICA

Art. 115.- Todo el que dentro del territorio de la República conspire contra su seguridad exterior, induciendo a una potencia extranjera a declarar la guerra al Ecuador, será reprimido con reclusión mayor extraordinaria, de doce a dieciséis años, sometido a la vigilancia especial de la autoridad, por diez años, e inhabilitado por el mismo tiempo para ejercer los derechos de ciudadanía.

Si a las maquinaciones no hubiere seguido la ruptura de hostilidades, el delincuente será reprimido con reclusión mayor de ocho a doce años.

Estas penas se aplicarán a los ecuatorianos, aunque las maquinaciones para declarar la guerra a la República hayan tenido lugar fuera de su territorio.

Art. 116.- Los ecuatorianos que, bajo bandera enemiga, hicieren armas contra la República, serán reprimidos con las mismas penas establecidas en el artículo anterior.

Art. 117.- Incurrirán en las mismas penas:

1o.- Los ecuatorianos que facilitaren a los enemigos de la República la entrada o la marcha en el territorio del Estado;

2o.- Los ecuatorianos que les hubieren entregado ciudades, fortalezas, plazas, puertos, fuerzas, almacenes, arsenales, planos o diseños militares, buques, embarcaciones, o aeronaves pertenecientes al Ecuador;

3o.- Los ecuatorianos que suministraren a potencia enemiga auxilios de soldados, hombres, guías, dinero, víveres, caballos o vehículos, armas, municiones u otros objetos conocidamente útiles para el enemigo;

4o.- Los ecuatorianos que hubieren favorecido el progreso de las armas enemigas en la República, contra las fuerzas ecuatorianas de tierra, mar o aire, corrompiendo la fidelidad de oficiales, soldados, marinos, u otros ciudadanos; o dando aviso referente al número, estado o movimientos estratégicos de las fuerzas ecuatorianas; o dirigiendo, como prácticos, al ejército, fuerzas aéreas o armada enemigas; o dando, intencionalmente, falso rumbo o falsas noticias a las Fuerzas Armadas de la República;

5o.- Los ecuatorianos que hubieren ocultado o hecho ocultar a espías o soldados enemigos, conociéndoles como tales;

6o.- Todo ecuatoriano que, encargado o instruido oficialmente, por razón de su empleo u oficio, de las medidas tomadas contra el enemigo, del secreto de una negociación, o de una expedición, lo hubiere revelado maliciosamente a una potencia enemiga o a sus agentes;

7o.- Los ecuatorianos que, con el fin de favorecer al enemigo, destruyeren o incendiaren almacenes, parques, armas, municiones, buques, aeronaves, fortalezas, sembrados u otros objetos de que podían aprovecharse las fuerzas de la República;

8o.- Los ecuatorianos que impidieren a las tropas de la República, en tiempo de guerra internacional, recibir auxilios de caudales, armas, municiones de guerra y de boca, equipos, embarcaciones o aeronaves, o planos, instrucciones o noticias convenientes para el mejor progreso de la guerra; y,

9o.- Los ecuatorianos que entreguen a una potencia limítrofe o a sus agentes, mapas o documentos, comprobantes del dominio de la República, sobre los terrenos fronterizos disputados.

En los casos de los números 2o. y 9o. de este artículo, si la entrega dolosa de planos, diseños militares, mapas o documentos ha sido hecha a potencia distinta de la enemiga, se impondrá al culpado la pena de ocho a doce años de reclusión mayor.

Si dichos planos, diseños, mapas o documentos fueren entregados a potencias extrañas o a sus agentes, por acto culposo de un ecuatoriano, la pena será de uno a cinco años de prisión.

Si la revelación contemplada en el número 6o. de este artículo, hecha dolosamente, fuere realizada a una potencia no enemiga, será reprimida con reclusión mayor de ocho a doce años; y si fuere culposa, con prisión de uno a cinco años.

Art. 118.- La conspiración para cometer alguna de las infracciones detalladas en los tres artículos anteriores, será reprimida con ocho a doce años de reclusión mayor, en caso de que se haya puesto por obra algún acto para preparar la ejecución de dichas infracciones; y en el caso contrario la pena será de cuatro a ocho años de la misma reclusión.

Art. 119.- Las penas señaladas en los cuatro artículos anteriores, se aplicarán también si las infracciones mencionadas fueron cometidas contra una nación aliada del Ecuador.

Art. 120.- Si los hechos mencionados en los Arts. 115, 117, 118 y 119, fueren cometidos por extranjeros, en el territorio de la República, se les aplicarán las penas establecidas en dichos artículos.

El extranjero convicto de espionaje será reprimido con la pena señalada en el Art. 115.

Art. 121.- Todo individuo que hubiere mantenido con súbditos de otra nación una correspondencia que, sin tener en mira ninguna de las infracciones determinadas en los Arts. 115 y 117, haya tenido, sin embargo, por resultado suministrar a los enemigos del Ecuador o de sus aliados que obren contra el enemigo común, instrucciones perjudiciales a su situación militar, será reprimido con reclusión mayor de ocho a doce años.

Art. 122.- En toda sentencia condenatoria por traición a la Patria, se impondrá la obligación de resarcir a la nación los daños y perjuicios ocasionados con la perpetración del delito que se reprima.

La sentencia a que se refiere el inciso anterior, lleva consigo la pérdida de la nacionalidad ecuatoriana.

Capítulo II

DE LOS DELITOS QUE COMPROMETEN LA PAZ Y LA DIGNIDAD DEL ESTADO

Art. 123.- El que, dolosamente, violare tregua o armisticio celebrado con el enemigo, después de haberse publicado en forma; o violare, de igual manera, cualquier tratado vigente, entre el Ecuador y otra nación, será reprimido con prisión de tres meses a un año.

Art. 124.- El que cometiere hostilidades contra alguna potencia extranjera o sus súbditos, sin conocimiento ni autorización del Gobierno de la República, si ocasionaren dichas hostilidades una declaración de guerra o represalias, será reprimido con ocho a doce años de reclusión mayor.

Si las hostilidades cometidas son tales que pueden producir represalias o una declaración de guerra, aunque no se siga este efecto, el autor de dichas hostilidades será reprimido con prisión de dos a cinco años.

Art. 125.- Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que indebidamente levantara planos de fortificaciones, buques, aeronaves, establecimientos, vías u otras obras militares, o se introdujere con tal fin, clandestina o engañosamente, en tales lugares, cuando su acceso se hubiere prohibido al público.

Art. 126.- ^{HISTÓRICO} (Reformado por el Art. 16 de la Ley 2001-47, R.O. 422, 28-IX-2001).- Todo aquel que en territorio del Ecuador atentare contra la vida, contra la inmunidad o contra la libertad personal del Jefe de un Estado extranjero, será reprimido: en caso de atentado contra la vida, con reclusión mayor de ocho a doce años; y en los otros casos, con reclusión mayor de cuatro a ocho años. Si el acto tuviere como resultado la muerte del Jefe del Estado extranjero, se reprimirá al culpable con reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años.

Todo aquél que en el territorio del Ecuador ofendiere la honra o el prestigio del Jefe de un Estado extranjero que visite el país, será reprimido con prisión de seis meses a dos años.

Art. 127.- Las disposiciones del artículo anterior se aplicarán a los actos en él previstos, cuando fueren cometidos contra los representantes de Estados extranjeros acreditados en el Ecuador, en calidad de jefes de misión diplomática.

Art. 128.- ^{HISTÓRICO} (Reformado por el Art. 4 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El que públicamente, y fuera de los casos previstos en este Código, incitare o fomentare por cualquier medio el separatismo, o el que ofendiere o vilipendiare a las instituciones públicas o a la Fuerza Pública, el que cometiere cualquier burla o desacato, con palabras o acciones, contra la Bandera, el Escudo o el Himno de la Patria, será reprimido con prisión de seis meses a tres años y multa de cuarenta y cuatro a ochenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 129.- ^{HISTÓRICO} (Reformado por el Art. 5 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El que ilegalmente impidiere el libre tránsito de vehículos, personas o mercaderías por las vías públicas del país, será sancionado con prisión de uno a tres años y multa de cuarenta y cuatro a ochenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Capítulo III

DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO

Art. 130.- El que en cualquier forma o por cualquier medio se alzare contra el Gobierno, con el objeto de desconocer la Constitución de la República, deponer al Gobierno constituido, impedir la reunión del Congreso o disolverlo, o provocar la guerra civil, será reprimido con reclusión mayor de cuatro a ocho años.

El acto existe desde que hay tentativa punible.

Art. 131.- La conspiración encaminada a conseguir alguno de los fines mencionados en el artículo anterior, será reprimida con prisión de seis meses a tres años.

El culpado será, además, sometido a la vigilancia de la autoridad por un tiempo igual al de la condena.

Art. 132.- El que de palabra o por escrito atacare de manera subversiva a la Constitución o a las leyes de la República, o incitare a su inobservancia, será reprimido con seis meses a tres años de prisión.

Art. 133.- Los autores de lecciones pastorales, prédicas o sermones, sea cualquiera la forma en que se las diere al pueblo, si fueren encaminadas a desprestigiar a la autoridad, presentándola como contraria a los dogmas, o a la disciplina, o a los intereses religiosos de alguna iglesia o culto, aceptado o tolerado en la República, serán reprimidos con seis meses a dos años de prisión.

Art. 134.- Si el autor de las lecciones pastorales, prédicas o sermones a los que se refiere el artículo anterior, se propusiere con ellas inculcar la desobediencia a la Constitución, o a las leyes, o a las órdenes de la autoridad, la pena será de uno a cinco años de prisión.

Si el fin que se propusiere el autor fuere sublevar al pueblo, o poner en armas a una parte de los ciudadanos contra la otra, la pena será de prisión de tres a cinco años.

En este caso, si se efectúa la sublevación o la guerra civil, el culpado de haberlas provocado sufrirá la pena de reclusión menor de tres a seis años.

Art. 135.- Los que promuevan la discordia entre los ciudadanos, armando o incitando a armarse unos contra otros, serán reprimidos con prisión de uno a cinco años, aunque no se propongan, de manera alguna, alterar el orden constitucional.

La conspiración para perpetrar estas infracciones, si ha sido seguida de algún acto preparatorio, será reprimida con prisión de tres meses a dos años.

Art. 136.- Si el atentado tiene por objeto llevar la devastación, la carnicería o el pillaje a uno o muchos lugares, será reprimido con reclusión mayor de ocho a doce años.

La conspiración para ejecutar tales atentados, si ha sido seguida de algún acto preparatorio, será reprimida con cuatro a ocho años de reclusión mayor.

Art. 137.- Serán reprimidos con reclusión menor de seis a nueve años los que, armados y organizados militarmente, alterasen por la fuerza el orden constitucional, desconociendo al Gobierno, al Congreso Nacional, o a la misma Constitución de la República.

Art. 138.- Serán reprimidos con prisión de uno a cinco años:

1o.- Los que hubieren tomado el mando de un cuerpo del ejército, de una tropa, de un buque de guerra, de una aeronave, de una plaza, de un puesto de guardia, de un puerto, de una ciudad, sin derecho ni motivo legítimo;

2o.- Los que hubieren retenido un mando militar cualquiera, contra la orden del Gobierno; y,

3o.- Los comandantes que tuvieren reunido su ejército o tropa después de tener conocimiento de haberse expedido la orden de licenciar esa fuerza.

Art. 139.- Todo individuo que, ya sea para apoderarse de los caudales públicos; ya para invadir propiedades, plazas, ciudades, fortalezas, puestos de guardia, almacenes, arsenales, puertos, buques, embarcaciones o aeronaves pertenecientes al Estado; ya para atacar o resistir a la fuerza pública que obra contra los autores de estos delitos, se hubiese puesto a la cabeza de facciones armadas o hubiere ejercido en ellas una función o mando cualquiera, será reprimido con el máximo de la pena señalada en el Art. 137.

Si estas facciones han tenido por objeto saquear y repartirse propiedades públicas, o nacionales, o de una generalidad de ciudadanos, o atacar o resistir a la fuerza pública que persigue a los autores de estos delitos, los que se hubieren puesto a la cabeza de esas facciones, o hubieren ejercido en ellas un empleo o mando cualquiera, serán también reprimidos con la pena anterior.

Art. 140.- Las penas establecidas en los dos incisos del artículo anterior serán aplicables a los que hubieren dirigido la asociación, levantado o hecho levantar, organizado o hecho organizar las facciones.

Art. 141.- En caso de que uno de los delitos mencionados en el Art. 130 haya sido cometido por una facción, las penas

señaladas por aquel artículo se aplicarán a todos los individuos que formen parte de la facción y que hayan sido aprehendidos en el lugar de la reunión sediciosa.

Art. 142.- Fuera del caso en que la reunión sediciosa haya tenido por objeto o por resultado uno de los delitos enumerados en el Art. 130, los individuos que formen parte de tales facciones, sin ejercer en ellas ningún mando o empleo, y que hayan sido aprehendidos en el mismo sitio, serán reprimidos con la pena inmediata inferior a la que debía imponerse a los directores o comandantes de dichas facciones.

Art. 143.- No se reprimirá a los que, habiendo formado parte de una facción, sin ejercer en ella empleo o mando, se hubieren separado espontáneamente, o a la primera amonestación de la autoridad.

Art. 144.- En toda sentencia condenatoria por las infracciones determinadas en este capítulo, se impondrá también la obligación de resarcir los daños y perjuicios ocasionados al Fisco, con la perpetración de los actos reprimidos.

Art. 145.- Quedan exentos de pena los conspiradores que revelaren a la autoridad la existencia de la conspiración, con tal que no se haya ejecutado ningún acto preparatorio punible.

Art. 146.-  (Reformado por el Art. 6 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El que incitare a la rebelión o indisciplina de la Fuerza Pública, será reprimido con prisión de dos a cinco años y multa de diecisiete a cuarenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Si como consecuencia de la incitativa resultare un conflicto en el cual se produjeran lesiones a personas, la pena será de reclusión menor de tres a seis años y multa de cuarenta y cuatro a ochenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América; y si se produjere la muerte de una o más personas, la pena será de seis a nueve años de reclusión menor ordinaria y multa de ochenta y siete a ciento setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 147.-  (Reformado por el Art. 7 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El que promoviere, dirigiere o participare en organizaciones de guerrillas, comandos, grupos de combate o grupos o células terroristas, destinadas a subvertir el orden público, sustituir la Fuerza Pública, atacarla o interferir su normal desempeño, será reprimido con reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años y multa de ochenta y siete a ciento setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Si estas actividades se ejecutasen con armas, u obedeciendo instrucciones foráneas, o con la intervención, apoyo o auxilio económico del extranjero, la pena será de ocho a doce años de reclusión mayor ordinaria y, multa de ciento setenta y cinco a cuatrocientos treinta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 148.-  (Reformado por el Art. 8 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El que difundiere por cualquier medio o enviare al exterior propaganda, noticias o informaciones falsas, que estén destinadas a alterar el orden público o que afecten el honor nacional, será sancionado con prisión de seis meses a dos años y multa de cuarenta y cuatro a ochenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 149.-  (Reformado por el Art. 9 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002; y, por el Art. 1 de la Ley 2006-31, R.O. 231, 17-III-2006).- El que establezca o mantenga depósitos de armas o municiones de uso militar o policial, y de cualquier otro tipo similar, sin autorización legal de autoridad competente, será reprimido con reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de mil a cinco mil dólares de los Estados Unidos de América.

Art. 150.- Se reputa depósito, la existencia de tres o más de dichas armas, cualquiera que sea su modelo o clase, aun cuando se hallen en piezas desmontadas.

Art. 151.-  (Reformado por el Art. 10 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El que hubiere introducido al país dinero o valores con fines subversivos o de alteración del orden público, será sancionado con prisión de tres meses a dos años y multa de diecisiete a ochenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América, y el dinero o valores serán comisados en beneficio de la Defensa Nacional.

Art. 152.-  (Reformado por el Art. 11 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El que favoreciere el ingreso al país, la permanencia o el ocultamiento en el mismo o la evasión de agentes subversivos extranjeros, conociendo su condición, será reprimido con prisión de dos a cinco años y multa de veinte y seis a setenta dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 153.-  (Reformado por el Art. 12 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El que promoviere, dirigiere u organizare desfiles o manifestaciones públicas en calles, plazas u otros lugares abiertos, siempre que se realizaren sin permiso escrito de autoridad competente, en el que se determinen el objeto de la reunión, el sitio, día y hora en que ha de verificarse, será reprimido con prisión de uno a tres meses y multa de nueve a veinte y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Se reputarán también directores, promovedores y organizadores, los que aparecieren como tales, por los discursos que pronunciaren, por los impresos que hubieren publicado o repartido, por las palabras de mando que pronunciaren, por las insignias que luzcan o por la contribución inicial voluntaria a los fondos del desfile o la manifestación o por cualquier otro hecho significativo.

La pena será de tres a seis meses de prisión y multa de diecisiete a treinta y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América, cuando el desfile o la manifestación se hiciera en contra de la prohibición emanada de autoridad competente.

Art. 154.-  (Reformado por el Art. 13 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Los que concurrieren a la manifestación de que trata el artículo precedente, portando armas, serán sancionados con la privación de la libertad de tres meses a un año y multa de cuarenta y cuatro a ochenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 155.-  (Reformado por el Art. 14 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Serán reprimidos con reclusión menor de tres a seis años y multa de cuarenta y cuatro a ciento setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América, los que, con el fin de alterar el orden público, invadan edificios, instalaciones o terrenos públicos o privados, o los que al cometer tales hechos con los mismos fines propuestos, se apoderaren de cosas ajenas.

Capítulo IV DE LOS DELITOS DE SABOTAJE Y TERRORISMO

Art. 156.-  (Reformado por el Art. 15 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Los médicos, enfermeras, farmacéuticos, practicantes, empleados de casas de salud o propietarios de farmacias o droguerías que, desobedeciendo órdenes de autoridad competente, paralizaren los servicios o se abstuvieren de prestar su colaboración a los que necesitaren de ellos, serán reprimidos con prisión de uno a cinco años y multa de treinta y cinco a setenta dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Se aplicará el máximo de las penas previstas en este artículo a los miembros de las organizaciones profesionales que hubieren incitado a la comisión de tales hechos, si éstos se hubieren consumado.

Art. 157.-  (Reformado por el Art. 16 de la Ley 2001-47, R.O. 422, 28-IX-2001 y por el Art. 16 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Será reprimido con reclusión menor de tres a seis años y multa de nueve a veinte y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que sustrajere, ocultare o inutilizare en ocasión de un incendio, inundación, naufragio u otra calamidad, cualquier objeto material u otro medio destinado a socorro, salvamento o a combatir el peligro. En la misma pena incurrirá el que dificultare el servicio que se preste con tal motivo.

Si del hecho resultaren personas lesionadas, la pena será de seis a nueve años de reclusión menor ordinaria y multa de ochenta y siete a doscientos sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América; y si resultare la muerte de una o más personas, la pena será de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años y multa de doscientos sesenta y dos a ochocientos setenta y tres dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 158.-  (Reformado por el Art. 16 de la Ley 2001-47, R.O. 422, 28-IX-2001; y, por el Art. 17 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Será reprimido con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años y multa de ochenta y siete a ciento setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que fuera de los casos contemplados en este Código, destruya, deteriore, inutilice, interrumpa o paralice servicios públicos, instalaciones industriales o fabriles, centros comerciales, puertos, canales, embalses, minas, polvorines, vehículos o cualquier otro elemento de transporte, instalaciones públicas o privadas de energía eléctrica, de agua potable, gas u otras semejantes, o instalaciones de radio, teléfono, telégrafo, televisión o cualquier otro sistema de transmisión; depósitos de mercancías, de explosivos, de lubricantes, combustibles, materias primas destinadas a la producción o al consumo nacional, o cualquier otro tipo de abastecimiento semejante, con el propósito de producir alarma colectiva.

Si, como consecuencia del hecho, se produjere lesiones a personas, la pena será del máximo indicado en el inciso anterior; y si resultare la muerte de una o más personas, la pena será de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años, y multa de ciento setenta y cinco a cuatrocientos treinta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 159.-  (Reformado por el Art. 18 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Será reprimido con prisión de uno a tres años y multa de diecisiete a cuarenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que, fuera de los casos contemplados en este Código, impidiere, desorganizare o perturbare la recolección, producción, transporte, almacenaje o distribución de materias primas, productos elaborados o extraídos, maquinarias o cualquier otro medio necesario para la producción, con el propósito de producir alarma colectiva.

Art. 160.-  (Reformado por el Art. 1 del D.S. 1273, R.O. 705, 19-XII-1974; por el Art. 2 del DL s/n, R.O. 36, 1-X-1979; por el Art. 16 de la Ley 2001-47, R.O. 422, 28-IX-2001; por el Art. 19 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002; y, por el Art. 2 de la Ley 2006-31, R.O. 231, 17-III-2006).- El que con el fin de cometer delitos contra la seguridad común de las personas o de los bienes, fabricare, suministrare, adquiriere, sustrajere, arrojar, usare, o introdujere al país armas, municiones o bombas explosivas, materias explosivas, asfixiantes o tóxicas, o sustancias o materiales destinados a su preparación, será reprimido con reclusión mayor ordinaria de 4 a 8 años y multa de cuatrocientos cuarenta y dos a ochocientos ochenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Si, por efecto de los hechos indicados se produjeren lesiones a personas, se impondrá el máximo de la pena señalada en el

inciso anterior; y si resultare muerta una o más personas, la sanción será de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años y multa de ochocientos ochenta y cuatro a mil setecientos sesenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Si los hechos delictivos afectaren exclusivamente a bienes, además de la pena señalada en el primer inciso, el autor será condenado a la indemnización de los daños y perjuicios causados.

Art. ... -  (Agregado por el Art. 2 del D.S. 373, R.O. 705, 19-XII-1974; reformado por el Art. 16 de la Ley 2001-47, R.O. 422, 28-IX-2001; y, por el Art. 20 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Los que, individualmente o formando asociaciones, como guerrillas, organizaciones, pandillas, comandos, grupos terroristas, montoneras o alguna otra forma similar, armados o no, pretextando fines patrióticos, sociales, económicos, políticos, religiosos, revolucionarios, reivindicatorios proselitistas, raciales, localistas, regionales, etc., cometieren delitos contra la seguridad común de las personas o de grupos humanos de cualquiera clase o de sus bienes: ora asaltando, violentando o destruyendo edificios, bancos, almacenes, bodegas, mercados, oficinas, etc.; ora allanando o invadiendo domicilios, habitaciones, colegios, escuelas, institutos, hospitales, clínicas, conventos, instalaciones de la fuerza pública, militares, policiales o paramilitares, etc.; ora sustrayendo o apoderándose de bienes o valores de cualquier naturaleza y cuantía; ora secuestrando personas, vehículos, barcos o aviones para reclamar rescate, presionar y demandar el cambio de leyes o de órdenes y disposiciones legalmente expedidas o exigir a las autoridades competentes poner en libertad a procesados o sentenciados por delitos comunes o políticos, etc.; ora ocupando por la fuerza, mediante amenaza o intimidación, lugares o servicios públicos o privados de cualquier naturaleza y tipo; ora levantando barricadas, parapetos, trincheras, obstáculos, etc., con el propósito de hacer frente a la fuerza pública en respaldo de sus intenciones, planes, tesis o proclamas; ora atentando, en cualquier forma, en contra de la comunidad, de sus bienes y servicios, serán reprimidos con reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años y multa de mil setecientos sesenta y siete a cuatro mil cuatrocientos dieciocho dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Si por los hechos delictivos enumerados se produjeran lesiones a las personas, se impondrá a sus autores el máximo de la pena indicada en el inciso anterior y, si se produjere la muerte de una o más personas, la pena será de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años y multa de cuatro mil cuatrocientos dieciocho a ocho mil ochocientos treinta y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Si los hechos a los que se refiere el inciso primero de este artículo afectaren únicamente bienes, además de la sanción impuesta en el mismo, el autor o autores serán condenados al resarcimiento de daños y perjuicios que hubieren causado.

Art. 161. -  (Reformado por el Art. 21 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El que se introdujere injustificadamente en dependencias, cuyo acceso al público o a los particulares ha sido prohibido, o a bases, naves, aeronaves, transportes, cuarteles, fábricas o depósitos militares o policiales, o, en general, en zonas de seguridad determinadas por la autoridad competente, será sancionado con prisión de seis meses a dos años y multa de cuarenta y cuatro a ochenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Si del hecho resultaren lesiones a personas, la pena será de reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de ciento setenta y cinco a cuatrocientos treinta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América, y si se produjere la muerte de una o más personas, la pena será de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años y multa de cuatrocientos treinta y siete a ochocientos setenta y tres dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 162. -  (Sustituido por el Art. 3 de la Ley 2006-31, R.O. 231, 17-III-2006).- Los particulares que sin el permiso necesario y sin debida explicación portaren armas de uso militar o policial y de cualquier otro tipo similar, serán sancionados con prisión de uno a cinco años y multa de nueve a cuarenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América.

La actuación dolosa reiterada de este tipo de conducta, será sancionada con una pena de reclusión de tres a seis años.

Corresponde al Ministerio de Defensa Nacional, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas extender el permiso de portar armas; esta facultad podrá ser delegada de conformidad con el reglamento de la materia.

Esta obligación se extiende a las armas que se empleen en industrias y oficios.

Las autoridades militares y de Policía debidamente autorizadas, están obligadas a decomisar y remitir previo el levantamiento del correspondiente parte de la acción efectuada, a la Dirección de Logística del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, toda arma o munición de procedencia nacional o extranjera, que no contare con los permisos y (SIC) legalmente otorgados.

Todas las armas decomisadas serán registradas en la Dirección de Logística del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas

y en caso de no justificar el propietario su procedencia, en un plazo de treinta días, serán entregadas a los depósitos de armas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para ser destruidas.

Las armas decomisadas que sirvieran como evidencia de la comisión de infracciones penales se mantendrán como tales bajo la custodia de la Policía Judicial y una vez terminado el juicio penal respectivo, serán registradas en la Dirección de Logística del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y entregadas posteriormente a la autoridad competente.

En los Comandos Provinciales de la Policía de todo el país se llevará un registro en el que se anote el tipo, calibre y características del arma o armas decomisadas y que han sido enviadas a la autoridad militar correspondiente.

Los fabricantes de armas, explosivos y municiones de cualquier tipo, deben registrar sus fábricas o talleres en la Dirección de Logística del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, e informar mensualmente a esta entidad sobre la cantidad, tipo, calibre y características de las armas producidas y el código asignado a cada una de ellas, las cuales obligatoriamente también deberán ser registradas.

Art. 163.-  (Reformado por el Art. 23 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Quien impartiere o recibiere instrucción militar sin permiso de la autoridad competente, será reprimido con prisión de seis meses a un año y multa de treinta y cinco a setenta dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 164.-  (Reformado por el Art. 16 de la Ley 2001-47, R.O. 422, 28-IX-2001; y, por el Art. 24 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- La agresión terrorista, siempre que el hecho no constituya delito más grave, perpetrada contra funcionarios o empleados de instituciones públicas o contra propiedades de los mismos, será sancionada con tres a seis años de reclusión menor ordinaria y multa de ochenta y siete a ciento setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Si se causaren lesiones a personas, la pena será de reclusión menor de seis a nueve años y multa de ochenta y siete a cuatrocientos treinta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América. Si resultare la muerte de una o más personas, la pena será de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años y multa de doscientos sesenta y dos a ochocientos setenta y tres dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 165.-  (Reformado por el Art. 25 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Fuera de los casos contemplados en este Código, la amenaza terrorista, por cualquier medio que se haga, será reprimida con prisión de tres meses a un año y multa de nueve a cuarenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 166.- Cuando los delitos previstos en este Capítulo fueren cometidos por extranjeros naturalizados en el Ecuador, además de la pena impuesta se cancelará la carta de naturalización y serán expulsados del país, después de cumplida la sanción que se les imponga.

Art.- (Agregado por la Disposición Reformativa Primera de la Ley s/n, R.O. 352-S, 30-XII-2010).- Quienes dolosamente, en forma individual o colectiva, de manera directa o indirecta, por cualquier medio, proporcionen, ofrezcan o recolecten fondos o activos para financiar en todo o en parte, con recursos lícitos o ilícitos, la comisión de los delitos tipificados en este Capítulo, serán sancionados con las mismas penas establecidas para el delito financiado.

El delito tipificado en este artículo será investigado, enjuiciado, fallado o sentenciado por el tribunal o la autoridad competente como delito autónomo de otros delitos tipificados en este Capítulo, cometidos dentro o fuera del país.

Título II

DE LOS DELITOS CONTRA LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y LA IGUALDAD RACIAL

Capítulo I

DE LOS DELITOS RELATIVOS AL EJERCICIO DEL SUFRAGIO

Art. 167.-  (Reformado por el Art. 26 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Los que, por medio de asonadas, violencias o amenazas, hubieren impedido a uno o más ciudadanos ejercer sus derechos políticos, serán reprimidos con prisión de uno a tres años y multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 168.- Los miembros de las Juntas Electorales y los demás funcionarios o corporaciones que, por ley, estuvieren encargados de verificar el escrutinio de una elección, y sustrajeren o falsificaren boletas, o anularan parcial o totalmente una elección, contra leyes expresas, serán reprimidos con prisión de tres a cinco años y la privación de los derechos políticos por dos años.

Art. 169.- Si los atentados previstos en los dos artículos anteriores se han cometido previo acuerdo para extenderlos y ejecutarlos en toda la República, o en varios cantones, la pena será de reclusión menor ordinaria de seis a nueve años e

interdicción de los derechos políticos por dos años.

Art. 170.- Todo individuo que fuere sorprendido sustrayendo boletas a los electores, mediante astucia o violencia, o sustituyendo fraudulentamente otra boleta a la que tuviere el elector, o que se presentare a votar con nombre supuesto, o que votare en dos o más parroquias, será reprimido con prisión de seis meses a un año y con un año de interdicción de los derechos políticos.

Art. 171.- Los que perturbaren una elección popular alegando motivos religiosos, ya sea en favor de sus candidatos, recomendándolos; ya desprestigiando a los candidatos contrarios, serán reprimidos con prisión de treinta a noventa días.

Art. 172.- Todo el que haya recibido algo en cambio de su voto, o que haya dado o prometido algo por el voto de otro, será reprimido con prisión de seis meses a un año e interdicción de los derechos políticos por igual tiempo.

Capítulo II

DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE CONCIENCIA Y DE PENSAMIENTO

Art. 173.- Los que, empleando violencias o amenazas, impidieren a uno o más individuos el ejercicio de cualquier culto permitido o tolerado en la República, serán reprimidos con prisión de seis meses a dos años.

Art. 174.-  (Reformado por el Art. 27 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Los particulares o ministros de un culto que provocaren asonadas, o tumultos contra los partidarios de otro culto, ya sea de palabra o por escrito, serán reprimidos con prisión de uno a seis meses y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 175.-  (Reformado por el Art. 28 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Si los infractores ejercieren autoridad eclesiástica, política, civil o militar, la pena será de seis meses a dos años de prisión y multa de dieciséis a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 176.-  (Reformado por el Art. 29 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Serán reprimidos con prisión de tres meses a un año y multa de doce a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América, los que hubieren impedido, retardado, o interrumpido el ejercicio de un culto, o las ceremonias públicas de él, no prohibidas expresamente por la ley, por medio de desorden o tumulto promovido en el lugar destinado para dicho culto, pero sin cometer violencias ni proferir amenazas contra nadie.

Art. 177.-  (Reformado por el Art. 30 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Los que ofendieren el cadáver de una persona, con acciones, palabras, emblemas o escritos, serán reprimidos con prisión de dos meses a un año y multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América.

La autoridad civil o eclesiástica que negare sepultura a un cadáver, en los cementerios públicos, alegando motivos religiosos, será reprimida con prisión de uno a tres meses y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Los que colocaren sobre la tumba de una persona emblemas o escritos injuriosos, serán reprimidos con prisión de treinta a noventa días y multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 178.- La autoridad que, por medios arbitrarios o violentos, coartare la facultad de expresar libremente el pensamiento, será reprimida con prisión de uno a cinco años e interdicción de los derechos políticos por un tiempo igual al de la condena.

Art. 179.- El que impidiere o estorbare la libre circulación de un libro, periódico o impreso, que no sean anónimos, será reprimido con prisión de seis meses a dos años.

Capítulo III

DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL

Art. 180.-  (Reformado por el Art. 31 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Los empleados públicos, los depositarios y los agentes de la autoridad o de la fuerza pública que, ilegal y arbitrariamente, hubieren arrestado o hecho arrestar, detenido o hecho detener a una o más personas, serán reprimidos con seis meses a dos años de prisión y multa de doce a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Podrán, además, ser condenados a la interdicción de los derechos de ciudadanía por dos a tres años.

Art. 181.- La autoridad que ordenare el confinamiento de una persona contraviniendo a los preceptos constitucionales, será reprimida con prisión de seis meses a dos años.

Art. 182.- Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el funcionario que retuviere a un detenido o preso cuya libertad haya debido decretar o ejecutar; y el que prolongare indebidamente la detención de una persona, sin ponerla a disposición del juez competente.

Art. 183.-  (Reformado por el Art. 32 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Serán reprimidos con prisión de dos meses a dos años y multa de seis a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América los que, sin orden de las

autoridades constituidas y fuera de los casos en que la ley y los reglamentos permitieren u ordenaren el arresto o detención de los particulares, hubieren arrestado o hecho arrestar, detenido o hecho detener a cualquiera persona, siempre que este arresto o detención no constituya un delito más severamente reprimido.

Art. 184.-  (Reformado por el Art. 33 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- La prisión será de seis meses a tres años y la multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América, si la detención ilegal y arbitraria hubiere durado más de diez días.

Art. 185.-  (Reformado por el Art. 34 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Si la detención ilegal y arbitraria hubiere durado más de un mes, el culpado será reprimido con prisión de uno a cuatro años y multa de dieciséis a cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 186.- Se aplicará la pena de reclusión menor de tres a seis años, si el arresto hubiere sido ejecutado con una orden falsa de la autoridad pública, o con el traje o bajo el nombre de uno de sus agentes, o si la persona arrestada o detenida hubiere sido amenazada de muerte.

Art. 187.-  (Reformado por el Art. 16 de la Ley 2001-47, R.O. 422, 28-IX-2001).- Cuando la persona arrestada o detenida hubiere sufrido tormentos corporales, el culpable será reprimido con tres a seis años de reclusión menor.

La pena será de reclusión menor de seis a nueve años, si de los tormentos hubiere resultado cualquiera de las lesiones permanentes detalladas en el capítulo de las lesiones.

Si los tormentos hubieren causado la muerte, el culpado será reprimido con reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años.

Art. 188.-  (Sustituido por el Art. 7 de la Ley 2001-47, R.O. 422, 28-IX-2001).- El delito del (sic) plagio se comete apoderándose de otra persona por medio de violencias, amenazas, seducción o engaño, sea para venderla o ponerla contra su voluntad al servicio de otra, o para obtener cualquier utilidad, o para obligarla a pagar rescate o entregar una cosa mueble, o extender, entregar o firmar un documento que surta o pueda surtir efectos jurídicos, o para obligarla a que haga u omita hacer algo, o para obligar a un tercero a que ejecute uno de los actos indicados tendiente a la liberación del plagiado.

Art. 189.-  (Sustituido por el Art. 8 de la Ley 2001-47, R.O. 422, 28-IX-2001).- El plagio será reprimido con las penas que se indican en los números siguientes:

1.- Con prisión de seis meses a dos años, si la víctima es devuelta a su libertad espontáneamente por el plagiario, antes de iniciarse procedimiento judicial, sin haber sufrido malos tratos, ni realizándose ninguno de los actos condicionantes determinados en el artículo anterior;

2.- Con prisión de uno a tres años, si la devolución de libertad, con las condiciones del número que precede, se ha realizado después de iniciado el procesamiento no estando detenido o preso el plagiario;

3.- Con reclusión menor ordinaria de tres a seis años, si la liberación se realiza en los términos del número 2 de este artículo, estando detenido o preso el plagiario;

... - (Agregado por el Art. 1 de la Ley 2005-21, R.O. 154, 28-XI-2005).- Con reclusión menor ordinaria de tres a seis años a quien o quienes, mediante amenazas, violencia, seducción, engaño u otros medios ilegítimos, se apoderasen de un vehículo automotor; reteniendo contra su voluntad a su conductor y/o a sus ocupantes, para asegurar el cometimiento del delito;

... - (Agregado por el Art. 1 de la Ley 2005-21, R.O. 154, 28-XI-2005).- Con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años, cuando el infractor, en el caso y circunstancias establecidas en el numeral anterior, ponga en marcha el vehículo u obligue al conductor o a otra de las personas retenidas a hacerlo, con el fin de, en compañía de éstas, aunque sin su participación, utilizar el automotor para cometer o intentar cometer otros delitos;

4.- Con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años, si en el caso del número 1, la víctima ha sufrido malos tratos;

5.- Con reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años, en el caso del número 2, si la víctima ha sufrido malos tratos;

6.- Con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años, en el caso del número 3, si hubiere tales malos tratos; y,

7.- Con reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años, cuando la víctima no hubiere recobrado su libertad hasta la fecha de la sentencia, debiendo imponerse el máximo de la pena si antes de la condena la víctima apareciere violada, muerta o falleciere como consecuencia del plagio.

Art. 190.- Aunque medie sentencia condenatoria ejecutoriada, en el caso del número 7o. del artículo anterior, la pena será

reducida a la mitad si el plagiario restituye la libertad de su víctima.

Art.- (Agregado por el Art. 9 de la Ley 2001-47, R.O. 422, 28-IX-2001).- Se considerarán agravantes del delito de plagio, además de las circunstancias señaladas en el artículo 30, cuando concurren una o más de las circunstancias siguientes:

Prolongar la privación de libertad del plagiado por un tiempo mayor a quince días.

Cometer la infracción utilizando orden de detención falsa, o simulando tenerla o abusando de autoridad en el caso de los miembros de la fuerza pública o jueces.

Capítulo ... (Ley 2005-2) **DEL DELITO RELATIVO A LA TRATA DE PERSONAS**

(Agregado por el Art. 8 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005)

Art. ... (1).- (Agregado por el Art. 8 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005).- Constituye delito de trata de personas, aunque medie el consentimiento de la víctima, el promover, inducir, participar, facilitar o favorecer la captación, traslado, acogida, recepción o entrega de personas recurriendo a la amenaza, violencia, engaño o cualquier otra forma fraudulenta, con fines de explotación ilícita, con o sin fines de lucro.

Para efectos de esta infracción, se considera explotación toda forma de trabajos o servicios forzados, esclavitud laboral, venta y/o utilización de personas para mendicidad, conflictos armados o reclutamiento para fines delictuosos.

Art. ... (2).- (Agregado por el Art. 8 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005).- La trata de personas será reprimida con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años, siempre que no constituya explotación sexual. Si la víctima fuere una persona menor de dieciocho años, la pena será de reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años.

Art. ... (3).- (Agregado por el Art. 8 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005).- La pena será de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años cuando en la comisión del delito establecido en el artículo anterior concurre una o más de las siguientes circunstancias:

1. Que la víctima sea menor de catorce años de edad;
2. Que, como consecuencia del delito, la víctima sufra lesión corporal grave o permanente, o daño psicológico irreversible;
3. Si el infractor es cónyuge, conviviente o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ascendiente o descendiente de la víctima; y,
4. Cuando el infractor se aprovechare de la vulnerabilidad de la víctima o ésta se encontrare incapacitada para resistir la agresión.

Art. ... (4).- (Agregado por el Art. 8 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005).- Quien venda, compre o realice cualquier transacción, en virtud de la cual una persona es entregada, por pago o cualquier otro medio, con fines de explotación, será sancionado con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años. Constituye tentativa la oferta en venta.

Si la víctima fuere una persona menor de dieciocho años, la pena será de reclusión mayor extraordinaria de nueve a doce años; y, si fuere menor de doce años, la pena será de doce a dieciséis años de reclusión mayor extraordinaria.

Capítulo ... (Ley 2005-2) **DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA EXTRACCIÓN Y TRÁFICO ILEGAL DE ÓRGANOS**

(Agregado por el Art. 8 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005)

Art. ... (1).- (Sustituido por la Disposición Reformatoria Segunda de la Ley s/n, R.O. 398, 4-III-2011).- Quien dolosamente incumpla las obligaciones o viole las prohibiciones previstas en los artículos 11, 19, 58, 69, 74, 76, 77, 78 y 79 de la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células; quien falsifique o adultere un protocolo de donación y trasplante, documento definido en la misma Ley, será reprimido con reclusión menor ordinaria de tres (3) a seis (6) años.

En caso de incumplimiento o inobservancia de las obligaciones o prohibiciones antes señaladas, cuando se refiera a instituciones o personas jurídicas, se presumirá la responsabilidad penal de la máxima autoridad de la institución o representante legal de la persona jurídica.

Quien, comercie dolosamente o trafique con órganos, tejidos, sustancias corporales o cualquier material anatómico

proveniente de cadáveres humanos será reprimido con reclusión menor extraordinaria de nueve (9) a doce (12) años. Igual pena se impondrá a quien los seleccione, extraiga, evalúe, prepare, obtenga, almacene, transporte, asigne, distribuya o trasplante dolosamente.

La pena será de reclusión mayor extraordinaria de doce (12) a dieciséis (16) años, si las actividades referidas en el inciso anterior se realizan con órganos, tejidos, sustancias corporales o cualquier material anatómico que provengan de personas vivas.

Se impondrá pena de reclusión mayor extraordinaria de doce (12) a dieciséis años, a las personas que extraigan o trasplanten cualquier componente anatómico humano, en centros médicos no acreditados por la Autoridad Sanitaria Nacional.

Si los componentes anatómicos extraídos o trasplantados dolosamente, provienen de niños, niñas o de adolescentes o de personas con discapacidad, la pena será de reclusión mayor especial de dieciséis (16) a veinticinco (25) años.

Art. ... (2).- (Agregado por la Disposición Reformatoria Tercera de la Ley s/n, R.O. 398, 4-III-2011).- Quien traslade órganos, donantes, receptores o profesionales de la salud especializados en trasplantes, fuera de sus fronteras jurisdiccionales originales, con la finalidad de realizar uno o más trasplantes en la República del Ecuador, sin contar con la categoría de inmigrante en el país o con los permisos correspondientes de la Autoridad Sanitaria Nacional, será reprimido con la pena de reclusión mayor extraordinaria de doce (12) a dieciséis (16) años.

Capítulo IV

DE LOS DELITOS CONTRA LA INVOLABILIDAD DEL DOMICILIO

Art. 191.-  (Reformado por el Art. 35 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Los empleados del orden administrativo o judicial, los oficiales de justicia o de policía, los comandantes o agentes de la fuerza pública que, obrando como tales, se hubieren introducido en el domicilio de un habitante, contra la voluntad de éste, fuera de los casos previstos y sin las formalidades prescritas por la ley, serán reprimidos con prisión de seis meses a dos años y multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 192.-  (Reformado por el Art. 36 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Será reprimido con prisión de un mes a dos años y multa de seis a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que sin orden de la autoridad y fuera de los casos en que la ley permite entrar en el domicilio de los particulares, contra la voluntad de éstos, se hubiere introducido en una casa, departamento, pieza o vivienda, habitada por otro, o sus dependencias cercadas, ya por medio de amenazas o violencias, ya por medio de fractura, escalamiento o ganzúas.

Art. 193.-  (Reformado por el Art. 37 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- La prisión será de seis meses a cinco años y la multa de doce a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América, si el hecho ha sido cometido con una orden falsa de la autoridad pública, o con el traje o bajo el nombre de uno de sus agentes o con una de las tres circunstancias siguientes:

Si el acto ha sido ejecutado de noche;

Si ha sido ejecutado por dos o más personas; y,

Si los culpables o alguno de ellos llevaban armas.

Art. 194.- Los culpados de las infracciones previstas en los dos artículos anteriores serán colocados bajo la vigilancia de la autoridad por un tiempo igual al de la condena.

Art. 195.-  (Reformado por el Art. 38 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Será reprimido con prisión de quince días a seis meses y multa de cinco a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que se hubiere introducido, sin el consentimiento del propietario, o del locatario, pero sin violencias o amenazas, en los lugares designados en el Art. 192, y haya sido encontrado en ellos durante la noche.

Art. 196.- En la violación de domicilio se presume que no hay consentimiento del dueño o su encargado cuando no están presentes en el acto que constituya la violación.

Capítulo V

DE LOS DELITOS CONTRA LA INVOLABILIDAD DEL SECRETO

Art. 197.-  (Sustituido por el Art. 2 de la Ley s/n, R.O. 555-S, 24-III-2009).- Serán sancionados con penas de 2 meses a un año de prisión, quienes interceptaren sin orden judicial, conversaciones telefónicas o realizadas por medios afines y quienes se sustrajeran o abrieran sobres de correspondencia que pertenecieran a otro sin autorización expresa.

Se exime la responsabilidad de quien lo hizo cuando la interceptación telefónica o la apertura de sobres se produce por error, en forma accidental o fortuita.

Art. 198.-  (Derogado por el Art. 2 de la Ley s/n, R.O. 555-S, 24-III-2009).

Art. 199.-  (Reformado por el Art. 41 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El que hallándose en posesión de una correspondencia no destinada a la publicación, la hiciera publicar, o presentare en juicio sin orden judicial, aunque haya sido dirigida a él, será reprimido con multa de seis a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América, si el acto puede causar perjuicio a terceros; a no ser que se trate de correspondencia en que consten obligaciones a favor del tenedor de ella, caso en el que puede presentarse en juicio.

Art. 200.- En la misma pena incurrirá el que, sin ser empleado público, divulgare actuaciones o procedimientos de que haya tenido conocimiento y que, por ley, deben quedar reservados.

Art. 201.-  (Reformado por el Art. 42 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El que teniendo noticia, por razón de su estado u oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación puede causar daño, lo revelare sin causa justa, será reprimido con prisión de seis meses a tres años y multa de ocho a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 202.- Los que sustrajeren cartas confiadas al correo serán reprimidos con prisión de quince a sesenta días, excepto los padres, maridos o tutores que tomen las cartas de sus hijos, consortes o pupilos, respectivamente, que se hallen bajo su dependencia.

Art. ... (1).- (Agregado por el Art. 58 de la Ley 2002-67, R.O. 557-S, 17-IV-2002).- El que empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, violentare claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener información protegida, contenida en sistemas de información; para vulnerar el secreto, confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la seguridad, será reprimido con prisión de seis meses a un año y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Si la información obtenida se refiere a seguridad nacional, o a secretos comerciales o industriales, la pena será de uno a tres años de prisión y multa de mil a mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

La divulgación o la utilización fraudulenta de la información protegida, así como de los secretos comerciales o industriales, será sancionada con pena de reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realiza por parte de la persona o personas encargadas de la custodia o utilización legítima de la información, éstas serán sancionadas con pena de reclusión menor de seis a nueve años y multa de dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Art. ... (2).- Obtención y utilización no autorizada de información.- (Agregado por el Art. 58 de la Ley 2002-67, R.O. 557-S, 17-IV-2002).- La persona o personas que obtuvieren información sobre datos personales para después cederla, publicarla, utilizarla o transferirla a cualquier título, sin la autorización de su titular o titulares, serán sancionadas con pena de prisión de dos meses a dos años y multa de mil a dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Capítulo VI

DE LOS DELITOS RELATIVOS A LAS DECLARACIONES DE LOS SINDICADOS O DE SUS PARIENTES

Art. 203.- El juez o autoridad que obligare a una persona a declarar contra sí misma, contra su cónyuge, sus ascendientes, descendientes, o parientes dentro del cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de afinidad, en asuntos que puedan acarrear responsabilidad penal, será reprimido con prisión de seis meses a tres años.

Art. 204.- El juez o autoridad que arrancare declaraciones o confesiones contra las personas indicadas en el artículo anterior, por medio del látigo, de prisión, de amenaza o de tormento, será reprimido con prisión de dos a cinco años y privación de los derechos de ciudadanía por igual tiempo al de la condena.

Se reprimirá con la misma pena a los agentes de policía o de la fuerza pública que incurrieren en la infracción indicada en el inciso anterior.

Capítulo VII

DE LOS DELITOS CONTRA LOS PRESOS O DETENIDOS

Art. 205.- Los que expidieren o ejecutaren la orden de atormentar a los presos o detenidos, con incomunicación por mayor tiempo que el señalado por la ley, con grillos, cepo, barra, esposas, cuerdas, calabozos malsanos, u otra tortura, serán reprimidos con prisión de uno a cinco años e interdicción de los derechos políticos por igual tiempo.

Art. 206.- Ni la inseguridad de las cárceles, ni lo temible del detenido o preso, ni la conducta rebelde de éste, podrán servir de disculpa en los casos del artículo anterior.

Art. 207.- El jefe de prisión u otro establecimiento penal, o el que le reemplace, que recibiere algún reo sin testimonio de sentencia firme en que se le hubiere impuesto la pena, o sin la orden o boleta constitucional, en caso de detención, será reprimido con prisión de uno a seis meses.

Art. 208.-  (Reformado por el Art. 43 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años y multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América, los jueces y demás empleados que hubieren retenido o hecho retener a una persona, en otros lugares que los determinados por la ley.

Capítulo VIII

DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE TRABAJO, ASOCIACIÓN Y PETICIÓN

Art. 209.- La autoridad política, civil, eclesiástica o militar que exigiere servicios no impuestos por la ley, u obligare a trabajar sin previa estipulación, será reprimida con prisión de uno a seis meses.

Art. 210.- Será reprimido con prisión de un mes a un año el que ejerciere violencia sobre otro, o le amenazare para obligarle a tomar parte en una huelga o boicot. La misma pena sufrirá el patrón, empresario o empleado que, por sí o por cuenta de alguien, suspendiere en todo o en parte el trabajo en sus establecimientos, agencias o escritorios, con el fin de imponer a sus dependientes modificaciones en los pactos establecidos; y los que por solidaridad, hicieren lo propio en otros establecimientos.

Art. 211.- La misma pena se aplicará al patrón, empresario o empleado que, por sí o por cuenta de alguien ejerciere coacción para obligar a otro a intervenir en alguno de los actos determinados en la segunda parte del artículo anterior, o para abandonar, o ingresar a una sociedad obrera determinada.

Art. 212.-  (Reformado por el Art. 44 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Será reprimido con multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América y prisión de uno a seis meses, la autoridad que, de cualquier manera, impidiere el libre ejercicio del derecho de petición.

Capítulo ...

DE LOS DELITOS DE ODIO

(Sustituido por el Art. 5 de la Ley s/n, R.O. 555-S, 24-III-2009)

Nota:

Aunque el Art. 5 de la Ley s/n (R.O. 555-S, 24-III-2009) no especifica que capítulo innumerado se sustituye por el presente, del análisis efectuado, hemos determinado que es el agregado por el D.S. 3194 (R.O. 769, 8-II-1979) que sancionaba los delitos de discriminación racial.

Art. ... (1)-  (Sustituido por el Art. 5 de la Ley s/n, R.O. 555-S, 24-III-2009).- Será sancionado con prisión de seis meses a tres años el que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, sexo, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, edad, estado civil o discapacidad.

Art. ... (2)-  (Sustituido por el Art. 5 de la Ley s/n, R.O. 555-S, 24-III-2009).- Será sancionado con prisión de seis meses a dos años el que cometiere actos de violencia moral o física de odio o de desprecio contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, edad, estado civil o discapacidad.

Si de los actos de violencia a que se refiere este artículo, resultare herida alguna persona, los autores serán sancionados con prisión de dos a cinco años. Si dichos actos de violencia produjeran la muerte de una persona, sus autores serán sancionados con reclusión de doce a dieciséis años.

Art. ... (3)-  (Sustituido por el Art. 5 de la Ley s/n, R.O. 555-S, 24-III-2009).- Será sancionado con prisión de uno a tres años, el que en ejercicio de sus actividades profesionales, mercantiles o empresariales, niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho, o excluya a una persona o niegue o vulnere o restrinja los derechos consagrados en la Constitución, por razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, edad, estado civil o discapacidad.

Art. ... (4)-  (Sustituido por el Art. 5 de la Ley s/n, R.O. 555-S, 24-III-2009).- Al que, siendo servidor público, incurra en alguna de las conductas previstas en este capítulo o niegue o retarde a una persona un trámite o servicio al que tenga derecho, se sancionará conforme lo previsto en el artículo anterior. En estos casos el funcionario quedará inhabilitado para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.

Capítulo IX

DISPOSICIONES COMUNES A ESTE TÍTULO

Art. 213.- Cualquier otro acto arbitrario y atentatorio contra las libertades y derechos garantizados por la Constitución, ordenado o ejecutado por un empleado u oficial público, por un depositario o agente de la autoridad o de la fuerza pública, será reprimido con prisión de tres a seis meses.

Respecto de la acusación; perdón, rebaja y conmutación de la pena; prescripción de las acciones, y responsabilidad civil, se aplicarán además, respecto de los funcionarios o empleados que violaren cualquiera de las garantías declaradas en la Constitución, las reglas especialmente puntualizadas por ésta.

Art. 214.- La obediencia disciplinaria podrá eximir de responsabilidad al que ha ejecutado una orden contraria a los derechos garantizados por la Constitución, siempre que dicha orden, emanada del superior jerárquico respectivo y en asunto de su competencia, no haya podido ser desobedecida por el inferior, sin quebrantamiento de la disciplina.

Comprobadas estas circunstancias, toda la responsabilidad del acto recaerá sobre el superior que hubiere expedido la orden de ejecutarlo.

Art. 215.- Si alguno de los actos arbitrarios mencionados en este Capítulo ha sido cometido mediante la firma falsificada de un empleado público, los autores de la falsificación y los que, maliciosa y fraudulentamente, hubieren usado de ella serán reprimidos con reclusión mayor de cuatro a ocho años.

Art. 216.- ^{HISTÓRICO} (Reformado por el Art. 45 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Serán reprimidos con multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América y prisión de uno a tres años, los jueces y demás empleados que, sin las autorizaciones prescritas por la Constitución, hubieren solicitado, expedido o firmado un auto o sentencia contra el Presidente de la República o el que le subroga, o contra los Ministros de Estado, los Magistrados de la Corte Suprema, o los Consejeros de Estado; o bien, una orden que tenga por objeto perseguirlos o hacerlos enjuiciar; o que hubieren dado o firmado la orden o mandato para aprehenderlos o arrestarlos.

Notas:

- *La norma constitucional prevé la autorización para enjuiciar penalmente sólo al Presidente y Vicepresidente y no para los demás funcionarios nombrados en este artículo. En la actualidad, ya no existen los Consejeros de Estado.*

- *Del Capítulo cuarto, Título IV; y, Capítulo dos, Título IX de la Constitución de la República del Ecuador (R.O. 449, 20-X-2008) se establece que la Corte Nacional de Justicia reemplace a la Corte Suprema de Justicia.*

Art. 217.- En iguales penas incurrirán los jueces y demás empleados que procedieren del modo que se indica en el artículo anterior respecto de los Senadores y Diputados, mientras gozan de inmunidad, salvo el caso de delito flagrante previsto por la Constitución.

Nota:

Actualmente la función legislativa es ejercida por la Asamblea Nacional, integrada por asambleístas, por lo que la distinción entre senadores y diputados no corresponde a nuestra actual organización política.

Título III

DE LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Capítulo I

DE LA REBELIÓN Y ATENTADOS CONTRA LOS FUNCIONARIOS

Art. 218.- Es rebelión todo ataque, toda resistencia hecha con violencias o amenazas a los empleados públicos, a los depositarios o agentes de la fuerza pública, a los comisionados para la percepción de los impuestos y contribuciones, a los ejecutores de los decretos y fallos judiciales, a los guardas de las aduanas y oficinas de recaudación y a los agentes de Policía, cuando obran en ejecución de las leyes, o de las órdenes o reglamentos de la autoridad pública.

Es, igualmente, rebelión todo ataque, toda resistencia con violencias o amenazas, por los individuos admitidos en los hospicios, no estando privados de conocimiento, o por los presos o detenidos en las cárceles y otros lugares de corrección o represión.

Art. 219.- Es también rebelión todo ataque, toda resistencia hecha con violencias o amenazas a los empleados o agentes del servicio telegráfico, cuando transmitan despachos de la autoridad pública.

Art. 220.- La rebelión cometida por una sola persona provista de armas será reprimida con prisión de tres meses a dos años. Si ha tenido lugar sin armas, con prisión de ocho días a seis meses.

Art. 221.- Si la rebelión ha sido cometida por muchas personas y a consecuencia de un concierto previo, los rebeldes que

lleven armas serán reprimidos con reclusión menor de tres a seis años; y los otros, con prisión de uno a tres años.

Si la rebelión no ha sido el resultado de un concierto previo, los culpados que llevaren armas serán reprimidos con prisión de tres meses a un año; y los otros, con prisión de quince días a tres meses.

Art. 222.- En caso de rebelión en pandilla o atropamiento, no se aplicará ninguna pena a los rebeldes que no ejercieren funciones ni empleos en la pandilla, si se hubieren retirado a la primera amonestación de la autoridad pública, o si han sido aprehendidos fuera del lugar de la rebelión, sin nueva resistencia y sin armas.

Art. 223.-  (Reformado por el Art. 46 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- En cuantos casos se aplicare, por el acto de rebelión, la pena de privación de la libertad, los culpados podrán ser colocados bajo la vigilancia de la autoridad hasta por un año, y multados con seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Los jefes de la rebelión y los que la hubieren provocado podrán ser condenados a vigilancia de la autoridad por dos años, a lo menos, y cinco, a lo más.

Art. 224.- La tentativa de asesinato contra el Presidente de la República o el que se hallare ejerciendo la Función Ejecutiva será reprimida con reclusión mayor de ocho a doce años, aunque no llegue a inferirse daño alguno.

Art. 225.- El reo de igual tentativa contra un Senador o Diputado, Ministro de Estado, Magistrado o Juez, Gobernador o cualquier otro funcionario público que ejerza jurisdicción o autoridad civil o militar, cuando se halle en actual ejercicio de sus funciones, o por razón de su ministerio, será reprimido con cuatro a ocho años de reclusión mayor, aunque no llegue a inferirse daño alguno.

Si el atentado se cometiere contra la vida de cualquier otro funcionario público que no ejerza jurisdicción, el autor será reprimido con reclusión menor de tres a seis años.

Nota:

Actualmente la función legislativa es ejercida por la Asamblea Nacional, integrada por asambleístas, por lo que la distinción entre senadores y diputados no corresponde a nuestra actual organización.

Art. 226.- La provocación a duelo dirigida a los funcionarios públicos de que hablan los dos artículos anteriores, será reprimida con la pena inmediata inferior a la señalada para la tentativa de asesinato contra los expresados funcionarios, y según las distinciones establecidas en los mismos artículos.

Art. 227.- El que hiriere o golpear, o maltratare de obra, o cometiere otra violencia material contra el Presidente de la República o contra quien hiciera sus veces, será reprimido con tres a seis años de reclusión menor.

Art. 228.- El que hiriere, golpear o maltratare de obra a alguno de los funcionarios enumerados en el Art. 225, cuando éste se halle en actual ejercicio, o por razón del ejercicio de sus funciones, será reprimido con uno a tres años de prisión.

El que, en igual caso, cometiere este delito contra cualquier otro funcionario público que no ejerza jurisdicción, o autoridad civil o militar, será reprimido con prisión de dos meses a un año.

Art. 229.- Si las heridas, golpes o maltratos, por su naturaleza y según las disposiciones de este Código, merecieren otra pena, se aplicará al culpado la pena del grado inmediato superior.

Art. 230.-  (Reformado por el Art. 47 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El que con amenazas, amagos o injurias, ofendiere al Presidente de la República o al que ejerza la Función Ejecutiva, será reprimido con seis meses a dos años de prisión y multa de dieciséis a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 231.-  (Reformado por el Art. 48 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El que con amenazas, injurias, amagos o violencias, ofendiere a cualquiera de los funcionarios públicos enumerados en el Art. 225, cuando éstos se hallen ejerciendo sus funciones, o por razón de tal ejercicio, será reprimido con prisión de quince días a tres meses y multa de ocho a cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Los que cometieren las infracciones detalladas en el inciso anterior contra otro funcionario que no ejerza jurisdicción, serán reprimidos con prisión de ocho días a un mes.

Art. 232.- El que faltare al respeto a cualquier tribunal, corporación o funcionario público, cuando se halle en ejercicio de sus funciones, con palabras, gestos o actos de desprecio, o turbare o interrumpiere el acto en que se halla, será reprimido con prisión de ocho días a un mes.

Art. 233.- Igual pena se aplicará al que insultare u ofendiere a alguna persona que se hallare presente y a presencia de los tribunales o de las autoridades públicas.

Art. 234.- Los que, fuera de los casos expresados en este Código, desobedecieren a las autoridades cuando ordenaren alguna cosa para el mejor servicio público, en asuntos de su respectiva dependencia y de acuerdo con sus atribuciones legales, serán reprimidos con prisión de ocho días a un mes.

Art. 235.-  (Reformado por el Art. 49 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Los que, sin causa legítima, rehusaren prestar el servicio que se les exija en la profesión, arte u oficio que ejerzan, o de cualquier otra manera que sea necesaria para la administración de justicia, o servicio público, serán reprimidos con prisión de ocho días a dos meses y

multa de seis dólares de los Estados Unidos de Norte América, sin perjuicio de que se les compela a prestar el servicio que se les hubiere exigido.

Capítulo II

DE LA USURPACIÓN DE FUNCIONES, TÍTULOS Y NOMBRES

Art. 236.-  (Reformado por el Art. 50 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El que, sin título legítimo, se fingiere empleado público civil, militar o eclesiástico, agente del Gobierno o comisionado, y ejerciere como tal alguna función, será reprimido con prisión de uno a cinco años y multa de dieciséis a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 237.-  (Reformado por el Art. 51 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El que, habiendo sido nombrado para funcionario público, hubiere entrado a ejercer sus funciones sin haber prestado la promesa que la ley previene, será reprimido con multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 238.-  (Reformado por el Art. 52 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El funcionario público, destituido, suspenso o declarado legalmente en interdicción, que continuare en el ejercicio de sus funciones después de haber sido notificado de la destitución, suspensión o interdicción, será reprimido con prisión de seis meses a un año y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Será reprimido con las mismas penas el funcionario público que hubiere continuado ejerciendo sus funciones después del período para el cual fue nombrado, salvo los casos legales.

Art. 239.-  (Reformado por el Art. 53 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El que hubiere tomado públicamente un nombre que no le pertenece será reprimido con prisión de ocho días a tres meses y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América, o con una de estas penas solamente.

Art. ... (1).- (Agregado por el Art. 1 del D.S. 1114, R.O. 159, 5-X-1972).- El que usare indebidamente grados, insignias, uniformes, denominaciones o distintivos militares será reprimido con prisión de seis meses a dos años.

El máximo de la pena se impondrá al Jefe de cualquier dependencia o institución que autorizare tal uso a sus subalternos.

Art. ... (2).- (Agregado por el Art. 1 del D.S. 1114, R.O. 159, 5-X-1972).- Si el uso indebido de grados, insignias, uniformes, denominaciones o distintivos militares se hiciera con finalidad delictiva o como medio facilitante para la comisión de un delito, al responsable se le impondrá prisión de 3 a 5 años. De haberse cometido el delito en estas circunstancias, al infractor se le aplicará el máximo de la pena del delito más grave de los que hubiere perpetrado.

Capítulo III

DE LA VIOLACIÓN DE SELLOS Y DOCUMENTOS

Art. 240.- Cuando hubieren sido rotos los sellos puestos por orden de la autoridad pública, los guardianes serán reprimidos, por simple negligencia, con prisión de ocho días a seis meses.

Art. 241.- Los que hubieren roto intencionalmente los sellos serán reprimidos con prisión de seis meses a dos años; y si el culpado fuere el guardián mismo o el funcionario público que ha ordenado o ejecutado la fijación, será reprimido con prisión de uno a tres años.

Art. 242.- Si los sellos rotos fueren de los fijados sobre papeles o efectos de un individuo acusado de un delito que tenga señalada la pena de reclusión mayor o de reclusión menor extraordinaria, o de un individuo condenado a alguna de estas penas, el guardián negligente será reprimido con prisión de tres meses a un año.

Art. 243.- El que hubiere roto intencionalmente los sellos puestos sobre papeles o efectos de la calidad enunciada en el artículo precedente, será reprimido con prisión de uno a tres años; y si el culpado es el guardián o el funcionario público que ha ordenado o ejecutado la fijación, será reprimido con prisión de uno a cinco años.

Art. 244.- Si el rompimiento de los sellos ha sido cometido con violencias, el culpado será reprimido con el máximo de las penas señaladas para la infracción.

Art. 245.-  (Reformado por el Art. 54 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- En los casos de los Arts. 241, 242, 243 y 244, el culpado podrá ser condenado, además, a multa de seis a sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Capítulo IV

DE LOS OBSTÁCULOS PUESTOS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS

Art. 246.- El que se hubiera opuesto, por vías de hecho, a la ejecución de obras públicas ordenadas por la autoridad competente, será reprimido con prisión de ocho días a tres meses.

Art. 247.- Los que, por medio de atropamiento, violencias, vías de hecho o amenazas, se hubieren opuesto a la ejecución de dichas obras, serán reprimidos con prisión de tres meses a dos años.

Los jefes y promotores serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años.

Art. 248.-  (Reformado por el Art. 55 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- En los casos previstos por los dos artículos precedentes, los culpados podrán, además, ser condenados a multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Capítulo V

DE LA VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS, DE LA USURPACIÓN DE ATRIBUCIONES Y DE LOS ABUSOS DE AUTORIDAD

Art. 249.-  (Reformado por el Art. 56 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El funcionario público a quien corresponda, como a tal, el cumplimiento y ejecución de una ley, reglamento u orden superior que legalmente se le comunique, no lo cumpla y ejecute, o no lo haga cumplir y ejecutar, en su caso, por morosidad, omisión o descuido, será reprimido con multa de dieciséis a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 250.- Igual pena se impondrá al que difiera ejecutar o hacer ejecutar la orden superior, aunque sea con pretexto de representar acerca de ella, excepto en los casos siguientes:

1o.- Cuando la orden superior sea manifiestamente contraria a la Constitución;

2o.- Cuando no sea comunicada con las formalidades que exigen la Constitución y las leyes, o haya algún motivo para dudar prudentemente de la autenticidad de la orden;

3o.- Cuando sea una resolución obtenida con engaño, o dada contra ley y con perjuicio de terceros; y,

4o.- Cuando de la ejecución de la orden resulten o se teman, probablemente, graves males que el superior no haya podido prever.

Aunque en estos casos podrá el ejecutor de la orden suspender, bajo su responsabilidad, la ejecución, para representar al que la haya dado, será reprimido con las penas respectivas, conforme a los dos artículos anteriores, si no adujere en la misma representación, los motivos fundados que alegue.

Si el superior, después de enterarse de la representación, repitiere la orden, deberá cumplirla y ejecutarla inmediatamente el inferior, salvo el único caso de ser manifiestamente contraria a la Constitución y a las leyes.

Art. 251.- Cuando, coligándose dos o más funcionarios públicos o cuerpos depositarios de alguna parte de la autoridad pública, sea en una reunión, o por diputación, o correspondencia entre ellos, concierten alguna medida para impedir, suspender o embarazar la ejecución de una ley, reglamento u orden superior, serán reprimidos con prisión de seis meses a cinco años.

Si el concierto ha tenido lugar entre las autoridades civiles y los cuerpos militares o sus jefes, los que lo hubieren provocado serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor; y los otros, con tres a cinco años de prisión.

Art. 252.- En caso de que las autoridades civiles hubieren formado con los cuerpos militares o sus jefes, una conspiración atentatoria contra la seguridad del Estado, los provocadores serán reprimidos con reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años, y los otros, con seis a nueve años de la misma reclusión.

Art. 253.-  (Reformado por el Art. 57 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Serán reprimidos con prisión de un mes a dos años y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América los funcionarios que, a consecuencia del convenio, hubieren dimitido con el fin de impedir o suspender, sea la administración de justicia, o el cumplimiento de un servicio legítimo.

Art. 254.-  (Reformado por el Art. 58 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El empleado público que dictare reglamentos o disposiciones, excediéndose de sus atribuciones, será reprimido con multa de ocho a treinta un dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 255.-  (Reformado por el Art. 59 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El juez que se arrogare atribuciones propias de las autoridades políticas o administrativas, o impidiere a éstas el ejercicio legítimo de las suyas, será reprimido con multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América.

En la misma pena incurrirá todo empleado del orden político o administrativo que ejerciere atribuciones judiciales, o impidiere la ejecución de una providencia o decisión dictada por el juez competente.

Art. 256.-  (Reformado por el Art. 60 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El empleado público o juez que, legalmente requerido de inhibición, continuare procediendo antes de que se decida la competencia o recusación, será

reprimido con multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 257.- ^{HISTÓRICO} (Sustituidos, conjuntamente con los Arts. 258 y 259, por el Art. 396 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, R.O. 337, 16-V-1977; reformado por el Art. 31 de la Ley 93, R.O. 764-S, 22-VIII-1995; por el Art. 19 de la Ley 99-26, R.O. 190, 13-V-1999; y, por el Art. 17 de la Ley 2001-47, R.O. 422, 28-IX-2001).- Serán reprimidos con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años los servidores de los organismos y entidades del sector público y toda persona encargada de un servicio público, que, en beneficio propio o de terceros, hubiere abusado de dineros públicos o privados, de efectos que los representen, piezas, títulos, documentos, bienes muebles o inmuebles que estuvieren en su poder en virtud o razón de su cargo, ya consista el abuso en desfalco, disposición arbitraria o cualquier otra forma semejante. La pena será de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años si la infracción se refiere a fondos destinados a la defensa nacional.

Se entenderá por malversación la aplicación de fondos a fines distintos de los previstos en el presupuesto respectivo, cuando este hecho implique, además, abuso en provecho personal o de terceros, con fines extraños al servicio público.

Nota:

Mediante Ley 2001-47 (R.O. 422, 28-IX-2001), se eliminó la palabra "malversación" del primer inciso. En tal virtud, el texto resaltado no tendría vigencia pese a no estar derogado expresamente; sin embargo, lo mantenemos por fines informativos.

Están comprendidos en esta disposición los servidores que manejen fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o de los bancos estatales y privados. Igualmente están comprendidos los servidores de la Contraloría General y de la Superintendencia de Bancos que hubieren intervenido en fiscalizaciones, auditorías o exámenes especiales anteriores, siempre que los informes emitidos implicaren complicidad o encubrimiento en el delito que se persigue.

También están comprendidos en las disposiciones de este artículo los funcionarios, administradores, ejecutivos o empleados de las instituciones del sistema financiero nacional privado, así como los miembros o vocales de los directorios y de los consejos de administración de estas entidades, que hubiesen contribuido al cometimiento de estos ilícitos.

Los culpados contra quienes se dictare sentencia condenatoria quedarán, además, perpetuamente incapacitados para el desempeño de todo cargo o función públicos; para este efecto, el juez de primera instancia comunicará, inmediatamente de ejecutoriado, el fallo a la Oficina Nacional de Personal y a la autoridad nominadora del respectivo servidor, e igualmente a la Superintendencia de Bancos si se tratare de un servidor bancario. El Director de la Oficina Nacional de Personal se abstendrá de inscribir los nombramientos o contratos otorgados a favor de tales incapacitados, para lo cual se llevará en la Oficina Nacional de Personal un registro en que consten los nombres de ellos.

La acción penal prescribirá en el doble del tiempo señalado en el artículo 101.

Con la misma pena serán sancionados los servidores de la Dirección General de Rentas y los servidores de aduanas, que hubieren intervenido en Actos de Determinación.

Notas:

- Las funciones de la Dirección General de Rentas fueron asumidas por el Servicio de Rentas Internas a partir del 1 de enero de 1998, según la Primera Disposición Transitoria de la Ley de creación del Servicio de Rentas Internas (R.O. 206, 2-XII-1997).

- La Oficina Nacional de Personal fue suprimida (R.O. 143, 7-III-1989; R.O. 11-S, 25-VIII-1998).

- La denominación actual de la Superintendencia de Bancos es Superintendencia de Bancos y Seguros (R.O. 465-S, 31-XI-2001).

- La Corte Suprema de Justicia mediante la Resolución s/n, publicada en el Registro Oficial 604, 25-VI-2002, declaró que el Art. 99 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado no afecta en su plena vigencia al presente artículo ni a sus reformas.

Art. 257 A.- (Agregado por el Art. 20 de la Ley 99-26, R.O. 190, 13-V-1999).- Serán reprimidos con reclusión de cuatro a ocho años las personas descritas en el artículo anterior que, abusando de sus calidades, hubieren actuado dolosamente para obtener o conceder créditos vinculados, relacionados o intercompañías, violando expresas disposiciones legales respecto de esta clase de operaciones. La misma pena se aplicará a los beneficiarios que dolosamente hayan intervenido para el cometimiento de este ilícito y a quienes hayan prestado su nombre para beneficio propio o de un tercero.

Art. ... (1).- ^{HISTÓRICO} (Agregado por la Ley 6, R.O. 260-S, 29-VIII-1985; y, reformado por el Art. 61 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Las personas elegidas por votación popular, los representantes o delegados del Presidente de la República y de otros funcionarios fiscales o municipales en organismos del Estado, autónomos o semiautónomos; los funcionarios, empleados o servidores públicos que de cualquier forma utilizaren en beneficio propio o de terceras personas

cuando éste signifique lucro o incremento patrimonial, trabajadores remunerados por el Estado o por las entidades del Sector Público o bienes del Sector Público, serán reprimidos con la pena de uno a cinco años de prisión y multa de ciento noventa a novecientos cincuenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. ... (2).- (Agregado por la Ley 6, R.O. 260-S, 29-VIII-1985).- Con la misma pena serán sancionadas las personas señaladas en el artículo anterior, que se hubieren aprovechado económicamente en beneficio propio o de terceras personas, de estudios, proyectos, informes, resoluciones y más documentos, calificados de secretos, reservados o de circulación restringida, que estén o hubiesen estado en su conocimiento o bajo su dependencia en razón o con ocasión del cargo que ejercen o hubiesen ejercido.

Art. ... (3).- (Agregado por la Ley 6, R.O. 260-S, 29-VIII-1985).- La misma pena señalada en los artículos anteriores se impondrá a las personas elegidas por votación popular, a los representantes o delegados y a los funcionarios, empleados o servidores públicos que aprovechándose de la representación popular o del cargo que ejercen se favorezcan o hayan favorecido a personas naturales o jurídicas para que, en contra de expresas disposiciones legales o reglamentarias, les hubiesen concedido contratos o permitido la realización de negocios con el Estado o con cualquier otro organismo del sector público.

Quedan comprendidos en la misma disposición anterior y sujetos a igual pena los directores, vocales o miembros de los organismos administradores del Estado o del Sector Público en general, que, con su voto, hubiesen cooperado a la comisión del delito al que se refiere el inciso precedente.

Art. 258.-  (Sustituido por el Art. 396 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, R.O. 337, 16-V-1977).

Art. 259.-  (Sustituido por el Art. 396 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, R.O. 337, 16-V-1977).

Art. 260.- Serán castigados con prisión de dos a cuatro años, si el caso no estuviere comprendido en el Art. 257, los funcionarios y empleados públicos o sus agentes que, encargados de la adquisición o compra de artículos y enseres para la administración, recibieren comisiones o primas, alteraren los precios en los artículos, las planillas, etc., y los vendedores o proveedores que tomen parte o se prestaren para estas combinaciones ilícitas.

Art. 261.- Los funcionarios que cobraren por sí mismos, debiendo hacerlo por medio de otro, las multas que impusieren; o que no otorgaren recibo del pago; o no dejaren constancia de la multa en el libro correspondiente, serán reprimidos con quince días a un año de prisión y el cuádruplo de la multa indebidamente cobrada.

Art. 262.-  (Sustituido por el Art. 59 de la Ley 2002-67, R.O. 557-S, 17-IV-2002).- Serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor, todo empleado público y toda persona encargada de un servicio público, que hubiere maliciosa y fraudulentamente, destruido o suprimido documentos, títulos, programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de información o red electrónica, de que fueren depositarios, en su calidad de tales, o que les hubiesen sido encomendados en razón de su cargo.

Art. 263.- Cuando se hubieren sustraído o destruido piezas o procesos criminales u otros papeles, registros o documentos contenidos en los archivos, oficinas o depósitos públicos, o entregados a un depositario público, en su calidad de tal, el depositario culpado de negligencia será reprimido con prisión de seis meses a un año.

Art. 264.-  (Reformado por el Art. 3 de la Ley 106, R.O. 365, 21-VII-1998; y, por el Art. 62 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Los empleados públicos o las personas encargadas de un servicio público que se hubieren hecho culpables de concusión, mandando percibir, exigiendo o recibiendo lo que sabían que no era debido por derechos, cuotas, contribuciones, rentas o intereses, sueldos o gratificaciones, serán reprimidos con prisión de dos meses a cuatro años.

La pena será de prisión de dos a seis años, si la concusión ha sido cometida con violencias o amenazas.

Esta pena será aplicable a los prelados, curas u otros eclesiásticos que exigieren de los fieles, contra la voluntad de éstos, diezmos, primicias, derechos parroquiales o cualesquiera otras oblaciones que no estuvieren autorizadas por la ley civil.

Las infracciones previstas en este artículo y en los tres precedentes serán reprimidas, además, con multa de cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norte América y con la restitución del cuádruplo de lo que hubieren percibido.

Estas penas serán también aplicadas a los agentes o dependientes oficiales de los empleados públicos y de toda persona encargada de un servicio público, según las distinciones arriba establecidas.

Art. 265.- El empleado público que, abiertamente o por medio de un acto simulado por él, o por interpuesta persona, tome para sí, en todo o en parte, finca o efecto en cuya subasta, arriendo, adjudicación, embargo, secuestro, partición judicial, depósito o administración, intervenga por razón de su cargo u oficio; o cualquiera de las personas referidas que entre a la par en alguna negociación o especulación de lucro o interés personal, que versen sobre las mismas fincas o efectos, o sobre cosa en que tenga igual intervención oficial, será reprimido con multa del seis al doce por ciento del valor de la finca o de la negociación y con prisión correccional de seis meses a tres años y no se podrá dejar en suspenso el cumplimiento de la pena.

Art. 266.- Los jueces del crimen, tesoreros, administradores y demás empleados de Aduana y del Resguardo, que ejercieren el comercio por sí mismos, dentro del distrito donde respectivamente desempeñan sus funciones, sea abiertamente o por actos simulados, serán reprimidos con la pérdida de lo que se les aprehenda perteneciente a este comercio ilícito.

La misma pena se impondrá al Presidente de la República, Ministros de Estado, Gobernadores, Comandantes Generales, Jefes de Zona Militar y Magistrados de los tribunales, si ejercieren el comercio.

La disposición de este artículo no comprende la venta de los productos de las haciendas que sean propias de los empleados, o que éstos manejen como arrendatarios, usufructuarios o usuarios, ni de los productos de los ramos de industria propia en que se ocupen sus familiares o sus agentes.

Tampoco es aplicable esta disposición a los que pusieren sus fondos en acciones de banco o de cualquier empresa o compañía, con tal que no ejerzan en ellas cargo ni tengan intervención directa, administrativa o económica, ni a los que dan a mutuo sus capitales.

Nota:

Los Jueces del Crimen actualmente son los Jueces de lo Penal.

Art. 267.-  (Reformado por el Art. 63 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El Magistrado o Juez que, dolosamente y mientras se agite el pleito, proceso o negocio de que conoce, se constituya deudor de alguna de las partes, o haga fiador suyo a alguna de ellas, o contraiga con ellas alguna obligación pecuniaria, será reprimido con multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América y suspensión por tres años de los derechos de ciudadanía.

Art. 268.-  (Derogado por el Art. 4 de la Ley 106, R.O. 365, 21-VII-1998).

Art. 269.-  (Derogado por el Art. 4 de la Ley 106, R.O. 365, 21-VII-1998).

Art. 270.- Será reprimido con prisión de uno a cinco años el funcionario público, agente o comisionado del Gobierno, cualquiera que sea su empleo o grado, que hubiere requerido u ordenado, hecho requerir u ordenar, la acción o empleo de la fuerza pública contra la ejecución de una ley o decreto ejecutivo, contra la percepción de un impuesto legalmente establecido, o contra la ejecución de un decreto, auto o sentencia judicial, o de cualquiera orden emanada de la autoridad.

Art. 271.- Si el requerimiento u orden ha surtido efecto, el culpado será reprimido con tres a seis años de reclusión menor.

Art. 272.- Si las órdenes o requerimientos han sido la causa directa de otros delitos que deban reprimirse con penas más rigurosas que las expresadas en los artículos anteriores, estas penas más rigurosas serán aplicadas a los funcionarios, agentes o comisionados culpados de haber dado dichas órdenes o realizado dichos requerimientos.

Art. 273.- Cuando un funcionario público, de cualquier naturaleza que sea, un agente del Gobierno o de la Policía, un ejecutor de órdenes o sentencias judiciales, un Comandante de la Fuerza Pública hubieren, sin motivo legítimo, usado o hecho usar violencias para con alguna persona, en el ejercicio o con ocasión del ejercicio de sus funciones, el mínimo de la pena señalada para estos actos se aumentará conforme al Art. 275.

Art. 274.- Todo comandante, oficial o subalterno de la Fuerza Pública que, después de haber sido legalmente requerido por la autoridad civil, se hubiere negado a prestar el auxilio que ésta le pida, será reprimido con prisión de quince días a tres meses.

Art. 275.- Fuera del caso en que la ley fija especialmente las penas con que deben reprimirse los delitos cometidos por los funcionarios o empleados públicos, los que se hubieren hecho culpables de otros delitos que estuvieren encargados de prevenir, perseguir o reprimir serán sancionados con las mismas penas señaladas a estos delitos, doblándose el mínimo si la pena es de prisión, y aumentándose en dos años si es de reclusión mayor o menor.

Art. 276.- Al tratarse de los delitos incriminados y sancionados en los Arts. 257 al 261 inclusive, 264 y 265, no se podrá conceder libertad condicional.

Capítulo VI DEL PREVARICATO

Art. 277.- Son prevaricadores y serán reprimidos con uno a cinco años de prisión:

1o.- Los jueces de derecho o árbitros juris que, por interés personal, por afecto o desafecto a alguna persona o corporación, o en perjuicio de la causa pública, o de un particular, fallaren contra ley expresa, o procedieren penalmente contra alguno, conociendo que no lo merece;

2o.- Los jueces o árbitros que dieran consejo a una de las partes que litigan ante ellos, con perjuicio de la parte contraria;

3o.- Los jueces o árbitros que en la sustanciación de las causas procedieren maliciosamente contra leyes expresas, haciendo lo que prohíben o dejando de hacer lo que mandan;

4o.- Los empleados públicos de cualquier clase que, ejerciendo alguna autoridad judicial, gubernativa o administrativa, por interés personal, afecto o desafecto a alguna persona o corporación, nieguen, rehúsen o retarden la administración de justicia, o la protección u otro remedio que legalmente se les pida o que la causa pública exija, siempre que estén obligados a ello; o que, requeridos o advertidos en forma legal, por alguna autoridad legítima o legítimo interesado, rehúsen o retarden prestar la cooperación o auxilio que dependan de sus facultades, para la administración de justicia, o cualquiera necesidad del servicio público;

5o.- Los demás empleados, oficiales y curiales que, por cualquiera de las causas mencionadas en el numeral primero, abusen dolosamente de sus funciones, perjudicando a la causa pública o a alguna persona; y,

6o.- Los jueces o árbitros que conocieren en causas en las que patrocinaron a una de las partes como abogados o procuradores.

Art. 278.- Si las infracciones detalladas en el artículo anterior han sido cometidas en materia penal, se aplicará el máximo de la pena.

Art. 279.- Los abogados, defensores o procuradores en juicio, que descubran los secretos de su defendido a la parte contraria; o que, después de haberse encargado de defender a la una parte y enterándose de sus pretensiones y medios de defensa, la abandonaren y defendieren a la otra; o que, de cualquier otro modo, dolosamente, perjudicaren a su defendido para favorecer al contrario, o sacar alguna utilidad personal, serán reprimidos con prisión de uno a cinco años.

Art. 280.-  (Reformado por el Art. 64 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Los actuarios que, en las causas en que intervienen, defiendan o aconsejen a alguno de los litigantes, serán reprimidos con prisión de tres meses a un año, multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América y pérdida del empleo.

Art. 281.- Los que maliciosamente ejerzan funciones de juez, verbalmente o por escrito, en causa civil o penal, en que sean interesados, o lo sea algún pariente suyo en el grado prohibido por la ley; o en que tengan cualquier otro impedimento legal para ejercerlas, serán reprimidos con prisión de un mes a un año.

Art. 282.- Todo funcionario público que, sin orden legal del superior competente, descubra o revele algún secreto de los que le están confiados por razón de su destino, o exhiba algún documento que deba estar reservado, será reprimido con uno a cinco años de prisión.

Art. 283.- Serán reprimidos con prisión de dos meses a un año y suspensión del ejercicio profesional por el mismo tiempo, los abogados que favorecieren la actuación de los tinterillos, autorizando con su firma los escritos de éstos.

Art. 284.-  (Reformado por el Art. 65 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Los médicos, cirujanos, farmacéuticos, obstétrices, o cualquier otro profesional depositario de un secreto en razón de la profesión que ejerzan y que lo revelare aún al declarar en juicio, será reprimido con prisión de uno a seis meses y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América y no se podrá dejar en suspenso el cumplimiento de la pena. Se exceptúa el caso en que la ley les obligue a hacer conocer dicho secreto.

Capítulo VII DEL COHECHO

Art. 285.-  (Reformado por el Art. 66 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Todo funcionario público y toda persona encargada de un servicio público que aceptaren oferta o promesa, o recibieren dones o presentes, para ejecutar un acto de su empleo u oficio, aunque sea justo, pero no sujeto a retribución, serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América, a más de la restitución del duplo de lo que hubieren percibido.

Serán reprimidos con prisión de uno a cinco años y multa de seis a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América, a más de restituir el triple de lo percibido, si han aceptado ofertas o promesas, o recibido dones o presentes bien sea por ejecutar en el ejercicio de su empleo u oficio un acto manifiestamente injusto; bien por abstenerse de ejecutar un acto de su obligación.

Art. 286.-  (Reformado por el Art. 67 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Todo funcionario público y toda persona encargada de un servicio público que, por ofertas o promesas aceptadas, por dones o presentes recibidos, hubieren ejecutado, en el ejercicio de su cargo, un acto injusto, o se hubieren abstenido de ejecutar un acto que entraba en el orden de sus deberes, serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor y con multa de dieciséis a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América, a más del triple de lo que hayan percibido.

Art. 287.-  (Reformado por el Art. 68 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El culpable será condenado a reclusión mayor de cuatro a ocho años y multa de dieciséis a ciento cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América, si ha aceptado ofertas o promesas, o recibido dones o presentes por cometer, en el ejercicio de su cargo, un delito.

Art. 288.- El juez, el árbitro o componedor, el jurado que se hubiere dejado cohechar o sobornar serán reprimidos con

cuatro a ocho años de reclusión mayor y privación del ejercicio de la abogacía, en su caso.

Art. 289.-  (Reformado por el Art. 69 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El juez, el árbitro o el jurado culpados de cohecho serán condenados, a más de las penas arriba mencionadas, a una multa igual al triple del dinero o valor de la recompensa. En ningún caso esta multa podrá ser menor de ocho dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 290.- Los que hubieren compelido por violencias o amenazas, corrompido por promesas, ofertas, dones o presentes, a un funcionario público, a un jurado, árbitro o componedor, o a una persona encargada de un servicio público, para obtener un acto de su empleo u oficio, aunque fuera justo, pero no sujeto a retribución, o la omisión de un acto correspondiente al orden de sus deberes, serán reprimidos con las mismas penas que el funcionario, jurado, árbitro o componedor culpados de haberse dejado cohechar.

Art. 291.- No se restituirán al corruptor, en ningún caso, las cosas entregadas por él, ni su valor; y serán comisadas y puestas a disposición del Presidente de la República, para que las destine a los establecimientos de asistencia pública que juzgue conveniente.

Capítulo VIII

DE LOS DELITOS CONTRA LA ACTIVIDAD JUDICIAL

Art. 292.- Todo funcionario o todo agente de Policía que, habiendo tenido noticia de la perpetración de un delito, no lo pusiere, inmediatamente, en conocimiento de un juez de instrucción, será reprimido con prisión de quince días a seis meses.

Art. 293.- (Reformado por el Art. 70 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Todo médico, cirujano, dentista, obstetrix o cualquier otra persona que, en el ejercicio de profesión sanitaria, al prestar servicios profesionales, descubriere un hecho que presente los caracteres de un delito y no lo denunciare a la policía o a un juez de instrucción, será reprimido con multa de ocho a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América, a menos que la denuncia pueda acarrear responsabilidad penal a la persona asistida.

Art. 294.- Todo aquel que mediante acusación o denuncia, o por anónimo, o con nombre falso afirme haberse cometido un delito que no ha existido, o que simule los vestigios de una infracción, para procurar un enjuiciamiento penal tendiente a obtener una certificación a su favor, será reprimido con prisión de tres meses a un año.

Art. 295.- Todo aquél que dentro de juicio ante el juez de instrucción o el de la causa, o extrajudicialmente, ante autoridades judiciales o agentes de policía, se declare autor de un delito que no se ha realizado, o de un delito en el que no ha tenido participación, será reprimido con prisión de tres meses a dos años.

El delito anterior no se reprimirá cuando se ha cometido por favorecer a un ascendiente o descendiente, cónyuge o hermano, o a un afín dentro del segundo grado.

Art. 296.-  (Reformado por el Art. 71 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Todo aquél que en el decurso de un procedimiento civil o administrativo, o antes de un procedimiento penal, o durante él, a fin de inducir a engaño al juez, cambie artificialmente el estado de las cosas, lugares o personas, y si el hecho no constituye otra infracción penada más gravemente por este Código, será reprimido con prisión de seis meses a dos años y multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Capítulo ... (Ley 6)

DEL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

(Agregado por la Ley 6, R.O. 260-S, 29-VIII-1985)

Art. ... (1).-  (Sustituido por el Art. 18 de la Ley 2001-47, R.O. 422, 28-IX-2001).- Constituye enriquecimiento ilícito el incremento injustificado del patrimonio de una persona, producido con ocasión o como consecuencia del desempeño de un cargo o función pública, que no sea el resultado de sus ingresos legalmente percibidos.

Art. ... (2).-  (Sustituido por el Art. 18 de la Ley 2001-47, R.O. 422, 28-IX-2001).- El enriquecimiento ilícito se sancionará con la pena de dos a cinco años de prisión y la restitución del duplo del monto del enriquecimiento ilícito, siempre que no constituya otro delito.

Art. ... (3).- Son aplicables los dos artículos innumerados anteriores a quienes como funcionarios o empleados, manejen fondos de los Bancos Central, del Sistema de Crédito de Fomento y Comerciales y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Capítulo IX

DE LA PUBLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESCRITOS ANÓNIMOS O SIN PIE DE IMPRENTA

Art. 297.-  (Reformado por el Art. 72 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Todo aquél que hubiere

contribuido a la publicación o distribución de cualesquiera impresos, mimeografiados o escritos a máquina o a mano, que no lleven el nombre del autor o del impresor, o de la imprenta, conocidos, será reprimido con prisión de tres meses a un año y multa de doce a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 298.- Quedarán exentos de la pena señalada por el artículo anterior:

Los que hubieren dado a conocer al impresor, al autor o la imprenta; y,

Los vendedores o repartidores que hubieren dado a conocer las personas de quienes hubieren recibido el impreso, mimeografiado, o escrito.

Art. 299.- Descubiertos la imprenta o el mimeógrafo en que se haya hecho la publicación anónima, serán comisados y destinados a un establecimiento público.

Capítulo X DE LOS DELITOS DE LOS PROVEEDORES

Art. 300.- A las personas encargadas de suministrar provisiones para las Fuerzas Armadas que, voluntaria o maliciosamente, hubieren faltado al servicio a que están obligados, se les reprimirá con reclusión menor de tres a seis años si la infracción se ha cometido en campaña; y si en tiempo de paz, con prisión de uno a cinco años.

Las mismas penas se aplicarán, según el caso, a los agentes de los proveedores, si estos agentes hubieren hecho faltar el servicio deliberadamente y con malicia.

Art. 301.- Los funcionarios públicos o los agentes comisionados o rentados por el Gobierno, que hubieren provocado o ayudado a los culpados a hacer faltar el servicio en tiempo de guerra, serán reprimidos con reclusión menor de seis a nueve años; y, en tiempo de paz, con prisión de uno a cinco años.

Art. 302.-  (Reformado por el Art. 73 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Cuando la cesación del servicio fuere resultado de negligencia de parte de los proveedores, de sus agentes, de los funcionarios públicos, o de los agentes comisionados o rentados por el Gobierno, los culpados serán reprimidos con prisión de tres meses a dos años en época de guerra; y, en caso contrario, con multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 303.-  (Reformado por el Art. 74 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Aunque el servicio no haya faltado, si las entregas han sido retardadas voluntariamente, los culpados serán reprimidos con prisión de seis meses a dos años en caso de guerra; y con multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América, si la República estuviere en paz.

Art. 304.- En los casos previstos por el Art. 302 no se podrá seguir juicio sino por denuncia del Ministro de Estado a quien concierne el asunto.

Art. 305.- Si ha existido fraude sobre la naturaleza, calidad o cantidad de las cosas suministradas, los culpados serán reprimidos con prisión de uno a cinco años.

Art. 306.- Los funcionarios públicos, o los agentes o comisionados del Gobierno que hubieren participado de este fraude serán reprimidos con prisión de dos a cinco años.

Capítulo XI DE LA EVASIÓN

Art. 307.- En caso de evasión de los detenidos o presos, los encargados de conducirlos o guardarlos serán reprimidos con arreglo a los artículos siguientes.

Art. 308.- Si el prófugo fuere perseguido, o estuviere condenado por un delito que merezca prisión, dichos encargados serán reprimidos con prisión de ocho días a tres meses, en caso de negligencia; y con prisión de seis meses a dos años, en caso de connivencia.

Art. 309.- Si el prófugo fuere perseguido, o estuviere condenado por un delito que merezca reclusión, dichos encargados serán reprimidos con prisión de seis meses a un año, en caso de negligencia; y con tres años de reclusión menor, en caso de connivencia.

Art. 310.- Los que, no estando encargados de guardar o conducir al detenido o preso, le hubieren procurado o facilitado la evasión, serán reprimidos, en el caso del Art. 308, con prisión de quince días a seis meses; y en el caso del Art. 309, con prisión de tres meses a un año.

Se exceptúan de la presente disposición los ascendientes, descendientes, cónyuges y hermanos del prófugo, y sus afines en los mismos grados.

Art. 311.- Si la evasión ha tenido lugar o ha sido intentada con violencias, amenazas, o fractura de prisión, las penas contra los que la hubieren favorecido, suministrando instrumentos propios para operarla, serán:

En las circunstancias enunciadas en el Art. 308, la de prisión de uno a cinco años contra los encargados de cuidar o conducir al prófugo, y la de tres meses a un año contra las otras personas; y en las circunstancias enunciadas en el Art. 309, la de reclusión menor por cuatro años contra los encargados del prófugo, y la de prisión de seis meses a dos años contra las otras personas.

Art. 312.- Si la evasión ha tenido lugar o ha sido intentada con violencias, amenazas, o fractura de prisión, las penas contra los que la hubieren favorecido con armas, serán:

En las circunstancias enunciadas en el Art. 308, la de reclusión menor de tres a seis años contra los encargados del prófugo, y la de prisión de uno a cinco años contra las demás personas.

En las circunstancias enunciadas en el Art. 309, la de reclusión mayor de cuatro años contra los encargados, y la de reclusión de tres años contra las otras personas.

Capítulo XII

DE LOS JUEGOS PROHIBIDOS Y DE LAS RIFAS

Art. 313.-  (Reformado por el Art. 75 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Los que establezcan casas o mesas de juegos prohibidos, sin permiso de la autoridad respectiva, serán reprimidos con prisión de tres a seis meses y multa de dieciséis a sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Los culpados podrán, además, ser puestos bajo la vigilancia especial de la autoridad por seis meses a lo menos y un año a lo más.

En todo caso, serán comisados los fondos y efectos que se hubieren encontrado expuestos al juego, así como los muebles, instrumentos, utensilios y aparatos destinados al servicio de los juegos.

Art. 314.-  (Reformado por el Art. 76 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Serán reprimidos con prisión de cuatro meses a un año y multa de dieciséis a sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América, los que en las casas de juego que corren a su cargo consientan a hijos de familia, dependientes de almacenes o de otros establecimientos de comercio o industria, sirvientes domésticos o individuos notoriamente vagos.

Art. 315.-  (Reformado por el Art. 77 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Los promotores, empresarios, administradores, comisionados o agentes de rifas no autorizadas por la Policía serán reprimidos con prisión de ocho días a tres meses y multa de dieciséis a sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Serán comisados los objetos muebles puestos en rifa y los que se emplearen o destinaren al servicio de ésta.

Cuando se hubiere puesto en rifa un inmueble no se aplicará el comiso, el cual será reemplazado por multa de sesenta y dos a ciento veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 316.-  (Reformado por el Art. 78 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Serán reprimidos con prisión de ocho días a un mes y multa de seis a veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América, o con una de estas penas solamente:

Los que hubieren colocado, pregonado, o distribuido billetes de rifas no permitidas por la Policía, la cual no podrá permitir sino las que la ley determina; y,

Los que por avisos, anuncios, carteles, o por cualquier otro medio de publicación hubieren hecho conocer la existencia de estas rifas.

En todo caso, los billetes, así como los avisos, anuncios o carteles serán inutilizados.

Art. 317.- Quedarán exentos de las penas señaladas por el artículo precedente los pregoneros y fija-carteles que hubieren hecho conocer la persona de quien han recibido los billetes o los escritos arriba mencionados.

Título IV

DE LOS DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA

Capítulo I

DE LA FALSIFICACIÓN DE MONEDAS, BILLETES DE BANCO, TÍTULOS AL

PORTADOR Y DOCUMENTOS DE CRÉDITO

Art. 318.- ^{HISTÓRICO} (Reformado por el Art. 79 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Serán reprimidos con reclusión mayor de cuatro a ocho años y multa de dieciséis a ciento cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América, los que falsificaren monedas de oro o plata que tengan curso legal en la República, o los que introdujeran, expidieren o pusieren en circulación tales monedas.

La pena será de reclusión menor de tres a seis años y multa de dieciséis a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América, si se tratare de monedas de oro o plata que no tengan curso legal en la República.

Art. 319.- ^{HISTÓRICO} (Reformado por el Art. 80 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Si el delito mencionado en el artículo anterior se realizare con monedas de otro metal, que tengan circulación legal en la República, la pena será de prisión de uno a tres años y multa de ocho a sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América.

La pena será de tres meses a un año de prisión y multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América, al tratarse de monedas de otro metal, que no tengan curso legal en la República.

Art. 320.- Los encargados de la acuñación de monedas que se excedieren en la cantidad para la que fueron autorizados, serán reprimidos como falsificadores, conforme a las distinciones establecidas en los artículos anteriores.

Art. 321.- ^{HISTÓRICO} (Reformado por el Art. 81 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El que con cercén, taladro, lima, o de otra manera alterare el valor de monedas de oro o plata que tengan circulación legal en la República, será reprimido con prisión de uno a cinco años y multa de ocho a cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Al tratarse de monedas de otro metal, la pena será de prisión de quince a noventa días y multa de seis a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 322.- ^{HISTÓRICO} (Reformado por el Art. 82 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Las alteraciones mencionadas en el artículo anterior, de monedas de oro o plata que no tengan circulación legal en la República, serán reprimidas con prisión de seis meses a tres años y multa de ocho a cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América; y si se tratare de monedas de otro metal, la pena será de prisión de ocho a sesenta días y multa de seis a nueve dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 323.- Los que se hicieren reos de fraude en la elección de los patrones destinados, según la ley monetaria, a la comprobación de la ley y peso de las monedas de oro y plata, serán reprimidos con reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años.

Art. 324.- Los que hubieren cometido ese fraude en la elección de los patrones de las monedas de otro metal, serán reprimidos con uno a cinco años de prisión.

Art. 325.- ^{HISTÓRICO} (Reformado por el Art. 83 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El que habiendo recibido como buenas monedas falsas o alteradas, hubiere vuelto a ponerlas en circulación después de haber reconocido o hecho reconocer sus defectos, será reprimido con multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América y prisión de uno a seis meses, o con una de estas penas solamente.

Art. 326.- ^{HISTÓRICO} (Reformado por el Art. 84 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Serán reprimidos con reclusión mayor de cuatro a ocho años y multa de nueve a ochenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América los que imitaren o falsificaren cheques, billetes de banco cuya emisión estuviere autorizada por la ley; títulos de las deudas del Fisco, de los Consejos Provinciales y de los Concejos Municipales o de cualquier otra Institución legalmente autorizada para emitirlos; títulos, cédulas o acciones al portador emitidas legalmente por los Bancos o Compañías autorizados para ello y los correspondientes cupones de intereses, así como los reos de fraude en la emisión de billetes y títulos o cupones de intereses a los que se refiere este artículo.

Art. 327.- Los que habiéndose procurado, por cualquier medio, billetes de banco, los pusieren en circulación, sin que ésta se hallare autorizada legalmente, serán reprimidos como falsificadores.

Art. 328.- ^{HISTÓRICO} (Reformado por el Art. 85 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Los que expidieren billetes, letras de cambio, o fichas en calidad de moneda convencional, o que, de la misma manera, emplearen cualquier otro objeto destinándolo a la circulación, serán reprimidos con la pena de ocho días a seis meses de prisión y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Capítulo II

DE LA FALSIFICACIÓN DE SELLOS, TIMBRES Y MARCAS

Art. 329.- Serán reprimidos con reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años:

Los que imitaren o falsificaren sellos o timbres nacionales, adhesivos o fijos, de cualquier especie o valor que fueren; y,

Los que, dolosamente, pusieren en venta o hicieren circular estos timbres imitados o falsos.

Si la imitación o falsificación se ha hecho en territorio extranjero, la pena será de seis a nueve años de reclusión menor.

Art. 330.- Los que imitaren o falsificaren los punzones, matrices, clisés, planchas o cualesquiera otros objetos que sirvan para la fabricación de timbres, acciones, obligaciones, cupones y billetes de banco cuya emisión haya sido autorizada por la ley, serán reprimidos con las penas y conforme a las distinciones establecidas en el artículo anterior.

Art. 331.-  (Reformado por el Art. 86 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El que, dolosamente, hiciere uso de sellos o timbres imitados o falsos, será reprimido con prisión de uno a cinco años y multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 332.- Serán reprimidos con tres meses a un año de prisión:

El que hubiere falsificado boletas para el transporte de personas o cosas, o hecho uso, dolosamente, de boleta falsa; y,

El que hubiere falsificado el sello, timbre o marca de una autoridad cualquiera, de un establecimiento privado, de banco, de industria, de comercio o de un particular, o hubiere hecho uso, dolosamente, de estos sellos, marcas o timbres falsos.

Art. 333.- Será reprimido con reclusión menor de seis a nueve años el que, habiéndose procurado de cualquier funcionario o de un particular los verdaderos punzones, clisés, planchas o cualesquiera otros útiles que sirvan para la fabricación de los objetos expresados en el Art. 330, hubiere hecho de ellos una aplicación o uso perjudicial a los derechos o intereses del Estado.

Art. 334.- Los que hubieren imitado o falsificado los sellos o timbres oficiales de naciones extranjeras, serán reprimidos con uno a cinco años de prisión.

Art. 335.- Los que, dolosamente, hicieren uso de estos sellos y timbres extranjeros, imitados o falsos, sufrirán la pena de seis meses a un año de prisión.

Art. 336.-  (Reformado por el Art. 87 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Serán reprimidos con multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América:

Los que hubieren hecho desaparecer de un timbre de correos u otro timbre adhesivo, la marca que indica que ya ha servido; y,

Los que hubieren hecho uso, dolosamente, de un timbre del cual se ha hecho desaparecer dicha marca.

Capítulo III

DE LAS FALSIFICACIONES DE DOCUMENTOS EN GENERAL

Art. 337.- Serán reprimidos con reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años los funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus funciones hubieren cometido una falsedad que consista:

En firmas falsas;

En alteración de actas, escrituras o firmas;

En suposición de personas;

En escrituras hechas o intercaladas en registros u otros documentos públicos, en escritos u otras actuaciones judiciales, después de su formación o clausura.

Art. 338.- Será reprimido con la misma pena el funcionario público que, al redactar piezas correspondientes a su empleo, hubiere desnaturalizado su sustancia o sus pormenores:

Ya escribiendo estipulaciones distintas de las que hubieren acordado o dictado las partes;

Ya estableciendo como verdaderos, hechos que no lo eran.

Art. 339.- Será reprimida con pena de seis a nueve años de reclusión menor, cualquiera otra persona que hubiere cometido una falsedad en instrumentos públicos, en escrituras de comercio o de banco, contratos de prenda agrícola o industrial o de prenda especial de comercio, en escritos o en cualquier otra actuación judicial:

Ya por firmas falsas;

Ya por imitación o alteración de letras o firmas;

Ya por haber inventado convenciones, disposiciones, obligaciones o descargos, o por haberlos insertado fuera de tiempo en

los documentos;

Ya por adición o alteración de las cláusulas, declaraciones o hechos que esos documentos tenían por objeto recibir o comprobar.

Art. 340.- El que, por cualquiera de los medios indicados en el artículo precedente, cometiere falsedad en instrumentos privados, a excepción de los cheques, será reprimido con dos a cinco años de prisión.

Art. 341.- En los casos expresados en los precedentes artículos, el que hubiere hecho uso, dolosamente, del documento falso, será reprimido como si fuere autor de la falsedad.

Art. 342.- Será reprimido con tres a seis años de reclusión menor, el que falsificare billetes de Banco, cuya emisión no esté autorizada.

Art. 343.-  (Reformado por el Art. 1 de la Ley 2002-91, R.O. 716, 2-XII-2002).- El que hubiere imitado o falsificado un pasaporte, o cualquier otro documento público de viaje, nacional o extranjero, o hubiese hecho uso doloso de los referidos documentos, será reprimido con la pena de reclusión menor ordinaria de tres a seis años.

No tendrá responsabilidad alguna quien haya sido inducido a utilizar tales documentos, cuando sea víctima del tráfico ilegal de migrantes.

Art. 344.-  (Reformado por el Art. 88 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El empleado público que hubiere entregado un pasaporte a una persona que no conocía, sin haber hecho atestiguar su nombre o calidad, por dos individuos conocidos por él, y en los casos que la ley exige estas formalidades, será reprimido con multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Si el empleado público tenía conocimiento de la suposición de nombre o calidad, cuando entregó el pasaporte, será reprimido con prisión de seis meses a tres años.

Será reprimido con prisión de uno a cinco años, si ha obrado movido por dones o promesas.

Art. 345.- Será reprimido con prisión de ocho días a un año el que, para eximirse o libertar a otro de un servicio debido legalmente, o de cualquiera otra obligación impuesta por la ley, hubiere forjado un certificado de enfermedad o imposibilidad, sea con el nombre de un médico, cirujano o practicante, sea con un nombre cualquiera, agregándole falsamente alguna de estas calidades.

Art. 346.-  (Reformado por el Art. 89 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El médico, cirujano o practicante que, por favorecer a alguno, hubiere certificado falsamente enfermedades o imposibilidades propias para dispensar de un servicio debido legalmente, o de cualquiera otra obligación impuesta por la ley, o para exigir o reclamar un derecho, será reprimido con prisión de seis meses a dos años y multa de seis a sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Si ha sido movido por dones o promesas, será reprimido con prisión de uno a cinco años, a más de la multa antes indicada.

Art. 347.- El que hubiere forjado, con el nombre de un funcionario público, un certificado que atestigüe la buena conducta, la indigencia o cualquiera otra circunstancia propia para atraer la benevolencia de la autoridad pública o de los particulares, hacia la persona designada en dicho certificado, o para procurarle empleos, créditos o socorros, será reprimido con prisión de un mes a un año.

Si el certificado ha sido forjado con el nombre de un particular, el culpado será reprimido con prisión de ocho días a dos meses.

Art. 348.- Los que hubieren forjado, con el nombre de un funcionario público, cualquier clase de certificados que puedan comprometer intereses públicos o privados, serán reprimidos con prisión de seis meses a cinco años.

Si el certificado se ha forjado con el nombre de un particular, el culpado será reprimido con prisión de dos meses a un año.

Art. 349.- El que se hubiere servido, dolosamente, de un certificado falso o forjado en las circunstancias enumeradas en los Arts. 344 al 348 inclusive, será reprimido con las penas señaladas por estos artículos y según las distinciones que ellos establecen.

Art. 350.- El funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, hubiere entregado un certificado falso, o falsificado un certificado, o hecho uso, dolosamente, de un certificado falso, será reprimido con tres a seis años de reclusión menor.

Art. 351.-  (Reformado por el Art. 90 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Los posaderos u hoteleros que, dolosamente, hubieren inscrito en su registro, con nombres falsos o supuestos, a las personas alojadas en su casa, o que de cualquier otra manera hubieren falsificado sus registros, serán reprimidos con prisión de un mes a un año y multa de seis a sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 352.- Los empleados o encargados de una oficina telegráfica que hubieren cometido una falsedad en el ejercicio de sus funciones, inventando o falsificando partes telegráficos, serán reprimidos con prisión de uno a cinco años.

Art. 353.- El que hubiere hecho uso, dolosamente, del parte falso, será reprimido como si fuere autor de la falsedad.

Art. (...) .- Falsificación electrónica.- (Agregado por el Art. 60 de la Ley 2002-67, R.O. 557-S, 17-IV-2002).- Son reos de falsificación electrónica la persona o personas que con ánimo de lucro o bien para causar un perjuicio a un tercero, utilizando cualquier medio, alteren o modifiquen mensajes de datos, o la información incluida en éstos, que se encuentre contenida en cualquier soporte material, sistema de información o telemático, ya sea:

- 1.- Alterando un mensaje de datos en alguno de sus elementos o requisitos de carácter formal o esencial;
- 2.- Simulando un mensaje de datos en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad;
- 3.- Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido o atribuyendo a las que han intervenido en el acto, declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho.

El delito de falsificación electrónica será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en este Capítulo.

Capítulo IV

DEL FALSO TESTIMONIO Y DEL PERJURIO

Art. 354.- Hay falso testimonio punible cuando al declarar, confesar, o informar ante la autoridad pública, sea el informante persona particular o autoridad, se falta a sabiendas a la verdad; y perjurio, cuando se lo hace con juramento.

Se exceptúan los casos de confesión e indagatoria de los sindicados en los juicios penales, y los informes de las autoridades cuando puedan acarrearles responsabilidad penal.

Art. 355.- El falso testimonio se reprimirá con prisión de uno a tres años; y el perjurio, con reclusión menor de tres a seis años.

Art. 356.- Si el falso testimonio o el perjurio se cometiere en causa penal, en perjuicio del inculpado, la pena será de ocho a doce años de reclusión mayor.

Art. 357.- Se impondrá la misma pena siempre que la falsedad o el perjurio se cometa por paga, o cuando el reo se preste habitualmente a declarar en juicio como testigo falso. Y podrá considerarse que existe este hábito si, habiendo declarado un individuo falsamente en dos o más juicios, sus antecedentes sospechosos, su falta de oficio o industria lícito y conocido, u otras circunstancias, lo hicieren suponer razonablemente.

Art. 358.- Si en la sentencia se declara no constar la falsedad del testimonio, pero sí la falta de ocupación lícita u otros antecedentes que hiciesen sospechosa la conducta del sindicado, quedará éste sometido a la vigilancia de la autoridad por dos a cinco años.

Art. 359.- Los que sobornaren testigos, peritos o intérpretes, o los que, a sabiendas, hicieren uso en juicio, de testigos o peritos falsos, sea en causa propia o de sus clientes o representados, serán reprimidos como reos de falso testimonio o de perjurio, en su caso.

El mínimo de la pena será elevado en un año si el testigo, perito o intérprete sobornado fuere campesino o montubio.

Si fuere abogado el que incurriere en la infracción determinada en este artículo, en la misma sentencia se le privará además, definitivamente, del ejercicio profesional.

Si un facultativo diere un informe en que faltare, dolosamente, a la verdad, se le privará también definitivamente del ejercicio profesional, sin perjuicio de las otras penas establecidas en este capítulo.

Art. 360.- Los intérpretes y peritos se considerarán como testigos para los efectos de los artículos precedentes.

Capítulo V

DE LOS DELITOS RELATIVOS AL COMERCIO, INDUSTRIAS Y SUBASTAS

Art. 361.-  (Reformado por el Art. 91 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El que maliciosa o fraudulentamente hubiere comunicado los secretos de la fábrica en que ha estado o está empleado, será reprimido con prisión de tres meses a tres años y multa de ocho a sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 362.- (Reformado por el Art. 92 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Será reprimido con prisión de ocho días a tres meses y multa de seis a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América, o con una de estas penas solamente, el que, con el fin de forzar el alza o baja de los salarios, o de atentar contra el libre ejercicio de la industria o del trabajo, hubiere cometido violencias, proferido injurias o amenazas, impuesto multas, prohibición o cualquiera interdicción, sea contra los que trabajen, o contra los que hacen trabajar.

La misma pena se impondrá a los que, por medio de reuniones, cerca de los establecimientos en que se trabaje, o cerca de

la morada de los que dirigen el trabajo, hubieren atentado contra la libertad de los maestros o de los obreros.

Art. 363.-  (Reformado por el Art. 93 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Serán reprimidos con prisión de dos meses a dos años y multa de treinta y un a ciento veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América:

1o.- Los que hicieren alzar o bajar el precio de las mercaderías, de los papeles, efectos o valores, por cualesquiera medios fraudulentos, o por reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercancía o género, con el fin de no venderla, o no venderla sino por un precio determinado;

2o.- Los que ofrecieren fondos públicos, o acciones u obligaciones de una sociedad o persona jurídica, afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsos; y,

3o.- El fundador, administrador, director, gerente o síndico de una sociedad o de una persona jurídica de otra índole, que publicare o autorizare un balance o cualquier otro informe falso o incompleto, cualquiera que hubiese sido el propósito al verificarlo.

Art.- (Agregado por el Art. 1 del D.S. 87, R.O. 480, 25-I-1974).- Serán reprimidos con prisión de seis meses a dos años y decomiso de los artículos, los que, sin autorización legal, alzaren o participaren, de cualquier manera, en el alza de los precios de los artículos alimenticios de primera necesidad destinados al consumo humano, ya consista su acción en monopolio, ocultamiento, acaparamiento, especulación, desplazamiento o cualquier otra forma fraudulenta que produzca desaparacimiento, encarecimiento o limitación tanto de la producción como de la comercialización de dichos productos.

Si se tratare de una persona jurídica, la responsabilidad o sanción recaerá en sus representantes legales, administradores o ejecutivos.

En caso de reincidencia se aplicará el doble de la pena y el decomiso de los productos o bienes motivos de la infracción cuya propiedad pasará a la Empresa Nacional de Productos Vitales o la Entidad que la sustituya, tanto para el presente caso como para el contemplado en el inciso primero de este artículo.

Nota:

La Empresa Nacional de Productos Vitales ha sido suprimida por el D.E. 197 (R.O. 47, 15-X-1998).

Art. 364.- Será reprimido con prisión de uno a cinco años el director, gerente o administrador de una sociedad o de una persona jurídica de otra índole que prestare su concurso o consentimiento para actos contrarios a los estatutos, leyes u ordenanzas que las rijan, a consecuencia de los cuales la persona jurídica o la sociedad quedare imposibilitada de satisfacer sus compromisos, o en la necesidad de ser disuelta.

Art. 365.-  (Reformado por el Art. 94 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El comandante general, el jefe de zona militar, el jefe de tropas, el gobernador o jefe político que, en la extensión de los lugares en que tiene derecho de ejercer su autoridad, hubiere empleado los medios indicados en el número 1o. del Art. 363, o hubiere tomado parte en la especulación en él indicada, sea abiertamente, sea por actos simulados o por interposición de personas, incurrirá en las penas señaladas a la infracción, elevándose el mínimo en un año, y debiendo ser la multa de setenta y siete a trescientos once dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 366.- Los que, por medio de tumultos, o con violencias o amenazas, hubieren perturbado el orden público en los mercados, con el propósito de provocar el saqueo, o solamente con el de obligar a los vendedores a deshacerse de sus mercancías por un precio inferior al que resultaría de la libre concurrencia, serán reprimidos con prisión de tres meses a dos años.

Los jefes o promotores serán reprimidos con prisión de seis meses a cinco años y colocados bajo la vigilancia de la autoridad durante dos años a lo menos y cinco a lo más.

Art. 367.-  (Reformado por el Art. 95 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El que hubiere alterado o deteriorado mercaderías, o los materiales o instrumentos que servían para su fabricación, será reprimido con prisión de un mes a un año y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América.

La prisión será de seis meses a tres años si el delito ha sido cometido por una persona empleada en la fábrica, taller o casa de comercio.

La pena será de uno a cinco años de prisión y multa de treinta y un a ciento cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América, si el delito ha sido cometido por empleados de la fábrica, taller o casa de comercio, con el fin de desacreditar la industria, o por soborno o cohecho.

Capítulo ...

DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA COMERCIALIZACIÓN ILÍCITA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DE HIDROCARBUROS, INCLUIDO EL GAS LICUADO DE PETRÓLEO Y BIOCOMBUSTIBLES

(Agregado por el Art. 7 de la Ley 2007-85, R.O. 170-S, 14-IX-2007)

Art. ... (1).- Tráfico ilegal de hidrocarburos, sus derivados, gas licuado de petróleo y biocombustibles.- (Agregado por el Art. 7 de la Ley 2007-85, R.O. 170-S, 14-IX-2007).- Serán sancionados con pena de tres a seis años de reclusión menor ordinaria, multa de un mil a dos mil remuneraciones básicas unificadas para los trabajadores en general y el comiso especial de los bienes y medios de transporte que sirvieron para la comisión del delito, las personas naturales o los representantes legales de las personas jurídicas que por medios fraudulentos, dolosos o clandestinos, vendan, ofrezcan, distribuyan o comercialicen a cualquier título en las zonas de frontera, en puertos marítimos o fluviales o en el mar territorial, a efectos de sacar ilegalmente del país, cualquier hidrocarburo, sus derivados incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles.

Serán sancionados con una pena de reclusión menor ordinaria de seis a nueve años, multa de un mil a dos mil remuneraciones básicas unificadas para los trabajadores en general y clausura definitiva del establecimiento, el propietario o administrador de plantas de abastecimiento, almacenamiento, envasado, centros de distribución, comercializadoras, estaciones de servicio, que estén autorizados para el almacenamiento, transporte y comercialización de combustibles, y que con su acción u omisión y en forma fraudulenta y dolosa, permitan la perpetración del delito señalado en el inciso precedente.

Art. ... (2).- Almacenamiento, transportación y comercialización sin la debida autorización.- (Agregado por el Art. 7 de la Ley 2007-85, R.O. 170-S, 14-IX-2007).- Serán sancionados con una pena de prisión de uno a tres años y multa de quinientos a un mil remuneraciones básicas unificadas para los trabajadores en general y el comiso especial de los bienes utilizados para la ejecución del delito, los que comercialicen, almacenen, transporten ilegalmente derivados de hidrocarburos especialmente en las zonas de frontera y mar territorial, sin autorizaciones, guías de remisión y demás permisos exigidos por la ley para la ejecución de dichas actividades. Con iguales penas, serán sancionados el Director de la DIGMER o sus delegados responsables que ilegal y fraudulentamente emitan tales autorizaciones.

Nota:

El Art. 11 del D.E. 1111 (R.O. 358, 12-VI-2008) prescribe la sustitución de toda referencia a la Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral - DIGMER, por la de "Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial". No obstante y puesto que mediante decreto no se puede introducir reformas a normativa jerárquicamente superior, hemos mantenido el texto original de la presente disposición.

Art. ... (3).- Adulteración de los derivados de hidrocarburos.- (Agregado por el Art. 7 de la Ley 2007-85, R.O. 170-S, 14-IX-2007).- Serán sancionados con prisión de dos a tres años y el comiso especial de los bienes utilizados para la ejecución del delito, quien de manera fraudulenta o dolosa para obtener beneficio personal o de un tercero, adulterare la calidad o cantidad de los hidrocarburos, sus derivados incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles.

Art. ... (4).- Uso indebido de derivados de hidrocarburos.- (Agregado por el Art. 7 de la Ley 2007-85, R.O. 170-S, 14-IX-2007).- Serán sancionados con prisión de un año y el comiso especial de los bienes utilizados en la ejecución del delito, los que en beneficio propio o de terceros, utilizaren derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, en actividades distintas a las permitidas expresamente en la ley.

Art. ... (5).- Sustracción de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan.- (Agregado por el Art. 7 de la Ley 2007-85, R.O. 170-S, 14-IX-2007).- Será sancionado con una pena de reclusión mayor ordinaria de seis a nueve años y multa de dos a tres mil remuneraciones básicas unificadas para los trabajadores en general y el comiso de los bienes utilizados en la ejecución del delito, el que por medios fraudulentos o clandestinos se apoderaren de hidrocarburos, sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, cuando sean transportados a través de un oleoducto, gasoducto, poliducto o a través de cualquier otro medio, o cuando se encuentren almacenados en fuentes inmediatas de abastecimiento o plantas de bombeo.

Art. ... (6).- Perjuicios al Estado y medio ambiente.- (Agregado por el Art. 7 de la Ley 2007-85, R.O. 170-S, 14-IX-2007).- Será reprimido con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años, el que de manera fraudulenta destruyere la infraestructura hidrocarburífera y/o causare la destrucción o deterioro del medio ambiente, sin perjuicio de que el causante remedie los daños ambientales y la recuperación de los bienes al Estado.

Art. ... (7).- Destinación de los bienes objeto de comiso especial.- (Agregado por el Art. 7 de la Ley 2007-85, R.O. 170-S, 14-IX-2007).- Una vez que el fiscal haya determinado la procedencia ilícita de los hidrocarburos, sus derivados, gas licuado de petróleo o biocombustibles, solicitará al juez la entrega de estos a PETROCOMERCIAL a efectos de que ésta le de el uso conveniente a los intereses del Estado. El juez con la solicitud del fiscal dispondrá la entrega inmediata a PETROCOMERCIAL de los bienes utilizados en la comisión de la infracción.

Art. ... (8).- Sanciones a funcionarios y miembros de la fuerza pública.- (Agregado por el Art. 7 de la Ley 2007-85, R.O. 170-S, 14-IX-2007).- Si los delitos previstos en este Capítulo fueren cometidos por funcionarios, empleados, servidores públicos o miembros de la Fuerza Pública, quienes de manera fraudulenta y clandestina o por sus acciones u

omisiones permitieran la comisión de dichos delitos, se aplicará el máximo de las penas previstas para cada uno de ellos.

Art. ... (9).- (Agregado por el Art. 7 de la Ley 2007-85, R.O. 170-S, 14-IX-2007).- Quien o quienes paralicen o suspendan de manera injustificada el servicio público de expendio o distribución de combustibles, sean estos gasolinas, diesel, gas licuado y demás productos derivados del petróleo o biocombustibles como el etanol, serán sancionados con multa de quinientas a mil remuneraciones básicas unificadas para los trabajadores en general y la revocatoria definitiva del permiso de expendio u operación, otorgado por la Dirección Nacional de Hidrocarburos, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar.

Capítulo VI

DEL PAGO CON CHEQUES SIN PROVISIÓN DE FONDOS

(Derogado por el Art. 1 de la Ley s/n, R.O. 555-S, 24-III-2009)

Art. 368.-  (Derogado por el Art. 1 de la Ley s/n, R.O. 555-S, 24-III-2009).

Título V

DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA

Capítulo I

DE LAS ASOCIACIONES ILÍCITAS

Art. 369.- Toda asociación formada con el fin de atentar contra las personas o las propiedades, es un delito que existe por el solo hecho de la organización de la partida.

Art. 370.- Si la asociación ha tenido por fin la perpetración de delitos que merezcan pena de reclusión mayor, los provocadores de la asociación, sus jefes y los que hubieren ejercido en ella un mando cualquiera serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor.

Serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, si la asociación ha sido formada para cometer delitos reprimidos con reclusión menor; y con prisión correccional de seis meses a tres años, si la asociación ha sido formada para cometer delitos de otra índole.

Art. 371.- Cualesquiera otros individuos que hubieren tomado parte en la asociación y los que dolosamente hubieren suministrado a la partida o a sus divisiones, armas, municiones, instrumentos para cometer el delito, alojamiento, escondite o lugar de reunión, serán reprimidos:

En el primer caso del artículo precedente, con prisión de uno a cinco años;

En el segundo caso, con prisión de tres meses a tres años; y,

En el tercer caso, con prisión de dos meses a un año.

Art. 372.- Los condenados a prisión en virtud de los Arts. 370 y 371, podrán ser colocados bajo la vigilancia especial de la autoridad por dos años a lo menos y cinco años a lo más.

Capítulo II

DE LA CONSERVACIÓN INDEBIDA DE EXPLOSIVOS

Art. 373.-  (Sustituido por el Art. 4 de la Ley 2006-31, R.O. 231, 17-III-2006).- Prohíbese terminantemente, a los particulares tener en sus domicilios, bodegas o instalaciones de cualquier tipo materiales y explosivos que constituyan elementos de peligro para las personas y propiedades y que deben ser guardados o almacenados en lugares y sitios técnicamente adecuados.

Art. 374.-  (Sustituido por el Art. 5 de la Ley 2006-31, R.O. 231, 17-III-2006).- Los que tuvieren dichas materias explosivas en domicilios, bodegas o instalaciones de cualquier tipo, están obligados a entregarlas a las autoridades militares o policiales correspondientes, se exceptúan las actividades artesanales dedicadas a la fabricación de juegos pirotécnicos y actividades mineras, siempre y cuando se encuentren almacenadas en lugares no poblados.

Art. 375.-  (Sustituido por el Art. 6 de la Ley 2006-31, R.O. 231, 17-III-2006).- Los que contravinieren las disposiciones anteriores, serán reprimidos con prisión de 2 a 4 años.

Art. 376.- Los atentados contra las personas o bienes mediante explosivos, se sancionarán con diez y seis años de reclusión mayor extraordinaria.

Capítulo III DE LA INTIMIDACIÓN

Art. 377.-  (Reformado por el Art. 97 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El que por escrito, anónimo o firmado, amenazare a otro con cualquier atentado contra las personas o las propiedades, que merezca pena de reclusión menor, será reprimido con prisión de seis meses a tres años y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América, si la amenaza ha sido acompañada de orden o condición.

En caso contrario, la pena será de tres meses a un año y multa de seis a nueve dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 378.-  (Reformado por el Art. 98 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Si la amenaza hecha con orden y bajo condición ha sido verbal, el culpado será reprimido con prisión de uno a seis meses y multa de seis dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 379.-  (Reformado por el Art. 99 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El que por escrito, anónimo o firmado, amenazare a otro con un atentado contra las personas o las propiedades, que merezca pena de reclusión mayor, será reprimido con prisión de uno a cinco años y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América, si la amenaza ha sido acompañada de orden o condición; y, en caso contrario, con prisión de seis meses a un año y multa de seis a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 380.- En los casos previstos en los tres artículos precedentes, el culpado podrá, además, ser puesto bajo la vigilancia especial de la autoridad por un tiempo que no exceda de cuatro años.

Art. 381.- Se exceptúan de las disposiciones anteriores las amenazas que se hagan en el acto de alguna riña o pelea, agresión, ofensa, provocación o injuria, que no estarán sujetas a pena alguna diversa de la en que se incurra por la misma agresión, ofensa, o riña.

Art. 382.- Será reprimido con prisión de un mes a dos años el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere gritos de alarma, hiciere estallar bombas o materias explosivas, o las colocare con ese fin, o amenazare con un desastre de peligro común, cuando estos acontecimientos no constituyan delito más severamente reprimido.

Capítulo IV DE LOS VAGOS Y MENDIGOS

Art. 383.- Son vagos los que no tienen domicilio fijo ni medios de subsistencia, y los que, sin enfermedad o lesión que les imposibilite, no ejercen habitualmente oficio o profesión.

Art. 384.- Serán reprimidos con prisión de tres meses a un año:

Los vagos o mendigos que hubieren sido encontrados llevando certificados o pasaportes falsos, o que fingieren lesiones o enfermedades;

Los vagos o mendigos que hubieren sido encontrados llevando armas, o hubieren amenazado con un ataque a las personas o propiedades, o ejercido un acto de violencia contra aquéllas; y,

Los vagos o mendigos que fueren encontrados provistos de limas, ganzúas u otros instrumentos propios para cometer robos u otros delitos, o para procurarse los medios de entrar en las casas.

Art. 385.- El mendigo que hubiere sido aprehendido disfrazado de cualquier modo, o que fugare del establecimiento en que le hubiere colocado la autoridad, será reprimido con prisión de dos meses a un año.

Capítulo V DE LA INSTIGACIÓN PARA DELINQUIR

Art. 386.- El que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución, cuando el instigador no puede ser considerado legalmente como correo, será reprimido, por la instigación y aunque el delito no se hubiere perpetrado, con prisión de quince días a dos años, según la gravedad del delito instigado.

Capítulo VI DE LA APOLOGÍA DEL DELITO

Art. 387.-  (Reformado por el Art. 100 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Será reprimido con multa de ocho a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología del delito, o de un condenado por delito, por razón del acto realizado.

La misma pena se aplicará al que haga la apología de un suicidio.

Capítulo VII

DEL INCENDIO Y OTRAS DESTRUCCIONES, DE LOS DETERIOROS Y DAÑOS

Art. 388.- Serán reprimidos con la pena de reclusión mayor extraordinaria de doce a diez y seis años los que hubieren puesto fuego:

1o.- A embarcaciones, aeronaves, almacenes, astilleros, edificios o cualesquiera otros lugares que sirvan de habitación y contengan una o más personas en el momento del incendio;

2o.- A edificios que sirvan para reuniones de individuos, durante el tiempo de estas reuniones; y,

3o.- A todo lugar, aun inhabitado, si contuviere depósitos de pólvora u otras materias explosivas; y si, según las circunstancias, el autor ha debido presumir que había en él una o más personas en el momento del delito, o si podía comunicarse el incendio a otros edificios habitados inmediatos.

La pena será de seis a nueve años de reclusión menor, si las paredes del edificio fueren de piedra, de ladrillo, o de otros materiales incombustibles, y no contuvieren en su recinto depósitos de materias explosivas.

Art. 389.-  (Reformado por el Art. 101 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Serán reprimidos con reclusión menor de tres a seis años, los que hubieren puesto fuego voluntariamente, ya a los objetos designados en el artículo precedente, pero fuera de los casos previstos por dicho artículo, ya a montes, arboledas, talleres o sementeras.

Si estos objetos pertenecieren exclusivamente a los que los han incendiado, y el fuego se pusiere con intención fraudulenta, los culpados serán reprimidos, en los casos no comprendidos en el artículo anterior, con prisión de uno a cinco años y multa de seis a veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América. Si no hubiere fraude ni peligro de que el fuego perjudique a otros, no será castigado el que incendie una cosa propia, a menos que con el incendio se perjudicare a la economía nacional.

Si el fuego hubiese sido puesto a mieses segadas; maderas cortadas y puestas en montones, el delito será reprimido con prisión de uno a cinco años.

Si las mieses o maderas cortadas no han sido reunidas, la pena será de prisión de seis meses a tres años y multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Si las mieses o maderas incendiadas pertenecieren exclusivamente al incendiario, y si el fuego ha sido puesto con intención fraudulenta, las penas serán: en el primer caso previsto en este artículo, de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América; y en el segundo caso, de prisión de dos meses a dos años y multa de seis a nueve dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Se entenderá que hay intención fraudulenta, cuando el incendio de los objetos indicados en este artículo venga en detrimento de la economía nacional y no tenga justificación razonable.

Art. 390.- En los casos previstos por los artículos precedentes el condenado podrá ser puesto, además, bajo la vigilancia especial de la autoridad por dos años a lo menos y cinco a lo más.

Art. 391.- El que, con intención de consumir alguno de los hechos previstos en los artículos precedentes, hubiere puesto fuego a cualesquiera objetos colocados de modo que el incendio pudiese comunicar a la cosa que se quería destruir, será reprimido como si hubiere puesto o intentado poner directamente el fuego a esta última cosa.

Art. 392.- Cuando el fuego se hubiere comunicado del objeto que el culpado quería quemar, a otro objeto cuya destrucción acarrea una pena más grave, se aplicará esta última si las cosas estuvieren colocadas de tal modo que el incendio haya de comunicarse, necesariamente, de la una a la otra cosa.

Art. 393.-  (Reformado por el Art. 16 de la Ley 2001-47, R.O. 422, 28-IX-2001).- Cuando el incendio ha causado la muerte de una o más personas la pena será de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años.

Si ha ocasionado heridas o lesiones permanentes, el incendiario será reprimido con reclusión mayor de ocho a doce años.

Art. 394.-  (Reformado por el Art. 102 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Será reprimido con prisión de ocho días a tres meses y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América el incendio de las propiedades muebles o inmuebles de otro, que hubiere sido causado, ya por la vejez o la falta de reparación o limpieza de hornos, chimeneas, fraguas, casas o talleres próximos; ya por fuegos encendidos en los campos, a menos de cien metros de

los edificios, bosques, matorrales, huertos, o plantaciones, cercas, pilas de grano, de paja, de heno, de forrajes o cualquier otro depósito de materias combustibles; ya por fuegos o luces llevados o dejados sin precaución suficiente; o por fuegos artificiales encendidos o tirados incautamente.

Art. 395.- Serán reprimidos con las penas señaladas en los artículos precedentes y según las distinciones en ellos establecidas, los que hubieren destruido o intentado destruir, por efecto de una explosión, edificios, embarcaciones, aeronaves, carruajes, vagones, almacenes, astilleros u otras construcciones.

La disposición del Art. 391 es aplicable a los casos previstos en este artículo.

Art. 396.- El incendio de chozas, pajares, cobertizos deshabitados, o de cualquier otro objeto cuyo valor, pasando de diez sucres no llegue a cincuenta, y en que no haya peligro de propagación del incendio, será reprimido con prisión de quince a noventa días.

Art. 397.- El que hubiere destruido o derribado, en todo o en parte, edificios, puentes, diques, calzadas, carreteras, ferrocarriles, acueductos, aeródromos, y otras construcciones nacionales, municipales, o pertenecientes a otro, será reprimido con prisión de tres a cinco años.

Se reprimirán con la misma pena la destrucción total o parcial de instalaciones para servicios de alarma contra incendios, así como el uso indebido de tales servicios.

Art. 398.- Los que destruyeren acueductos ajenos que no constituyan obras de mampostería serán reprimidos con prisión de tres a seis meses.

Cuando se trate de obras nuevas que atacan el derecho de propiedad o posesorio, de la persona o personas que han destruido el acueducto o bocacaz, no serán aplicables las disposiciones del inciso anterior.

Igual pena que la señalada en el inciso primero se aplicará a quienes destruyeren cercas vivas o de cualquier otra clase, cuando el acto no constituya usurpación.

Art. 399.-  (Reformado por el Art. 103 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El que hubiere destruido una máquina perteneciente a otro, sea hidráulica, de vapor, eléctrica, o movable con fuerza animal, si es destinada a la industria fabril o agrícola, será reprimido con prisión de seis meses a tres años y multa de dieciséis a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Hay destrucción desde que la acción de la maquinaria ha sido paralizada en todo o en parte, ya sea que el acto afecte a los aparatos motores, ya a los aparatos puestos en movimiento.

Art. 400.- Cuando el acto previsto por el artículo anterior hubiere sido cometido en reunión o pandilla, o por medio de violencias, vías de hecho, o amenazas, los culpados serán reprimidos con prisión de tres a cinco años.

Art. 401.-  (Reformado por el Art. 104 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Será reprimido con prisión de ocho días a un año y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que hubiere destruido, derribado, mutilado, o menoscabado los objetos siguientes:

1o.- Tumbas, signos conmemorativos, o piedras sepulcrales;

2o.- Monumentos, estatuas, u otros objetos destinados a la utilidad u ornato públicos y erigidos por la autoridad o con su autorización; y,

3o.- Monumentos, estatuas, cuadros, o cualquier otro objeto de arte, colocados en las iglesias, capillas, u otros edificios públicos.

En caso de destrucción o violación de sepulcros, para robar las cajas mortuorias, los objetos encerrados con los cadáveres, o el cadáver mismo, la pena será de prisión de tres a cinco años. Igual pena se impondrá al que cometa la infracción para aprovecharse de los materiales de la tumba destruida, o para satisfacer un acto de venganza.

Art. 402.-  (Reformado por el Art. 105 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El que hubiere destruido, de cualquier modo, registros auténticos o instrumentos originales de la autoridad pública, procesos civiles o penales, será reprimido con reclusión mayor de cuatro a ocho años.

La destrucción de títulos, letras de cambio, documentos de comercio o de banco, o cualquier fiduciario emitido en virtud de una ley, será reprimida con prisión de uno a cinco años y multa de dieciséis a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América.

La destrucción de recibos, obligaciones, minutas, u otros documentos privados, que contengan prueba de un acto o contrato, se reprimirá con prisión de seis meses a tres años.

Si las antedichas infracciones se han cometido con una o más circunstancias agravantes, las penas se reemplazarán del modo siguiente:

La reclusión mayor de cuatro a ocho años, con pena igual de ocho a doce años;

La prisión de uno a cinco años, con reclusión menor de tres a seis años; y,

La prisión de seis meses a tres años, con prisión de dos a cinco años.

Art. 403.-  (Reformado por el Art. 106 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Toda destrucción o detrimento de propiedades muebles de otro, ejecutado sin violencias ni amenazas, serán reprimidos con prisión de ocho días a un año y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 404.- Si el acto ha sido cometido en reunión o en pandilla, la pena será de tres meses a dos años de prisión.

Art. 405.- La destrucción o el detrimento de propiedades muebles de otro, ejecutado con violencias o amenazas, en una casa habitada o en sus dependencias, y concurriendo alguna de las circunstancias agravantes, será reprimido con tres a seis años de reclusión menor.

La pena será de reclusión menor de seis a nueve años, si el delito ha sido cometido en reunión o en pandilla.

Art. ... - (Agregado por el Art. 1 de la Ley 2006-63, R.O. 412, 7-XII-2006).- La destrucción o el detrimento de bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros, cometidas al interior de escenarios deportivos o en sus inmediaciones o demás lugares que por su capacidad, puedan albergar reuniones masivas de público, será reprimida con la pena de tres a seis años de reclusión menor ordinaria.

Art. 406.-  (Reformado por el Art. 16 de la Ley 2001-47, R.O. 422, 28-IX-2001).- Si las violencias o amenazas con que la destrucción o detrimento han sido cometidos causaren una enfermedad incurable, o una lesión corporal permanente, los culpados serán reprimidos con la pena inmediata superior a la en que hubieren incurrido, según el artículo precedente; y si hubieren causado la muerte, serán reprimidos con reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años.

Art. 407.- El que hubiere quitado, cortado o destruido las amarras, o los obstáculos que sujetaban una embarcación, un vagón o un carruaje, será reprimido con prisión de ocho días a dos años.

Art. 408.-  (Reformado por el Art. 107 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Será reprimido con prisión de un mes a tres años y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que hubiere cortado o talado sementeras, o plantaciones debidas a la industria del hombre o a la naturaleza.

Art. 409.-  (Reformado por el Art. 108 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Será reprimido con prisión de un mes a dos años y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que hubiere talado o destruido un campo sembrado; o derramado en él semillas de cizaña, o de cualquier yerba o planta dañina; o roto o descompuesto instrumentos de agricultura, parques de animales, o las cabañas de los guardianes.

Art. 410.-  (Reformado por el Art. 109 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El que hubiere derribado, mutilado o descortezado uno o más árboles de modo que perezcan; o destruido uno o más injertos, será reprimido, por cada árbol, con prisión de ocho días a un mes y multa de seis a nueve dólares de los Estados Unidos de Norte América.

En ningún caso la totalidad de la pena excederá de tres años en cuanto a la prisión, ni de treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América en cuanto a la multa.

Art. 411.-  (Reformado por el Art. 110 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El que hubiere envenenado caballos u otras bestias de tiro o de carga, animales de asta, carneros, cabros o cerdos, será reprimido con prisión de tres meses a dos años y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 412.-  (Reformado por el Art. 111 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El que hubiere echado a un río, canal, arroyo, estanque, vivar, o depósito de agua sustancias propias para destruir los peces, sufrirá la pena de prisión de ocho días a tres meses y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 413.-  (Reformado por el Art. 112 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Los que sin causa justificable hubieren matado alguno de los animales mencionados en el Art. 411, o le hubieren causado una herida o lesión grave, serán reprimidos como sigue:

Si el delito ha sido cometido en las casas, cercados o dependencias, o en las tierras de que el dueño del animal muerto o herido, era propietario, colono o inquilino, la pena será de prisión de uno a seis meses y multa de seis a nueve dólares de los Estados Unidos de Norte América;

Si ha sido cometido en los lugares de que el culpado era propietario, colono, o inquilino, la pena será de prisión de ocho días a tres meses y multa de seis dólares de los Estados Unidos de Norte América; y,

Si ha sido cometido en otro lugar, la prisión será de quince días a cuatro meses y la multa de seis a nueve dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 414.-  (Reformado por el Art. 113 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El que, sin necesidad, matare a un animal doméstico, que no sea de los mencionados en el Art. 411, o a un animal domesticado, o les hubiere causado una herida o lesión grave, en un lugar de que el dueño del animal es propietario, usufructuario, usuario, locatario o inquilino, será reprimido con prisión de ocho días a tres meses y multa de seis a nueve dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 415.- Si en los casos previstos por los artículos precedentes ha habido violación de cerramiento, la pena se aumentará en el doble.

Art. ... (1).- Daños informáticos.- (Agregado por el Art. 61 de la Ley 2002-67, R.O. 557-S, 17-IV-2002).- El que dolosamente, de cualquier modo o utilizando cualquier método, destruya, altere, inutilice, suprima o dañe, de forma temporal o definitiva, los programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de información o red electrónica, será reprimido con prisión de seis meses a tres años y multa de sesenta a ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

La pena de prisión será de tres a cinco años y multa de doscientos a seis cientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se trate de programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de información o red electrónica, destinada a prestar un servicio público o vinculada con la defensa nacional.

Art. ... (2).- (Agregado por el Art. 61 de la Ley 2002-67, R.O. 557-S, 17-IV-2002).- Si no se tratare de un delito mayor, la destrucción, alteración o inutilización de la infraestructura o instalaciones físicas necesarias para la transmisión, recepción o procesamiento de mensajes de datos, será reprimida con prisión de ocho meses a cuatro años y multa de doscientos a seis cientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Capítulo VII A

DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL

(Capítulo agregado por el Art. 1 de la Ley 99-49, R.O. 2, 25-I-2000)

Art. 415 A.- El que destruya o dañe bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de Nación, será reprimido con prisión de uno a tres años sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe y de que el juez, de ser factible, ordene la reconstrucción, restauración o restitución del bien, a costa del autor de la destrucción o deterioro.

Con la misma pena será sancionado el que cause daños en un archivo, registro, museo, biblioteca, centro docente, gabinete científico, institución análoga, yacimientos arqueológicos o cualquier bien perteneciente al patrimonio cultural, sin perjuicio de que el juez ordene la adopción de medidas encaminadas a restaurar en lo posible el bien dañado a costa del autor del daño.

Si la infracción fuere culposa, la pena será de tres meses a un año.

El daño será punible cuando no provenga del uso normal que debió haberse dado al bien, según su naturaleza y características.

Art. 415 B.- La misma pena prevista en el artículo anterior, si el hecho no constituyere un delito más severamente reprimido, se aplicará al funcionario o empleado público que actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o permita, contra derecho, modificaciones, alteraciones o derrocamiento que causen la destrucción o dañen bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación; así como al funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo resultado.

No constituye infracción la autorización dada para que se intervenga en el bien patrimonial a fin de asegurar su conservación, si se adoptan las precauciones para que en la ejecución se respeten las normas técnicas internacionalmente aceptadas.

Art. 415 C.- Igual pena será aplicable a quienes con violación de las leyes y demás disposiciones jurídicas sobre la materia, trafiquen, comercialicen o saquen fuera del país piezas u objetos arqueológicos, bienes de interés histórico o pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación.

Capítulo VIII

DE LOS DELITOS CONTRA LOS MEDIOS DE TRANSPORTE Y DE COMUNICACIÓN

Art. 416.-  (Reformado por el Art. 16 de la Ley 2001-47, R.O. 422, 28-IX-2001 y por el Art. 114 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Será reprimido con prisión de seis meses a cinco años y multa de ocho a ciento cincuenta y

seis dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que inutilizare o destruyere, en todo o en parte, las vías u obras destinadas a la comunicación pública, por tierra, por aire o por agua, o estorbare las medidas adoptadas para la seguridad de las mismas.

Si resultaren heridas o lesiones, la pena será de cuatro a ocho años de reclusión mayor; y si resultare la muerte de alguna persona, la pena será de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años.

Art. 417.- El que empleare cualquier medio para detener o entorpecer la marcha de un tren, o para hacerle descarrilar, será reprimido:

- 1o.- Con prisión de seis meses a tres años, si no se produjere descarrilamiento u otro accidente;
- 2o.- Con prisión de uno a cinco años, si se produjere descarrilamiento u otro accidente;
- 3o.- Con reclusión mayor de cuatro años, si resultare herida o lesionada alguna persona; y,
- 4o.- Con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años si resultare la muerte de alguna persona.

Será reprimido con las penas establecidas en este artículo, y en sus casos respectivos, el que ejecutare cualquier acto tendiente a interrumpir el funcionamiento de un telégrafo o teléfono destinado al servicio de un ferrocarril

Art. 418.-  (Reformado por el Art. 115 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Será reprimido con prisión de uno a cinco años y multa de ocho a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América, si el hecho no importare un delito más severamente reprimido, el que arrojaré cuerpos contundentes o proyectiles contra un tren, tranvía u otro vehículo en marcha.

Art. 419.-  (Reformado por el Art. 16 de la Ley 2001-47, R.O. 422, 28-IX-2001 y por el Art. 116 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Será reprimido con prisión de uno a cinco años y multa de ocho a ciento cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que ejecutare cualquier acto tendiente a poner en peligro la seguridad de una nave, aeróstato, o construcción flotante; o a detener o entorpecer la navegación.

Si el acto produjere naufragio, avería, varamiento, o cualquier otro accidente grave, la pena será de reclusión menor de tres a seis años; si resultare herida o lesionada alguna persona, la pena será de cuatro a ocho años de reclusión mayor; y si produjere la muerte de alguna persona, la pena será de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años.

Art. 420.-  (Reformado por el Art. 117 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Serán reprimidos con prisión de seis meses a dos años y multa de ocho a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América, si el hecho no estuviere reprimido con pena más grave, los conductores, capitanes, pilotos, mecánicos y demás empleados de un tren o de un buque, o de un aeróstato que abandonaren sus puestos durante sus servicios respectivos, antes de llegar a puerto o al término del viaje ferroviario o de la aeronave.

La prisión será de tres meses a un año, al tratarse de pilotos de automotores destinados al transporte internacional, interprovincial o intercantonal.

Art. 421.-  (Reformado por el Art. 118 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Será reprimido con prisión de dos meses a dos años y multa de ocho a cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que, por imprudencia o negligencia, o por impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un naufragio, descarrilamiento u otro accidente de tránsito. Si del acto resultare herida, lesionada o muerta alguna persona, la pena será de seis meses a cinco años de prisión, según la gravedad del acto y sus consecuencias.

Art. 422.-  (Agregados los tres últimos incisos por el Art. 1 de la Ley 99-38, R.O. 253, 12-VIII-1999).- Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que interrumpiere la comunicación postal, telegráfica, telefónica, radiofónica o de otro sistema, o resistiere violentamente al restablecimiento de la comunicación interrumpida.

Si el acto se realizare en reunión o en pandilla, o la interrupción fuere por medios violentos, vías de hecho o amenazas, la pena será de prisión de tres a cinco años.

Quienes ofrezcan, presten o comercialicen servicios de telecomunicaciones, sin estar legalmente facultados, mediante concesión, autorización, licencia, permiso, convenios o cualquier otra forma de la contratación administrativa, salvo la utilización de servicios de internet, serán reprimidos con prisión de dos a cinco años.

Estarán comprendidos en esta disposición, quienes se encuentren en posesión clandestina de instalaciones que, por su configuración y demás datos técnicos, hagan presumir que entre sus finalidades está la de destinarlos a ofrecer los servicios señalados en el inciso anterior, aún cuando no estén siendo utilizados.

Las sanciones indicadas en este artículo, se aplicarán sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y civiles previstas en la Ley Especial de Telecomunicaciones y sus Reglamentos.

Capítulo IX DE LA PIRATERÍA

Art. 423.- El delito de piratería o asalto cometido a mano armada en alta mar, o en las aguas o ríos de la República, será reprimido con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años.

Art. 424.- Los que en buques armados navegaren con dos o más patentes de diversas naciones, o sin patentes ni matrículas, u otro documento que pruebe la legitimidad de su viaje, serán tenidos por piratas, aunque no cometan otros actos de piratería; y serán reprimidos, el comandante o capitán, con ocho a doce años de reclusión mayor; y los tripulantes que resultaren culpados, con cuatro a ocho años de la misma pena.

Art. 425.- El que, maliciosamente, entregare a piratas la embarcación a cuyo bordo fuere, será reprimido con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años.

Art. 426.- Serán considerados y reprimidos como piratas, todos los corsarios.

Art. 427.- El que, dolosamente, traficare con piratas en el territorio de la República, será reprimido como su cómplice.

Capítulo X DE LOS DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA

Art. 428.-  (Reformado por el Art. 119 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El que, con el fin de proporcionarse una ganancia hubiere mezclado o hecho mezclar con bebidas o comestibles, o con sustancias o artículos alimenticios, destinados a ser vendidos, materias de tal naturaleza que pueden alterar la salud, será reprimido con prisión de tres meses a un año y multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Si las materias mezcladas con las bebidas o comestibles, o con sustancias o artículos alimenticios destinados a la venta, pudieren causar la muerte, la pena será de prisión de uno a cinco años y multa de dieciséis a sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 429.- Serán reprimidos con las mismas penas y según las distinciones establecidas en el artículo anterior:

El que vendiere o pusiere en venta cualesquiera comestibles, bebidas, sustancias o artículos alimenticios, sabiendo que contienen materias que pueden alterar la salud o causar la muerte; y,

El que hubiere vendido o procurado esas materias, sabiendo que debían servir para falsificar sustancias o artículos alimenticios.

Art. 430.- En los casos anteriores, si el uso de esos productos, alterados o falsificados, hubiere causado una lesión permanente de las definidas en este Código, o la muerte, la pena será la determinada en los artículos que tratan de las lesiones y del homicidio preterintencional.

Art. 431.- Los comestibles, bebidas, sustancias o artículos alimenticios serán comisados y destruidos.

Art. 432.-  (Reformado por el Art. 120 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Será reprimido con prisión de uno a cinco años y multa de ocho a ciento cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que propague, a sabiendas, una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas.

Art. 433.-  (Reformado por el Art. 16 de la Ley 2001-47, R.O. 422, 28-IX-2001 y por el Art. 121 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El que envenenare o infectare, dolosamente, aguas potables, o sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de la colectividad, será reprimido, por el solo acto del envenenamiento o infección, con reclusión mayor de cuatro a ocho años y multa de dieciséis a ciento cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Si el acto ha producido enfermedad, la pena será de reclusión mayor de ocho a doce años; y si ha producido la muerte, la de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años.

Art. 434.-  (Reformado por el Art. 122 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Cuando los actos previstos en los artículos anteriores fueren cometidos por imprudencia, o por negligencia, o por impericia en el propio arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, se impondrá multa de ocho a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América, si no resultare enfermedad o muerte de alguna persona; y prisión de seis meses a cinco años, si resultare enfermedad o muerte.

Art. 435.-  (Reformado por el Art. 123 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Será reprimido con prisión de seis meses a dos años y multa de ocho a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia.

Art. 436.- Los médicos, boticarios, o cualquier persona que, por falta de precaución o de cuidado, recetaren, despacharen o suministraren medicamentos que comprometan gravemente la salud, serán reprimidos con prisión de seis meses a un año; si hubieren causado enfermedad que parezca o fuere incurable, la prisión será de uno a tres años; y en caso de haber producido la muerte, la prisión será de tres a cinco años.

Art. 437.-  (Reformado por el Art. 124 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Será reprimido con prisión de un mes a un año y multa de ocho a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América, el médico que prestare su nombre a quien no tenga título para ejercer su profesión.

Capítulo X A

DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE

(Capítulo agregado por el Art. 2 de la Ley 99-49, R.O. 2, 25-I-2000)

Art. 437 A.- Quien, fuera de los casos permitidos por la ley, produzca, introduzca, deposite, comercialice, tenga en posesión, o use desechos tóxicos peligrosos, sustancias radioactivas, u otras similares que por sus características constituyan peligro para la salud humana o degraden y contaminen el medio ambiente, serán sancionados con prisión de dos a cuatro años.

Igual pena se aplicará a quien produzca, tenga en posesión, comercialice, introduzca armas químicas o biológicas.

Art. 437 B.- El que infringiere las normas sobre protección del ambiente, vertiendo residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad con la ley, si tal acción causare o pudiere causar perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, el potencial genético, los recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a tres años, si el hecho no constituyere un delito más severamente reprimido.

Art. 437 C.- La pena será de tres a cinco años de prisión, cuando:

- a) Los actos previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la salud de las personas o a sus bienes;
- b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible;
- c) El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su autor; o,
- d) Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales necesarios para la actividad económica.

Art. 437 D.- Si a consecuencia de la actividad contaminante se produce la muerte de una persona, se aplicará la pena prevista para el homicidio inintencional, si el hecho no constituye un delito más grave.

En caso de que a consecuencia de la actividad contaminante se produzcan lesiones, impondrá las penas previstas en los artículos 463 a 467 del Código Penal.

Art. 437 E.- Se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho no constituyere un delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado público que actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o permita, contra derecho, que se viertan residuos contaminantes de cualquier clase por encima de los límites fijados de conformidad con la ley; así como el funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo resultado.

Art. 437 F.- El que cace, capture, recolecte, extraiga o comercialice, especies de flora o fauna que estén legalmente protegidas, contraviniendo las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, será reprimido con prisión de uno a tres años.

La pena será de prisión de dos a cuatro años cuando:

- a) El hecho se cometa en período de producción de semilla o de reproducción o crecimiento de las especies;
- b) El hecho se cometa contra especies en peligro de extinción; o,
- c) El hecho se cometa mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas.

Art. 437 G.- El que extraiga especies de flora o fauna acuáticas protegidas, en épocas, cantidades o zonas vedadas, o utilice procedimientos de pesca o caza prohibidos, será reprimido con prisión de uno a tres años.

Art. 437 H.- El que destruya, queme, dañe o tale, en todo o en parte, bosques u otras formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que estén legalmente protegidas, será reprimido con prisión de uno a tres años, siempre que el hecho no constituya un delito más grave.

La pena será de prisión de dos o cuatro años cuando:

- a) Del delito resulte la disminución de aguas naturales, la erosión del suelo o la modificación del régimen climático; o,
- b) El delito se cometa en lugares donde existan vertientes que abastezcan de agua a un centro poblado o sistema de irrigación.
- Art. 437 I.-** Será sancionado con prisión de uno a tres años, si el hecho no constituye un hecho más grave, el que sin autorización o sin sujetarse a los procedimientos previstos en las normas aplicables, destine las tierras reservadas como de protección ecológica o de uso agrícola exclusivo, a convertirse en áreas de expansión urbana, o de extracción o elaboración de materiales de construcción.
- Art. 437 J.-** Se aplicará la misma pena prevista en el artículo anterior, si el hecho no constituyere un delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado público que actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o permita, contra derecho, que se destine indebidamente las tierras reservadas como de protección ecológica o de uso agrícola exclusivo a un uso distinto de que legalmente les corresponde; así como al funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo resultado.
- Art. 437 K.-** El juez penal podrá ordenar, como medida cautelar, la suspensión inmediata de la actividad contaminante, así como la clausura definitiva o temporal del establecimiento de que se trate, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental.

Capítulo XI

DEL QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA Y ALGUNAS OCULTACIONES

- Art. 438.-** El condenado puesto bajo la vigilancia especial de la autoridad, que contraviniera a las disposiciones del Art. 61, será reprimido con prisión de quince días a seis meses y no se podrá dejar en suspenso el cumplimiento de la pena.
- Art. 439.-**  (Reformado por el Art. 125 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Los que hubieren ocultado o hecho ocultar a una persona, sabiendo que estaba perseguida o condenada por un delito reprimido con reclusión, serán reprimidos con ocho días a dos años de prisión y multa de seis a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América.
- Art. 440.-** Se exceptúan de la disposición precedente los ascendientes, descendientes, cónyuge, y hermanos de los prófugos ocultados, y de los cómplices o coautores del delito, y sus afines en los mismos grados.

Capítulo XII

DEL TRÁFICO ILEGAL DE MIGRANTES

(Capítulo agregado por el Art. 1 de la Ley 2000-20, R.O. 110, 30-VI-2000)

- Art. 440-A.-**  (Derogado por el Art. 1 de la Ley 2006-70, R.O. 427-S, 29-XII-2006).
- Art. 440-B.-**  (Derogado por el Art. 1 de la Ley 2006-70, R.O. 427-S, 29-XII-2006).
- Art. ... -** (Agregado por el Art. 1 de la Ley 2006-70, R.O. 427-S, 29-XII-2006).- El que por medios ilegales, promueva, facilite, induzca, financie, colabore, participe o ayude a la migración de personas, nacionales o extranjeras, desde el territorio del Estado Ecuatoriano hacia otros países, siempre que ello no constituya infracción más grave, será reprimido con la pena de reclusión mayor de cuatro a ocho años y multa de veinte a cuarenta remuneraciones básicas unificadas.

Igual sanción se impondrá a los encargados de la protección y custodia de los niños, niñas o adolescentes, sean éstos padre, madre, abuelos, tíos, hermanos o tutores o cualquier otra persona que faciliten de cualquier modo la ejecución de este ilícito.

El Juez competente ordenará la aprehensión e incautación inmediata del transporte clandestino utilizado, cuando accidentado el mismo, resultaren personas muertas o lesionadas, debiéndose destinar el producto del remate del mismo en la forma prevista en el artículo 186 del Código de Procedimiento Penal.

Por los delitos concurrentes a la infracción de tráfico ilegal de emigrantes se establecerá una acumulación de penas de hasta un máximo de veinticinco años de reclusión mayor especial.

Cuando los actos de ejecución del delito de tráfico de emigrantes produjeren la muerte del emigrante, los culpables serán reprimidos con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años y si se produjeren lesiones previstas en los artículos 465, 466 y 467 de este Código, los culpables serán sancionados con la pena de reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años.

Se considerará circunstancia agravante el hecho de haber conocido, o de que sea algo evidente, que el medio de transporte que utilizaba para el transporte de los emigrantes se encontraba en malas condiciones de uso o que no tenga la suficiente capacidad para el número de personas que transportaba.

Con la misma pena se sancionará a los dueños de los vehículos de transporte aéreo, marítimo o terrestre y a las personas que sean parte de la tripulación o encargadas de la operación y conducción, cuando se estableciere su conocimiento y participación en el ilícito.

Las víctimas que den a conocer la identidad de los involucrados en el cometimiento de este delito, serán protegidos por la autoridad respectiva.

Capítulo XIII

DE CIERTOS DELITOS PROMOVIDOS O EJECUTADOS POR MEDIO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS

(Agregado por el Art. 53 de la Ley 2002-97, R.O. 733-S, 27-XII-2002)

Art. 440-B.- La persona o personas que instigaren, promovieren o ejecutaren actividades turísticas con el objeto de cometer o perpetrar el delito de plagio tipificado en el artículo 188 y contemplado en el Capítulo III referido a los "Delitos contra la Libertad Individual", del Título II, Libro Primero del Código Penal; de los delitos contra las personas contempladas en el Título VI y particularmente tipificados en el Capítulo I referido a los delitos contra la vida; en el Capítulo II relacionado con "Las Lesiones" y el Capítulo III relativo al "Abandono de Personas" del Libro II del Código Penal; de los delitos sexuales contemplados en el Título VIII, en los Capítulos II relativo al "Atentado contra el Pudor, de la violación y del estupro", el Capítulo II atinente a los delitos de proxenetismo y corrupción de menores y Capítulo IV relativo al rapto; el Libro Segundo del Código Penal, de los delitos contra la propiedad contemplados en el Título X y particularmente tipificados en el Capítulo I relacionado con el delito de hurto, el Capítulo II acerca del delito de robo, el Capítulo IV relativo al delito de extorsión y el Capítulo V referido a las estafas y otras defraudaciones del Libro II del Código Penal, se les impondrá el máximo de la pena que corresponda a la naturaleza de la correspondiente infracción. Así mismo, quienes cometieran delitos previstos en este artículo contra personas que tengan la condición de turistas y a sabiendas que tenía tal condición se les impondrá la máxima pena prevista para la infracción perpetrada.

Notas:

- *El Art. 188, referente al plagio, consta en el Libro Segundo del Código Penal y no en el Libro Primero, como se menciona en el texto de este artículo.*

- *No obstante que la Ley 2002-97 introdujo el Capítulo XIII y el Art. 440-B, la Ley 2002-91 (R.O. 716, 2-XII-2002), ya había agregado al Capítulo XII un artículo con la misma numeración.*

Título VI

DE LOS DELITOS CONTRA LAS PERSONAS

Capítulo ...

DE LOS DELITOS DE GENOCIDIO Y ETNOCIDIO

(Agregado por el Art. 1 de la Ley s/n, R.O. 578-S, 27-IV-2009)

Art. ... (1).- (Agregado por el Art. 1 de la Ley s/n, R.O. 578-S, 27-IV-2009).- Quien, con propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, perpetre alguno de los siguientes actos, será sancionado:

1. Quien ocasionare la muerte de sus miembros, será sancionado con pena de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años.

2. Quien ocasionare lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de seis a nueve años.

3. Quien sometiere intencionalmente al grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de seis a nueve años.

4. Quien tomare medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de seis a nueve años. La información o acceso a métodos de planificación familiar, métodos anticonceptivos y servicios de salud sexual y reproductiva, no se considerarán medidas destinadas a impedir nacimientos.

5. Quien traslade por la fuerza a niños y niñas del grupo a otro grupo, será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de seis a nueve años.

Art. ... (2).- (Agregado por el Art. 1 de la Ley s/n, R.O. 578-S, 27-IV-2009).- Quien irrespetare la autodeterminación de un

grupo nacional, étnico, racial o religioso, o su voluntad de permanecer en aislamiento voluntario, incurrirá en delito de etnocidio y será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de tres a seis años.

Art. ... (3).- (Agregado por el Art. 1 de la Ley s/n, R.O. 578-S, 27-IV-2009).- Quien realizare, con conciencia de que puede producirse la desaparición total o parcial de grupos humanos, actividades tendientes a influir, alterar, o de cualquier manera cambiar la cultura, forma de vida o identidad de los pueblos en aislamiento voluntario, será sancionado con pena de prisión de dos a cuatro años.

Art. ... (4).- (Agregado por el Art. 1 de la Ley s/n, R.O. 578-S, 27-IV-2009).- El hecho de que las infracciones tipificadas en este capítulo hayan sido cometidas por un subordinado, no eximirá de responsabilidad penal al superior que la ordenó ni al subordinado que la ejecutó.

En todos estos casos, la tentativa será sancionada con la mitad de la pena prevista para el delito consumado.

Art. ... (5).- (Agregado por el Art. 1 de la Ley s/n, R.O. 578-S, 27-IV-2009).- Las acciones y las penas por los delitos de los que trata este capítulo serán imprescriptibles.

Capítulo I

DE LOS DELITOS CONTRA LA VIDA

Art. 441.- El que por alimentos, bebidas, medicamentos, violencias o cualquier otro medio hubiere, intencionalmente, hecho abortar a una mujer que no ha consentido en ello, será reprimido con tres a seis años de reclusión menor.

Si los medios empleados no han tenido efecto, se reprimirá como tentativa.

Art. 442.- Cuando el aborto ha sido causado por violencias hechas voluntariamente, pero sin intención de causarlo, el culpado será reprimido con prisión de seis meses a dos años.

Si las violencias han sido cometidas con premeditación o con conocimiento del estado de la mujer, la prisión será de uno a cinco años.

Art. 443.- El que por alimentos, bebidas, medicamentos o cualquier otro medio hubiere hecho abortar a una mujer que ha consentido en ello, será reprimido con prisión de dos a cinco años.

Art. 444.- La mujer que voluntariamente hubiere consentido en que se le haga abortar, o causare por sí misma el aborto, será reprimida con prisión de uno a cinco años.

Si consintiere en que se le haga abortar o causare por sí misma el aborto, para ocultar su deshonor, será reprimida con seis meses a dos años de prisión.

Art. 445.- Cuando los medios empleados con el fin de hacer abortar a una mujer hubieren causado la muerte de ésta, el que los hubiere aplicado o indicado con dicho fin será reprimido con tres a seis años de reclusión menor, si la mujer ha consentido en el aborto; y con reclusión mayor de ocho a doce años, si la mujer no ha consentido.

Art. 446.- En los casos previstos por los Arts. 441, 443 y 445, si el culpado es médico, tocólogo, obstetrix, practicante o farmacéutico, la pena de prisión será reemplazada con reclusión menor de tres a seis años; la de reclusión menor, con reclusión mayor de cuatro a ocho años; y la de reclusión mayor ordinaria con la extraordinaria de doce a dieciséis años.

Art. 447.- El aborto practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer o de su marido o familiares íntimos, cuando ella no estuviere en posibilidad de prestarlo, no será punible:

1o.- Si se ha hecho para evitar un peligro para la vida o salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; y,

2o.- Si el embarazo proviene de una violación o estupro cometido en una mujer idiota o demente. En este caso, para el aborto se requerirá el consentimiento del representante legal de la mujer.

Art. 448.- Se califican de voluntarios el homicidio, las heridas, los golpes y lesiones, mientras no se pruebe lo contrario, o conste la falta de intención por las circunstancias del hecho, calidad y localización de las heridas, o de los instrumentos con que se hicieron.

Art. 449.- El homicidio cometido con intención de dar la muerte, pero sin ninguna de las circunstancias detalladas en el artículo siguiente, es homicidio simple y será reprimido con reclusión mayor de ocho a doce años.

Art. 450.-  (Reformado por el Art. 16 de la Ley 2001-47, R.O. 422, 28-IX-2001).- Es asesinato y será reprimido con reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años, el homicidio que se cometa con alguna de las circunstancias siguientes:

1o.- Con alevosía;

2o.- Por precio o promesa remuneratoria;

- 3o.- Por medio de inundación, veneno, incendio, o descarrilamiento;
- 4o.- Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido;
- 5o.- Cuando se ha imposibilitado a la víctima para defenderse;
- 6o.- Por un medio cualquiera capaz de causar grandes estragos;
- 7o.- Buscando de propósito la noche o el despoblado para cometer el homicidio;
- 8o.- Con el fin de que no se descubra, o no se detenga al delincuente, excepto cuando el homicida sea ascendiente o descendiente, cónyuge o hermano del delincuente al que se haya pretendido favorecer; y,
- 9o.- Como medio de preparar, facilitar, consumir u ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados o impunidad; o por no haber obtenido los resultados que se propuso al intentar el otro hecho punible.
- 10.- (Agregado por el Art. 3 de la Ley s/n, R.O. 555-S, 24-III-2009).- Con odio o desprecio en razón de raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, edad, estado civil o discapacidad, de la víctima.
- 11.- (Agregado por el Art. 2 de la Ley s/n, R.O. 160-S, 29-III-2010).- Si ha sido cometido en contra de miembros de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, fiscales o jueces de garantías penales, en el desempeño de sus funciones
- Art. 451.-** Cuando hayan concurrido a un robo u otro delito dos o más personas, todas serán responsables del asesinato que con este motivo u ocasión se cometa; a menos que se pruebe quien lo cometió, y que los demás no tuvieron parte en él, ni pudieron remediarlo o impedirlo.
- Art. 452.-**  (Sustituido por el Art. 5 de la Ley 106, R.O. 365, 21-VII-1998 y reformado por el Art. 16 de la Ley 2001-47, R.O. 422, 28-IX-2001).- Los que, a sabiendas y voluntariamente, mataren a cualquier ascendiente o descendiente, cónyuge o hermano, serán reprimidos con reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años.
- Art. 453.-** La madre que por ocultar su deshonra matare al hijo recién nacido, será reprimida con la pena de reclusión menor de tres a seis años.
- Igual pena se impondrá a los abuelos maternos que, para ocultar la deshonra de la madre, cometieren este delito.
- Art. 454.-**  (Reformado por el Art. 126 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Será reprimido con prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que instigare o prestare auxilio a otro para que se suicide, si el suicidio se hubiese tentado o consumado.
- Art. 455.-** Cuando las heridas, o golpes, dados voluntariamente, pero sin intención de dar la muerte, la han causado, el delincuente será reprimido con tres a seis años de reclusión menor.
- Será reprimido con reclusión menor de seis a nueve años, si ha cometido estos actos de violencia con alguna de las circunstancias detalladas en el Art. 450.
- Art. 456.-** Si las sustancias administradas voluntariamente, que pueden alterar gravemente la salud, han sido dadas sin intención de causar la muerte, pero la han producido, se reprimirá al culpado con reclusión menor de tres a seis años.
- Art. 457.-** En la infracción mencionada en el artículo anterior, se presumirá la intención de dar la muerte si el que administró las sustancias nocivas es médico, farmacéutico o químico; o si posee conocimientos en dichas profesiones, aunque no tenga los títulos o diplomas para ejercerlas.
- Art. 458.-** En los casos mencionados en los Arts. 454, 455 y 456, si el culpado ha cometido la infracción en la persona del padre u otro ascendiente, o descendiente, cónyuge o hermano, el mínimo de las penas señaladas en dichos artículos se aumentará con dos años más.
- Art. 459.-** Es reo de homicidio inintencional el que ha causado el mal por falta de previsión o de precaución, pero sin intención de atentar contra otro.
- Art. 460.-**  (Reformado por el Art. 127 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El que inintencionalmente hubiere causado la muerte de otra persona, si el acto no estuviere más severamente reprimido, será penado con prisión de tres meses a dos años y multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América.
- Art. 461.-**  (Reformado por el Art. 128 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Cuando en riña o agresión en que tomen parte más de dos personas, resultare una muerte, sin que constare quien o quienes la causaron, se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido, y se aplicará la pena de uno a cinco años de prisión y multa de treinta y un a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América.
- Art. 462.-** El homicidio causado por un deportista, en el acto de un deporte y en la persona de otro deportista en juego, no será penado al aparecer claramente que no hubo intención ni violación de los respectivos reglamentos, y siempre que se

trate de un deporte no prohibido en la República.

En caso contrario, se estará a las reglas generales de este Capítulo, sobre homicidio

Capítulo II DE LAS LESIONES

Art. 463.-  (Reformado por el Art. 129 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El que hiriere o golpear a otro, causándole una enfermedad o incapacidad para el trabajo personal, que pase de tres días y no de ocho, será reprimido con prisión de quince días a tres meses y multa de seis a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Si concurre alguna de las circunstancias del Art. 450, las penas serán de prisión de dos a seis meses y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 464.-  (Reformado por el Art. 130 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Si los golpes o heridas han causado una enfermedad o una incapacidad para el trabajo personal, que pase de ocho días y no exceda de un mes, las penas serán de prisión de dos meses a un año y multa de doce a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Si concurre alguna de las circunstancias del Art. 450, la prisión será de seis meses a dos años, y la multa, la de dieciséis a cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 465.-  (Reformado por el Art. 131 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Si los golpes o heridas han causado una enfermedad o incapacidad para el trabajo, que pase de treinta días y no exceda de noventa, las penas serán de prisión de seis meses a dos años, y multa de dieciséis a cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América.

En caso de concurrir alguna de las circunstancias del Art. 450, la prisión será de uno a tres años, y la multa de dieciséis a sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 466.-  (Reformado por el Art. 132 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Si los golpes o heridas han causado una enfermedad o incapacidad para el trabajo personal, que pase de noventa días, o una incapacidad permanente para los trabajos a que hasta entonces se había dedicado habitualmente el ofendido, o una enfermedad grave, o la pérdida de un órgano no principal, las penas serán de prisión de uno a tres años y multa de dieciséis a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América.

En caso de concurrir alguna de las circunstancias del Art. 450, las penas serán de prisión de dos a cinco años y multa de treinta y un a ciento veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 467.-  (Reformado por el Art. 133 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Las penas serán de prisión de dos a cinco años y multa de treinta y un a ciento veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América, si de los golpes o heridas ha resultado una enfermedad cierta o probablemente incurable, o una incapacidad permanente para el trabajo, o una mutilación grave, o la pérdida o inutilización de un órgano principal.

Las penas serán de reclusión menor de tres a seis años y multa de dieciséis a ciento cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América, si concurre alguna de las circunstancias del Art. 450.

Art. 468.-  (Reformado por el Art. 134 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Será reprimido con prisión de uno a seis meses y multa de doce a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que hubiere causado a otro una enfermedad o incapacidad transitoria para el trabajo personal, administrándole voluntariamente sustancias que puedan alterar gravemente la salud.

Art. 469.- La pena será de prisión de dos a cinco años, cuando dichas sustancias hubieren causado una enfermedad cierta o probablemente incurable, o una incapacidad permanente para el trabajo personal, o la pérdida absoluta, o inutilización de un órgano.

Art. 470.-  (Reformado por el Art. 135 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Cuando en riña o agresión en que toman parte más de dos personas, resultaren heridas o lesiones, sin que constare quien o quienes las causaron, se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido, y se aplicará la pena de quince días a un año de prisión y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 471.- En los delitos mencionados en los artículos anteriores de este Capítulo, si el culpado ha cometido la infracción en la persona del padre o madre u otro ascendiente o descendiente, en la del cónyuge o en la de un hermano, se aplicará la pena inmediata superior.

Art. 472.-  (Reformado por el Art. 136 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Es reo de heridas o lesiones inintencionales el que las ha causado por falta de previsión o de precaución, y será reprimido con prisión de ocho días a tres meses y multa de seis a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América, si el acto no estuviere más severamente

castigado como delito especial.

Art. 473.- En las circunstancias del Art. 462, cuando se trate de heridas o lesiones, se estará a lo que allí se establece.

Art.- (Agregado por el Art. 2 de la Ley 2006-63, R.O. 412, 7-XII-2006).- Los incitadores o responsables de hechos de violencia dentro de los escenarios deportivos o en sus inmediaciones o demás lugares que por su capacidad, puedan albergar reuniones masivas de público, antes, durante o después del evento deportivo, artístico u otros espectáculos y que causen lesiones a terceros, serán reprimidos con pena de uno a tres años de prisión.

Capítulo III DEL ABANDONO DE PERSONAS

Art. 474.-  (Reformado por el Art. 137 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Serán reprimidos con prisión de un mes a un año y multa de seis dólares de los Estados Unidos de Norte América, los que hubieren abandonado o hecho abandonar un niño en un lugar no solitario; y los que lo hubieren expuesto o hecho exponer, siempre que no sea en un hospicio o en casa de expósitos.

Art. 475.-  (Reformado por el Art. 138 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Los delitos previstos en el precedente artículo serán reprimidos con prisión de seis meses a dos años y multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América, si han sido cometidos por los padres, o por personas a quienes el niño estaba confiado.

Art. 476.-  (Reformado por el Art. 139 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Si, a consecuencia del abandono, quedare el niño mutilado o estropeado, los culpados serán reprimidos:

En el caso previsto por el Art. 474, con prisión de tres meses a dos años y multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América; y,

En el del Art. 475, con prisión de dos a cinco años y multa de dieciséis a cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 477.- Si el abandono ha causado la muerte del niño, la pena será:

En el caso del Art. 474, de prisión de uno a tres años; y en el caso del Art. 475, de prisión de cinco años.

Art. 478.- Serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años, los que hubieren abandonado o hecho abandonar a un niño en un lugar solitario.

Art. 479.- La prisión será de dos a cinco años, si los culpados del abandono en lugar solitario son los padres, o personas a quienes estaba confiado el niño.

Art. 480.- Si, a consecuencia del abandono, quedare estropeado o mutilado el niño, el culpado será reprimido con el máximo de las penas señaladas en los dos artículos anteriores.

Si el abandono ha causado la muerte, en el caso del Art. 478, la pena será de reclusión menor de tres a seis años; y en el caso del Art. 479, la de reclusión mayor de cuatro a ocho años.

Capítulo IV DEL DUELO

(Derogado por el Art. 1 de la Ley s/n, R.O. 555-S, 24-III-2009)

Art. 481.- (Derogado por el Art. 1 de la Ley s/n, R.O. 555-S, 24-III-2009).

Art. 482.- (Derogado por el Art. 1 de la Ley s/n, R.O. 555-S, 24-III-2009).

Art. 483.- (Derogado por el Art. 1 de la Ley s/n, R.O. 555-S, 24-III-2009).

Art. 484.- (Derogado por el Art. 1 de la Ley s/n, R.O. 555-S, 24-III-2009).

Art. 485.- (Derogado por el Art. 1 de la Ley s/n, R.O. 555-S, 24-III-2009).

Art. 486.- (Derogado por el Art. 1 de la Ley s/n, R.O. 555-S, 24-III-2009).

Art. 487.- (Derogado por el Art. 1 de la Ley s/n, R.O. 555-S, 24-III-2009).

Capítulo V DEL ABUSO DE ARMAS

Art. 488.-  (Reformado por el Art. 7 de la Ley 2006-31, R.O. 231, 17-III-2006).- Será reprimido con prisión de dos años a cinco años el que dispare arma de fuego contra una persona, o la agrediere con cualquier otra arma, sin herirle, siempre que el acto no constituya tentativa.

Título VII

DE LOS DELITOS CONTRA LA HONRA

Capítulo Único DE LA INJURIA

Art. 489.- La injuria es:

Calumniosa, cuando consiste en la falsa imputación de un delito; y,

No calumniosa, cuando consiste en toda otra expresión proferida en descrédito, deshonra o menosprecio de otra persona, o en cualquier acción ejecutada con el mismo objeto.

Art. 490.- Las injurias no calumniosas son graves o leves:

Son graves:

1o.- La imputación de un vicio o falta de moralidad cuyas consecuencias pueden perjudicar considerablemente la fama, crédito, o intereses del agraviado;

2o.- Las imputaciones que, por su naturaleza, ocasión o circunstancia, fueren tenidas en el concepto público por afrentosas;

3o.- Las imputaciones que racionalmente merezcan la calificación de graves, atendido el estado, dignidad y circunstancias del ofendido y del ofensor; y,

4o.- Las bofetadas, puntapiés, u otros ultrajes de obra.

Son leves las que consisten en atribuir a otro, hechos, apodos o defectos físicos o morales, que no comprometan la honra del injuriado.

Art. 491.-  (Reformado por el Art. 142 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El reo de injuria calumniosa será reprimido con prisión de seis meses a dos años y multa de seis a veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América, cuando las imputaciones hubieren sido hechas:

En reuniones o lugares públicos;

En presencia de diez o más individuos;

Por medio de escritos, impresos o no, imágenes o emblemas fijados, distribuidos o vendidos, puestos en venta, o expuestos a las miradas del público; o,

Por medio de escritos no publicados, pero dirigidos o comunicados a otras personas, contándose entre éstos las cartas.

Art. 492.-  (Reformado por el Art. 143 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Serán reprimidos con uno a seis meses de prisión y multa de seis a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América, los que hicieren la imputación privadamente, o en concurrencia de menos de diez personas.

Art. 493.-  (Reformado por el Art. 144 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Serán reprimidos con uno a tres años de prisión y multa de seis a veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América, los que hubieren dirigido a la autoridad imputaciones que constituyan injuria calumniosa.

Si las imputaciones hechas a la autoridad constituyeren injurias no calumniosas, pero graves, las penas serán de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a diecinueve dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 494.-  (Reformado por el Art. 145 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Serán reprimidos con prisión de tres meses a tres años y multa de seis a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América, los que hubieren propuesto una acusación judicial, o hecho denuncia, que no hubiesen sido probadas durante el juicio.

Art. 495.-  (Reformado por el Art. 146 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El reo de injuria grave no calumniosa, realizada de palabra o hecho, por escrito, imágenes o emblemas, en alguna de las circunstancias indicadas en el Art. 491, será reprimido con prisión de tres a seis meses y multa de seis a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América; y en las circunstancias del Art. 492, con prisión de quince días a tres meses y multa de seis dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 496.- Cuando las injurias fueren recíprocas en el mismo acto, ninguna de las personas ofendidas podrá intentar acción

por las que se hubieren inferido en dicho acto, sea cual fuere la gravedad de las injurias no calumniosas que se hubieren recíprocamente dirigido; pero no hay compensación entre las injurias calumniosas y las no calumniosas.

Art. 497.- Al acusado de injuria no calumniosa, no se admitirá prueba sobre la verdad de las imputaciones.

Art. 498.- Las injurias, calumniosas o no, publicadas en órganos de publicidad del extranjero, podrán ser perseguidas contra las personas que hubieren enviado los artículos o la orden de insertarlos, o contribuido a la introducción o a la distribución de tales órganos en el Ecuador.

Art. 499.- Son también responsables de injurias, en cualquiera de sus clases, los reproductores de artículos, imágenes o emblemas injuriosos, sin que en este caso, ni en el del artículo anterior, pueda alegarse como causa de justificación o excusa que dichos artículos, imágenes o emblemas no son otra cosa que la reproducción de publicaciones hechas en el Ecuador o en el extranjero.

Art.- (Agregado por el Art. 1 de la Ley 167, R.O. 771, 22-VI-1984).- Constituye difamación la divulgación, por cualquier medio de comunicación social u otro de carácter público, excepto la autorizada por la ley, de los nombres y apellidos de los deudores ya sea para requerirles el pago o ya empleando cualquier forma que indique que la persona nombrada tiene aquella calidad. Los responsables serán sancionados con la pena de prisión de seis meses a dos años.

Art. 500.-  (Reformado por el Art. 147 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- No darán lugar a la acción de injuria los discursos pronunciados ante los jueces o tribunales, cuando las imputaciones se hubieren hecho en fuerza de la defensa de la causa; como si se ponen tachas a los testigos del adversario y se prueban, para enervar el valor de su testimonio.

Sin embargo, los jueces podrán, ya sea de oficio, o a solicitud de parte, mandar que se devuelvan los escritos que contengan injurias de cualquier especie; apercibir a los abogados o a las partes, y aun imponerles multa hasta de dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América aplicando al efecto las reglas de la Ley Orgánica de la Función Judicial.

Las imputaciones extrañas a la causa dan lugar a la acción correspondiente, sin perjuicio de la multa de que se habla en el inciso anterior.

Nota:

La Ley Orgánica de la Función Judicial fue derogada por el Código Orgánico de la Función Judicial (R.O. 544-S, 9-III-2009).

Art. 501.-  (Reformado por el Art. 148 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Los reos de cualquier especie de injuria que, fuera de los casos determinados en los artículos anteriores, comunicándose con varias personas, aun en actos singulares, respecto de cada una de éstas, ofendieren la reputación, serán reprimidos como autores de difamación, con pena de tres meses a un año de prisión y multa de seis a diecinueve dólares de los Estados Unidos de Norte América; admitiéndose prueba singular respecto de cada uno de los actos, y siempre que éstos pasen de tres.

Art. 502.- No cometen injuria: los padres ni los ascendientes, respecto de sus hijos y descendientes; ni los tutores, curadores, patronos, maestros, directores o jefes de los establecimientos de educación, corrección o castigo, respecto de sus pupilos, trabajadores, discípulos o dependientes, a menos que la injuria sea de las calificadas como calumniosas.

Título VIII DE LOS DELITOS SEXUALES

Capítulo I DEL ADULTERIO

Art. 503.-  (Derogado por el Art. final del Código de Procedimiento Penal, R.O. 511, 10-VI-1983).

Art. 504.-  (Derogado por el Art. final del Código de Procedimiento Penal, R.O. 511, 10-VI-1983).

Capítulo II DEL ATENTADO CONTRA EL PUDOR, DE LA VIOLACIÓN Y DEL ESTUPRO

Art.- (Agregado por el Art. 9 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005).- Será reprimido con reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años, quien someta a una persona menor de dieciocho años de edad o con discapacidad, para obligarla a realizar actos de naturaleza sexual, sin que exista acceso carnal.

Nota:

Este artículo ha sido interpretado por la Ley No. 2006-53 (R.O. 350-S, 6-IX-2006).

Art. 505.-  (Derogado por el Art. 10 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005).

Art. 506.-  (Derogado por el Art. 10 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005).

Art. 507.-  (Derogado por el Art. 10 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005).

Art. 508.- El atentado existe desde que hay principio de ejecución.

Art. 509.-  (Sustituido por el Art. 11 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005).- Llámase estupro la cópula con una persona, empleando la seducción o engaño para alcanzar su consentimiento.

Art. 510.-  (Sustituido por el Art. 12 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005).- El estupro se reprimirá con prisión de tres meses a tres años si la víctima fuere mayor de catorce años y menor de diez y ocho.

Art. 511.-  (Derogado por el Art. 10 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005).

Art. ... -  (Agregado por el Art. 7 de la Ley 106, R.O. 365, 21-VII-1998 y sustituido por el Art. 13 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005).- Quien solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, prevaleciendo de una situación de superioridad laboral, docente, religiosa o similar, con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima, o a su familia, un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación, será sancionado con pena de prisión de seis meses a dos años.

Con la misma pena será reprimido quien, de conformidad con lo previsto en el inciso anterior, actúe prevaleciendo del hecho de tener a su cargo trámites o resoluciones de cualquier índole.

El que solicitare favores o realizare insinuaciones maliciosas de naturaleza sexual que atenten contra la integridad sexual de otra persona, y que no se halle previsto en los incisos anteriores, será reprimido con pena de prisión de tres meses a un año.

Las sanciones previstas en este artículo, incluyen necesariamente la prohibición permanente de realizar actividades que impliquen contacto con la víctima.

Si el acoso sexual se cometiere en contra de personas menores de edad, será sancionado con prisión de dos a cuatro años.

Art. 512.-  (Reformado por el Art. 8 de la Ley 106, R.O. 365, 21-VII-1998 y sustituido el primer inciso por el Art. 14 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005).- Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o, la introducción, por vía vaginal o anal, de los objetos, dedos u órganos distintos del miembro viril, a una persona de cualquier sexo, en los siguientes casos:

1.- Cuando la víctima fuere menor de catorce años;

2.- Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del sentido, o cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no pudiera resistirse; y,

3.- Cuando se usare de violencia, amenaza o de intimidación.

Art. ... -  (Agregado por el Art. 9 de la Ley 106, R.O. 365, 21-VII-1998; y, derogado por el Art. 15 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005).

Art. 513.-  (Sustituido por el Art. 11 de la Ley 2001-47, R.O. 422, 28-IX-2001 y por el Art. 16 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005).- El delito de violación será reprimido con reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años, en el número 1 del artículo anterior; y, con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, en los números 2 y 3 del mismo artículo.

Nota:

Por el contexto, se ha de entender que la referencia al "artículo anterior" corresponde al artículo 512.

Art. 514.-  (Sustituido por el Art. 12 de la Ley 2001-47, R.O. 422, 28-IX-2001 y el primer inciso por el Art. 17 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005).- Si la violación produjere una grave perturbación en la salud de la persona violada se aplicará la pena establecida para los numerales 2 y 3 del artículo anterior; y, si le produjere la muerte, la pena será de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años.

Igual pena de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años, se impondrá a los responsables de violación si las víctimas son sus descendientes, ascendientes, hermanos o afines en línea recta; debiendo en su caso, ser condenados, además a la pérdida de la patria potestad.

Art. 515.-  (Reformado por los Arts. 10 y 11 de la Ley 106, R.O. 365, 21-VII-1998 y por el Art. 13 de la Ley 2001-47, R.O. 422, 28-IX-2001).- El mínimo de las penas señaladas por los artículos precedentes será aumentado con cuatro años:

Si los responsables son de los que tienen autoridad sobre la víctima;

Si son institutores, o sus sirvientes, o sirvientes de las personas arriba designadas;

Si el atentado ha sido cometido sea por funcionarios públicos, o ministros del culto, que han abusado de su posición para cometerlo; sea por profesionales de la salud y personal responsable en la atención y cuidado del paciente, comadrones, o practicantes, en personas confiadas a su cuidado; y,

Si en los casos de los Arts. 507 y 512, el culpado, quienquiera que sea, ha sido auxiliado en la ejecución del delito por una o muchas personas.

Art. 516.- En los casos de homosexualismo, que no constituyan violación, los dos correos serán reprimidos con reclusión mayor de cuatro a ocho años.

Cuando el homosexualismo se cometiere por el padre u otro ascendiente en la persona del hijo u otro descendiente, la pena será de reclusión mayor de ocho a doce años y privación de los derechos y prerrogativas que el Código Civil concede sobre la persona y bienes del hijo.

Si ha sido cometido por ministros del culto, maestros de escuela, profesores de colegio, o institutores, en las personas confiadas a su dirección o cuidado, la pena será de reclusión mayor de ocho a doce años.

Nota:

El inciso primero de este artículo ha sido declarado inconstitucional mediante Res. 106-I-97 (R.O. 203-S, 27-XI-1997).

Art. 517.- La bestialidad se reprimirá con reclusión mayor de cuatro a ocho años.

Art. 518.-  (Derogado por el Art. 20 del D.S. 2636, R.O. 621, 4-VII-1978).

Art. 519.-  (Derogado por el Art. 20 del D.S. 2636, R.O. 621, 4-VII-1978).

Art. 520.-  (Derogado por el Art. 20 del D.S. 2636, R.O. 621, 4-VII-1978).

Capítulo III

DE LOS DELITOS DE PROXENETISMO Y CORRUPCIÓN DE MENORES

(El presente capítulo, que comprendía los Arts.  521 a 528, fue sustituido por el Art. 12 de la Ley 106, R.O. 365, 21-VII-1998)

Art. ... (1).- (Agregado por el Art. 12 de la Ley 106, R.O. 365, 21-VII-1998).- El que promoviere o facilitare la prostitución de otra persona será sancionado con pena de prisión de uno a tres años, salvo que tuviere a su cargo una casa de tolerancia, establecida conforme a los reglamentos que la autoridad competente expidiere para esta clase de establecimientos.

Art. ... (2).- (Agregado por el Art. 12 de la Ley 106, R.O. 365, 21-VII-1998).- La pena será de seis a nueve años de reclusión menor extraordinaria, sin que opere la eximente del artículo anterior, cuando:

1. La víctima fuese menor de catorce años de edad;
2. Se empleare violencia, engaño, abuso de autoridad o cualquier otro medio coercitivo;
3. La víctima se encontrare por cualquier causa privada de la capacidad de prestar su consentimiento;
4. El autor es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o es cónyuge, conviviente, adoptante, tutor o curador o tiene bajo su cuidado por cualquier motivo a la persona prostituida;
5. La víctima se encuentra en situación de abandono o de extrema necesidad económica; y,
6. El autor ha hecho del proxenetismo su oficio o modo de vida.

Art. ... (3).- (Agregado por el Art. 12 de la Ley 106, R.O. 365, 21-VII-1998).- Se impondrá pena de dos a cuatro años de prisión al que explotare la ganancia obtenida por una persona que ejerciere la prostitución.

Si la víctima fuese menor de catorce años, o descendiente, hijo adoptivo, hijo de su cónyuge o de su conviviente o estuviese bajo su cuidado, la pena será de tres a seis años de reclusión menor ordinaria.

Art. ... (4).- (Agregado por el Art. 12 de la Ley 106, R.O. 365, 21-VII-1998).- Se reputará como proxenetismo la conducta del que mediante seducción o engaño sustrajere a una persona para entregarle a otro con el objeto de que tenga relaciones sexuales.

Art. ... (5).- (Agregado por el Art. 12 de la Ley 106, R.O. 365, 21-VII-1998).- Será sancionado con pena de dos a cuatro años el que promoviere o facilitare la entrada o salida del país o el traslado dentro del territorio de la República de personas

para que ejerzan la prostitución.

Si mediare alguna de las circunstancias agravantes previstas en los artículos anteriores la pena será de tres a seis años de reclusión menor ordinaria.

Art. ... (6).- (Agregado por el Art. 12 de la Ley 106, R.O. 365, 21-VII-1998).- Será sancionado con pena de uno a tres años de prisión:

1. La exposición, venta o entrega a menores de catorce años de objetos, libros, escritos, imágenes visuales o auditivas obscenas, que puedan afectar gravemente el pudor o excitar o pervertir su instinto sexual; y,
2. El que incitare a un menor de catorce años a la ebriedad o a la práctica de actos obscenos o le facilitare la entrada a los prostíbulos u otros centros de corrupción como cines o teatros que brinden espectáculos obscenos.

Capítulo ... (Ley 2005-2)

DE LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL

(Agregado por el Art. 18 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005)

Art. ... (1).- (Agregado por el Art. 18 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005).- Quien produjere, publicare o comercializare imágenes pornográficas, materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato, u organizare espectáculos en vivo, con escenas pornográficas en que participen los mayores de catorce y menores de dieciocho años, será reprimido con la pena de seis a nueve años de reclusión menor ordinaria, el comiso de los objetos y de los bienes producto del delito, la inhabilidad para el empleo, profesión u oficio.

Con la misma pena incurrirá quien distribuyere imágenes pornográficas, cuyas características externas hiciere manifiesto que en ellas sea (SIC) grabado o fotografiado la exhibición de mayores de doce y menores de dieciocho años al momento de la creación de la imagen.

Con la misma pena será reprimido quien facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico en cuyas imágenes participen menores de edad.

Cuando en estas infracciones, la víctima sea un menor de doce años o discapacitado, o persona que adolece enfermedad grave incurable, la pena será de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, al pago de la indemnización, el comiso de los objetos y de los bienes producto del delito, a la inhabilidad del empleo, profesión u oficio; y, en caso de reincidencia, la pena será de veinticinco años de reclusión mayor especial.

Cuando el infractor de estos delitos sea el padre, la madre, los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, los tutores, los representantes legales, los curadores o cualquier persona del contorno íntimo de la familia, los ministros de culto, los maestros y profesores y, cualquier otra persona que por su profesión u oficio hayan abusado de la víctima, serán sancionados con la pena de dieciséis a veinticinco años de reclusión mayor extraordinaria, al pago de la indemnización, el comiso de los objetos y de los bienes producto del delito, a la inhabilidad del empleo, profesión u oficio.

Si la víctima fuere menor de doce años, se aplicará el máximo de la pena.

Art. ... (2).- (Agregado por el Art. 18 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005).- Quien con violencia, amenaza, intimidación o engaño utilizare a personas mayores de edad, en espectáculos que impliquen la exhibición total o parcial de su cuerpo con fines sexuales, será reprimido con reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años.

Art. ... (3).- (Agregado por el Art. 18 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005).- Quien organice, ofrezca o promueva actividades turísticas que impliquen servicios de naturaleza sexual, será sancionado con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años y multa de diez mil a quince mil dólares de los Estados Unidos de América y la extinción de la persona jurídica o el cierre de la empresa, si pertenece a una persona natural.

La pena será de reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años, si la víctima fuere una persona menor de dieciocho años de edad y multa de quince mil a veinte mil dólares de los Estados Unidos de América.

Se aplicará la pena de reclusión mayor extraordinaria de nueve a doce años, en los siguientes casos:

1. Cuando la víctima sea menor de doce años;
2. Cuando el ofensor se aproveche de la vulnerabilidad de la víctima o ésta se encontrare incapacitada para resistir, o se utilice violencia, amenaza o intimidación;

3. Cuando el ofensor sea cónyuge, conviviente o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de la víctima; y,

4. Si tiene el infractor algún tipo de relación de confianza o autoridad, o si es representante legal, padrastro o madrastra de la víctima o ministro de culto.

Art. ... (4).- (Agregado por el Art. 18 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005).- El que, por cualquier medio, adquiera o contrate actividades turísticas, conociendo que implican servicios de naturaleza sexual con personas menores de dieciocho años de edad, será sancionado con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años.

Art. ... (5).- (Agregado por el Art. 18 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005).- El que promueva, induzca, participe, facilite o favorezca la captación, traslado, acogida, recepción o entrega de personas recurriendo a la amenaza, violencia, engaño o cualquier otra forma fraudulenta con fines de explotación sexual, será reprimido con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años. Si la víctima fuere una persona menor de dieciocho años de edad, se aplicará el máximo de la pena.

Se aplicará la pena de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, cuando concurren una o más de las siguientes circunstancias:

1. Si la víctima fuere una persona menor de doce años;

2. Si hay abuso de autoridad, o de una situación de necesidad o vulnerabilidad de la víctima;

3. Si el ofensor es cónyuge, conviviente o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de la víctima;

4. Si el infractor tiene algún tipo de relación de confianza, autoridad, si es representante legal, padrastro o madrastra de la víctima o ministro de culto; y,

5. Si la víctima, como consecuencia del delito, sufre una lesión física o daño psicológico permanente o contrae una enfermedad grave o mortal.

Art. ... (6).- (Agregado por el Art. 18 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005).- En el caso de que por la comisión de cualquiera de los delitos de este Capítulo, se produjera la muerte de la víctima, la pena será de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años.

Art. ... (7).- (Agregado por el Art. 18 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005).- El que induzca, promueva, favorezca, facilite la explotación sexual de personas menores de dieciocho años de edad, o de las que tienen discapacidad, a cambio de remuneración o cualquier otra retribución, o se apropie de todo o parte de estos valores, será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de seis a nueve años y el comiso de los bienes adquiridos con los frutos del delito y al pago de la indemnización de daños y perjuicios.

Si la víctima es menor de catorce años, la pena será de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años. En caso de reincidencia, la pena será reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años.

Capítulo ... (Ley 2005-2)

DISPOSICIONES COMUNES A LOS DELITOS SEXUALES Y DE TRATA DE PERSONAS

(Agregado por el Art. 18 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005)

Art. ... (1).- (Agregado por el Art. 18 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005).- En el caso de concurrencia de delitos sexuales y/o de trata de personas, las penas se acumularán hasta un máximo de treinta y cinco años.

Art. ... (2).- (Agregado por el Art. 18 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005).- En los delitos contemplados en el Título VIII, del Libro II del Código Penal, la acción penal prescribirá en el doble del tiempo de la pena máxima prevista para cada infracción, sin que el plazo pueda exceder de cincuenta años. La pena prescribirá en un tiempo igual al doble de la condena, pero el plazo de prescripción nunca será mayor de treinta y cinco años ni menor de cinco años.

Art. ... (3).-  (Agregado por el Art. 18 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005).- El comportamiento público o privado de la víctima, anterior a la comisión del delito sexual o de trata de personas, no será considerado dentro del proceso.

Nota:

El texto del presente artículo ha sido enmendado por la fe de erratas publicada en el R.O. 96, 5-IX-2005.

Art. ... (4).- (Agregado por el Art. 18 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005).- En los delitos sexuales, el consentimiento

dado por la víctima menor de dieciocho años de edad, será irrelevante. En los delitos de trata de personas, el consentimiento será irrelevante.

Art. ... (5).- (Agregado por el Art. 18 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005).- Si el autor o responsables de la comisión de delitos sexuales o de trata de personas, al momento de cometerse la infracción, ejerce respecto de la víctima su patria potestad o representación legal, será sancionado, además de la pena correspondiente, con la pérdida indefinida de éstas.

Art. ... (6).- (Agregado por el Art. 18 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005).- Cuando los medios de comunicación hicieren apología de delitos sexuales y de trata de personas, los respectivos representantes legales serán sancionados con multas de hasta veinte mil dólares de los Estados Unidos de América, sin perjuicio del comiso de los productos o medios empleados para su comisión.

En caso de reincidencia, se procederá a la clausura y reversión de las frecuencias o autorización para su funcionamiento.

Art. ... (7).- (Agregado por el Art. 18 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005).- Lo relacionado con libertad condicional, reducción de penas, modificación de la pena, suspensión del cumplimiento de la pena, condena condicional y libertad condicional, previstas en el Libro I, Título IV, Capítulo II del Código Penal, no se considerarán ni aplicarán para el caso de los delitos contemplados en el Título VIII del Libro II del Código Penal, cuando hubieren sido cometidos en contra de personas menores de dieciocho años de edad.

Art. ... (8).- (Agregado por el Art. 18 de la Ley 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005).- El que alterare la identidad de un niño; lo sustituyere por otro; suponga un embarazo o parto; entregue o consigne datos falsos o supuestos sobre un nacimiento; usurpare la legítima paternidad o maternidad de un niño; o, declarare falsamente el fallecimiento de un recién nacido, será sancionado con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años y multa de quince mil a veinte mil dólares de los Estados Unidos de América.

Capítulo IV DEL RAPTO

Art. 529.-  (Reformado por el Art. 149 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Será reprimido con prisión de uno a cinco años y multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América el que, con fines deshonestos, por medio de violencias, artificios o amenazas, hubiere arrebatado o hecho arrebatar a un menor de más de siete años de edad.

Art. 530.- Si la persona arrebatada es una niña menor de dieciséis años, la pena será de tres a seis años de reclusión menor.

Art. 531.- El que hubiere arrebatado o hecho arrebatar a una mujer mayor de dieciséis años y menor de dieciocho, que hubiere consentido en su rapto y seguido voluntariamente al raptor, será reprimido con uno a cinco años de prisión.

Art. 532.- El raptor que se casare con la menor que hubiere arrebatado o hecho arrebatar, y los que hubieren tomado parte en el rapto, no podrán ser perseguidos sino después de haber sido definitivamente declarada la nulidad del matrimonio.

Título IX DE LOS DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL

Capítulo I DE LA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS ILEGALES

Art. 533.- El que contrajere segundo o ulterior matrimonio, sabiendo que no se hallaba legítimamente disuelto el anterior, será reprimido con dos a cinco años de prisión.

Art. 534.- El que, en la celebración de los matrimonios, no se sujetare a las leyes establecidas en la República, será reprimido con prisión de uno a cinco años.

Art. 535.- El que empleare fraude o violencia para burlar las leyes vigentes que reglan la celebración o la terminación del matrimonio, será reprimido con tres a cinco años de prisión.

Art. 536.- El que, en un matrimonio ilegal pero válido, hiciere intervenir a la autoridad por sorpresa o engaño, será reprimido con seis meses a dos años de prisión; y,

Si le hiciere intervenir con violencia o intimidación, será reprimido con reclusión menor de tres a seis años.

Si alguien se fingiere autoridad para la celebración de un matrimonio, será reprimido con reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años.

Igual pena se impondrá al contrayente que haya hecho intervenir a dicho funcionario fingido.

Art. 537.-  (Reformado por el Art. 150 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El tutor o curador que, antes de la aprobación legal de sus cuentas, contrajere matrimonio, o prestare su consentimiento para que lo contraigan sus hijos o

descendientes con la persona que tuviere o hubiere tenido en guarda, será reprimido con uno a cinco años de prisión y multa de dieciséis a ciento cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 538.-  (Reformado por el Art. 151 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- La autoridad que celebrare matrimonio para el cual haya impedimento no dispensable, será reprimida con multa de ocho a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América y prisión de uno a cinco años.

Si el impedimento fuere dispensable, la pena se rebajará a la mitad.

Art. 539.- En todos los casos de este Capítulo, el contrayente doloso será condenado a dotar, según su posibilidad, a la mujer que hubiere contraído matrimonio de buena fe.

Art. 540.-  (Reformado por el Art. 152 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- La autoridad que expidiera dispensas y autorizaciones para la celebración de un matrimonio, sin previa presentación del consentimiento escrito de los padres, o curadores de los contrayentes menores, o del juez, en su caso, será reprimido con prisión de seis meses a un año y multa de sesenta y dos a ciento cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Capítulo II

DE LOS DELITOS QUE SE DIRIGEN A DESTRUIR O IMPEDIR LA PRUEBA DEL ESTADO CIVIL DE UN NIÑO

Art. 541.- El que habiendo encontrado un niño recién nacido, no lo hubiere entregado en el término de tres días, al teniente político, o autoridad de policía del lugar en que fue encontrado, será reprimido con prisión de ocho días a tres meses.

Art. 542.- Serán reprimidos con reclusión menor de tres a seis años, los culpados de sustitución de un niño por otro; o de suposición de un parto; o de usurpación del estado civil de una persona.

Art. 543.- El que hubiere arrebatado o hecho arrebatar a un niño, y siempre que el delito no constituya un plagio, será reprimido con reclusión menor de tres a seis años, aunque el niño hubiere seguido voluntariamente al culpado.

Nota:

El presente artículo fue modificado por la fe de erratas s/n (R.O. 173, 3-III-1971).

Art. 544.-  (Reformado por el Art. 153 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El que maliciosamente hubiere ocultado o hecho ocultar a un niño, si el acto no está más severamente penado en este Código, será reprimido con prisión de uno a cinco años y multa de seis a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 545.-  (Reformado por el Art. 154 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Los que hubieren llevado o hecho llevar a una casa de expósitos u otros establecimientos destinados al efecto, a un niño que les estaba confiado, serán reprimidos con prisión de uno a tres meses y multa de seis a nueve dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 546.-  (Reformado por el Art. 155 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Serán reprimidos con prisión de ocho días a un año y multa de seis a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América los que, estando encargados de un niño, no lo hicieren saber a las personas que tienen derecho de reclamarlo.

Título X

DE LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD

Capítulo I DEL HURTO

Art. 547.- Son reos de hurto los que, sin violencias ni amenazas contra las personas, ni fuerza en las cosas, sustrajeren fraudulentamente una cosa ajena, con ánimo de apropiarse.

Además son considerados como reos de hurto los individuos de reconocida conducta delictuosa, que habitualmente se dedicaren a la comisión de delitos contra la propiedad y que se hallaren registrados como tales en las Oficinas de Seguridad del Estado. La pena para esta clase de delincuentes será de uno a tres años de prisión.

Nota:

El segundo inciso de este artículo fue suspendido por resolución del Tribunal de Garantías Constitucionales (R.O. 632, 24-II-1987), ratificada por el Congreso Nacional (R.O. 677, 4-V-1987).

Art. 548.- El hurto será reprimido con prisión de un mes a tres años, tomando en cuenta el valor de las cosas hurtadas.

Art. 549.- La pena será de seis meses a cinco años de prisión:

1o.- Cuando se tratare de máquinas o instrumentos de trabajo dejados en el campo, o de alambres u otros elementos de

cercas, causándose la destrucción total o parcial de éstas;

2o.- Cuando el hurto se cometiere con ocasión de un incendio, explosión, inundación, naufragio, accidente de ferrocarril, asonada o motín, o aprovechando las facilidades provenientes de cualquier otro desastre o conmoción pública;

3o.- Cuando se tratase de herramientas, instrumentos de labranza u otros útiles, o animales de que el ofendido necesite para el ejercicio de su profesión, arte, oficio o trabajo; y,

4o.- Cuando las personas a quienes se hurtare fueren miserables o necesitadas, o cuando lo que se les hurtare fuere bastante para arruinar su propiedad.

Capítulo II DEL ROBO

Art. 550.- El que, mediante violencias o amenazas contra las personas o fuerza en las cosas, sustrajere fraudulentamente una cosa ajena, con ánimo de apropiarse, es culpado de robo, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitararlo, en el momento de cometerlo, o después de cometido para procurar su impunidad.

Art. 551.-  (Reformado por el Art. 14 de la Ley 2001-47, R.O. 422, 28-IX-2001).- El robo será reprimido con prisión de uno a cinco años y con reclusión menor de tres a seis años en los casos en que se perpetre con violencia contra las personas, tomando en consideración el valor de las cosas robadas.

Art. 552.-  (Reformado por los Arts. 15 y 16 de la Ley 2001-47, R.O. 422, 28-IX-2001).- El máximo de la pena establecida en el artículo anterior, se aplicará al responsable si concurre alguna de las siguientes circunstancias:

1o.- Si las violencias han producido heridas que no dejen lesión permanente;

2o.- Si el robo se ha ejecutado con armas, o por la noche, o en despoblado, o en pandilla, o en caminos o vías públicas;

3o.- Si se perpetrare el robo con perforación o fractura de pared, cercado, techo o piso, puerta o ventana de un lugar habitado o sus dependencias inmediatas; y,

4o.- Cuando concorra cualquiera de las circunstancias de los números 2o., 3o. y 4o. del Art. 549.

Cuando concurren dos o más de las circunstancias a que se refiere este artículo, la pena será de reclusión menor de seis a nueve años.

Si las violencias han ocasionado una lesión permanente de las detalladas en los Art. 466 y 467, la pena será de reclusión mayor de ocho a doce años.

Si las violencias han causado la muerte, la pena será de **reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años**.

Nota:

El Art. 15 de la Ley 2001-47 reformó el último inciso de este artículo en el sentido de establecer la pena de reclusión mayor especial de dieciséis a treinta años. Sin embargo, la misma ley en su Art. 16 fijó la pena para el mismo supuesto de dieciséis a veinticinco años. Considerando que el Art. 53 del Código Penal establece la reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años aplicamos la reforma del Art. 16, la misma que consta resaltada en negrita.

Art. ... (1).- (Agregado por el Art. 2 de la Ley 2005-21, R.O. 154, 28-XI-2005).- Serán reprimidos con reclusión menor ordinaria de tres a seis años quien o quienes, habiendo despojado al conductor o a los ocupantes de un vehículo automotor, lo utilicen con la finalidad de cometer otros delitos, aunque no exista ánimo de apropiación del vehículo.

Art. ... (2).- (Agregado por el Art. 2 de la Ley 2005-21, R.O. 154, 28-XI-2005).- Si como consecuencia del cometimiento de estos delitos se produjeran lesiones graves físicas o daños psicológicos en la o las víctimas, el o los autores serán sancionados con reclusión mayor extraordinaria de ocho a doce años.

Art. ... (3).- (Agregado por el Art. 2 de la Ley 2005-21, R.O. 154, 28-XI-2005).- Serán reprimidos con reclusión mayor especial de 16 a 25 años quienes en el cometimiento de los delitos tipificados en esta Ley, hayan causado la muerte o la incapacidad permanente de la o las víctimas.

Art. 553.- Se asimila al robo la sustracción de cosa ajena hecha con fraude y ánimo de apropiarse, aunque no haya violencias ni amenazas contra las personas ni fuerza en las cosas, si ha sido realizada en trenes, tranvías, autobuses, muelles, reuniones públicas u otras aglomeraciones.

También se reprimirá con la pena que señala el Art. 552, la sustracción de objetos, implementos, materiales o cosas

pertenecientes a instalaciones destinadas al servicio de los Cuerpos contra Incendios y la compra fraudulenta de esos objetos, materiales o cosas.

Art. ... (1).- Apropiación ilícita.- (Agregado por el Art. 62 de la Ley 2002-67, R.O. 557-S, 17-IV-2002).- Serán reprimidos con prisión de seis meses a cinco años y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, los que utilizaren fraudulentamente sistemas de información o redes electrónicas, para facilitar la apropiación de un bien ajeno, o los que procuren la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos de una persona, en perjuicio de ésta o de un tercero, en beneficio suyo o de otra persona alterando, manipulando o modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas informáticos, sistemas informáticos, telemáticos o mensajes de datos.

Art. ... (2).- (Agregado por el Art. 62 de la Ley 2002-67, R.O. 557-S, 17-IV-2002).- La pena de prisión de uno a cinco años y multa de mil a dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, si el delito se hubiere cometido empleando los siguientes medios:

1. Inutilización de sistemas de alarma o guarda;
2. Descubrimiento o descifrado de claves secretas o encriptadas;
3. Utilización de tarjetas magnéticas o perforadas;
4. Utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia; y,
5. Violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras semejantes.

Capítulo III DEL ABIGEATO

Art. 554.- El hurto o el robo de ganado caballar, vacuno, porcino o lanar, cometido en sitios destinados para la conservación, cría o ceba de los mismos, constituye el delito de abigeato, sin consideración a la cuantía del ganado sustraído.

Art. 555.- El abigeato será reprimido con la pena de uno a tres años de prisión, en caso de hurto; y de dos a cinco años, de prisión, en caso de robo.

La reincidencia se castigará con el doble de dichas penas.

Art. 556.- Si el abigeato cometido con violencias ha causado heridas o lesiones, o la muerte de alguna persona, se aplicarán al culpable las penas establecidas, para estos casos, en el Capítulo del robo.

Capítulo IV DE LA EXTORSIÓN

Art. 557.- Será reprimido con prisión de uno a cinco años el que, con intimidación, o simulando autoridad pública, o falsa orden de la misma, obligue a otro, sin privarle de la libertad personal, a entregar, enviar, depositar, o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero, o documentos que produzcan o puedan producir efectos jurídicos.

Art. 558.- Incurrirá en la misma pena establecida en el artículo anterior el que, por los mismos medios, o con violencia, obligue a otro, sin privarle de la libertad personal, a suscribir o destruir documentos de obligación o de crédito.

Art. 559.- Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años el que, con amenaza de imputaciones contra el honor, o de violación de secretos, o de publicaciones que afecten a la honra o reputación, cometiere alguno de los actos expresados en los dos artículos precedentes.

Capítulo V DE LAS ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES

Art. 560.-  (Reformado por el Art. 156 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El que fraudulentamente hubiere distraído o disipado en perjuicio de otro, efectos, dinero, mercancías, billetes, finiquitos, escritos de cualquier especie, que contengan obligación o descargo, y que le hubieren sido entregados con la condición de restituirlos, o hacer de ellos un uso o empleo determinado, será reprimido con prisión de uno a cinco años y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 561.-  (Reformado por el Art. 157 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Será reprimido con prisión de tres meses a cinco años y multa de seis a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que hubiere abusado de las necesidades, debilidades o pasiones de un menor, para hacerle suscribir, en su perjuicio, obligaciones, finiquitos, descargos, libranzas, o cualesquiera otros documentos obligatorios, cualquiera que sea la forma en que esta negociación

haya sido hecha o disfrazada.

Art. 562.-  (Reformado por el Art. 158 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El que después de haber producido en juicio algún título, pieza o memorial, lo hubiere sustraído dolosamente, de cualquier manera que sea, será reprimido con multa de seis a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Esta pena será aplicada de plano por el tribunal o juez que conoce de la causa.

Art. 563.-  (Reformado por el Art. 63 de la Ley 2002-67, R.O. 557-S, 17-IV-2002; por el Art. 159 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002; y, por el Art. 3 de la Ley 2002-91, R.O. 716, 2-XII-2002).- El que, con propósito de apropiarse de una cosa perteneciente a otro, se hubiere hecho entregar fondos, muebles, obligaciones, finiquitos, recibos, ya haciendo uso de nombres falsos, o de falsas calidades, ya empleando manejos fraudulentos para hacer creer en la existencia de falsas empresas, de un poder, o de un crédito imaginario, para infundir la esperanza o el temor de un suceso, accidente, o cualquier otro acontecimiento quimérico, o para abusar de otro modo de la confianza o de la credulidad, será reprimido con prisión de seis meses a cinco años y multa de ocho a ciento cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Será sancionado con el máximo de la pena prevista en el inciso anterior y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el que cometiere el delito utilizando medios electrónicos o telemáticos.

La pena será de reclusión menor ordinaria de tres a seis años, si la defraudación se cometiera en casos de migraciones ilegales.

Art. 564.-  (Reformado por el Art. 160 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Será reprimido con prisión de un mes a un año y multa de seis a cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América, o con una de estas penas solamente, el que hubiere engañado al comprador:

Acerca de la identidad de la cosa vendida, entregando fraudulentamente una cosa distinta del objeto determinado sobre el cual ha versado el contrato; y,

Acerca de la naturaleza u origen de la cosa vendida, entregando una cosa semejante en apariencia a la que se ha comprado o creído comprar.

Art. 565.-  (Reformado por el Art. 161 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Serán reprimidos con prisión de un mes a un año y multa de seis a veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América los que, con manejos fraudulentos, hubieren engañado al comprador acerca de la cantidad de las cosas vendidas.

Art. 566.-  (Reformado por el Art. 162 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Serán reprimidos con prisión de quince días a tres meses y multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América:

Los que sin estar en el caso del Art. 428, por no existir peligro de alterar la salud de los consumidores, hubieren falsificado o hecho falsificar bebidas o comestibles;

Los que hubieren vendido o hecho vender, pública o privadamente, dichos artículos falsificados; y,

Los que por carteles o avisos, impresos o no, o por cualquier otro modo de propaganda, hubieren enseñado o revelado procedimientos para la falsificación de los mencionados artículos.

Art. 567.-  (Reformado por el Art. 163 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Serán reprimidos con la misma pena y multa de dieciséis a sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América, los importadores, comisionistas, o receptores de bebidas o comestibles falsificados.

Art. 568.- Al tratarse de las infracciones determinadas en los artículos precedentes y en los Arts. 428, 429 y 430, el juez mandará publicar la sentencia, por carteles y por la prensa, a costa del condenado; y hará cerrar las fábricas, tiendas, bodegas y almacenes donde los artículos falsificados se guarden o expendan, hasta la expedición de la sentencia, y dispondrá el comiso a que hubiere lugar.

Art. 569.-  (Sustituido por el Art. 3 de la Ley s/n, R.O. 160-S, 29-III-2010).- Será reprimido con reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de América, quien oculte, custodie, guarde, transporte, venda o transfiera la tenencia, en todo o en parte, los bienes, cosas o semovientes, producto del robo o hurto, **o cuya procedencia legal no pueda probarse.**

Nota:

El texto resaltado en negritas fue declarado inconstitucional por el fondo, mediante Sentencias 029-10-SCN-CC (R.O. 343-2S, 17-XII-2010), 033-10-SCN-CC, 034-10-SCN-CC, 035-10-SCN-CC y 036-10-SCN-CC (R.O. 407-S, 18-III-2011).

Art. 570.- En caso de embargo, si el deudor o cualquier otro hubiere destruido fraudulentamente o dispuesto de alguno de

los objetos en que se ha hecho la traba, será reprimido con prisión de ocho días a dos años.

Art. 571.-  (Reformado por el Art. 165 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Serán reprimidos con prisión de ocho días a dos años y multa de seis a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América:

Los que habiendo encontrado una cosa mueble perteneciente a otro, cuyo valor pase de cien sucres, u obtenido por casualidad su tenencia, la hubieren ocultado o entregado a tercero, fraudulentamente; y,

Los que habiendo descubierto un tesoro, se hubieren apropiado de él en perjuicio de los que, según la ley, tienen derecho al tesoro.

Art. 572.- En el caso del inciso segundo del artículo anterior, si el valor del objeto que no se haya restituido a su dueño no excediere de cien sucres, se reprimirá al ocultador o detentador con pena de contravención únicamente.

Art. 573.-  (Reformado por el Art. 166 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Será reprimido con prisión de uno a cinco años y multa de seis a sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que se hubiere procurado fraudulentamente fondos, valores o recibos, por medio de una libranza girada contra una persona que no existe, o que no era su deudora, o que no debía serlo al tiempo del vencimiento, o que no le había autorizado para girar contra ella.

Sin embargo, la persecución no podrá tener lugar, o cesará, si la libranza ha sido pagada, o si el girador hubiere pagado él mismo el valor, al ser descubierto el fraude.

Art. 574.-  (Reformado por el Art. 167 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El deudor que indebidamente remueva o permita que se remueva del lugar en que se efectúan la explotación industrial o agrícola los objetos dados en prenda industrial o agrícola, o que por su negligencia causare la desaparición o deterioro de los mismos, los cambiare, abandonare o diere en garantía como suyos bienes agrícolas o industriales que no le pertenezcan, será reprimido con prisión de uno a cinco años y multa de nueve a cuatrocientos treinta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América.

En la misma pena incurrirá el deudor de prenda especial de comercio o de prenda agrícola o industrial que vendiere, donare o diere en prenda a otra persona el objeto constituido en prenda sin la intervención del acreedor, o que no cumpliere dentro del término que le señalare el juez con la exhibición o entrega para la venta al martillo del objeto dado en prenda, lo cambiare de lugar de conservación señalado en el contrato ocasionando perjuicios a la otra parte, o lo destruyere, dañare o menoscabare dolosamente la integridad del mismo sin solucionar el crédito.

Igual sanción se impondrá al deudor que vendiere los frutos de los objetos empeñados en prenda industrial o agrícola o los objetos mismos, sin dar aviso al comprador de la existencia del contrato de prenda.

Estos juicios se iniciarán por orden del juez en lo civil, quien remitirá todo lo actuado al Juez del Crimen para la correspondiente sustanciación del proceso penal. Si hasta rendir la indagatoria se pusiera a disposición del juez la prenda, quedará terminado el juicio penal y se la devolverá al Juez Civil con los antecedentes que envió, para la continuación del remate.

Nota:

El juez del crimen es actualmente el juez de lo penal.

Art. 575.-  (Reformado el último inciso por el Art. 170 del D.L. 02, R.O. 930-S, 7-V-1992).- El que hubiere comprado bienes muebles con reserva de dominio y celebrare sobre ellos contratos de venta, permuta, arrendamiento o prenda, los sacare del país o entregare a otras personas sin haber pagado la totalidad del precio, salvo el caso de autorización expresa y escrita del vendedor, será sancionado con prisión de dos meses a tres años.

La misma pena se aplicará al comprador que dolosamente hiciere desaparecer las cosas adquiridas con reserva de dominio, que las deteriorare o destruyere, que alterare las marcas, números, señales o que por cualquier medio impidiere su identificación.

En ambos casos se aplicará lo dispuesto en el inciso 4o. del artículo anterior.

Quienes dolosamente realizaren actos con los cuales obtuvieren beneficios cambiarios o monetarios indebidos, ya sea a través de declaraciones falsas ya sea de otra forma, serán penados con prisión de tres meses a cuatro años y multa no menor al 50% ni mayor al 200% de los valores indebidamente obtenidos.

Nota:

El último inciso del presente artículo fue agregado por el Decreto Ley No. 2, que expidió la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado (R.O. 930-S, 7-V-1992). Por considerar que el mismo se refiere a igual conducta que la prevista en el texto introducido por la Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público (R.O. 453, 17-III-1983), se procedió

a su sustitución. De todas formas, con el objeto de ofrecer un completo manejo de la normativa, hacemos constar a continuación el texto sustituido introducido por la reforma de 17 de mayo de 1983: "Los que fraudulentamente presenten y suscriban falsa declaración y documentación encaminada a obtener beneficios cambiarios o monetarios ilícitos, con la sobrefacturación o subfacturación en el comercio exterior, serán reprimidos con prisión de uno a cinco años, sin perjuicio de las sanciones establecidas en otras disposiciones legales".

Art. ... (1).- (Agregado por el Art. 1 del D.S. 2969, R.O. 714, 20-XI-1978).- Serán reprimidos con prisión de dos a cinco años los que con el propósito de sacar provecho personal y a título de dirigentes, organicen pseudo-cooperativas, e invadan tierras tanto en la zona urbana como en la rural, atentando de esta manera el derecho de propiedad privada.

Art. ... (2).- (Agregado por el Art. 1 del D.S. 2969, R.O. 714, 20-XI-1978).- Quien alegando la calidad de integrante de una pseudo-cooperativa, invada tierras ubicadas en la zona rural o en la urbana y negocie sobre aquellas o sobre supuestos derechos adquiridos en dichas tierras, será reprimido con prisión de uno a tres años.

Art. ... (3).- (Derogado por la Disposición Derogatoria Tercera de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).

Art. ... (4).- (Agregado por el Art. 5 de la Ley 99-48, R.O. 347, 27-XII-1999).- El que fraudulentamente, mediante cualquier acto no pague el precio mínimo de sustentación de la caja de banano para exportación, fijado por acuerdo interministerial vigente, así como los autores intelectuales, cómplices y encubridores, serán sancionados con prisión de uno a tres años y la multa establecida en el artículo 4 de la Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del Banano.

Iniciado el juicio penal por la infracción al que se refiere el inciso anterior, el juez dictará como medida cautelar, la suspensión de la marca y/o patente de exportador.

Capítulo VI DE LOS QUEBRADOS Y OTROS DEUDORES PUNIBLES

Art. 576.- Los comerciantes que, en los casos previstos por las leyes, fueren declarados culpables o responsables de quiebra, serán reprimidos:

Los de quiebra culpable, con prisión de uno a tres años; y,

Los de alzamiento o quiebra fraudulenta, con reclusión menor de tres a seis años.

Art. 577.- Cuando se tratare de la quiebra de una sociedad o de una persona jurídica que ejerza el comercio, todo director, administrador o gerente de la sociedad o persona jurídica fallida, o contador o tenedor de libros, que hubiere cooperado a la ejecución de alguno de los actos culpables o fraudulentos que determinen la quiebra, será reprimido con la pena del quebrado fraudulento o culpable en su caso.

Art. 578.- Cuando no se trate de la quiebra de un comerciante, el culpado será reprimido con prisión de uno a cinco años, en el caso de insolvencia fraudulenta, y con prisión de seis meses a dos años, en el de insolvencia culpable.

Art. 579.-  (Reformado por el Art. 168 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Serán reprimidos con prisión de seis meses a dos años y multa de seis a sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América:

Los que en obsequio del fallido hubieren sustraído, disimulado u ocultado, en todo o en parte, sus bienes muebles e inmuebles;

Los que se hubieren presentado fraudulentamente en la quiebra, y sostenido, sea a su nombre, sea por interposición de persona, créditos supuestos o exagerados;

El acreedor que hubiere estipulado, sea con el fallido o cualquiera otra persona, ventajas particulares, por razón de sus votos en la deliberación relativa a la quiebra, o el que hubiere hecho un contrato particular del cual resultare una ventaja a su favor y contra el activo del fallido; y,

El síndico de la quiebra culpado de malversación en el desempeño de su cargo.

Capítulo VII DE LA USURPACIÓN

Art. 580.- Será reprimido con prisión de un mes a dos años:

1o.- El que por violencia, engaño o abuso de confianza despojare a otro de la posesión o tenencia de bien inmueble, o de un derecho real de uso, usufructo, habitación, servidumbre o anticresis, constituido sobre un inmueble;

2o.- El que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterare los términos o límites del mismo; y,

3o.- El que, con violencias o amenazas, estorbare la posesión de un inmueble.

Art. 581.- Será reprimido con prisión de quince días a un año:

1o.- El que estorbare el derecho que un tercero tuviere sobre aguas; y,

2o.- El que, ilícitamente y con propósito de impedir el uso legítimo de una persona con derecho, represare, desviare o detuviere las aguas de los ríos, arroyos, canales o fuentes, o usurpare un derecho cualquiera referente al curso de ellas.

La pena se aumentará hasta dos años, si para cometer los delitos expresados en los números 1o. y 2o. de este artículo se rompieren o alteraren diques, esclusas, compuertas u otras obras semejantes, hechas en los ríos, arroyos, fuentes, depósitos, canales o acueductos.

Art. 582.-  (Reformado por el Art. 169 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El que fraudulentamente sustrajere o desviare aguas del público o de los particulares, ya sea para aprovecharse de ellas en beneficio propio, o con cualquier otro fin, será reprimido con prisión de ocho días a seis meses y multa de cinco a veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Capítulo VIII

DE LA USURA Y DE LAS CASAS DE PRÉSTAMOS SOBRE PRENDAS

Art. 583.- Es usurario el préstamo en el que, directa o indirectamente, se estipula un interés mayor que el permitido por la ley, u otras ventajas usurarias.

Art. 584.-  (Reformado por el Art. 170 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Será reprimido con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de dieciséis a trescientos once dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que se dedicare a préstamos usurarios.

Art. 585.-  (Reformado por el Art. 171 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002; y, por el Art. 2 de la Ley 2006-70, R.O. 427-S, 29-XII-2006).- Será reprimido con prisión de dos a cuatro años y multa de mil dólares de los Estados Unidos de América, el que encubriere, con otra forma contractual cualquiera, la realidad de un préstamo usurario.

Art. 586.-  (Reformado por el Art. 172 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002; y, por el Art. 3 de la Ley 2006-70, R.O. 427-S, 29-XII-2006).- Será reprimido con reclusión de dos a cuatro años y multa de quinientos dólares de los Estados Unidos de América el que, hallándose dedicado a la industria de préstamos sobre prendas, sueldos o salarios, no llevare libros, asentando en ellos, sin claros ni entrerrenglonados, las cantidades prestadas, los plazos e intereses, los nombres y domicilios de los que reciben el préstamo, la naturaleza, calidad y valor de los objetos dados en prenda y las demás circunstancias que exijan los reglamentos u ordenanzas de la materia; o fueren convictos de falsedad en los asientos de dichos libros.

Art. 587.- El prestamista que no diere resguardo de la prenda o seguridad recibida, será reprimido con una multa del duplo al quíntuplo de su valor y no se podrá dejar en suspenso el cumplimiento de la pena.

Capítulo IX

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 588.- Están exentos de responsabilidad penal y sujetos únicamente a la civil, por los hurtos, robos con fuerza en las cosas, defraudaciones, o daños que recíprocamente se causaren:

1o.- Los cónyuges, ascendientes, descendientes o afines, en la misma línea;

2o.- El consorte viudo, respecto de las cosas pertenecientes a su difunto cónyuge, mientras no hayan pasado a poder de otro; y,

3o.- Los hermanos y cuñados, si vivieren juntos.

La excepción de este artículo no es aplicable a los extraños, si participaren en el delito.

Art. 589.- En las infracciones de que trata este Título, con excepción de las detalladas en el Capítulo VIII, podrán los autores ser colocados bajo la vigilancia especial de la autoridad, por dos años a lo menos y cinco a lo más.

Art. 590.-  (Reformado por el Art. 173 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- El que fraudulentamente hubiere falsificado o adulterado llaves será condenado a prisión de tres meses a dos años y multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Si el culpado es cerrajero de oficio, será reprimido con prisión de uno a tres años y multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Art. 591.- Caminos públicos son aquellos cuyo uso es público.

Art. 592.- Robo cometido durante la noche es el ejecutado en el lapso comprendido entre las siete pasado meridiano y las cinco de la mañana.

Art. 593.- Se reputa casa habitada todo edificio, departamento, vivienda, choza, cabaña, aunque sea movable, o cualquier otro lugar que sirva para habitación.

Art. 594.- Se reputan dependencias de una casa habitada los patios, corrales, jardines y cualesquiera otros terrenos cerrados, así como los trojes, pesebreras, y cualesquiera otros edificios contenidos en ellos, cualquiera que sea su uso, aun cuando formen un cercado particular dentro del cercado general.

Art. 595.- Los parques móviles, destinados a contener ganado en los campos, de cualquier modo que estén hechos, se reputan dependencia de casa habitada cuando están establecidos sobre un mismo espacio de terreno con las cabañas movibles u otros abrigos destinados a los guardianes.

Art. 596.- Por violencia se entienden los actos de apremio físico ejercidos sobre las personas.

Por amenazas se entienden los medios de apremio moral que infundan el temor de un mal inminente.

Art. 597.- La fuerza en las cosas o fractura consiste en cualquier quebrantamiento, rompimiento, demolición, horadamiento, o cualquier otra violencia que se ejecute en embarcaciones, vagones, aeróstatos, paredes, entresuelos, techos, puertas, ventanas, rejas, armarios, cómodas, cofres, maletas, papeleras o cualesquiera otros muebles cerrados; la remoción de cadenas, barras u otros instrumentos que sirvan para cerrar, o impedir el paso y guardar las cosas; y la ruptura de correas, sogas, cordeles u otras ataduras que resguarden algunos efectos, y el uso de ganzúas.

Art. 598.- Se asimila a la sustracción con fuerza en las cosas:

La de los muebles de que se ha hablado en el artículo precedente; y,

La cometida mediante ruptura de sellos.

Art. 599.- Se califica de escalamiento:

Toda entrada en casas, patios, corrales, o cualquier otro edificio, jardines, parques y cercados, ejecutada por encima de puertas, techos, murallas, o cualquiera otra especie de cercado; y,

La entrada por una abertura subterránea, o por balcones o ventanas, o por cualquier otra parte que no sea destinada para entrar legítimamente.

Art. 600.- Se califica de ganzúas:

Todo gancho, corchete, llave maestra, llave imitada, falsificada o alterada;

Las llaves que no han sido destinadas por el propietario, locatario, posadero o fondista a las chapas, candados o cerraduras a que el culpado las hubiere aplicado; y,

Las llaves perdidas, extraviadas o sustraídas que hubieren servido para cometer el acto.

Art. 601.- Es pandilla la reunión de tres o más personas, con una misma intención delictuosa, para la comisión de un delito.

Art. 602.- Se comprende por la palabra arma toda máquina, o cualquier otro instrumento cortante, punzante o contundente que se haya tomado para matar, herir o golpear, aun cuando no se haga uso de él.

Título XI

DELITOS DE FUNCIÓN DE SERVIDORAS Y SERVIDORES POLICIALES Y MILITARES

(Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010)

Capítulo I

DE LOS DELITOS COMUNES DE FUNCIÓN

(Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010)

Art. ... (602.3).- **Insubordinación.-** (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con prisión de tres meses a un año, la servidora o servidor militar o policial que:

1. Rechazare, impidiere, o se resistiere violentamente al cumplimiento de orden legítima del servicio;

2. Hiciere peticiones de forma violenta a un superior;
3. Amenazare, ofendiere o ultrajare a un superior;
4. Hiriere o lesionare a un superior, en actos de servicio; o,
5. Sacare tropa armada de una unidad, reparto o instalación, sin orden superior legítima.

Si la infracción se cometiere con armas, se hiciere publicidad de la misma, se cometiere en combate, estado de excepción u operativo policial respectivamente, la pena será de tres a seis años de reclusión menor ordinaria.

Art. ... (602.4).- **Sedición.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Serán sancionados con prisión de uno a tres años, las servidoras o servidores militares o policiales que, mediante concierto expreso o tácito, en número de cuatro o más, realizaren cualquiera de los siguientes actos:

1. Desobedecieren órdenes legítimas recibidas;
2. Incumplieren los deberes del servicio;
3. Amenazaren, ofendieren o ultrajaren a un superior;
4. Pretendieren impedir la posesión de cargo de un superior o lo destituyeren de su función; o,
5. Actuaren violentamente para realizar reclamaciones o peticiones al superior.

Si las servidoras o servidores militares o policiales, realizaren alguno o varios de estos actos en tiempo de conflicto armado, estado de excepción u operativo policial respectivamente, serán sancionados con tres a seis años de reclusión menor ordinaria.

Si los hechos tuvieron lugar en situación de peligro para la seguridad de la unidad o del servicio frente a los sediciosos, acudiendo a las armas o agrediendo a un superior, serán sancionados con la pena de tres a seis años de reclusión menor ordinaria.

Art. ... (602.5).- **Conspiración, proposición y apología de la sedición.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Serán sancionados con prisión de tres meses a un año, las servidoras o servidores militares o policiales que realicen conspiración o proposición para cometer el delito de sedición y quienes incitaren a miembros de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional a cometer este delito o hicieren apología de él o de quienes lo cometen.

Art. ... (602.6).- **No evitar o no denunciar sedición.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con prisión de tres meses a un año, la servidora o servidor militar o policial que no adoptare las medidas necesarias o no empleare los medios racionales a su alcance para evitar la sedición en las unidades o servicios a su mando o que, teniendo conocimiento de que se tratare de cometer este delito, no lo denunciare a sus superiores.

Art. ... (602.7).- **Falsa alarma.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con prisión de tres meses a un año, la servidora o servidor militar o policial que, sin justificación alguna, y con intención de causar daño, produzca o difunda falsa alarma para la preparación al conflicto.

Art. ... (602.8).- **Abuso de facultades.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con prisión de tres meses a un año, la servidora o servidor militar o policial que, en ejercicio de su autoridad o mando:

1. Impusiere contra sus inferiores castigos no establecidos en la ley, o se excediere en su aplicación;
2. Asumiere, retuviere o prolongare ilegal o indebidamente un mando, servicio, cargo o función militar o policial;
3. Hiciere requisiciones o impusiere contribuciones ilegales;
4. Ordenare a sus subalternos el desempeño de funciones inferiores a su grado o empleo; o ajenas al interés del servicio; o instare a cometer un delito que ponga en peligro la seguridad de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas;
5. Obtuviere beneficios para sí o terceros, abusando de la jerarquía, grado, función, nivel o prerrogativas, siempre que este hecho no constituya otro delito;
6. Permitiere a personas ajenas o desvinculadas a la institución ejercer funciones que les corresponden exclusivamente a

los miembros del servicio militar o policial;

7. Amenazare, ofendiere o ultrajare a un inferior; o,

8. Impidiere arbitrariamente el ejercicio de sus derechos a un inferior.

Art. ... (602.9).- **Desacato militar o policial.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con prisión de tres meses a un año, la servidora o servidor militar o policial que se negare a obedecer o no cumpliera las órdenes o resoluciones legítimas que dicten las autoridades civiles o judiciales, siempre que al hecho no le corresponda una pena superior con arreglo a las disposiciones de este Código.

Este delito también se configura cuando la servidora o el servidor militar o policial desobedezca o se resista a cumplir órdenes o resoluciones legítimas de la Policial Judicial, en su función de agentes de autoridad y auxiliares de la Fiscalía General del Estado. El desacato o la resistencia que opusiere la servidora o el servidor militar o policial fundamentada en el rango o nivel jerárquico que ostente, será considerada como agravante.

Art. ... (602.10).- **Destrucción o inutilización de bienes.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con prisión de uno a tres años la servidora o servidor militar o policial que destruya o inutilice bienes destinados a la seguridad pública o la defensa nacional.

La pena será de tres meses a un año, cuando por culpa pierda, destruya o inutilice los bienes señalados en este artículo.

Art. ... (602.11).- **Violación de correspondencia.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con prisión de tres meses a un año, la servidora o servidor militar o policial que, sin la debida autorización legal, intercepte, examine, retenga, grabe o difunda correspondencia o comunicaciones privadas o reservadas de cualquier tipo y por cualquier medio.

Art. ... (602.12).- **Delitos contra la información pública no clasificada legalmente.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con prisión de tres meses a un año, la servidora o servidor militar o policial que, utilizando cualquier medio electrónico, informático o afín, obtenga información a la que tenga acceso en su condición de servidora o servidor policial o militar, para después cederla, publicarla, divulgarla, utilizarla o transferirla a cualquier título sin la debida autorización. La misma pena será aplicable a quien destruyere o inutilizare este tipo de información.

Si la divulgación o la utilización fraudulenta son realizadas por parte de la persona o personas encargadas de la custodia o utilización legítima de la información, éstas serán sancionadas con el máximo de la pena.

Art. ... (602.13).- **Delitos contra la información pública clasificada legalmente.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con reclusión menor ordinaria de tres a seis años, la servidora o servidor militar o policial que, utilizando cualquier medio electrónico, informático o afín, obtenga información clasificada de conformidad con la ley. La misma pena será aplicable a quien destruyere o inutilizare este tipo de información.

La divulgación o la utilización de la información así obtenida, será reprimida con pena de reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años, siempre que no se configure otro delito de mayor gravedad.

Si la divulgación o la utilización fraudulenta son realizadas por parte de la persona o personas encargadas de la custodia o utilización legítima de la información, éstas serán sancionadas con el máximo de la pena.

Art. ... (602.14).- **Hurto de bienes de uso policial o militar.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con reclusión menor ordinaria de tres a seis años, la servidora o el servidor policial o militar que hurte material bélico como armas, municiones, explosivos o equipos de uso policial o militar. En el caso de hurto de medicinas, vestuario, víveres u otras especies que afecten al empleo de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, será sancionado con prisión de uno a tres años.

Art. ... (602.15).- **Robo de bienes de uso policial o militar.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años, la servidora o el servidor policial o militar que robe material bélico, como armas, municiones, explosivos o equipos de uso policial o militar. En el caso de robo de medicinas, vestuario, víveres u otras especies que afecten al empleo de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, será sancionado con reclusión menor ordinaria de tres a seis años.

Art. ... (602.16).- **Compra de bienes de uso policial o militar hurtados o robados.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con reclusión menor ordinaria de tres a seis años, la servidora o el servidor policial o militar que adquiera bienes robados o hurtados pertenecientes a la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas o destinados al empleo de estas.

Art. ... (602.17).- **Hurto de bienes requisados.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será culpable del delito de hurto tipificado en este capítulo, la servidora o servidor policial o militar, que por causa de haber practicado requisiciones, se hubiere apropiado de los bienes requisados.

Capítulo II

DELITOS DE FUNCIÓN DE SERVIDORAS Y SERVIDORES POLICIALES

(Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010)

Sección I

DE LOS DELITOS CONTRA LOS DEBERES DEL SERVICIO POLICIAL

Art. ... (602.18).- **Actos contra ciudadanas o ciudadanos.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con reclusión menor ordinaria de tres a seis años, la servidora o servidor policial que cometiere deportaciones o traslados ilegales, detenciones ilegítimas, toma de rehenes, coacciones para servir a grupos subversivos o privare a cualquier persona de su derecho a ser juzgado de forma ordinaria e imparcial.

Art. ... (602.19).- **Elusión de responsabilidades.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con prisión de tres meses a un año, la servidora o servidor policial que eluda su responsabilidad en actos de servicio, cuando esta omisión cause daños.

Art. ... (602.20).- **Alteración de evidencias.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con prisión de tres meses a un año, la servidora o servidor policial que ponga en riesgo la obtención o conservación de vestigios, evidencias materiales u otros elementos de prueba para la investigación de un delito.

La sanción será de prisión de uno a tres años, si la servidora o servidor policial destruyere o produjere cualquier alteración de los elementos de prueba.

Sección II

DE LOS DELITOS CONTRA LOS DEBERES DE DIRECCIÓN

Art. ... (602.21).- **Abstención de ejecución de operaciones en conmoción interna.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con pena de prisión de uno a tres años, la servidora o servidor policial, jefe de servicio o de unidad policial que en tiempo de conmoción interna y sin que lo justifique la situación, dejare de emprender o cumplir una misión, se abstuviere de ejecutar un operativo debiendo hacerlo, o no empleare en el curso de las operaciones todos los medios que exija el cumplimiento de los preceptos de la ley y órdenes legítimas recibidas.

Sección III

DE LOS DELITOS CONTRA LOS BIENES PÚBLICOS O INSTITUCIONALES

Art. ... (602.22).- **Delitos contra los bienes institucionales.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con prisión de tres meses a un año la servidora o servidor policial que:

1. Ejecutare o no impidiere, en lugar o establecimiento policial, actos que puedan producir incendio o estragos, u originar un grave riesgo para la seguridad de una unidad o establecimiento de la Policía Nacional; o,

2. Ocultare a sus superiores averías o deterioros graves en instalaciones, aprovisionamiento o material logístico a su cargo que sea de uso del personal policial o de servicio.

Art. ... (602.23).- **Extralimitación en la ejecución de un acto de servicio.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con prisión de uno a tres años, la servidora o servidor policial que se extralimitare en la ejecución de un acto del servicio, y que como consecuencia de ello, produjera en una persona lesiones con una incapacidad no mayor a los noventa días. Si las lesiones ocasionadas generan en una persona incapacidad superior a los noventa días o incapacidad permanente, será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de tres a seis años.

Capítulo III

DELITOS DE FUNCIÓN DE SERVIDORAS Y SERVIDORES MILITARES

(Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010)

Sección I

DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DE LOS DELITOS DE FUNCIÓN DE SERVIDORAS O SERVIDORES MILITARES

Art. ... (602.24).- **Territorialidad.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Serán sancionados los delitos de la función militar cometidos dentro del territorio de la República o a bordo de naves o aeronaves militares o

mercantes movilizados para el servicio.

Los delitos de función cometidos por servidoras o servidores militares en el extranjero, con base en el principio de reciprocidad, serán juzgados por los jueces o tribunales que determinen las leyes ecuatorianas

Sección II

DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD, LA SOBERANÍA Y LA INTEGRIDAD TERRITORIAL DE LA REPÚBLICA

Art. ... (602.25).- **Delitos de traición a la Patria.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años en tiempo de paz; y con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años en conflicto armado, la servidora o servidor militar que realice alguno o varios de estos actos, aun contra fuerzas aliadas:

1. Desertar hacia las fuerzas del enemigo;
2. Facilitar a las fuerzas del enemigo el ingreso al territorio nacional o a naves o aeronaves ecuatorianas o aliadas;
3. Efectuar acciones hostiles contra un país extranjero con la intención de causar al Ecuador un conflicto armado internacional;
4. Mantener negociaciones con otros Estados, tendientes a someter de cualquier forma al territorio ecuatoriano;
5. Declararse en rebelión mientras el Estado ecuatoriano enfrenta conflicto armado internacional;
6. Entregar al enemigo territorio, plaza, puesto, posición, construcción, edificio, establecimiento, instalación, buque, aeronave, armamento, tropas o fuerza a sus órdenes o materiales de la defensa; o inducir u obligar a otro a hacerlo;
7. Dar noticias falsas o distorsionadas acerca de las operaciones del conflicto armado;
8. No dar aviso de aproximación del enemigo o de circunstancia que repercuta directamente en el conflicto, o en la población civil;
9. Impedir que las naves, aeronaves o tropas nacionales o aliadas reciban los auxilios y noticias que se les enviaren, con intención de favorecer al enemigo;
10. Arriar, mandar a arriar o forzar a arriar la bandera nacional, sin orden del Mando en el conflicto armado;
11. No cumplir una orden legítima o alterarla arbitrariamente con el propósito de perjudicar a las Fuerzas Armadas del Ecuador o beneficiar al enemigo;
12. Divulgar noticias con la intención de infundir pánico, desaliento o desorden en las tropas, o ejecutar cualquier acto que pueda producir iguales consecuencias;
13. Mantener con el enemigo relaciones o correspondencia sobre las operaciones del conflicto armado internacional o de las Fuerzas Armadas del Ecuador o sus aliados; o, sin la debida autorización, entrar en entendimiento con el enemigo para procurar la paz o la suspensión de las operaciones;
14. Poner en libertad a prisioneros de guerra con el fin de que vuelvan a las fuerzas armadas del enemigo, o devolver equipo militar al enemigo;
15. Ejecutar u ordenar, dentro o fuera del territorio nacional, reclutamiento de tropas para alistarlas en las filas del enemigo, seducir tropas ecuatorianas para el mismo fin o provocar la deserción de éstas; o,
16. Ejecutar sabotaje con el propósito de dificultar las operaciones militares nacionales o facilitar las del enemigo.

Art. ... (602.26).- **Tentativa, conspiración y proposición de traición a la Patria.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- En los casos de traición a la Patria se sancionará la tentativa de conformidad con este Código; la conspiración y proposición serán sancionados con una pena de dos tercios de la aplicable al autor o autores del delito.

Art. ... (602.27).- **Prolongación de hostilidades.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será

sancionado con reclusión menor ordinaria de tres a seis años, la servidora o el servidor militar que prolongare las hostilidades, pese a haber sido notificado oficialmente de haberse acordado la paz, armisticio o tregua con el enemigo.

Art. ... (602.28).- **Espionaje.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años, la servidora o servidor militar que en tiempo de paz:

1. Obtuvo, difundiere, falseare o inutilizare información clasificada legalmente y que su uso o empleo por país extranjero o atentare contra la seguridad y la soberanía del Estado;
2. Interceptare, sustrajere, copiare información, archivos, fotografías, filmaciones, grabaciones u otros sobre tropas, equipos, operaciones o misiones de carácter militar;
3. Enviare documentos, informes, gráficos u objetos que ponga en riesgo la seguridad o la soberanía del Estado, sin estar obligado a hacerlo; o, de estar obligado por la fuerza, no pusiere tal hecho en conocimiento de las autoridades inmediatamente;
4. Ocultare información relevante a los mandos militares nacionales; o,
5. Alterare, suprimiere, destruyere, desviare, incluso temporalmente, información u objetos de naturaleza militar relevantes para la seguridad, la soberanía o la integridad territorial.

Si la servidora o servidor militar, realizare alguno o varios de estos actos en tiempo de conflicto armado, será sancionado con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años.

Sección III

DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL ESTADO

Art. ... (602.29).- **Rebelión.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años, la servidora o servidor militar que, en tiempo de paz, realice uno o varios de los siguientes actos:

1. Se levantara en armas, para derrocar al gobierno o dificultar el ejercicio de sus atribuciones;
2. Impidiere la reunión de la Asamblea Nacional o la disolviere;
3. Impidiere las elecciones convocadas; o,
4. Promoviere, ayudare o sostuviere cualquier movimiento armado para alterar la paz del Estado.

Si la servidora o servidor militar realiza alguno o varios de estos actos en tiempo de conflicto armado internacional o no internacional, será sancionado con reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años.

Art. ... (602.30).- **Omisión en el abastecimiento.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con reclusión menor ordinaria de tres a seis años, la servidora o servidor militar que, estando obligado a hacerlo por su función, se abstenga de abastecer a las tropas para el cumplimiento de acciones militares, poniendo en riesgo la seguridad del Estado.

Sección IV

DE LOS DELITOS CONTRA LAS OPERACIONES Y SEGURIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

Art. ... (602.31).- **Atentar contra la seguridad de las Fuerzas Armadas.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con prisión de uno a tres años, la servidora o servidor militar que atentare contra la seguridad de las Fuerzas Armadas por incumplimiento de sus deberes u obligaciones en forma dolosa, siempre que el hecho no constituya otro delito.

Art. ... (602.32).- **Atentar contra el desenvolvimiento de las operaciones militares.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Serán sancionados con prisión de uno a tres años, las y los reservistas que, en caso de conflicto armado, fueren llamados e injustificadamente no concurrieren dentro de cinco días a desempeñar las funciones militares.

Art. ... (602.33).- **Atentado contra la seguridad de las operaciones militares.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años, la servidora o servidor militar que, en conflicto armado no internacional, se rinda o huya sin haber agotado los medios de defensa y seguridad que

exijan los preceptos militares u órdenes recibidas; y con reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años si se comete en conflicto armado internacional.

Sección V

DEL DELITO DE DESERCIÓN

Art. ... (602.34).- **Deserción.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con prisión de tres meses a un año, la servidora o servidor militar que, en conflicto armado, abandonare por más de cinco días el puesto, servicio o función que le hubiere sido designado, de forma ilegal e injustificada.

Art. ... (602.35).- **Omisión de aviso de deserción.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Serán sancionados con prisión de tres meses a un año, las o los superiores directos o jefes de unidades o repartos que no dieren parte de la deserción de sus subordinados.

Art. ... (602.36).- **Circunstancias especiales de deserción.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- A los desertores se les impondrá el máximo de la pena si la deserción se cometiere en complot, en territorio enemigo, hurtando, robando o destruyendo los bienes de las Fuerzas Armadas.

Capítulo IV

DELITOS CONTRA LAS PERSONAS Y BIENES PROTEGIDOS POR EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

(Agregado por el Art. 3 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010)

Art. ... (602.37).- **Aplicación de disposiciones en conflicto armado internacional o no internacional.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Las disposiciones relativas al conflicto armado internacional o no internacional son aplicables desde el día en que éste tiene lugar, independientemente de la declaración formal por parte de la Presidenta o Presidente de la República o de que decreta el estado de excepción en todo el territorio nacional o parte de él, de acuerdo con la Constitución y la ley.

Se entenderá concluido el estado de conflicto armado internacional o no internacional una vez terminado el estado de excepción por haber desaparecido las causas que lo motivaron, por finalizar el plazo de su declaratoria, por revocatoria del decreto que lo declaró; o, hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad que hubiesen sido afectadas.

Art. ... (602.38).- **Personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Para efectos de este capítulo, se consideran protegidas las personas consideradas como tales por los instrumentos internacionales vigentes del Derecho Internacional Humanitario, y en particular, las siguientes:

1. La población civil;
2. Las personas que no participan en hostilidades y los civiles en poder de la parte adversa;
3. El personal sanitario o religioso;
4. Los periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados;
5. Las personas que han depuesto las armas;
6. Las personas que se encuentran fuera de combate o indefensas en el conflicto armado;
7. Quienes, antes del inicio de las hostilidades, pertenecían a la categoría de apátridas o refugiados;
8. Los asilados políticos;
9. El personal de las Naciones Unidas y personal asociado protegido por la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y del Personal Asociado; y,
10. Cualquier otra persona que tenga esta condición en virtud de los Convenios I, II, III y IV de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales.

Art. ... (602.39).- **Homicidio de persona protegida.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, mate a persona protegida.

Art. ... (602.40).- **Tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes en persona protegida.**- (Agregado por el Art. 4 de

la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, torture o infrinja tratos crueles, inhumanos o degradantes a persona protegida.

Art. ... (602.41).- **Castigos colectivos en persona protegida.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, infrinja castigos colectivos a persona protegida.

Art. ... (602.42).- **Mutilaciones y experimentos en persona protegida.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, mutile o realice experimentos médicos o científicos o extraiga tejidos u órganos a persona protegida.

Art. ... (602.43).- **Lesión a la integridad física de persona protegida.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, afecte o lesione la integridad física de persona protegida, siempre que no constituya otro delito de mayor afectación a la persona.

Art. ... (602.44).- **Atentado a la integridad sexual y reproductiva de persona protegida.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, lesione o afecte la integridad sexual o reproductiva de persona protegida. Este delito comprende la violación y las demás conductas que según este Código afecten la integridad sexual o reproductiva.

Art. ... (602.45).- **Privación de la libertad de persona protegida.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, prive de la libertad de persona protegida. Este delito comprende:

1. Toma de rehenes;
2. Detención ilegal;
3. Deportación o traslado ilegal;
4. Desplazamiento forzado; o,
5. Demora o retardo en la repatriación.

Art. ... (602.46).- **Reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, reclute o aliste niñas, niños o adolescentes en las fuerzas armadas o grupos armados, o los utilice para participar en el conflicto armado.

Art. ... (602.47).- **Denegación de garantías judiciales de persona protegida.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, prive a una persona de las garantías del debido proceso o imponga o ejecute una pena sin que haya sido juzgada en un proceso judicial.

Art. ... (602.48).- **Abolición y suspensión de derechos de persona protegida.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, declare abolidos o suspendidos los derechos, garantías constitucionales o acciones judiciales de las personas protegidas.

Art. ... (602.49).- **Ataque a persona protegida con fines terroristas.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, realice cualquier forma de ataque a persona protegida cuyo objeto o efecto sea aterrorizar a la población civil.

Art. ... (602.50).- **Contribuciones arbitrarias.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, imponga contribuciones arbitrarias.

Art. ... (602.51).- **Omisión de medidas de socorro y asistencia humanitaria.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con reclusión menor ordinaria de tres a seis años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, omita las medidas de socorro y asistencia humanitaria a favor de las personas protegidas, estando obligado a hacerlo.

Art. ... (602.52).- **Omisión de medidas de protección.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con reclusión menor ordinaria de tres a seis años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, omita la adopción de medidas para la protección genérica de la población civil, estando obligado a hacerlo.

Art. ... (602.53).- **Obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, obstaculice o impida al personal médico, sanitario o de socorro a la población civil, la realización de las tareas sanitarias y humanitarias que pueden y deben realizarse de acuerdo con las normas del Derecho Internacional Humanitario.

Art. ... (602.54).- **Delitos contra los participantes activos en conflicto armado.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, realizare cualquiera de las siguientes conductas en contra de un participante activo:

1. Obligarlo a servir de cualquier modo en las fuerzas armadas del adversario;
2. Privarlo del derecho a tener un juicio con las garantías del debido proceso; o,
3. Impedir o dilatar injustificadamente la liberación o repatriación.

Art. ... (602.55).- **Ataque a bienes protegidos.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, dirija o participe en ataques contra los siguientes bienes protegidos:

1. Objetos civiles que no constituyan objetivo militar;
2. Bienes destinados a asegurar la existencia e integridad de las personas civiles, como las zonas y localidades destinadas a separarlas de objetivos militares, y los bienes destinados a su supervivencia o atención;
3. Bienes que hacen parte de una misión de mantenimiento de paz o de asistencia humanitaria;
4. Bienes destinados a la satisfacción de los derechos civiles y políticos de la población civil, como los destinados al culto religioso, las artes, la ciencia o la beneficencia;
5. Bienes que hagan parte del patrimonio histórico, cultural, o ambiental; y,
6. Los demás bienes protegidos según el Derecho Internacional Humanitario.

Art. ... (602.56).- **Empleo de métodos prohibidos en la conducción de conflicto armado.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, emplee métodos de guerra o conflicto armado prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario, y en particular, los siguientes:

1. El padecimiento de hambre a la población civil, inclusive a través de la obstaculización de los suministros;
2. La muerte o lesión a traición de un combatiente enemigo o a un miembro de la parte adversa que participe en el conflicto armado;
3. La utilización de la presencia de una persona protegida como escudo para poner ciertos puntos, zonas o fuerzas militares a salvo de operaciones bélicas, o para obstaculizar las acciones del enemigo en contra de objetivos militares determinados;
4. La orden de no dar cuartel;
5. El ataque a la población civil en cuanto tal;
6. El ataque de los bienes civiles; o,
7. El ataque indiscriminado con la potencialidad de provocar muerte o lesiones a civiles, daños a bienes protegidos, o daños graves o desproporcionados al medio ambiente.

Art. ... (602.57).- **Destrucción o apropiación de bienes de la parte adversa.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con reclusión menor ordinaria de tres a seis años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, destruya o confisque los bienes de la parte adversa, sin necesidad militar imperativa.

Art. ... (602.58).- **Utilización de armas prohibidas.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y

en desarrollo de conflicto armado, produzca, detente, almacene, utilice o distribuya armas prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario, y en particular las siguientes:

1. Veneno o armas envenenadas;
2. Gases asfixiantes, tóxicos u otras sustancias que produzcan el mismo efecto;
3. Armas biológicas, bacteriológicas o tóxicas;
4. Armas químicas;
5. Balas que se ensanchan o aplastan fácilmente en el cuerpo humano, como las balas de camisa dura que no recubren totalmente la parte interior o que tengan incisiones;
6. Armas cuyo efecto principal es la lesión mediante fragmentos que no puedan localizarse mediante rayos X;
7. Minas, armas trampa y otras armas con el mismo efecto;
8. Armas incendiarias;
9. Armas láser cegadoras;
10. Minas antipersonales, con excepción de las obtenidas por personal autorizado del Ejército ecuatoriano, cuando tengan por objeto desarrollar técnicas de detección, limpieza o destrucción de minas;
11. Municiones de racimo; o,
12. Demás armas que por su propia naturaleza causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios, o que surtan efectos indiscriminados.

Art. ... (602.59).- **Técnicas de modificación ambiental con fines militares.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, utilice técnicas de modificación ambiental con fines militares, de combate u otros fines hostiles como medio para producir destrucciones, daños o perjuicios vastos, duraderos o graves al medio ambiente.

Art. ... (602.60).- **Empleo de medios prohibidos en la conducción de conflicto armado.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, emplee cualquier otro método de guerra o conflicto prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario.

Art. ... (602.61).- **Uso indebido de signos protectores, distintivos y símbolos patrios.**- (Agregado por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010).- Será sancionado con prisión de tres meses a un año, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, simule la condición de persona protegida o utilice indebidamente emblemas, banderas, insignias u otros signos de protección contemplados en instrumentos internacionales vigentes, tales como:

1. Bandera blanca;
2. Bandera Nacional, insignias militares o uniformes del enemigo;
3. Insignias o uniforme de las Naciones Unidas u otros organismos humanitarios reconocidos internacionalmente;
4. Emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de 1949; y,
5. Emblemas, denominaciones, señales distintivas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, de conformidad con los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales.

Libro Tercero

DE LAS CONTRAVENCIONES

Título Primero

DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS CONTRAVENCIONES

Art. 603.- Para el efecto del procedimiento e imposición de penas, las contravenciones se dividen, según su mayor o menor gravedad, en contravenciones de primera, de segunda, de tercera y de cuarta clase; y las penas correspondientes a cada una de ellas están determinadas en los capítulos siguientes.

Capítulo I

DE LAS CONTRAVENCIONES DE PRIMERA CLASE

Art. 604.-  (Reformado por el Art. 174 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Serán reprimidos con multa de dos a cuatro dólares de los Estados Unidos de Norte América:

1o.- Los que construyeren chimeneas, estufas u hornos, con infracción de los reglamentos; o dejaren de limpiarlos o cuidarlos, con peligro de incendio;

2o.- Los que, fuera de los casos permitidos por las ordenanzas municipales ocuparen las aceras o los portales con fogones, artículos de comercio y objetos en general que interrumpen o entorpezcan el libre tránsito de los peatones, o los que transitaren por las aceras o los portales a caballo o en cualquier vehículo; o que, por los mismos, condujeran objetos que por su forma y calidad, estorbaren a los transeúntes;

3o.- Los que introdujeran sus animales en dehesas, pastos o sembrados ajenos que estuvieren cercados. Se presume la existencia de esta contravención por el hecho de ser encontrados los animales en cualquiera de dichos lugares;

4o.- Los que hubieren dejado en las calles, caminos, plazas u otros lugares públicos, tenazas, barretas, barras de hierro, escaleras u otras máquinas, instrumentos o armas de que puedan abusar los ladrones u otros malhechores. Además, serán comisados los referidos objetos;

5o.- Los que sin derecho hubieren entrado, o hubieren pasado o hecho pasar sus perros, ganado u otros animales, con o sin carga, por dehesas o terrenos ajenos que estuvieren cercados;

6o.- Los que ocultaren su verdadero nombre y apellido a las autoridades o agentes de policía u otras personas que tengan derecho a exigir que los manifiesten, si el acto no constituye delito;

7o.- Los que se negaren a recibir moneda legítima y admisible, o quisieren recibirla por menor valor del legal que tenga en la República;

8o.- Los encargados de la guarda de un alienado al que le dejaren abandonado en sitios públicos sin la debida vigilancia;

9o.- Los que salieren vestidos de una manera indecorosa o contraria a las buenas costumbres;

10o.- Los que se bañaren quebrantando las reglas de la decencia;

11o.- Los que tuvieran en balcones, ventanas o azoteas, macetas u otros objetos, sin las precauciones necesarias para evitar su caída o molestia para los transeúntes;

12o.- Los que arrojaran piedras u otros objetos en lugares públicos, con peligro para las personas; o lo hicieren a las casas o edificios, en perjuicio de éstos, o con peligro de sus habitantes;

13o.- Los que causaren algún daño leve en las fuentes públicas, acueductos, faroles de alumbrado, u otro cualquier objeto de servicio público; o rayaren, escribieren o ensuciaren las paredes de un edificio, sin perjuicio de la indemnización civil;

14o.- Los que tuvieran casas o tiendas inhabitadas y abiertas;

15o.- (Derogado por el Art. 8 de la Ley 2006-31, R.O. 231, 17-III-2006);

16o.- Los que transportaren objetos, sin permiso de la policía, durante la noche;

17o.- Los que ataren animales de cualquier clase en árboles o verjas de los jardines, de las plazas, de los paseos públicos o

avenidas, o en los postes de las líneas de telégrafo, teléfono o luz eléctrica;

18o.- Los que ocuparen un espacio cualquiera de las calles o caminos al construir sus edificios;

19o.- Los que pegaren avisos o cualquier papel en las paredes de los edificios públicos o casas particulares;

20o.- Los que no pintaren o blanquearen las paredes exteriores y balcones de sus casas de acuerdo con los reglamentos;

21o.- Los que colocaren toldos o cortinas hacia la calle sobre las puertas de sus establecimientos, a menor altura que la de dos metros sobre el nivel de la acera;

22o.- Los que colocaren avisos o carteles fuera de los casos previstos en las ordenanzas municipales;

23o.- Los que no cercaren los solares o terrenos que tuvieran dentro de las poblaciones; sin perjuicio de las sanciones impuestas en las ordenanzas municipales;

24o.- Los que, sin ser ebrios consuetudinarios, fueren encontrados en cualquier lugar público en estado de embriaguez;

25o.- Los dueños o administradores de cualquier establecimiento industrial o comercial que no fijaren un rótulo permanente en el que conste el nombre o la razón social y el objeto del mismo;

26o.- Los que en sus tiendas, casas o propiedades en general, ostentaren rótulos o inscripciones inexactas;

27o.- Los que al vender un artículo alteraren su precio anunciado de antemano al público;

28o.- Los que detuvieren a los traficantes, o impidieren la venta de cualquier artículo de comercio;

29o.- Los que hicieren obras que entorpezcan el tránsito momentánea o perpetuamente, salvo el caso de autorización o reparación urgente; sin perjuicio de lo dispuesto en las ordenanzas municipales;

30o.- Los que estropearan o torturaren a un animal, aun cuando sea para obligarle al trabajo, o con cualquier otro objeto;

31o.- Los que dieran muerte a un animal, sin necesidad;

32o.- Los que gobernaren animales con instrumentos punzantes o cortantes, capaces de causar lastimaduras;

33o.- Los que en el servicio emplearen animales heridos o maltratados;

34o.- Los que en las paredes de establecimientos públicos, como hoteles, casas de posada, cafés, casinos, balnearios, etc., etc., escribieren palabras o frases que ofendan a la moral, o dibujaren pinturas obscenas, si el acto no constituye delito;

35o.- Los que públicamente ofendieren el pudor, con acciones o dichos indecentes;

36o.- Los que no socorrieren o auxiliaren a una persona que en un lugar público se encontrase sola, herida, maltratada o en peligro de perecer, cuando pudieren hacerlo sin detrimento propio, si el acto no estuviere reprimido como delito;

37o.- Los que amansaren caballos dentro de las poblaciones;

38o.- Los que hubieren dejado en soltura animales bravíos o dañinos;

39o.- Los que hubieren azuzado, o no hubieren contenido a sus perros cuando éstos acometan o persigan a los transeúntes, aun cuando no hubiesen ocasionado ningún daño;

40o.- Los que al encontrarse a pie, o a caballo, por la calle, camino u otro lugar público, con persona que lleve dirección opuesta, le disputare o estorbare el paso, en vez de inclinar a su derecha;

41o.- Los que arrancaren, rompieren o borraren avisos, listas de correo y, en general, toda publicación emanada de autoridad o empleado competente, ocasionando, de tal manera, perjuicio al público, si el acto no constituye delito;

- 42o.- Los que cerraren las puertas de los teatros y demás lugares públicos, mientras haya concurrencia en ellos;
- 43o.- Los que faltaren a la sumisión y respeto debidos a la autoridad, aun cuando no sea en el ejercicio de sus funciones, siempre que en este caso se haya anunciado o se haya dado a conocer como tal, si el acto no constituye delito;
- 44o.- Los que formaren pendencias o algarazas en lugar público, durante el día;
- 45o.- Los que, con discursos pronunciados en público, excitaren a motines o rebeliones, o turbaren de alguna manera la tranquilidad de los habitantes, atacaren las prerrogativas nacionales, o indujeren a cometer cualquier infracción, si los actos no están reprimidos como delito;
- 46o.- Los que se introdujeren en una casa o habitación ajena para provocar riña o pendencia, si el acto no constituye delito;
- 47o.- Los que en calles y plazas reventaren petardos o cohetes, o hicieren fogatas, sin permiso especial de la Policía;
- 48o.- Los que permanecieren en una casa o habitación ajena contra la voluntad del dueño;
- 49o.- Los que volaren globos con sustancias inflamables, o quemaren fuegos artificiales, sin permiso de la policía, cuando el acto no es delito;
- 50o.- Los que tuvieren pozos sin las debidas seguridades;
- 51o.- Los que, por descuido o resistencia, no hubieren dado cumplimiento a la orden impartida por la autoridad para reparar o demoler edificios que amenazan ruina;
- 52o.- Los que no guarden la debida compostura y moderación en los templos, teatros y otros lugares de reunión; pudiendo ser sacados inmediatamente por cualquiera de los agentes de policía del lugar de la contravención;
- 53o.- Los que permanecieren a la salida de los templos, teatros, escuelas y colegios, formando agrupaciones de más de dos, o causaren molestias a los concurrentes;
- 54o.- (Derogado por el Art. 8 de la Ley 2006-31, R.O. 231, 17-III-2006).

Capítulo II

DE LAS CONTRAVENCIONES DE SEGUNDA CLASE

Art. 605.-  (Reformado por el Art. 175 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Serán reprimidos con multa de cuatro a siete dólares de los Estados Unidos de Norte América y prisión de un día, o con una de estas penas solamente:

- 1o.- Los hoteleros, dueños de casa de posada, arrendadores de casas o departamentos amoblados, dueños y directores de casas de juego y empresarios de transporte, que hubieren dejado de inscribir en un registro llevado con ese fin, el nombre, apellido, domicilio, calidad, fechas de entrada y salida de toda persona que hubiere dormido, pasado una noche en su casa, hospedado, concurrido, o viajado, en su caso;
- 2o.- Los mencionados individuos que dejaren de enviar diariamente los estados que hayan sentado el día anterior en el registro mencionado en el número precedente, a la primera autoridad de policía del lugar, o que dejaren de presentar ese registro cuando fueren requeridos por los empleados o agentes de policía;
- 3o.- Los que se mofaren de cualquier acto religioso o de las demostraciones exteriores de un culto;
- 4o.- Los que de cualquier modo se opusieren, impidieren o turbaren el ejercicio y demostraciones exteriores de un culto;
- 5o.- Los que tuvieren dentro de las poblaciones fábricas o depósitos de pólvora u otras sustancias explosivas, o que produzcan exhalaciones mefíticas, insalubres, capaces de dañar el aire y volverlo fastidioso para los habitantes, cuando la acción u omisión no constituya delito y sin perjuicio de lo que dispongan las leyes o reglamentos contra incendios y de sanidad;
- 6o.- Los que infringieren los reglamentos y disposiciones de la autoridad sobre la custodia de materias inflamables o

corrosivas, o productos químicos que puedan causar estragos;

7o.- Los que en caso de guerra, o cuando la autoridad competente lo previniere, viajen sin el correspondiente pasaporte;

8o.- Los encargados o comprometidos a transportar personas o cosas, que se negaren a ello sin causa justificable;

9o.- Los conductores de ganado o bestias, que por falta de precaución o previsión, fuesen culpados de alguna avería; sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad que pudiera sobrevenirles con ocasión de la avería;

10o.- Los que, a sabiendas, condujeran en carros u otros vehículos a personas perseguidas por la autoridad, alienados o ebrios que no se dirijan a su domicilio; a no ser que en estos dos últimos casos lo hagan con permiso de la autoridad.

11o.- Los jefes, capitanes, o dueños de embarcaciones, ferrocarriles o carruajes de viaje, que no pasaren a la autoridad correspondiente una nómina de los pasajeros que condujeran, con expresión de la nacionalidad, procedencia y destino;

12o.- Los que verificaren transacciones sobre objetos pertenecientes al Estado o destinados al uso o servicio público, como armas, prendas militares, o muebles de establecimientos públicos;

13o.- Los que infringieren los reglamentos relativos al abastecimiento de los pueblos;

14o.- Los negociantes que anduviesen vendiendo, por las casas, o por calles, plazas o cualquier otro lugar público, alhajas, ropa, o cualquier otro mueble, sin previo permiso escrito de la policía. Esta concederá el permiso a las personas que justifiquen honradez;

15o.- Los que por falta de cuidado, o por haber ejecutado obras, o no haber reparado las hechas en sus respectivas propiedades, no tuvieren expeditas y en buen estado de servicio las vías o caminos públicos o vecinales, en las partes que les correspondiere;

16o.- Los que al regar sus propiedades encharcaren los caminos públicos, o los estorbaren con acueductos o canales superficiales, u ocasionaren derrumbes de tierra, piedras, árboles, etc., sobre dichos caminos, si el acto no estuviere sancionado por las leyes especiales.

17o.- Los que causaren cualquier daño a una persona o propiedad por obra de caída o desplome de cualquier edificio o fábrica de su propiedad, si el acto no constituye delito;

18o.- Los que tomaren como prenda muebles o semovientes ajenos para exigir el cumplimiento de una obligación, o la reparación de perjuicios;

19o.- Los que no consignaren en la policía, en el término de tres días, las cosas ajenas encontradas en cualquier lugar;

20o.- Los que compraren fuera de una feria cualquier artículo de comercio u objetos muebles, alhajas o prendas de vestir, etc., a personas desconocidas, o que no tuvieren el correspondiente permiso de la policía, a menores de diez y ocho años, no autorizados para la venta, o a sirvientes domésticos; sin perjuicio de la devolución de los objetos comprados a su dueño, si no lo fuere el vendedor;

21o.- Los que hicieren el oficio de adivinar, pronosticar, explicar sueños, encontrar tesoros escondidos, o curar mediante ciertos artificios, sin perjuicio del comiso de los instrumentos o artículos de que se valgan para tales artes;

22o.- Los que tomaren o sustrajeran frutos de cualquiera especie de las huertas, jardines o campos ajenos;

23o.- Los que construyeren letrinas, acueductos, baños, desagües, o cualquier otra obra semejante, sin sujetarse a los reglamentos sobre la materia;

24o.- Los que infringieren los reglamentos expedidos sobre esta materia por la autoridad.

25o.- Los que maltrataren, injuriaren o ejercieren actos de resistencia contra los agentes de policía en el ejercicio de sus funciones, si el acto no constituye delito;

26o.- Los que en sus tabernas aceptaren ebrios, o les vendieren licores de cualquier clase, o tolerasen que continúen en

ellos;

27o.- Los dueños o administradores de tabernas o casas de juego que admitieren en ellos menores de edad;

28o.- Los que dieran a beber licores alcohólicos o fermentados a un menor de edad;

29o.- Los que proporcionaren los mismos licores a personas para quienes hubiese prohibición anticipada, por escrito, de la policía o de sus padres o guardadores;

30o.- Los que abrieren huecos o zanjas en las calles, plazas o caminos;

31o.- Los que públicamente jugaren carnaval;

32o.- Los que en los lugares de que son propietarios, locatarios, inquilinos, usufructuarios o usuarios, hubieren maliciosamente matado o herido de gravedad, en perjuicio de otro, un animal doméstico que no sea de los mencionados en el Art. 411, de este Código;

33o.- Los que disminuyeren el peso, cantidad o medida de un artículo en el momento de la venta; y,

34o.- Los que infringieren los reglamentos relativos a la elaboración de objetos fétidos o insalubres, al establecimiento de tenerías, coheterías, tintorerías y otras fábricas que pueden alterar la atmósfera con exhalaciones mefíticas y vapores corrompidos y perjudiciales a la salud de los habitantes, si no estuviere el acto sancionado por leyes especiales.

Capítulo III

DE LAS CONTRAVENCIONES DE TERCERA CLASE

Art. 606.-  (Reformado por el Art. 176 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Serán reprimidos con multa de siete a catorce dólares de los Estados Unidos de Norte América y con prisión de dos a cuatro días, o con una de estas penas solamente:

1o.- Los que, fuera de los casos previstos en el Capítulo VII del Título V, Libro II de este Código, hubieren dañado o destruido voluntariamente los bienes muebles de otro;

2o.- Los que hubieren causado la muerte o herida grave a animales por efecto de la soltura de otros dañinos, o por la mala dirección o carga excesiva de los vehículos, carruajes, caballos, bestias de tiro, de carga o de montura;

3o.- Los que, por imprevisión o falta de precaución, causaren los mismos daños por empleo o uso de armas, o arrojando cuerpos duros o cualesquiera substancias;

4o.- Los que hubieren causado los mismos accidentes por la vejez, deterioro o falta de reparación de las casas o edificios, o por estorbos o excavaciones y otras obras hechas en o cerca de las calles, caminos, plazas o vías públicas, sin las precauciones o señales previstas en los reglamentos, o por la costumbre;

5o.- Los que llevaran para apacentar bestias de cualquier especie y en cualquier época a los prados naturales o artificiales, plantíos o almácigas de árboles frutales o de otra clase, pertenecientes a otro, sin perjuicio de la indemnización civil correspondiente;

6o.- Los que, hallando una cosa ajena, siendo autoridades o agentes de policía, no la consignaren en ésta, en el término de veinticuatro horas, o que, teniendo conocimiento del hallazgo, no procedieren conforme a lo dispuesto en el Código Civil;

7o.- Los que condujeran aguas a través de los caminos o calles públicas, siempre que lo hicieren por cañerías descubiertas, sin perjuicio de ser compelidos a cubrir las cañerías;

8o.- Los culpables de pependencias o algazaras nocturnas;

9o.- Los que formaren mítines o pobladas para cualesquiera manifestaciones políticas, religiosas, etc., sin el correspondiente permiso escrito de la policía;

10o.- Los que construyeren ventanas voladas, a menor altura de dos metros sobre el nivel de la acera o de las calles, sin

perjuicio de la demolición;

11o.- Los que lidiaren toros, aun en los casos permitidos por la ley, o dieran cualesquiera otros espectáculos públicos, aun de los no prohibidos, sin previo y especial permiso de la policía;

12o.- Los que permanecieren mucho tiempo y sin objeto alguno plausible parados en las esquinas de las calles u otros lugares no destinados al recreo de los habitantes;

13o.- Los propaladores de noticias o rumores falsos que digan relación al orden público, a la seguridad del Estado o al honor nacional;

14o.- Los que propalaren noticias o rumores falsos contra la honra y dignidad de las personas o de las familias, o se preocuparen de la vida íntima de éstas, sin perjuicio de la acción de injuria;

15o.- Los que dirigieren a otro injuria no calumniosa leve;

16o.- Los que recibieren en su casa, sin conocimiento de la autoridad, a menores prófugos;

17o.- Los que infringieren los reglamentos sobre diversiones y espectáculos públicos;

18o.- Los que no cercaren los terrenos que tuvieren dentro de las poblaciones, después de haber sido requeridos para ello por las autoridades; y (sic),

19o.- Los que causaren cualquier daño o perjuicio en las instalaciones u obras destinadas a la provisión de alumbrado, agua potable, o en los focos, lámparas o faroles, etc., destinados al servicio público, si el acto no fuere delito;

... .- (Agregado por el Art. 64 de la Ley 2002-67, R.O. 557-S, 17-IV-2002).- Los que violaren el derecho a la intimidad, en los términos establecidos en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.

Nota:

El texto resaltado en negritas fue declarado inconstitucional mediante Sentencia 011-12-SCN-CC (R.O. 641-S, 15-II-2012).

Capítulo IV

DE LAS CONTRAVENCIONES DE CUARTA CLASE

Art. 607.-  (Reformado por el Art. 1 de la Ley 66, R.O. 395, 14-III-1990; por el Art. 177 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002; y, por el Art. 4, inc. 2, de la Ley s/n, R.O. 160-S, 29-III-2010).- Serán reprimidos con multa de catorce a veintiocho dólares de los Estados Unidos de América y prisión de cinco a treinta días:

1o.- (Sustituido por el Art. 4, inc. 2, de la Ley s/n, R.O. 160-S, 29-III-2010).- El hurto, siempre que el valor de las cosas sustraídas no supere el cincuenta por ciento de una remuneración básica unificada del trabajador en general;

2o.- Los ministros de un culto que, en los templos o lugares religiosos, calles o plazas, predicaren en contra o en favor de un partido político determinado;

3o.- Los que voluntariamente hirieren, o dieran golpes a otro, causándole enfermedad o incapacidad para el trabajo personal que no pase de tres días;

4o.- (Derogado por el Art. 8 de la Ley 2006-31, R.O. 231, 17-III-2006);

5o.- Los que establecieren casas de juego, sin permiso de la autoridad, y los que concurrieren a dichas casas;

6o.- Los que usaren de cosas ajenas sin la voluntad o sin el consentimiento del dueño, aun cuando no tengan el ánimo de apropiarse de ellas;

7o.- Los que hubieren deteriorado cercas urbanas o rústicas pertenecientes a otro, cualesquiera que sean los materiales de que estuvieran hechas, cuando el valor del daño no exceda de cien sucres;

8o.- Los culpables de maltratos contra sus domésticos o sirvientes, sin perjuicio de la pena correspondiente si los maltratos constituyeren delito;

9o.- Los que faltaren, de cualquier modo, con palabras, gestos, acciones, etc., a sus ascendientes, sin perjuicio de la pena correspondiente en caso de que el hecho constituya, además, otra infracción.

Para la imposición de esta pena, el juez tomará en cuenta, necesariamente, lo dispuesto en el Art. 31 de este Código;

10o.- Todo el que ultrajare de obra a una persona con bofetadas, puntapiés, empujones, foetazos, piedras, palos, o de cualquier otro modo, pero sin ocasionarle enfermedad o lesión, ni imposibilitarle para el trabajo, sin perjuicio de la acción de injuria, en los casos en que hubiere lugar; y,

11o.- Los que monopolizaren o pretendieren el monopolio en las negociaciones sobre artículos de consumo diario en las carnicerías, plazas de mercado u otros lugares, sin perjuicio del comiso de dichos artículos y de las otras penas que impongan las ordenanzas municipales.

Capítulo V

DE LAS CONTRAVENCIONES AMBIENTALES

(Agregado por el Art. 3 de la Ley 99-49, R.O. 2, 25-I-2000)

Art. 607 A.-  (Reformado por el Art. 178 de la Ley 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002).- Será sancionado con prisión de cinco a siete días, y multa de cuarenta y cuatro a ochenta y ocho dólares de los Estados Unidos de Norte América, todo aquel que:

- a) Contamine el aire mediante emanaciones superiores a los límites permitidos de los escapes de los vehículos;
- b) Acumule basura en la vía pública, en terrenos o en los frentes de las casas o edificios;
- c) Haga ruido por falta de silenciador de su vehículo o a través de equipos de amplificación a alto volumen que alteren la tranquilidad ciudadana; o,
- d) Arroje desperdicios o aguas contaminantes, destruya la vegetación de los parques o espacios verdes, en los casos en que tales actos no constituyan delito.

Título II

DISPOSICIONES ESPECIALES RESPECTO DE LAS CONTRAVENCIONES

Capítulo Único

Art. 608.- En todo lo relativo a la punibilidad, responsabilidad o prescripción de las contravenciones, que no estuviese reglamentado de una manera especial, se observarán las disposiciones del Libro I de este Código. No rigen, sin embargo, para las contravenciones, las reglas de los Arts. 82 y 87.

Art. 609.- Los condenados a prisión, de conformidad con las disposiciones de este Libro, sufrirán la pena en las cárceles de sus respectivas parroquias o cantones; pero en caso de faltar éstas, la cumplirán en la cárcel de la capital de provincia.

Art. 610.- A los menores de catorce años y mayores de siete, que se les encontrare jugando, fumando o vagando en las calles, plazas o cualquier otro lugar público, la policía les remitirá inmediatamente al respectivo Tribunal de Menores.

Nota:

Los Tribunales de Menores fueron sustituidos por los Juzgados de la Niñez y Adolescencia (R.O. 737, 3-I-2003).

Art. 611.- Los perjuicios ocasionados por los mayores de siete años y menores de dieciocho, serán pagados por los padres, guardadores, patronos o personas de quienes dependan los contraventores, de conformidad con las disposiciones del Código Civil.

Art. 612.- Cuando una misma acción u omisión constituya dos o más contravenciones, se aplicará la pena mayor.

Art. 613.- La reiteración será circunstancia agravante.

Art. 614.- En caso de reincidencia se aplicará el máximo de la pena señalada para la última contravención cometida.

Art. 615.- Para la graduación de las penas, el juez de policía tomará en cuenta las circunstancias agravantes o atenuantes que acompañen al hecho, de este modo:

Si hubiere una o más agravantes, el máximo;

Si hubiere una o más atenuantes y ninguna agravante, el mínimo.

Art. 616.- En la duración de una pena de policía se contará todo el tiempo que hubiese sido detenido el culpado, por causa de la misma.

Art. 617.- La acción de policía prescribe en treinta días, y la pena en noventa, contados ambos términos desde el día en que se cometió la infracción, o desde la fecha en que la sentencia condenatoria quedó ejecutoriada, respectivamente.

Art. 618.- La pena de comiso especial prescribirá en el plazo señalado para la pena principal; y las condenas civiles, según las reglas del Código Civil.

Art. 619.- En caso de que se hubiera ya iniciado el juzgamiento por una contravención, el tiempo de la prescripción empezará a correr desde la última diligencia judicial.

Art. 620.- La prescripción podrá declararse de oficio, o a petición de parte.

Art. 621.- La policía está obligada a garantizar toda clase de asociaciones civiles o religiosas; pero impedirá y disolverá las que tengan por objeto turbar la tranquilidad pública o perpetrar una infracción; lo que se presume si los individuos que las componen están armados o formando pendencia.

Las autoridades de policía dictarán las medidas oportunas aplicables al caso.

Art. 622.- Siempre que llegare a conocimiento del Intendente u otra de las autoridades de policía que se trate de cometer, o que se está perpetrando un delito o contravención, tomarán las medidas adecuadas y oportunas para impedir la realización del hecho penal, o su continuación, aún valiéndose de la fuerza; sujetándose siempre a las disposiciones correspondientes del Código de Procedimiento Penal.

Art. 623.- Respecto a la detención del indiciado en una contravención, se observarán las prescripciones correspondientes del Código de Procedimiento Penal.

Art. 624.-  (Sustituido por el Art. 9 de la Ley 2006-31, R.O. 231, 17-III-2006).- Queda prohibido el usar o llevar consigo armas de cualquier clase, sin permiso previo otorgado legalmente por la autoridad competente.

En caso de que las autoridades competentes para el juzgamiento de las contravenciones decomisen armas de dudosa procedencia, sin permiso legal vigente, deberán levantar el acta correspondiente, e inmediatamente remitirán el arma requisada a la Dirección de Logística del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y si el arma requisada sirviere como evidencia del delito, será puesta a disposición de la autoridad competente.

Art. 625.- Para transitar libremente en caso de guerra, o cuando el ejecutivo lo exigiere, será indispensable el correspondiente permiso de la autoridad de policía, manifestado en un pasaporte.

Art. 626.- La policía y, en especial, la Oficina de Servicio de Investigación Criminal están obligadas a la investigación y descubrimiento de los robos y más infracciones, lo mismo que a la averiguación del paradero de las cosas sustraídas o perdidas.

Las cosas sustraídas o perdidas que se encontraren en poder de cualquier persona que no las posea con título alguno de dominio, serán aseguradas mediante depósito hasta que reclame su dueño o se subasten conforme a la ley.

Art. 627.- El que se encontrare en cualquier lugar público en estado de enajenación mental será aprehendido por la policía y, previo el reconocimiento de facultativos, será internado en un hospital psiquiátrico o en un establecimiento apropiado.

Art. 628.- La policía está obligada a concurrir con sus agentes a los teatros, circos y, en general, a toda casa, establecimiento o lugar donde deba presentarse un espectáculo público, para la conservación del orden y el cumplimiento de los programas respectivos.

Art. 629.- Sin permiso escrito de la policía no se efectuará ningún espectáculo público, a excepción de aquellos reglamentados por ordenanzas municipales.

Art. 630.- Las penas de policía son independientes de la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por el contraventor.

Art. 631.- Las autoridades de policía deben impedir la entrada a los tribunales de su jurisdicción a las personas que, por no tratarse de su propia defensa, pretendan proceder como tinterillos.

Capítulo Final

Art. 632.-  (Derogado por el Art. final del Código de Procedimiento Penal, R.O. 511, 10-VI-1983).

DISPOSICIONES EN LEYES REFORMATARIAS

LEY No. 2007-85

(R.O. 170-S, 14-IX-2007)

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Competencia.- Tendrán competencia para juzgar los delitos previstos en esta Ley, los jueces y tribunales penales de la jurisdicción donde se cometió la infracción o se aprehendieran los hidrocarburos, sus derivados, gas licuado de petróleo o biocombustibles o mezclas que los contengan, conforme lo determina el Título Primero del Código de Procedimiento Penal.

SEGUNDA.- El Ministerio Público como titular de la acción penal, prevendrá en el conocimiento de las causas, dirigirá y promoverá la investigación de los delitos tipificados y sancionados en los artículos precedentes, para lo cual contará con el apoyo de la Fuerza Pública, especialmente de la Policía Nacional, quienes se someterán a las regulaciones establecidas en el Capítulo Primero del Libro Cuarto del Código de Procedimiento Penal; y, de hallarse fundamento acusará a los presuntos infractores, sujetándose al procedimiento penal vigente y al contemplado en la presente Ley y su Reglamento.

TERCERA.- Los recursos económicos que se generen por la aplicación de las sanciones pecuniarias y multas previstas en esta Ley, ingresarán a una cuenta especial que mantendrá la Dirección Nacional de Hidrocarburos, la misma que estará bajo el control y vigilancia de la Contraloría General del Estado. Dichos recursos serán exclusivamente utilizados para tecnología, monitoreo, control y supervisión establecidos en el artículo innumerado que consta en el artículo 6 de la presente Ley.

CUARTA.- Se concede acción popular para la denuncia de las infracciones establecidas en esta Ley, en cuyo caso se reconocerá al denunciante el 25% de la multa impuesta en firme a los autores de las infracciones. La denuncia acarreará responsabilidades de carácter civil y penal en el caso de que el sujeto de control denunciado obtuviere declaración judicial que la califique de maliciosa o temeraria. El reglamento respectivo definirá los requisitos para el ejercicio de la acción popular, el mismo que será expedido en un plazo máximo de sesenta días, a partir de la vigencia de la presente Ley.

LEY S/N

(R.O. 196-S, 19-V-2010)

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- El proceso administrativo disciplinario que corresponda al mismo hecho que se está investigando en el proceso penal, podrá seguirse de manera independiente sin necesidad de que exista sentencia ejecutoriada en este último.

Segunda.- Ejecución de penas.- Las medidas cautelares de carácter personal y las penas que se impongan a servidoras o servidores militares o policiales, se cumplirán en lugares que garanticen su seguridad; sin perjuicio de la jurisdicción de los jueces de garantías penitenciarias.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Competencia.- A partir de la publicación de esta ley en el Registro Oficial, las y los jueces y tribunales de garantías penales conocerán los procesos penales por delitos militares y policiales iniciados con anterioridad a la vigencia de la presente ley reformativa, de acuerdo con las competencias establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial; y continuarán sustanciándolos de acuerdo con las normas procesales que estuvieron vigentes cuando se iniciaron y a las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, en lo que fueren aplicables. Dichos jueces conocerán, asimismo, los procesos por delitos penales militares y policiales que se inicien luego de la vigencia de la presente ley reformativa, y los tramitarán de conformidad con el Código de Procedimiento Penal.

La Corte Nacional de Justicia, a través de resolución del Pleno, normará la entrega de las causas pendientes a la jurisdicción ordinaria.

Segunda.- Ingreso a la Función Judicial.- Las y los integrantes de los actuales tribunales y juzgados penales militares y policiales, como el personal administrativo en todos los niveles, podrán ingresar a la carrera judicial en la Función Judicial, siempre que cumplan con lo previsto en el literal e) de la disposición transitoria quinta del Código Orgánico de la Función Judicial. En todo caso, no se considerará ningún privilegio para el ingreso a dicha carrera.

Tercera.- Órganos colegiados para el juzgamiento militar y policial.- Inmediatamente después de la promulgación de esta ley, el Consejo de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial, deberá establecer en los procesos de formación inicial y permanente de fiscales, juezas y jueces, programas de capacitación sobre derecho policial, militar y Derecho Internacional Humanitario.

Cuarta.- Del personal.- En el plazo de trescientos sesenta y cinco días (365) contados desde la vigencia de esta ley, la Asamblea Nacional deberá aprobar la ley sobre personal policial y militar que incluya una actualización de los catálogos de faltas o contravenciones disciplinarias, así como la autoridad competente para juzgar y los procedimientos, respetuosos del debido proceso, para sancionar administrativamente.

Quinta.- **Faltas disciplinarias.**- Hasta que la Asamblea Nacional apruebe la ley sobre personal policial y militar que incluya la tipificación y sanción de las faltas y contravenciones disciplinarias, las servidoras y servidores policiales y militares serán juzgados por la comisión de faltas disciplinarias al amparo de las disposiciones actualmente vigentes.

FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DEL CÓDIGO PENAL

- 1.- Codificación del Código Penal (Suplemento del Registro Oficial 147, 22-I-1971) *
- 2.- Fe de erratas (Registro Oficial 165, 17-II-1971)
- 3.- Fe de erratas (Registro Oficial 173, 3-III-1971)
- 4.- Decreto Supremo 1458 (Registro Oficial 323, 4-X-1971)
- 5.- Decreto Supremo 1114 (Registro Oficial 159, 5-X-1972)
- 6.- Decreto Supremo 87 (Registro Oficial 480, 25-I-1974)
- 7.- Decreto Supremo 1273 (Registro Oficial 705, 19-XII-1974)
- 8.- Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Art. 396 (Registro Oficial 337, 16-V-1977)
- 9.- Decreto Supremo 2060 (Registro Oficial 495, 30-XII-1977)
- 10.- Decreto Supremo 2124 (Registro Oficial 508, 18-I-1978)
- 11.- Decreto Supremo 2636 (Registro Oficial 621, 4-VII-1978)
- 12.- Decreto Supremo 2969 (Registro Oficial 714, 20-XI-1978)
- 13.- Decreto Supremo 3194 (Registro Oficial 769, 8-II-1979)
- 14.- Decreto Legislativo s/n (Registro Oficial 36, 1-X-1979)
- 15.- Ley 122 (Suplemento del Registro Oficial 453, 17-III-1983)
- 16.- Código de Procedimiento Penal, Artículo Final (Registro Oficial 511, 10-VI-1983)
- 17.- Ley 167 (Registro Oficial 771, 22-VI-1984)
- 18.- Ley 6 (Suplemento del Registro Oficial 260, 29-VIII-1985)
- 19.- Resolución s/n del Tribunal de Garantías Constitucionales (Registro Oficial 632, 24-II-1987)
- 20.- Resolución s/n del Congreso Nacional (Registro Oficial 677, 4-V-1987)
- 20.- Ley de Control Tributario y Financiero, Art. 82 (Registro Oficial 97, 29-XII-1988)
- 21.- Resolución s/n del Tribunal de Garantías Constitucionales (Registro Oficial 224, 3-VII-1989)
- 22.- Ley 66 (Registro Oficial 395, 14-III-1990)
- 23.- Ley del Régimen Monetario y Banco del Estado, Art. 170 (Suplemento del Registro Oficial 930, 7-V-1992)
- 24.- Ley 04 (Suplemento del Registro Oficial 22, 9-IX-1992)

- 25.- Ley 51 (Registro Oficial 349, 31-XII-1993)
- 26.- Ley 93 (Suplemento del Registro Oficial 764, 22-VIII-1995)
- 27.- Resolución 106-1-97 del Tribunal Constitucional (Suplemento del Registro Oficial 203, 27-XI-1997)
- 28.- Resolución 119-1-97 del Tribunal Constitucional (Suplemento del Registro Oficial 222, 24-XII-1997)
- 29.- Ley 106 (Registro Oficial 365, 21-VII-1998)
- 30.- Fe de erratas (Registro Oficial 373, 31-VII-1998)
- 31.- Ley 99-26 (Registro Oficial 190, 13-V-1999)
- 32.- Ley 99-38 (Registro Oficial 253, 12-VIII-1999)
- 33.- Ley 99-48 (Registro Oficial 347, 27-XII-1999)
- 34.- Ley 99-49 (Registro Oficial 2, 25-I-2000)
- 35.- Ley 2000-20 (Registro Oficial 110, 30-VI-2000)
- 36.- Ley 2000-24 (Suplemento del Registro Oficial 144, 18-VIII-2000)
- 37.- Ley 2001-47 (Registro Oficial 422, 28-IX-2001)
- 38.- Fe de Erratas (Registro Oficial 439, 24-X-2001)
- 39.- Ley 2002-67 (Suplemento del Registro Oficial 557, 17-IV-2002)
- 40.- Ley 2002-75 (Registro Oficial 635, 7-VIII-2002)
- 41.- Ley 2002-91 (Registro Oficial 716, 2-XII-2002)
- 42.- Ley 2002-97 (Suplemento del Registro Oficial 733, 27-XII-2002)
- 43.- Ley 2005-2 (Registro Oficial 45, 23-VI-2005)
- 44.- Fe de erratas (Registro Oficial 96, 5-IX-2005)
- 45.- Ley 2005-21 (Registro Oficial 154, 28-XI-2005)
- 46.- Ley 2006-31 (Registro Oficial 231, 17-III-2006)
- 47.- Ley 2006-63 (Registro Oficial 412, 7-XII-2006)
- 48.- Ley 2006-70 (Suplemento del Registro Oficial 427, 29-XII-2006)
- 49.- Ley 2007-85 (Suplemento del Registro Oficial 170, 14-IX-2007)
- 50.- Ley s/n (Tercer Suplemento del Registro Oficial 242, 29-XII-2007)
- 51.- Ley s/n (Segundo Suplemento del Registro Oficial 393, 31-VII-2008)
- 52.- Ley s/n (Suplemento del Registro Oficial 555, 24-III-2009)
- 53.- Ley s/n (Suplemento del Registro Oficial 578, 27-IV-2009)
- 54.- Ley s/n (Suplemento del Registro Oficial 160, 29-III-2010)

- 55.- Ley s/n (Suplemento del Registro Oficial 196, 19-V-2010)
- 56.- Ley s/n (Suplemento del Registro Oficial 352, 30-XII-2010)
- 57.- Sentencia 029-10-SCN-CC (Segundo Suplemento del Registro Oficial 343, 17-XII-2010)
- 58.- Ley s/n (Registro Oficial 398, 4-III-2011)
- 59.- Sentencia 033-10-SCN-CC (Suplemento del Registro Oficial 407, 18-III-2011)
- 60.- Sentencia 034-10-SCN-CC (Suplemento del Registro Oficial 407, 18-III-2011)
- 61.- Sentencia 035-10-SCN-CC (Suplemento del Registro Oficial 407, 18-III-2011)
- 62.- Sentencia 036-10-SCN-CC (Suplemento del Registro Oficial 407, 18-III-2011)
- 63.- Sentencia 011-12-SCN-CC (Suplemento del Registro Oficial 641-S, 15-II-2012).

* Existen dos ediciones "oficiales" de esta Codificación, con la misma numeración del Registro Oficial: la publicada en separata y la incluida en la Recopilación de Códigos y Leyes, publicada por la Comisión Jurídica en diciembre de 1971. Esta última contiene algunas variantes.

NORMAS REFORMATORIAS E INTERPRETATIVAS AL CÓDIGO PENAL

FE DE ERRATAS AL CÓDIGO PENAL (R.O. 165, 17-II-1971)

LA COMISIÓN JURÍDICA

Considerando:

Que en la codificación del Código Penal publicada en el Suplemento No. 147 del Registro Oficial, correspondiente al 22 de enero del presente año, se han deslizado errores tipográficos y que es menester modificar la redacción de los artículos que estuvieron ya impresos cuando fue derogada la Ley de Patronato de Cárceles,

Resuelve:

Art. 1.- Inclúyanse en la codificación antedicha las siguientes enmiendas como Fe de Erratas:

Pág	Art.	Dice:	Debe decir:
14	57	"Patronatos de Cárceles"	"defiende"
6	21	"se defiende"	"Jueces"
16	66	"de Patronatos de Cárceles y Penitenciarias"	"respectiva"
111	543	"prisión"	"reclusión"

Art. 2.- Con el mismo carácter agréguese también al Art. 575, el siguiente inciso que se ha omitido: "En ambos casos se aplicará lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo anterior".

Art. 3.- Publíquese esta Resolución en el Registro Oficial.

Dada en la Sala de Sesiones de la Comisión Jurídica, en Quito, a 8 de febrero de 1971.

DECRETO REFORMATARIO AL CÓDIGO PENAL

(Decreto Supremo No. 1458, R.O. 323, 4-X-1971)

JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA,
Presidente de la República,

Considerando:

Que la claridad y la precisión son requisitos indispensables en la redacción de las leyes;

Que el texto del numeral 6° del artículo 87 del Código Penal constante en la codificación aparecida en el suplemento del No. 147 del Registro Oficial de 22 de Enero de 1971, adolece de evidente oscuridad, provocando así el entorpecimiento de los trámites de concesión de libertad condicional en las provincias; y,

En uso de las facultades de que se halla investido,

Decreta:

Art. 1.- Sustitúyase el texto del numeral 6° del Art. 87 del Código Penal vigente por el siguiente:

"Que el Instituto de Criminología en la Capital de la República o una comisión integrada por el Ministro Fiscal de la Corte Suprema de Justicia del distrito y el Jefe Provincial de Salud, en las demás localidades del Estado conceda informe favorable a la libertad condicional".

Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 27 de Septiembre de 1971.

DECRETO REFORMATARIO AL CÓDIGO PENAL (Decreto Supremo No. 1114, R.O. 159, 5-X-1972)

Nota:

En la presente edición del Decreto Supremo 1114 sólo se han incluido las normas que tienen relación con el Código Penal.

GENERAL GUILLERMO RODRÍGUEZ LARA,
Presidente de la República,

Considerando:

Que, al promulgar el último Código Penal, la Comisión Jurídica ha omitido incorporar en su texto las disposiciones pertinentes contenidas en el Decreto No. 801, expedido el 20 de abril de 1964 y publicado en el Registro Oficial No. 247, de 14 de mayo del mismo año;

Que, igualmente, no se han insertado en la vigente Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas las disposiciones constantes en el Art. 2° del Decreto indicado en el considerando anterior;

Que es necesario corregir estas omisiones;

En uso de las atribuciones de que se halla investido, a pedido del Ministerio de Defensa Nacional y previo el informe favorable del Consejo de Gobierno,

Decreta:

Art. 1.- Después del Art. 239 del Código Penal, añádanse los siguientes:

Art. ... El que usare indebidamente grados, insignias, uniformes, denominaciones o distintivos militares será reprimido con prisión de seis meses a dos años.

El máximo de la pena se impondrá al Jefe de cualquier Dependencia o Institución que autorizare tal uso a sus subalternos

Art. ... Si el uso indebido de grados, insignias, uniformes, denominaciones o distintivos militares se hiciere con finalidad delictiva o como medio facilitante para la comisión de un delito, al responsable se le impondrá prisión de 3 a 5 años. De haberse cometido el delito en estas circunstancias, al infractor se le aplicará el máximo de la pena del delito más grave de los que hubiere perpetrado.

Art. 3.- Los señores Ministros de Gobierno y Defensa Nacional quedan encargados de la ejecución del presente Decreto, que entrará en vigencia a partir de su promulgación en el Registro Oficial.

Dado, en el Palacio Nacional, en Quito, a 27 de Septiembre de 1972.

DECRETO REFORMATARIO AL CÓDIGO PENAL (Decreto Supremo No. 87, R.O. 480, 25-I-1974)

GENERAL GUILLERMO RODRÍGUEZ LARA,
Presidente de la República,

Considerando:

Que en forma inescrupulosa e irresponsable ciertos productores y comerciantes de artículos de primera necesidad para el consumo humano, mediante actos dolosos, provocan un alza arbitraria de los alimentos;

Que es deber del Gobierno Nacionalista Revolucionario precautelar los intereses de las mayorías del pueblo ecuatoriano sancionando actos contrarios a los más elementales conceptos de dignidad humana; y,

En uso de las atribuciones de las que se halla investido,

Decreta:

Art. 1.- A continuación del Art. 363 del Código Penal, agréguese el siguiente:

"Art. Serán reprimidos con prisión de seis meses a dos años y decomiso de los artículos, los que, sin autorización legal, alzaren o participaren, de cualquier manera, en el alza de los precios de los artículos alimenticios de primera necesidad destinados al consumo humano, ya consista su acción en monopolio, ocultamiento, acaparamiento, especulación, desplazamiento o cualquier otra forma fraudulenta que produzca desaparacimiento, encarecimiento o limitación tanto de la producción como de la comercialización de dichos productos.

Si se tratare de una persona jurídica, la responsabilidad o sanción recaerá en sus representantes legales, administradores o ejecutivos.

En caso de reincidencia se aplicará el doble de la pena y el decomiso de los productos o bienes motivos de la infracción cuya propiedad pasará a la Empresa Nacional de Productos Vitales o la Entidad que la sustituya, tanto para el presente caso como para el contemplado en el inciso primero de este artículo.

Art. 2.- Los Tribunales Especiales de la República, dentro de sus respectivas jurisdicciones, serán competentes para conocer, tramitar conforme a la Ley y sancionar los delitos establecidos en artículo anterior.

Art. 3.- Los Intendentes y Comisarios de Policía y Agentes de la Fuerza Pública, procederán a la inmediata captura de las personas incursoas en la comisión de los delitos que se puntualizan en el artículo primero de este Decreto y, en el término de veinticuatro horas las pondrán a órdenes del Tribunal Especial correspondiente para su juzgamiento.

Art. 4.- Establécese acción popular para denunciar los hechos determinados en el artículo primero de este Decreto.

Art. 5.- De la ejecución del presente Decreto, que entrará en vigencia desde su publicación en el Registro Oficial, encárguese el señor Ministro Secretario de Estado en la Cartera de Gobierno, Justicia y Policía.

Dado, en el Palacio Nacional, en Quito, a 22 de enero de 1974.

DECRETO REFORMATARIO AL CÓDIGO PENAL (Decreto Supremo No. 1273, R.O. 705, 19-XII-1974)

GENERAL GUILLERMO RODRÍGUEZ LARA,
Presidente de la República,

Considerando:

Que para asegurar la tranquilidad pública y amparar la vida de las personas y sus bienes, es indispensable tipificar los delitos que se producen por actos terroristas.

En uso de las atribuciones de que se halla investido,

Decreta:

Las siguientes Reformas al Código Penal.

Art. 1.- El Art. 160 del Código Penal dirá:

"El que con el fin de producir alarma colectiva o cometer delitos contra la seguridad común de las personas o de los bienes, empleando cualquiera clase de medios, instrumentos o recursos; fabricare, suministrare, adquiriere, sustrajere, arrojar, usare, o introducir al país o tuviere en su poder armas, municiones o bombas explosivas, materiales radioactivos, materias explosivas, inflamables, asfixiantes o tóxicas, o sustancias o materiales destinados a su preparación, será reprimido con reclusión menor de tres a seis años y multa de cinco mil a diez mil sucres.

Si, por efecto de los hechos indicados, se produjeran lesiones a personas, se impondrá el máximo de la pena señalada en el inciso anterior; y, si resultare muerta una o más personas, la sanción será de reclusión mayor extraordinaria de doce a diez y seis años y multa de diez mil a veinte mil sucres.

Si los hechos delictivos afectaren exclusivamente a bienes, además de la pena señalada en el primer inciso, el autor será condenado a la indemnización de los daños y perjuicios causados".

Art. 2.- A continuación del Art. 160, póngase el siguiente artículo:

"Los que, individualmente o formando asociaciones, como guerrillas, organizaciones, pandillas, comandos, grupos terroristas, montoneras o alguna otra forma similar, armados o no, pretextando fines patrióticos, sociales, económicos, políticos, religiosos, revolucionarios, reivindicatorios, proselitistas, raciales, localistas, regionales, etc., cometieren delitos contra la seguridad común de las personas o de grupos humanos de cualquiera clase o de sus bienes: ora asaltando, violentando o destruyendo edificios, bancos, almacenes, bodegas, mercados, oficinas, etc.; ora allanando o invadiendo domicilios, habitaciones, colegios, escuelas, institutos, hospitales, clínicas, conventos, instalaciones de la fuerza pública, militares, policiales o paramilitares, etc.; ora sustrayendo o apoderándose de bienes o valores de cualquier naturaleza y cuantía; ora secuestrando personas, vehículos, barcos o aviones para reclamar rescate, presionar y demandar el cambio de leyes o de órdenes y disposiciones legalmente expedidas o exigir a las autoridades competentes poner en libertad a procesados o sentenciados por delitos comunes o políticos, etc.; ora ocupando por la fuerza, mediante amenaza o intimidación, lugares o servicios públicos o privados de cualquiera naturaleza y tipo; ora levantando barricadas, parapetos, trincheras, obstáculos, etc., con el propósito de hacer frente a la fuerza pública en respaldo de sus intenciones, planes, tesis o proclamas; ora atentando, en cualquier forma, en contra de la comunidad, de sus bienes y servicios, serán reprimidos con reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años y multa de veinte mil a cincuenta mil sucres.

Si por los hechos delictivos enumerados se produjeran lesiones a las personas, se impondrá a sus autores el máximo de la pena indicada en el inciso anterior y, si se produjere la muerte de una o más personas, la pena será de reclusión mayor extraordinaria de doce a diez y seis años y multa de cincuenta mil a cien mil sucres.

Si los hechos a los que se refiere el inciso primero de este artículo, afectaren únicamente bienes, además de la sanción impuesta en el mismo, el autor o autores serán condenados al resarcimiento de daños y perjuicios que hubieren causado."

Art. 3.- De la ejecución del presente Decreto que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, encárguese el Ministro de Gobierno y Justicia.

Dado en el Palacio Nacional en Quito, a 9 de diciembre de 1974.

DECRETO REFORMATARIO AL CÓDIGO PENAL (Decreto Supremo No. 1429, R.O. 337, 16-V-1977)

Nota:

En la presente edición de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control sólo se ha incluido el Art. 396 que tiene relación con el Código Penal.

EL CONSEJO SUPREMO DE GOBIERNO,

Considerando:

Que la prestación de los servicios públicos y el desarrollo socio-económico del país requieren que la administración financiera y el control de los recursos del sector público sean eficientes, efectivos y económicos;

Que, al efecto, es preciso ordenar los sistemas gubernamentales de presupuesto, de determinación y recaudación de los recursos financieros, de tesorería, de contabilidad y de control, componentes que, a su vez, deben estar estrechamente coordinados entre sí;

Que a través del sistema nacional de proyectos, se trata de armonizar las funciones y atribuciones de los componentes de dicho sistema, que propende a establecer un conjunto de normas orientadas a perfeccionar la determinación de las prioridades de inversión, la ejecución de estudios de preinversión en estrecha coordinación con el proceso de financiamiento, a fin de asegurar la correcta asignación de los recursos del sector público; con arreglo a los lineamientos establecidos en los planes de corto, mediano y largo plazo;

Que es necesario velar porque la inversión en proyectos de obras públicas esté de acuerdo con los planes y programas y que su ejecución se realice con arreglo a las técnicas apropiadas y mediante el uso adecuado de los recursos públicos, de suerte que llenen a cabalidad las necesidades del servicio público para los que han sido ordenados dichos proyectos;

Que hay que propender a la coordinación de la administración financiera y del control de los recursos de las entidades y organismos del sector público, por medio, básicamente, de la unificación de criterios y normas actualizadas y coherentes;

Que es necesario armonizar las numerosas y dispersas normas hacendarias y presupuestarias, acumuladas y superpuestas desde la Ley Orgánica de Hacienda de 1928, publicada en el Registro Oficial No. 753 de 27 de septiembre del mismo año, y desde la Ley Orgánica de Presupuesto publicada en el Registro Oficial No. 769 de 21 de marzo de 1951, tarea que es indispensable para facilitar el control legal que se produce por comparación entre la norma aplicable y la realidad objetiva;

Que la Ley Orgánica de Hacienda, considerada en su conjunto, ha dejado de ser un instrumento práctico, ágil e idóneo por haber sufrido en el transcurso de los años una paulatina pero continua desadecuación a la realidad de la administración financiera del país, cada vez más voluminosa y compleja, situación que no ha sido superada a pesar de las numerosas e importantes reformas legales que, frecuentemente, no han sido debidamente planificadas, coordinadas ni complementadas;

Que el Decreto Supremo 1065-A, publicado en el Registro Oficial No. 668 de 28 de octubre de 1974, contiene sólo las reformas indispensables relativas al control de los recursos públicos, que hay que incorporar orgánicamente al sistema integral de administración financiera y control;

Que el cuarto considerando de la Ley Orgánica de Hacienda Codificada, publicada en el Registro Oficial No. 855 de 29 de julio de 1975, expresa que la referida codificación debe tener vigencia hasta que se prepare y expida la presente ley;

Que la organización de la administración financiera del Gobierno Nacional, en los términos previstos en la Ley de Hacienda, ha sido sustancialmente modificada por los Decretos 1015, 1081 y 944, publicados en los Registros Oficiales Nos. 953, 961 y 232 de 16 y 29 de diciembre de 1975 y de 14 de diciembre de 1976;

En uso de las atribuciones de que se halla investido, expide la siguiente:

LEY ORGÁNICA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL.

Art. 396.- **Código Penal.**- Los artículos 257, 258 y 259 del Código Penal, sustitúyense por el siguiente:

Art. 257.- Serán reprimidos con reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años los servidores de los organismos y

entidades del sector público y toda persona encargada de un servicio público, que hubiere abusado de dineros públicos o privados, de efectos que lo representen, piezas, títulos, documentos o efectos mobiliarios que estuvieren en su poder en virtud o razón de su cargo; ya consista el abuso en desfalco, malversación, disposición arbitraria o cualquier otra forma semejante. La pena será de ocho a doce años si la infracción se refiere a fondos destinados a la defensa nacional.

Se entenderá por malversación la aplicación de fondos a fines distintos de los previstos en el presupuesto respectivo, cuando este hecho implique, además, abuso en provecho personal o de terceros, con fines extraños al servicio público.

Están comprendidos en esta disposición los servidores que manejen fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o de los bancos estatales y privados. Igualmente están comprendidos los servidores de la Contraloría General y de la Superintendencia de Bancos que hubieren intervenido en fiscalizaciones, auditorías o exámenes especiales anteriores, siempre que los informes emitidos implicaren complicidad o encubrimiento en el delito que se persiga.

Los culpados contra quienes se dictare sentencia condenatoria quedarán, además, perpetuamente incapacitados para el desempeño de todo cargo o función públicos; para este efecto, el juez de primera instancia comunicará, inmediatamente de ejecutoriado, el fallo a la Oficina Nacional de Personal y a la autoridad nominadora del respectivo servidor, e igualmente a la Superintendencia de Bancos si se tratare de un servidor bancario. El Director de la Oficina Nacional de Personal se abstendrá de inscribir los nombramientos o contratos otorgados a favor de tales incapacitados, para lo cual se llevará en la Oficina Nacional de Personal un registro en que consten los nombres de ellos.

La acción penal prescribirá en el doble del tiempo señalado en el artículo 101.

Dada en el Palacio Nacional, en Quito, a 11 de mayo de 1977.

DECRETO REFORMATARIO AL CÓDIGO PENAL (Decreto Supremo No. 2636, R.O. 621, 4-VII-1978)

Nota:

En la presente edición del Decreto Supremo 2636 sólo se han incluido las normas que tienen relación con el Código Penal.

EL CONSEJO SUPREMO DE GOBIERNO,

Considerando:

Que el país está atravesando por un agudizamiento alarmante del problema delictivo, con grave peligro para la seguridad e integridad de las personas y para la paz y tranquilidad de la República;

Que el terrorismo, con sus secuelas de asesinato, plagio y otras formas de delito y de violencia, organizado en la clandestinidad, bajo la inspiración y preparación extranjeras, amenaza destruir los basamentos de la nación ecuatoriana;

Que la monstruosa incidencia del tráfico y consumo ilícito de drogas, está convirtiendo al Ecuador, en un país de producción, elaboración, tránsito y consumo de toda clase de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, situación que atenta contra la vida del pueblo, y especialmente, de su juventud;

Que corresponde al Gobierno de las Fuerzas Armadas y a todas las entidades y organismos del Estado arbitrar las medidas legales conducentes para evitar, perseguir, sancionar y erradicar el delito en cualesquiera de sus formas; y,

En uso de las facultades de que se halla investido,

Decreta:

Las siguientes reformas al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal y a la Ley de Control y Fiscalización del Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.

AL CÓDIGO PENAL
Art. 1.- El Art. 51 dirá:

"Art. 51.- Las penas aplicables a las infracciones son las siguientes:

Penas peculiares del delito:

- 1o.- Reclusión mayor;
- 2o.- Reclusión menor;
- 3o.- Pena acumulativa;
- 4o.- Prisión de treinta y un días a cinco años;
- 5o.- Interdicción de ciertos derechos políticos y civiles;
- 6o.- Sujeción a la vigilancia de la autoridad;
- 7o.- Privación del ejercicio de profesiones, artes u oficios;
- 8o.- Incapacidad temporal o perpetua para el desempeño de todo empleo o cargo público; y,
- 9o.- Las demás determinadas en la Ley;

Penas peculiares de la contravención:

- 1o.- Prisión de uno a treinta días;
- 2o.- Multa de cien a dos mil sucres; y,
- 3o.- Las demás determinadas por la ley.

Penas comunes a todas las infracciones:

- 1o.- Multa; y,
- 2o.- Comiso especial".

Art. 2.- Los Arts. 53, 54 y 55 sustitúyanse por los siguientes:

"Art. 53.- La reclusión mayor se divide en:

- a) Ordinaria de cuatro a ocho años y, de ocho a doce años;
- b) Extraordinaria de doce años un día a dieciséis años; y,
- c) Especial de dieciséis años un día a veinte y cinco años".

"Art. 54.- La reclusión menor, se divide en:

- a) Ordinaria de tres a seis años y de seis a nueve años; y,
- b) Extraordinaria de nueve años un día a doce años."

"Art. 55.- Las penas de reclusiones se cumplirán en las penitenciarías, y las de prisión, en las cárceles del respectivo cantón.

Las mujeres y los contraventores, según el caso, cumplirán las penas en establecimientos penitenciarios o carcelarios especiales o en secciones apropiadas de los establecimientos penitenciarios comunes.

El condenado a pena de reclusión mayor especial no tendrá derecho a rebaja alguna y está obligado a pagar al Estado los gastos de su mantenimiento en los establecimientos penitenciarios. Por esta obligación, que no es extensiva a sus herederos, responderá con todos sus bienes presentes y futuros."

Art. 3.- Como inciso final del Art. 72, póngase el siguiente:

"la reclusión mayor especial no será susceptible de modificación por atenuantes".

Art. 4.- Después del numeral segundo del Art. 80, póngase el siguiente numeral:

"Si el nuevo delitos está reprimido con reclusión mayor extraordinaria de doce años un día a dieciséis años, se condenará al autor a la pena de reclusión mayor especial de dieciséis años un día a veinte y cinco años".

Art. 5.- Sustitúyase el Art. 81 por el siguiente:

"Art. 81.- En caso de concurrencia de varias infracciones se acumularán las penas determinadas para cada una de ellas, por manera que la pena acumulada a aplicarse será el resultado de la suma de las penas correspondientes a cada infracción, sin límite de tiempo. Igual acumulación de penas se aplicará cuando un solo acto constituya varias infracciones o, cuando un individuo cometa a varios delitos a la vez, aunque sean de la misma naturaleza, en contra de dos o más personas, como en el caso de asesinato múltiple.

Cuando haya concurrencia de varias contravenciones, se acumularán todas las penas merecidas por el contraventor.

La pena acumulativa será cumplida en los establecimientos indicados en el Art. 55, según el caso."

Art. 6.- Como inciso final del Art. 87, póngase el siguiente:

"Si la infracción está reprimida con reclusión mayor especial, el condenado no podrá acogerse a la libertad condicional ni a los beneficios de la ley de gracia".

Art. 7.- Los incisos cuarto y sexto del Art. 101 dirán:

"En los delitos de acción pública, de no haber enjuiciamiento, la acción para perseguirlos prescribirá en diez años, en tratándose de infracciones reprimidas con reclusión, a excepción de las infracciones castigadas con reclusión mayor especial, cuyas acciones prescribirán en dieciséis años; y, en cinco años en tratándose de infracciones reprimidas con prisión. El tiempo se contará a partir de la fecha en que la infracción fue perpetrada".

"Si el indiciado se presentare voluntariamente a la justicia, en el plazo máximo de seis meses posteriores al auto inicial, los respectivos plazos se reducirán a diez a ocho años, de dieciséis a catorce años; y de cinco a cuatro años, contados desde la fecha del auto cabeza de proceso. No surtirá efecto esta regla en los casos de reincidencia".

Art. 8.- En el Art. 115, en vez de las palabras: "extraordinaria de doce a dieciséis años", póngaselas siguientes: "especial de dieciséis años un día a veinte y cinco años"; en vez de "diez años" póngase "dieciséis años"; y en vez de "mayor de ocho a doce años", póngase "mayor extraordinaria de doce años un día a dieciséis años".

Art. 9.- En el inciso primero del Art. 126, en vez de las palabras "mayor extraordinaria de doce a dieciséis años", póngase "mayor especial de veinte y cinco años".

Art. 10.- Al Art. 147 agréguese los siguientes incisos:

"Si en la ejecución de dichas actividades, se sustrajere dinero o pertenencias de personas naturales o instituciones públicas o privadas, la pena será de reclusión mayor especial, de dieciséis años un día a veinte y cinco años y multa de diez mil a cincuenta mil sucres. Si en estos hechos resultare muerta alguna persona, la pena será de veinte y cinco años de reclusión mayor especial."

"Si con las mismas finalidades, se plagiare a una o más personas para obtener rescate o uno cualquiera de los fines propuestos, la pena será de reclusión mayor extraordinaria de doce años un día a dieciséis años y multa de diez mil a cincuenta mil sucres, aún cuando ni el rescate ni las condiciones exigidas, hayan sido satisfechas. Si la víctima fuere sometida a tormentos o resultare muerta, la pena será de reclusión mayor especial de veinte y cinco años y multa de veinte mil a cien mil sucres."

Art. 11.- En el inciso segundo del Art. 160 establecido por el Decreto No. 1273 de 9 de diciembre de 1974, publicado en el Registro Oficial No. 705 de 19 del mismo mes y año, en vez de las palabras "mayor extraordinaria de doce a dieciséis años", póngase "mayor especial de dieciséis años un día a veinte y cinco años" y, en vez de "diez mil a veinte mil sucres", póngase "veinte mil a cincuenta mil sucres".

Art. 12.- En el inciso segundo del Art. 2º del Decreto No 1273, mencionado en el artículo anterior, en vez de las palabras "mayor extraordinaria de doce a dieciséis años", póngase "mayor especial de dieciséis años un día a veinte y cinco años".

Art. 13.- Al final del inciso segundo del Art. 161, en vez de las palabras "mayor extraordinaria de doce a dieciséis años y multa de cinco mil a diez mil sucres", póngase "mayor especial de dieciséis años un día a veinte y cinco años y multa de veinte mil a cincuenta mil sucres".

Art. 14.- El inciso primero y los numerales 1º, 2º, 3º y 8º del Art. 189 dirán:

"Salvo lo establecido por el Art. 147, el plagio será reprimido con reclusión mayor extraordinaria de doce años un día a dieciséis años, o en su caso, con las penas que se indican en los numerales siguientes:

1º- Con prisión de uno a dos años, si la víctima es devuelta a su libertad espontáneamente por el plagiario, antes de iniciarse procedimiento judicial, sin haber sufrido maltratos, ni realizándose ninguno de los actos determinados en el artículo anterior.

2º- Con prisión de dos a cuatro años, si la devolución de la libertad, con las condiciones del numeral que precede, se ha

realizado después de iniciado el procedimiento, no estando detenido o preso el plagiario.

3°- Con prisión de tres a cinco años si la liberación se realiza en los términos del numeral segundo de este artículo, estando detenido o preso el plagiario.

8°- Con reclusión especial de veinte y cinco años, si se hubiere producido la muerte de la víctima durante el plagio, o por consecuencia de éste".

Art. 15.- Al Art. 224 añádase el siguiente inciso:

"Si el acto causare la muerte del Presidente de la República, o de quien haga sus veces, el culpable será reprimido con la pena de reclusión mayor especial de veinte y cinco años".

Art. 16.- En el inciso primero del Art. 257 establecido por el Decreto Supremo No. 1429, publicado en el Registro Oficial No. 337 de 16 mayo de 1977, suprimase la palabra "malversación"; y, en vez de las palabras "mayor ordinaria de cuatro a ocho años", póngase: " mayor extraordinaria de doce años un día a dieciséis años"; y, en vez de las palabras " de ocho a doce años", póngase: dieciséis años un día a veinte y cinco años de reclusión mayor especial".

Suprimase el inciso segundo de dicho artículo.

Art. 17.- En los Arts. 231, 232, 234, 316 y 410, reemplácense las palabras "ocho días a un mes", por: "treinta y un días a dos meses".

Art. 18.- En los Arts. 157, 158, 164, 187, 393, 406, 416, 417, 419, 433, 450, 452, 514, y 552, sustitúyanse las palabras "reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años" por: "reclusión mayor especial de dieciséis años un día a veinte y cinco años".

Art. 19.- El Art. 513 dirá:

"Art. 513.- El delito de violación será reprimido con reclusión mayor especial de dieciséis años un día a veinte y cinco años, en el caso primero del artículo anterior y, con reclusión mayor extraordinaria de doce años un día a dieciséis años en los casos segundo y tercero del mismo artículo.

Si para su perpetración participaren dos o más personas, confabuladas o no, aún cuando alguna de ellas no tuviere acceso carnal con la víctima, serán sancionadas con las mismas penas señaladas en el inciso anterior, para cada caso".

Art. 20.- Suprimanse los Arts. 518, 519, y 520.

Art. 21.- En los artículos donde consten las palabras: "un mes", "quince días" y "ocho días" reemplácense con: "treinta y un días".

Art. 22.- En los artículos donde se establece la pena de multa, quintuplíquense los montos mínimos y máximos de dicha pena a excepción de los casos contenidos en los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 26, y 27 de este Decreto.

Art. 23.- En el inciso primero del Art. 604, en vez de las palabras "quince a treinta sucres", póngase: "cien a quinientos sucres".

Art. 24.- En el Art. 605 sustitúyanse las palabras "treinta y cinco a sesenta sucres y prisión de un día" por las siguientes: "quinientos a mil sucres y prisión de uno a cinco días".

Art. 25.- En el Art. 606 en lugar de las palabras "sesenta y uno a ciento veinte sucres y con prisión de dos a cuatro días" póngase: "mil a mil quinientos sucres y prisión de seis a quince días".

Art. 26.- En el Art. 607 sustitúyanse las palabras: "ciento veinte y uno a doscientos cuarenta sucres y prisión de cuatro a siete días" por las siguientes: "mil quinientos a dos mil sucres y prisión de dieciséis a treinta días".

Art. 27.- Suprimase el Art. 612.

Art. 28.- En el Art. 617, en vez de las palabras "treinta días", póngase "noventa días" y en vez de las palabras "noventa", póngase "ciento ochenta días".

Dado, en el Palacio Nacional, en Quito, a 26 de junio de 1978.

DECRETO REFORMATARIO AL CÓDIGO PENAL (Decreto Supremo No. 2969, R.O. 714, 20-XI-1978)

EL CONSEJO SUPREMO DE GOBIERNO,

Considerando:

Que en el país vienen produciéndose continuas invasiones de tierras, tanto en la zona urbana como en la rural, que atentan contra la propiedad privada garantizada por la Constitución Política y causan grave perjuicio a la economía nacional;

Que estas invasiones son fomentadas por quienes asumen artificiosamente la calidad de Dirigentes de falsas cooperativas, para enriquecerse ilícitamente;

Que mediante estos procedimientos muchas personas se están dedicando a negociaciones fraudulentas sobre las tierras invadidas o supuestos derechos adquiridos en ellas;

Que para proteger a quienes están siendo víctimas, en número cada vez más creciente, de estas formas de explotación ilícita, y garantizar el orden y el desarrollo del país, es necesario tipificar nuevas figuras delictivas generadas por dichas invasiones;

En uso de las facultades de que se halla investido;

Decreta:

Art. 1.- En el Capítulo V del Código Penal, a continuación del Art. 575, agréguese los siguientes artículos:

"Art. ... Serán reprimidos con prisión de dos a cinco años los que con el propósito de sacar provecho personal y a título de dirigentes, organicen pseudo-cooperativas, e invadan tierras tanto en la zona urbana como en la rural, atentando de esta manera el derecho de propiedad privada".

"Art. ... Quien alegando la calidad de integrante de una pseudo-cooperativa, invada tierras ubicadas en la zona rural o en la urbana y negocie sobre aquellas o sobre supuestos derechos adquiridos en dichas tierras, será reprimido con prisión de uno a tres años".

Art. 2.- De la ejecución del presente Decreto que entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial, encárguese el señor Ministro, Secretario de Estado, en la Cartera de Gobierno y Justicia.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 6 de Noviembre de 1978.

EL CONSEJO SUPREMO DE GOBIERNO

Considerando:

Que el proyecto de Código Penal elaborado por la Comisión de Legislación, se encuentra en estudio para su aprobación;

Que hasta que se expida el nuevo Código Penal, es necesario adoptar las medidas legislativas para hacer efectivas las disposiciones de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución número 2106 A (XX), de 21 de Diciembre de 1965;

Que el Ecuador se adhirió a la mencionada Convención por Decreto número 1037 de 15 de Septiembre de 1966;

Visto el informe favorable de la Comisión de Legislación; y,

En uso de las atribuciones de que se halla investido,

Decreta:

Las siguientes reformas al Código Penal

DECRETO REFORMATARIO AL CÓDIGO PENAL
(Decreto Supremo No. 3194, R.O. 769, 8-II-1979)

Art. 1.- El Título II del Libro II del Código Penal, dirá: "De los Delitos contra las Garantías Constitucionales y la Igualdad Racial".

Art. 2.- Después del Capítulo VIII del Título II del Código Penal, agréguese un capítulo que dirá "De los Delitos relativos a la Discriminación Racial", integrado por los siguientes artículos:

Art. ... Será sancionado con prisión de tres meses a tres años:

- 1) El que, por cualquier medio, difundiere ideas basadas en la superioridad o en el odio racial;
- 2) El que incitare, en cualquier forma, a la discriminación racial;
- 3) El que realizare actos de violencia o incitare a cometerlos contra cualquier raza, persona o grupo de personas de cualquier color u origen étnico; y ,
- 4) El que financiare, asistiere o ayudare cualquier clase de actividades racistas.

Si los delitos puntualizados en este artículo fueren ordenados o ejecutados por funcionarios o empleados públicos, la pena será de prisión de uno a cinco años.

Art. ... Si de los actos de violencia a que se refiere el numeral 3 del artículo precedente, resultare herida alguna persona, los autores serán sancionados con prisión de dos a cinco años. Si dichos actos de violencia produjeron la muerte de una persona, sus autores serán sancionados con reclusión de 12 a 16 años.

Art. ... Declárese ilegales, y en consecuencia prohibidas en la República, tanto las organizaciones como todas las actividades de propaganda y de difusión que promuevan la discriminación racial o inciten a ella. Por consiguiente, quien participe en tales organizaciones o en dichas actividades será sancionado con prisión de dos meses a dos años.

Art. ... Queda prohibido a las autoridades y a las instituciones públicas nacionales, regionales o locales promover o incitar la discriminación racial. De la violación de esta prohibición serán responsables las mencionadas autoridades, los representantes legales o los directivos de dichas instituciones, quienes serán sancionados con prisión de seis meses a tres años y pérdida de los derechos políticos por igual tiempo al de la condena.

Art. ... A los funcionarios o empleados públicos que cometieren cualesquiera de los delitos de discriminación racial tipificados en este Decreto, se les aplicará las normas especiales previstas en la Constitución Política para el caso de violación de las garantías en ella declaradas.

Nota:

Por Disposición Derogatoria de la Constitución de la República del Ecuador (R.O. 449, 20-X-2008), se abroga la Constitución Política de la República del Ecuador (R.O. 1, 11-VIII-1998), y toda norma que se oponga al nuevo marco constitucional.

Art. 3.- Al redactarse el nuevo Código Penal se procederá a incorporar en su texto, las disposiciones del presente Decreto, con las reformas que fuere necesario introducir.

Art. 4.- El presente Decreto regirá desde su promulgación en el Registro Oficial y se encargarán de su ejecución los señores Ministros de Estado en las Carteras de Gobierno y Justicia y e Relaciones Exteriores.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 29 de Enero de 1979.

DECRETO REFORMATARIO AL CÓDIGO PENAL (Decreto Legislativo s/n, R.O. 36, 1-X-1979)

LA CÁMARA NACIONAL DE REPRESENTANTES

Considerando:

Que los Decretos Supremos Nos. 2636 y 1273, publicados en los Registros Oficiales Nos. 621 y 705, de 4 de julio de 1978 y de 19 de diciembre de 1974, respectivamente, incorporan disposiciones de orden penal consideradas inconvenientes; y,

Que corresponde a la H. Cámara Nacional de Representantes corregir los excesos de la actual legislación penal, poniéndola de acuerdo con la realidad ecuatoriana y con el progreso alcanzado por las ciencias penales.

Decreta:

Art. 1.- Deróganse los Arts. 1º al 19 inclusive y 21 al 28 inclusive del Decreto Supremo No. 2636, de 26 de junio de 1978, publicado en el Registro Oficial No. 621, de 4 de julio del mismo año, y restablécense los Arts. 51, 53, 54, 55, 72, 80, 81, 87, 101, 115, 126, 147, 157, 158, 161, 164, 187, 189, 224, 231, 232, 234, 316, 393, 406, 410, 416, 417, 419, 433, 450, 452, 513, 514, 552, 604, 605, 606, 607, 612, y 617 del Código Penal, los que conservarán el texto que tenían antes de ser reformados por el mencionado Decreto Supremo No. 2636.

Art. 2.- El inciso primero del Art. 160 del Código Penal, establecido mediante Decreto Supremo No. 1273, de 9 de diciembre de 1974, publicado en el Registro Oficial No. 705, de 19 de los mismos mes y año, sustitúyese por el siguiente:

"El que con el fin de cometer delitos contra la seguridad común de las personas o de los bienes, fabricare, suministrare, adquiriere, sustrajere, arrojar, usare, o introducir al país armas, municiones o bombas explosivas, materias explosivas, asfixiantes o tóxicas, o sustancias o materiales destinados a su preparación, será reprimido con reclusión menor de tres a seis años y multa de cinco mil a diez mil sucres".

Art. 3.- En el inciso primero del Art. 257 del Código Penal establecido mediante Decreto Supremo No. 1429, publicado en el Registro Oficial No. 337, de 16 de mayo de 1977, restablécense las penas de reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años y de ocho a doce años.

Art. 4.- En los artículos del Código Penal donde se establece la pena de multa, restablécese el texto que regía antes del ya citado Decreto Supremo No. 2636.

Dado, en la Sala de Sesiones de la H. Cámara Nacional de Representantes, en Quito, a los veinte y dos días del mes de Agosto de mil novecientos setenta y nueve

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL (Ley No. 122, R.O. 453-S, 17-III-1983)

Nota:

En la presente edición de la Ley 122, sólo se han incluido las normas que tienen relación con el Código Penal.

CÁMARA NACIONAL DE REPRESENTANTES

EL PLENARIO DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS

Considerando:

Que la crisis económica actual exige un mayor control del crecimiento de los gastos corrientes del sector público, a fin de reducir los déficits presupuestarios;

Que con igual propósito es imprescindible aumentar los ingresos fiscales en base al aporte de todos los organismos y sectores del país;

Que es necesario corregir el anárquico y discriminatorio sistema de remuneraciones que se ha establecido en el sector público mediante leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y disposiciones administrativas;

Que la situación actual exige reformas en ciertos cuerpos legales, a fin de dotar de instrumentos adecuados de política económica y control a varios organismos del Estado, armonizándolos además con las disposiciones constitucionales; y,

En uso de las atribuciones que le concede el Art. 66 (136) de la Constitución Política, expide la siguiente:

LEY DE REGULACIÓN ECONÓMICA Y CONTROL DEL GASTO PÚBLICO

Art. 37.- Al Art. 575 del Código Penal añádase el siguiente inciso:

"Los que fraudulentamente presenten y suscriban falsa declaración o documentación encaminada a obtener beneficios cambiarios o monetarios ilícitos, con la sobrefacturación o subfacturación en el comercio exterior, serán reprimidos con prisión de uno a cinco años, sin perjuicio de las sanciones establecidas en otras disposiciones legales".

Dado en Quito, en la Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas, a los catorce días del mes de marzo de mil novecientos ochenta y tres.

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL (Ley No. 134, R.O. 511, 10-VI-1983)

Nota:

En la presente edición del Código de Procedimiento Penal sólo se ha incluido la norma que tiene relación con el Código Penal.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

EL PLENARIO DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS

En ejercicio de las facultades que le confiere el Art. 66 (134) de la Constitución,

EXPIDE EL SIGUIENTE CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

ARTÍCULO FINAL.- Suprimanse los Arts. 503, 504 y 632 del Código Penal. Deróganse, todas las disposiciones generales y especiales que se opongan a este Código y de manera expresa el Código de Procedimiento Penal, publicado en el Suplemento del No. 200 del Registro Oficial, el 12 de abril de 1971 y todas sus reformas posteriores. Este Código entrará en vigencia desde su promulgación.

Dado en Quito, en la sala de sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas de la H. Cámara Nacional de Representantes a los once días del mes de mayo de mil novecientos ochenta y tres.

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL (Ley No. 167, R.O. 771, 22-VI-1984)

CONGRESO NACIONAL

EL PLENARIO DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS,

Considerando:

Que la Constitución Política de la República en el numeral 3 del Art. 19 (66, num. 18) garantiza el derecho al honor y a la buena fama de las personas;

Que la divulgación hecha en los medios de comunicación social u otros de carácter publico, de los nombres de los deudores, con la finalidad de alcanzar el pago de los créditos, constituye una violación de la citada garantía y una forma de difamación, por estar reñida con los procedimientos establecidos en la Ley;

Que esta figura delictiva no se halla tipificada en el Código Penal, por lo que es necesario establecerla con el objeto de que sea debidamente sancionada; y,

En uso de sus atribuciones, expide la siguiente,

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL

Art. 1.- A continuación del Art. 499, agréguese uno que dirá:

"Art. ... Constituye difamación la divulgación, por cualquier medio de comunicación social u otro de carácter publico, excepto la autorizada por la Ley, de los nombres y apellidos de los deudores ya sea para requerirles el pago o ya empleando cualquier forma que indique que la persona nombrada tiene aquella calidad. Los responsables serán sancionados con la pena de prisión de seis meses a dos años".

Art. 2.- Esta Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

Dada, en Quito, en la Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas, a los seis días del mes de junio de mil novecientos ochenta y cuatro.

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL (Ley No. 6, R.O. 260-S, 29-VIII-1985)

Nota:

En la presente edición de la Ley 6 sólo se han incluido las normas que tienen relación con el Código Penal.

EL CONGRESO NACIONAL

Que es necesario señalar de manera precisa las conductas delictivas que pueden dar lugar el enriquecimiento indebido de las personas que han sido elegidas por votación popular, representantes o delegados del Presidente de la República y de otros servidores públicos, así como de los funcionarios que presten sus servicios en las instituciones y empresas autónomas y semiautónomas del sector público y las empresas de economía mixta; los directores, gerentes y administradores de los bancos y demás instituciones financieras privadas; los funcionarios y empleados que manejen fondos de los Bancos Central, del Sistema de Crédito y Fomento y Comerciales y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social;

Que de igual forma es indispensable que la Ley establezca las sanciones correspondientes para tales conductas delictivas;

Que en la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control se debe incorporar dentro de sus normas, en forma precisa, el control del patrimonio de las personas anteriormente señaladas;

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política, expide las siguientes:

REFORMAS AL CÓDIGO PENAL Y A LA LEY ORGÁNICA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL

Art. 1.- Después del Art. 257 del Código Penal agréguese los artículos siguientes:

"Art. ... Las personas elegidas por votación popular, los representantes o delegados del Presidente de la República y de otros funcionarios fiscales o municipales en organismos del Estado, autónomos o semiautónomos; los funcionarios, empleados o servidores públicos que de cualquier forma utilizaren en beneficio propio o de terceras personas cuando éste signifique lucro o incremento patrimonial, trabajadores remunerados por el Estado o por las entidades del Sector Público o bienes del Sector Público, serán reprimidos con la pena de uno a cinco años de prisión y multa de diez mil a cincuenta mil sucres".

"Art. ... Con la misma pena serán sancionadas las personas señaladas en el Art. anterior, que se hubieren aprovechado económicamente en beneficio propio o de terceras personas, de estudios, proyectos, informes, resoluciones y más documentos, calificados de secretos, reservados o de circulación restringida, que estén o hubiesen estado en su conocimiento o bajo su dependencia en razón o con ocasión del cargo que ejercen o hubiesen ejercido".

"Art. ... La misma pena señalada en los artículos anteriores se impondrá a las personas elegidas por votación popular, a los representantes o delegados y a los funcionarios, empleados o servidores públicos que aprovechándose de la representación popular o del cargo que ejercen se favorezcan o hayan favorecido a personas naturales o jurídicas para que, en contra de expresas disposiciones legales o reglamentarias, les hubiesen concedido contratos o permitido la realización de negocios con el Estado o con cualquier otro organismo del sector público.

Quedan comprendidos en la misma disposición anterior y sujetos a igual pena los directores, vocales o miembros de los organismos administradores del Estado o el Sector Público en general, que, con su voto, hubiesen cooperado a la comisión del delito al que se refiere el inciso precedente".

Art. 2.- Entre los capítulos VIII y IX, del Título III del Libro Segundo del Código Penal, agréguese el Capítulo siguiente:

CAPÍTULO DEL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.

"Art. ... Constituye enriquecimiento ilícito el incremento injustificado del patrimonio de una persona producido con ocasión o como consecuencia del desempeño de un cargo o función pública, generado por actos no permitidos por las leyes y que, en consecuencia no sea el resultado de ingresos legalmente percibidos".

"Art. ... El enriquecimiento ilícito se sancionará con la pena de uno a cinco años de prisión y la restitución del duplo del monto del enriquecimiento ilícito, siempre que no constituya otro delito".

"Art. ... Son aplicables los dos artículos innumerados anteriores, a quienes como funcionarios o empleados, manejen fondos de los Bancos Central, del Sistema de Crédito de Fomento y Comerciales y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social".

Dado, en Quito en la sala de sesiones del Congreso Nacional, a los diecinueve días del mes de agosto de mil novecientos ochenta y cinco.

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL (Ley No. 006, R.O. 97, 29-XII-1988)

Nota:

En la presente edición de la Ley de Control Tributario y Financiero sólo se ha incluido la norma que tiene relación con el Código Penal.

CONGRESO NACIONAL

EL PLENARIO DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS

Considerando:

Que la crítica situación por la que atraviesa la economía ecuatoriana requiere la reforma de ciertos cuerpos legales, con el fin de permitir a la política económica financiera contar con instrumentos lo suficientemente ágiles y flexibles, a fin de garantizar la solvencia y liquidez de la economía del país;

Que dado el grado de modernización y tecnificación del sistema financiero ecuatoriano, es imprescindible dotar a la Superintendencia de Bancos de un marco legal que no solo amplíe, sino profundice su campo de acción, con la finalidad de consolidar su función de ente Rector del sistema, y así garantizar el sano funcionamiento y la necesaria solidez, del sector financiero;

Que es necesario orientar el crédito del Banco Central hacia sectores que utilizan mano de obra en forma intensiva y que contribuyen a satisfacer las necesidades fundamentales de los grupos de población de menores ingresos, concediendo también al Instituto Emisor facultades para otorgar líneas de crédito de mediano y largo plazo;

Que la economía ecuatoriana afronta una difícil situación fiscal, que se evidencia en la baja participación de los ingresos tributarios dentro del total de ingresos corrientes de la Nación, lo cual amerita una urgente reestructuración de su sistema impositivo, con el fin de otorgarle dinamismo dentro de criterios de equidad, simplicidad, neutralidad y eficiencia económica;

Que se hace necesario ampliar la base tributaria mediante el establecimiento de un sistema coherente de retenciones en la fuente y la adopción de medidas que produzcan una real simplificación de los trámites tributarios; y,

Que los municipios del país requieren de fuentes propias de financiamiento que les permita una más eficiente programación de sus inversiones en beneficio del desarrollo de sus comunidades.

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, expide la siguiente,

LEY DE CONTROL TRIBUTARIO Y FINANCIERO

Título XI

OTRAS REFORMAS Y DISPOSICIONES GENERALES

Art. 82.- En el Capítulo V, Título X del Código Penal, a continuación del Art. 575, añádase el siguiente artículo:

"Los representantes legales de los agentes de percepción y retención de impuestos que reinciden en no depositar los valores percibidos y recaudados dentro de los plazos previstos en la Ley y Reglamentos respectivos, serán reprimidos con prisión de seis meses a dos años, sin perjuicio de las sanciones pecuniarias que correspondan y de la restitución de los valores indebidamente retenidos".

Dada en Quito, en la Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas a los veinte y dos días del mes de

diciembre de mil novecientos ochenta y ocho.

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL (Ley No. 66, R.O. 395, 14-III-1990)

CONGRESO NACIONAL

EL PLENARIO DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS

Considerando:

Que el numeral 1 del artículo 607 del Código Penal establece como contravención de cuarta clase al hurto y el robo, cuando el valor de las cosas sustraídas no pase de cien sucres;

Que las condiciones económicas del país han variado sustancialmente; y,

Que en los Juzgados de lo Penal y los Tribunales Superiores se acumulan causas de mínima cuantía por delitos contra la propiedad.

En ejercicio de sus facultades constitucionales expide la siguiente

LEY REFORMATORIA DEL CÓDIGO PENAL

Art. 1.- En el numeral 1 del artículo 607 sustitúyanse las palabras "cien sucres" por "un salario mínimo vital general".

Art. 2.- La disposición de la presente Ley, que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, prevalecerá sobre las que se le opongan.

Dada en Quito en la Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas, a los cinco días del mes de marzo de mil novecientos noventa.

DECRETO LEY REFORMATARIO AL CÓDIGO PENAL (Decreto-Ley No. 02, R.O. 930-S, 7-V-1992)

Nota:

En la presente edición de la Ley del Régimen Monetario y Banco del Estado sólo se ha incluido el Art. 170 que tiene relación con el Código Penal.

CONGRESO NACIONAL

EL PLENARIO DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS

Considerando:

Que la política monetaria, financiera, crediticia y cambiaria, debe contribuir al desarrollo de la economía del país y velar por la estabilidad de la moneda nacional y la solvencia financiera externa;

Que es indispensable establecer los mecanismos que permitan una coordinación práctica y efectiva entre la política monetaria, financiera, crediticia y cambiaria y la política fiscal y con las demás actividades del sector público;

Que la política monetaria, financiera, crediticia y cambiaria debe ser definida y ejecutada por la Junta Monetaria y el Banco Central como organismos autónomos y eminentemente técnicos;

Que el Banco Central debe cumplir las funciones compatibles con sus objetivos propios;

Que es indispensable la creación del Banco del Estado como depositario oficial y como mecanismo para canalizar los recursos públicos para el financiamiento de los proyectos prioritarios de desarrollo; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, expide la siguiente

LEY DE RÉGIMEN MONETARIO Y BANCO DEL ESTADO

DEROGATORIAS Y REFORMAS

Art. 170.- El inciso 5° del Artículo 575 del Código Penal dirá: "Quienes dolosamente realizaren actos con los cuales obtuvieren beneficios cambiarios o monetarios indebidos, ya sea a través de declaraciones falsas ya sea de otra forma, serán penados con prisión de tres meses a cuatro años y multa no menor al 50% ni mayor al 200% de los valores indebidamente obtenidos".

Palacio Nacional, en Quito, a siete de mayo de mil novecientos noventa y dos.

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL (Ley No. 04, R.O. 22-S, 9-IX-1992)

CONGRESO NACIONAL

Considerando:

Que uno de los más graves problemas en la administración de justicia en el campo penal es el retardo en la resolución de las causas, que hace que el índice de las personas detenidas que no tienen sentencia llegue alrededor del setenta por ciento;

Que esto causa tremendo hacinamiento en los centros de rehabilitación social, con todas las dañosas consecuencias que trae consigo;

Que lo mencionado constituye gran atentado contra los derechos de las personas; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, expide la siguiente:

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL

Art. 1.- En el Capítulo III del Título IV del Libro Primero del Código Penal común del Ecuador, a continuación del artículo 114, añádase los siguientes artículos:

"Art. ... Las personas que hubieren permanecido detenidas sin haber recibido auto de sobreseimiento o de apertura al plenario por un tiempo igual o mayor a la tercera parte del establecido por el Código Penal como pena máxima para el delito por el cual estuvieren encausadas, serán puestas inmediatamente en libertad por el juez que conozca el proceso.

De igual modo las personas que hubieren permanecido detenidas sin haber recibido sentencia, por un tiempo igual o mayor a la mitad del establecido por el Código Penal como pena máxima por el delito por el cual estuvieren encausadas, serán puestas inmediatamente en libertad por el tribunal penal que conozca el proceso.

Se excluye de estas disposiciones a los que estuvieren encausados, por delitos sancionados por la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas."

"Art. ... En uno u otro caso, el director del centro de rehabilitación social en que se encuentre el detenido, comunicará al día siguiente de aquél en que se cumplan los plazos señalados en el artículo anterior, al juez o tribunal de la causa, dicha circunstancia, para que ordene la inmediata libertad del detenido.

En caso de que no recibiera la orden de libertad emitida por el juez o tribunal dentro de las veinte y cuatro horas siguientes al aviso dado a éstos, el director del centro de rehabilitación pondrá en libertad al detenido de inmediato, lo que comunicará por escrito al juez o tribunal penal y al Presidente de la Corte Superior del distrito."

Art. 2.- La Corte Suprema de Justicia de conformidad con las disposiciones presupuestarias, dentro del plazo de seis meses, a contarse desde la vigencia de esta Ley, basándose en la estadística y recursos de que dispone, creará, en los distritos judiciales en donde fuere necesario, tanto juzgados y tribunales de lo penal, como se requiera para que cada una de aquellas dependencias tenga que despachar cuando más cuatrocientas causas anuales.

Art. 3.- Los jueces y miembros de los tribunales de lo penal que no despachen las causas a su cargo dentro de los plazos

establecidos en los artículos 231, 251, 260, 271 y 324 del Código de Procedimiento Penal, serán inmediatamente sancionados por el Presidente de la Corte Superior de Justicia respectivamente con multa igual al cincuenta por ciento del valor del salario mínimo para los trabajadores en general en cada una de las tres primeras veces en que incurran en tal retardo y con la destitución del cargo en la siguiente vez, quedando inhabilitado para reintegrarse por un lapso de cinco años.

Estas sanciones serán impuestas en el mismo día en que el Presidente de la Corte Superior conozca del retardo, bajo su responsabilidad personal y pecuniaria.

Art. 4.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito, en la Sala de Sesiones del Congreso Nacional, a los veintiséis días del mes de agosto de mil novecientos noventa y dos.

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL (Ley No. 51, R.O. 349, 31-XII-1993)

Nota:

En la presente edición de la Ley 51 sólo se han incluido las normas que tienen relación con el Código Penal.

CONGRESO NACIONAL.

Considerando:

Que con la expedición de la Ley No. 56 de Régimen Tributario Interno, promulgada en el Registro Oficial No. 341 del 22 de diciembre de 1989, se inició un importante proceso de reforma tributaria que requiere ser profundizado y revisado para cumplir con su objetivo principal consistente en hacer de la recaudación tributaria un eficiente instrumento de desarrollo, la simplificación de los procedimientos y la reducción de los costos de recaudación;

Que la caída de los precios de exportación del petróleo ha ocasionado una eventual reducción de los ingresos fiscales, haciendo necesaria la adopción de mecanismos compensatorios con el objeto de preservar la estabilidad macro-económica;

Que es preciso dotar a la Administración Tributaria Fiscal de una mayor autonomía y descentralización que le permitan cumplir en forma más eficiente sus fines específicos, cumpliendo así con los objetivos de la Reforma Tributaria iniciada con la Ley No. 56;

Que es conveniente precisar de manera más clara y equitativa el alcance de ciertas instituciones contempladas en el Código Tributario; y,

En ejercicio de sus atribuciones que le otorga el artículo 66 (134) de la Constitución Política de la República, expide la siguiente:

LEY REFORMATORIA DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO

Título Quinto

INTRODÚCESE LA SIGUIENTE REFORMA AL CÓDIGO PENAL, EN SUSTITUCIÓN DEL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 006 DE CONTROL TRIBUTARIO Y FINANCIERO, PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL No. 97 DE 29 DE DICIEMBRE DE 1988.

Art. 50.- En el capítulo V, título X del Código Penal a continuación del artículo 575, añádase el siguiente artículo:

"Los agentes de percepción y de retención o sus representantes legales que, por más de dos meses no presenten dentro de los plazos previstos en la Ley y Reglamentos respectivos, las declaraciones y pagos mensuales de los valores percibidos o recaudados, serán reprimidos con prisión de seis meses a dos años, sin perjuicio de las sanciones pecuniarias que correspondan y de la entrega al respectivo sujeto activo de los valores indebidamente retenidos.

Para el ejercicio de esta acción penal se tendrá como base el informe del funcionario de la Dirección General de Rentas en el cual se de cuenta de la tardanza establecida en el primer inciso de este artículo."

Dado en Quito, en la Sala de Sesiones del Congreso Nacional del Ecuador, a los veintinueve días del mes de diciembre de

mil novecientos noventa y tres.

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL (Ley No. 93, R.O. 764-S, 22-VIII-1995)

Nota:

En la presente edición de la Ley 93 sólo se han incluido las normas que tienen relación con el Código Penal.

CONGRESO NACIONAL

EL PLENARIO DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS

Considerando:

Que para mejorar la administración del Sistema Tributario, es necesario incorporar reformas específicas al Código Tributario, a la Ley de Régimen Tributario Interno y a otras leyes;

Que es necesario que las disposiciones legales, sean claras y precisas para facilitar su aplicación a nivel de contribuyentes, administración tributaria y administración de justicia;

Que es indispensable, proseguir con la Reforma Tributaria, con el propósito de conseguir el cumplimiento más eficiente de las obligaciones fiscales, para evitar la evasión tributaria que actualmente alcanza altos niveles en el país;

Que el Sistema Tributario debe garantizar los principios de capacidad contributiva, igualdad y generalidad, manteniendo en la Ley las exoneraciones del Impuesto al Valor Agregado IVA que benefician a sectores de menores ingresos en las adquisiciones de productos de primera necesidad; y,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente:

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO TRIBUTARIO, LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, LEY DE CASACIÓN Y LEY DE RÉGIMEN MONETARIO Y BANCO DEL ESTADO

Título Octavo

REFORMAS AL CÓDIGO PENAL

Art. 31.- Agréguese en el artículo 257 de Código Penal el siguiente inciso:

"Art. ... con la misma pena serán sancionados los servidores de la Dirección General de Rentas y los servidores de aduanas que hubieren intervenido en Actos de Determinación".

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas del Congreso Nacional del Ecuador, a los ocho días del mes de agosto de mil novecientos noventa y cinco.

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL (Ley No. 106, R.O. 365, 21-VII-1998)

Nota:

La presente norma fue promulgada como Ley 105; sin embargo, la Fe de Erratas publicada en el R.O. 373, 31-VII-98, modificó su numeración a 106.

CONGRESO NACIONAL

EL PLENARIO DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS

Considerando:

Que el Código Penal ecuatoriano vigente, no ha sido revisado desde 1971 y, que a partir de entonces las demandas de las

mujeres por cambios que reivindiquen sus derechos han sido cada vez más urgentes;

Que en el Ecuador de fines de siglo se han evidenciado cambios profundos en la participación ciudadana en la cual las mujeres se han destacado en su lucha por el derecho a una vida digna, que consagre seguridad para sus hijos y su familia;

Que es deber del Estado asegurar el derecho que tienen los ciudadanos de vivir en una sociedad libre de violencias, donde hombres y mujeres respeten su derecho a la autodeterminación como seres humanos;

Que es indispensable dar un cambio sustancial a las viejas y caducas instituciones del Código Penal, para introducir nuevas figuras delictivas y conductas típicas que siendo parte de la realidad de la sociedad ecuatoriana, no son sancionadas, derivándose de ello la impunidad;

Que en los albores del tercer milenio es importante armonizar la legislación penal por los cambios que se han operado en el mundo contemporáneo; y,

En uso de las atribuciones legales y constitucionales expide la siguiente:

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL:

REFORMAS AL CÓDIGO PENAL

Art. 1.- Derógase el artículo 27.

Art. 2.- Sustitúyase el artículo 58 por el siguiente:

"Ninguna mujer embarazada podrá ser privada de su libertad, ni será notificada con sentencia que le imponga penas de prisión o de reclusión, sino 90 días después del parto."

Art. 3.- En el penúltimo inciso del artículo 264 luego de las palabras "serán reprimidas, además", cámbiese la frase "con multa de ciento a doscientos sucres" por la siguiente: "con multa de un salario mínimo vital general".

Art. 4.- Deróganse los artículos 268 y 269.

Art. 5.- Cámbiese el texto del artículo 452 por el siguiente:

"Los que a sabiendas y voluntariamente mataren a cualquier ascendiente o descendiente, cónyuge o hermano, serán reprimidos con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años".

Art. 6.- Derógase el Capítulo III del Título VIII del Código Penal y se reemplaza por el siguiente: "Título VIII DE LA RUFIANERÍA Y CORRUPCIÓN DE MENORES".

Art. 7.- A continuación del artículo 511, agréguese un innumerado que diga:

"Art. ... El que solicitare favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o análoga con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación, será castigado como autor de acoso sexual con pena de prisión de seis meses a dos años".

Art. 8.- Cámbiese el texto del artículo 512 por el siguiente:

"Violación es el acceso carnal, con introducción parcial o total del miembro viril, por la vía vaginal, anal o bucal, con personas de uno u otro sexo, en los siguientes casos:

1.- Cuando la víctima fuere menor de catorce años;

2.- Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del sentido, o cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no pudiera resistirse; y,

3.- Cuando se usare de violencia, amenaza o de intimidación."

Art. 9.- A continuación del artículo 512 reformado, agréguese un artículo innumerado que diga:

"Art. ... Se aplicarán las mismas penas del artículo anterior, en caso de agresión sexual consistente en la introducción de objetos distintos al miembro viril por la vía vaginal o anal, realizado en las mismas circunstancias del artículo 512".

Art. 10.- En el primer inciso del artículo 515 luego de las palabras "será aumentado con", cámbiese "dos años" por "cuatro años".

Art. 11.- En el penúltimo inciso del artículo 515, luego de las palabras "para cometerlo;", cámbiese la frase: "por médicos, cirujanos", por "profesionales de la salud y personal responsable en la atención y cuidado del paciente".

Art. 12.- El capítulo III del Título VIII dirá: "DE LOS DELITOS DE PROXENETISMO Y CORRUPCIÓN DE MENORES".

Art. ... El que promoviere o facilitare la prostitución de otra persona será sancionado con pena de prisión de uno a tres años, salvo que tuviere a su cargo una casa de tolerancia, establecida conforme a los reglamentos que la autoridad competente expidiere para esta clase de establecimientos.

Art. ... La pena será de seis a nueve años de reclusión menor extraordinaria, sin que opere la eximente del artículo anterior, cuando:

- 1.- La víctima fuese menor de catorce años de edad;
- 2.- Se empleare violencia, engaño, abuso de autoridad o cualquier otro medio coercitivo;
- 3.- La víctima se encontrare por cualquier causa privada de la capacidad de prestar su consentimiento;
- 4.- El autor es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o es cónyuge, conviviente, adoptante, tutor o curador o tiene bajo su cuidado por cualquier motivo a la persona prostituida;
- 5.- La víctima se encuentra en situación de abandono o de extrema necesidad económica; y,
- 6.- El autor ha hecho del proxenetismo su oficio o modo de vida.

Art. ... Se impondrá pena de dos a cuatro años de prisión a la que explotare la ganancia obtenida por una persona que ejerciere la prostitución.

Si la víctima fuese menor de catorce años, o descendiente, hijo adoptivo, hijo de su cónyuge o de su conviviente o estuviese bajo su cuidado, la pena será de tres a seis años de reclusión menor ordinaria.

Art. ... Se reputará como proxenetismo la conducta del que mediante seducción o engaño sustrajere a una persona para entregarle a otro con el objeto de que tenga relaciones sexuales.

Art. ... Será sancionado con pena de dos a cuatro años el que promoviere o facilitare la entrada o salida del país o el traslado dentro del territorio de la República de personas para que ejerzan la prostitución.

Si mediare alguna de las circunstancias agravantes previstas en los artículos anteriores la pena será de tres a seis años de reclusión menor ordinaria.

Art. ... Será sancionado con pena de uno a tres años de prisión:

1. La exposición, venta o entrega a menores de catorce años de objetos, libros, escritos, imágenes visuales o auditivas obscenas, que puedan afectar gravemente el pudor o excitar o pervertir su instinto sexual; y,
2. El que incitare a un menor de catorce años a la ebriedad o a la práctica de actos obscenos o le facilitare la entrada a los prostíbulos u otros centros de corrupción como cines o teatros que brinden espectáculos obscenos.

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano en la Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas del Congreso Nacional del Ecuador, el uno de julio de mil novecientos noventa y ocho.

FE DE ERRATAS AL CÓDIGO PENAL (R.O. 373, 31-VII-1998)

FE DE ERRATAS

Rectificamos los errores, tanto en el Sumario como en la página 2 del Registro Oficial No. 365 del 21 de julio de 1998, en donde la Ley Reformatoria al Código Penal aparece con el número 105, siendo el correcto el No. 106.

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL (Ley No. 99-26, R.O. 190, 13-V-1999)

Nota:

En la presente edición de la Ley 99-26 sólo se han incluido las normas que tienen relación con el Código Penal.

EL CONGRESO NACIONAL

Considerando:

Que la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, requiere reformas que permitan a las autoridades de control ejercer sus funciones a cabalidad;

Que es necesario evitar la concentración de créditos de las instituciones bancarias para garantizar la solvencia y fortalecimiento del sistema financiero;

Que es necesario institucionalizar un sistema de calificación de riesgo de las instituciones;

Que es necesario fortalecer la capacidad de control y regulación por parte de la Superintendencia de Bancos;

Que es necesario armonizar las reformas de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero con la Ley de Reordenamiento en Materia Económica, en el Área Tributario-Financiera;

Que se debe obligar a que en los procesos de reestructuración se utilicen únicamente recursos del sistema financiero privado y garantizar la recuperación de los recursos de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) en los procesos de saneamiento de las instituciones del sistema financiero nacional; y,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente:

LEY REFORMATORIA A LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO; A LA LEY DE REORDENAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA, EN EL ÁREA TRIBUTARIO-FINANCIERA; Y, AL CÓDIGO PENAL.

Art. 19.- A continuación del tercer inciso del artículo 257 del Código Penal, añádase el siguiente inciso:

"También están comprendidos en las disposiciones de este artículo los funcionarios, administradores, ejecutivos o empleados de las instituciones del sistema financiero nacional privado, así como los miembros o vocales de los directorios y de los consejos de administración de estas entidades, que hubiesen contribuido al cometimiento de estos ilícitos."

Art. 20.- A continuación del artículo 257 del Código Penal agréguese el siguiente artículo:

"Art. 257 A.- Serán reprimidos con reclusión de cuatro a ocho años las personas descritas en el artículo anterior que, abusando de sus calidades, hubieren actuado dolosamente para obtener o conceder créditos vinculados, relacionados o intercompañías, violando expresas disposiciones legales respecto de esta clase de operaciones. La misma pena se aplicará a los beneficiarios que dolosamente hayan intervenido para el cometimiento de este ilícito y a quienes hayan prestado su nombre para beneficio propio o de un tercero."

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Congreso Nacional del Ecuador, a los cinco días del mes de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL (Ley No. 99-38, R.O. 253, 12-VIII-1999)

EL CONGRESO NACIONAL

Considerando:

Que la Constitución Política de la República, en su artículo 247 inciso tercero (17, num. 1), establece que será facultad exclusiva del Estado la concesión del uso de frecuencias electromagnéticas para la difusión de señales de radio, televisión y otros medios;

Que en el mercado nacional, han proliferado empresas que apartándose del ordenamiento jurídico vigente y de las normas legales que existen para el efecto, ofrecen públicamente y prestan servicios de llamadas telefónicas internacionales ilícitas, infringiendo los principios de la Ley Especial de Telecomunicaciones;

Que esta práctica ilícita, perjudica de manera considerable, tanto a las operadoras legalmente constituidas, como al fisco, por la evasión de los tributos que estas operaciones generan, beneficiándose económicamente las personas naturales y jurídicas que actúan al margen de la Ley;

Que esta situación debe ser enfrentada decididamente, dotando a los correspondientes organismos de control, de normas que sancionen a los responsables de este perjuicio en contra de los intereses del Estado y de los particulares;

Que sin perjuicio de las normas existentes en el Código Penal, y la Ley Especial de Telecomunicaciones, es necesario incorporar nuevos tipos que repriman las telecomunicaciones ilícitas y la simple tenencia de equipos destinados al cometimiento de estos ilícitos; y,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales expide la siguiente,

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL

Art. 1.- A continuación del artículo 422 del Código Penal, añádanse los siguientes incisos:

"Quienes ofrezcan, presten o comercialicen servicios de telecomunicaciones, sin estar legalmente facultados, mediante concesión, autorización, licencia, permiso, convenios o cualquier otra forma de la contratación administrativa, salvo la utilización de servicios de internet, serán reprimidos con prisión de dos a cinco años.

Estarán comprendidos en esta disposición, quienes se encuentren en posesión clandestina de instalaciones que, por su configuración y demás datos técnicos, hagan presumir que entre sus finalidades está la de destinarlos a ofrecer los servicios señalados en el inciso anterior, aun cuando no estén siendo utilizados.

Las sanciones indicadas en este artículo, se aplicaran sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y civiles previstas en la Ley Especial de Telecomunicaciones y sus Reglamentos".

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Congreso Nacional del Ecuador, a los cuatro días del mes de agosto de mil novecientos noventa y nueve.

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL (Ley No. 99-48, R.O. 347, 27-XII-1999)

Nota:

En la presente edición de la Ley 99-48 sólo se ha incluido las normas que tienen relación con el Código Penal.

EL CONGRESO NACIONAL

Considerando:

Que la Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del Banano, publicada en el Registro Oficial No. 124 de 6 de agosto de 1997, dispone que el Ministro de Agricultura y Ganadería por intermedio del Director del Programa Nacional del Banano, imponga las sanciones a los incumplidores de esta Ley;

Que el programa Nacional del Banano fue suprimido el 29 de diciembre de 1998, lo cual ha permitido la impunidad de inescrupulosos exportadores de banano que no pagan al productor el precio mínimo de sustentación de las cajas aptas para la exportación;

Que es deber del Estado preservar el crecimiento sustentable de la economía y el desarrollo equilibrado y equitativo en

beneficio colectivo; y,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente:

LEY REFORMATORIA A LA LEY PARA ESTIMULAR Y CONTROLAR LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL BANANO

Art. 5.- En el capítulo Quinto, del Título X del Código Penal, a continuación del artículo 575, añádase el siguiente artículo innumerado:

"Art.... El que fraudulentamente, mediante cualquier acto no pague el precio mínimo de sustentación de la caja de banano para exportación, fijado por acuerdo interministerial vigente, así como los autores intelectuales, cómplices y encubridores, serán sancionados con prisión de uno a tres años y la multa establecida en el artículo 4 de la Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del Banano.

Iniciado el juicio penal por la infracción al que se refiere el inciso anterior, el juez dictará como medida cautelar, la suspensión de la marca y/o patente de exportador."

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Congreso Nacional del Ecuador, a los siete días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL (Ley No. 99-49, R.O. 2, 25-I-2000)

EL H. CONGRESO NACIONAL

Considerando:

Que el artículo 62 (377) de la Constitución Política de la República establece como responsabilidad del Estado la conservación, restauración, protección y respeto del patrimonio cultural;

Que por mandato del artículo 86 (14) de la Constitución Política de la República, es deber del Estado proteger el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y garantizar la preservación de la naturaleza;

Que conforme el artículo 87 (396) de la Constitución Política de la República, la ley debe tipificar infracciones y determinar procedimientos para establecer responsabilidades penales por acciones u omisiones en contra de las normas de protección ambiental; y,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente:

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL

Art. 1.- Luego del Capítulo VII, del Título V, del Libro II del Código Penal, agréguese el siguiente:

"CAPÍTULO VII A

DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL

Art. 415 A.- El que destruya o dañe bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación, será reprimido con prisión de uno a tres años sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe y de que el juez, de ser factible, ordene la reconstrucción, restauración o restitución del bien, a costa del autor de la destrucción o deterioro.

Con la misma pena será sancionado el que cause daños en un archivo, registro, museo, biblioteca, centro decente, gabinete científico, institución análoga, yacimientos arqueológicos o cualquier bien perteneciente al patrimonio cultural, sin perjuicio de que el juez ordene la adopción de medidas encaminadas a restaurar en lo posible el bien dañado a costa del autor del daño.

Si la infracción fuere culposa, la pena será de tres meses a un año

El daño será punible cuando no provenga del uso normal que debió haberse dado al bien, según su naturaleza y características.

Art. 415 B.- La misma pena prevista en el artículo anterior, si el hecho no constituyere un delito mas severamente reprimido, se aplicará al funcionario o empleado público que actuando por si mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o permita, contra derecho, modificaciones, alteraciones o derrocamiento que causen la destrucción o dañen bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación; así como al funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo resultado.

No constituye infracción la autorización dada para que se intervenga en el bien patrimonial a fin de asegurar su conservación, si se adoptan las precauciones para que en la ejecución se respeten las normas técnicas internacionalmente aceptadas.

Art. 415 C.- Igual pena será aplicable a quienes con violación de las leyes y demás disposiciones jurídicas sobre la materia, trafiquen, comercialicen o saquen fuera del país piezas u objetos arqueológicos, bienes de interés histórico o pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación".

Art. 2.- Luego del Capítulo X, del Título V, del Libro II del Código Penal, agréguese el siguiente:

"CAPÍTULO X A

DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE

Art. 437 A.- Quien, fuera de los casos permitidos por la ley, produzca, introduzca, deposite, comercialice, tenga en posesión, o use desechos tóxicos peligrosos, sustancias radioactivas, u otras similares que por sus características constituyan peligro para la salud humana o degraden y contaminen el medio ambiente, serán sancionados con prisión de dos a cuatro años.

Igual pena se aplicará a quien produzca, tenga en posesión, comercialice, introduzca armas químicas o biológicas.

Art. 437 B.- El que infringiere las normas sobre protección del ambiente, vertiendo residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad con la ley, si tal acción causare o pudiere causar perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, el potencial genético, los recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a tres años, si el hecho no constituyere un delito más severamente reprimido.

Art. 437 C.- La pena será de tres a cinco años de prisión, cuando:

- a) Los actos previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la salud de las personas o a sus bienes;
- b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible;
- c) El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su autor; o,
- d) Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales necesarios para la actividad económica.

Art. 437 D.- Si a consecuencia de la actividad contaminante se produce la muerte de una persona, se aplicará la pena prevista para el homicidio inintencional, si el hecho no constituye un delito mas grave.

En caso de que a consecuencia de la actividad contaminante se produzcan lesiones, impondrá las penas previstas en los artículos 463 a 467 del Código Penal.

Art. 437 E.- Se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho no constituyere un delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado público que actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o permita, contra derecho, que se viertan residuos contaminantes de cualquier clase por encima de los límites fijados de conformidad con la ley; así como el funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo resultado.

Art. 437. F.- El que cace, capture, recolecte, extraiga o comercialice, especies de flora o fauna que estén legalmente protegidas, contraviniendo las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, será reprimido con prisión de uno a tres años.

La pena será de prisión de dos a cuatro años cuando:

- a) El hecho se cometa en periodo de producción de semilla o de reproducción o crecimiento de las especies;
- b) El hecho se cometa contra especies en peligro de extinción; o,
- c) El hecho se cometa mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o radiactivas.

Art. 437 G.- El que extraiga especies de flora o fauna acuáticas protegidas, en épocas, cantidades o zonas vedadas, o utilice procedimiento de pesca o caza prohibidos, será reprimido con prisión de uno a tres años.

Art. 437 H.- El que destruya, quemé, dañe o tale, en todo o en parte, bosques u otras formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que estén legalmente protegidas, será reprimido con prisión de uno a tres años, siempre que el hecho no constituya un delito más grave.

La pena será de prisión de dos a cuatro años cuando:

- a) Del delito resulte la disminución de aguas naturales, la erosión del suelo o la modificación del régimen climático; o,
- b) El delito se cometa en lugares donde existan vertientes que abastezcan de agua a un centro poblado o sistema de irrigación.

Art. 437 I.- Será sancionado con prisión de uno a tres años, si el hecho no constituye un hecho más grave, el que sin autorización o sin sujetarse a los procedimientos previstos en las normas aplicables, destine las tierras reservadas como de protección ecológica o de uso agrícola exclusivo, a convertirse en áreas de expansión urbana, o de extracción o elaboración de materiales de construcción.

Art. 437 J.- Se aplicará la misma pena prevista en el artículo anterior, si el hecho no constituyere un delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado público que actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o permita, contra derecho, que se destine indebidamente las tierras reservadas como de protección ecológica o de uso agrícola exclusivo a un uso distinto de que legalmente les corresponde; así como al funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo resultado.

Art. 437 K.- El juez penal podrá ordenar, como medida cautelar, la suspensión inmediata de la actividad contaminante, así como la clausura definitiva o temporal del establecimiento de que se trate, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental."

Art. 3.- Luego del Capítulo IV, del Título I, del Libro III del Código Penal, agréguese el siguiente:

"CAPÍTULO V

DE LAS CONTRAVENCIONES AMBIENTALES

Art. 607 A.- Será sancionado con prisión de cinco a siete días, y multa de cinco a diez salarios mínimos vitales generales, todo aquel que:

- a) Contamine el aire mediante emanaciones superiores a los límites permitidos de los escapes de los vehículos;
- b) Acumule basura en la vía pública, en terrenos o en los frentes de las casas o edificios;
- c) Haga ruido por falta de silenciador de su vehículo o a través de equipos de amplificación a alto volumen que alteren la tranquilidad ciudadana; o,
- d) Arroje desperdicios o aguas contaminantes, destruya la vegetación de los parques o espacios verdes, en los casos en que tales actos no constituyan delito."

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Pleno del Congreso Nacional del Ecuador, a los dieciséis días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL (Ley No. 2000-20, R.O. 110, 30-VI-2000)

EL CONGRESO NACIONAL

Considerando:

Que la Constitución Política de la Republica, en su artículo 23, numeral 4 (66, num. 29), prohíbe el tráfico de seres humanos en todas sus formas;

Que la difícil situación económica por la que atraviesa el país, así como los altos índices de desempleo, han hecho que muchos ecuatorianos busquen salir al extranjero, pretendiendo encontrar mejores condiciones de subsistencia y trabajo, para alcanzar un nivel de vida digno para ellos y sus familias;

Que dicha situación ha llevado a que personas desaprensivas lucren de la necesidad de quienes buscan salir del país, creando una verdadera industria de tráfico ilegal de migrantes;

Que este tráfico ilegal de migrantes, atenta contra la vida, la integridad y la dignidad de las personas, a más del perjuicio económico que se les ocasiona, creando en muchos casos falsas expectativas de encontrar mejores condiciones de vida;

Que es necesario incorporar en la legislación ecuatoriana, normas que sancionen de manera drástica este tipo de prácticas, que tanto daño han causado a muchos ecuatorianos, tanto en lo económico, como en lo personal y familiar; y,

En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 5 del artículo 130 (132) de la Constitución Política de la República, expide la siguiente:

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL

Art. 440-A.- El que por medios ilegales facilitare la migración de personas nacionales o extranjeras hacia otros países, siempre que ello no constituya infracción más grave será reprimido con la pena de reclusión menor ordinaria de tres a seis años.

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL (Ley No. 2000-24, R.O. 144-S, 18-VIII-2000)

Nota:

En la presente edición de la Ley 2000-24 sólo se ha incluido la disposición final primera que tiene relación con el Código Penal.

EL CONGRESO NACIONAL

Considerando:

Que en el ordenamiento jurídico del Ecuador, el régimen legal de la extradición, activa y pasiva, consta en el Reglamento a la Ley de Extranjería de 30 de junio de 1986, publicada en el Registro Oficial No. 473 de 7 de julio de 1986;

Que dicho reglamento, en lo relativo al régimen de la extradición activa, pretendió reformar ilegalmente el contenido del artículo 164 del Código de Procedimiento Penal, expedido el 26 de mayo de 1983, publicado en el Registro Oficial No. 54 de 10 de junio de 1983;

Que la extradición a pesar de la evolución de fondo y forma que ha experimentado en el ámbito internacional, se encuentra regulada en nuestro País, en un contexto legal inapropiado como el de la extranjería y en un nivel reglamentario, en contra de la corriente legislativa imperante en el mundo;

Que la referida situación jurídica no está en armonía con el ordenamiento constitucional vigente, lo que hace imperiosamente necesario una Ley de Extradición que sirva eficientemente a sus propósitos; y,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente:

LEY DE EXTRADICIÓN

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Sustitúyase el artículo 7 del Código Penal, por el siguiente: "El ecuatoriano que, fuera de los casos contemplados en el artículo anterior, cometiere en país extranjero un delito para el que la ley ecuatoriana tenga establecida pena privativa de libertad mayor de un año, será reprimido según la ley penal del Ecuador, siempre que se encuentre en territorio ecuatoriano."

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Pleno del Congreso Nacional del Ecuador, a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil.

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL (Ley No. 2001-47, R.O. 422, 28-IX-2001)

Nota:

En la presente edición de la Ley 2001-47 sólo se han incluido las normas que tienen relación con el Código Penal.

CONGRESO NACIONAL

Considerando:

Que en los últimos años, el Ecuador ha experimentado un alarmante incremento del auge delictivo y un proceso creciente de corrupción en la administración pública y en el manejo de los dineros del público, cuya impunidad desmoraliza a la población ecuatoriana y perjudica notoriamente la imagen del Ecuador ante la comunidad internacional;

Que constituye clamor ciudadano la adopción de medidas para sancionar aquellos delitos que lesionan bienes jurídicos considerados de alta significación social como la vida, la integridad personal, la libertad de las personas y los bienes y recursos públicos, que deben ser protegidos en toda sociedad civilizada;

Que es indispensable que el sistema jurídico penal establezca la debida proporcionalidad entre infracciones y sanciones, por mandato imperativo del artículo 24, numeral 3 (76, num. 6) de la Constitución Política de la República;

Que es deber del Estado proporcionar seguridad jurídica a los habitantes del país; y,

En ejercicio de las facultades constitucionales de que se halla investido, expide la siguiente:

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL Y AL CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACIÓN SOCIAL.

Art. 1.- Sustitúyase el artículo 51 del Código Penal, por el siguiente:

"Art. 51.- Las penas aplicables a las infracciones son las siguientes:

Penas peculiares del delito:

- 1.- Reclusión mayor;
- 2.- Reclusión menor;
- 3.- Prisión de ocho días a cinco años;
- 4.- Interdicción de ciertos derechos políticos y civiles;
- 5.- Sujeción a la vigilancia de la autoridad;
- 6.- Privación del ejercicio de profesiones, artes u oficios; y,
- 7.- Incapacidad perpetua para el desempeño de todo empleo o cargo público.

Penas peculiares de la contravención:

- 1.- Prisión de uno a siete días.
- 2.- Multa.

Penas comunes a todas las infracciones:

- 1.- Multas.
- 2.- Comiso Especial."

Art. 2.- Sustitúyase el artículo 53, por el siguiente:

"Art. 53.- La reclusión mayor, que se cumplirá en los Centros de Rehabilitación Social del Estado, se divide en:

- a) Ordinaria de cuatro a ocho años y, de ocho a doce años;
- b) Extraordinaria de doce a dieciséis años; y,
- c) Especial de dieciséis a veinticinco años."

Art. 3.- Sustitúyase el artículo 72, por el siguiente:

"Art. 72.- Cuando haya dos o más circunstancias atenuantes y ninguna agravante, no constitutiva o modificatoria de la infracción, las penas de reclusión serán reducidas o modificadas de la siguiente manera:

La reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años se sustituirá con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años.

La reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años se sustituirá con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años.

La reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años se sustituirá con reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años.

La reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años se sustituirá con reclusión menor ordinaria de tres a seis años.

La reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años se sustituirá con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años.

La reclusión menor ordinaria de seis a nueve años se sustituirá con prisión correccional de dos a cinco años.

La reclusión menor ordinaria de tres a seis años se sustituirá con prisión correccional de uno a tres años."

Art. 4.- A continuación del número 2 del artículo 80, inclúyase el siguiente numeral:

"El que habiendo sido antes condenado a pena de reclusión cometiere un delito reprimido con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, la pena será de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años; y, si el nuevo delito es sancionado con reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años, la pena será de veinticinco años, no sujeta a modificación".

Art. 5.- El artículo 81, sustitúyase por el siguiente:

"Art. 81.- En caso de concurrencia de varias infracciones, se observarán las reglas siguientes:

- 1.- Si concurren varios delitos reprimidos con penas correccionales, o uno o más de estos delitos con una o más contravenciones, se acumularán todas las multas y penas de prisión correccional y de policía; pero de manera que la multa no pueda exceder del doble de la más rigurosa; y la prisión correccional, de seis años;
- 2.- Cuando concorra un delito reprimido con reclusión con delitos reprimidos con prisión correccional o una o más contravenciones, se impondrá la pena señalada al delito más grave;
- 3.- Cuando concurren varios delitos reprimidos con reclusión, se impondrá la pena mayor.

Cuando concurren varios delitos reprimidos con reclusión mayor especial, se acumularán las penas por un máximo de treinta y cinco años;

4.- Las penas de comiso especial en virtud de varias infracciones concurrentes, serán siempre acumuladas;

5.- Cuando haya concurrencia de varias contravenciones se acumularán todas las penas merecidas por el contraventor,

pero no podrán exceder del máximo de la pena de policía; y,

6.- Cuando un solo acto constituya varias infracciones únicamente se impondrá la pena más rigurosa que será hasta de treinta y cinco años, si se trata de infracciones sancionadas con reclusión mayor especial.

Art. 6.- Sustitúyase los incisos cuarto y sexto del artículo 101, por los siguientes:

Inciso Cuarto.- "A excepción de los casos de imprescriptibilidad de las acciones y de las penas previstas en el último inciso del número 2 del artículo 23 (80) y en el segundo inciso del artículo 121 (233) de la Constitución Política de la República, en los demás delitos reprimidos con reclusión, cuyo ejercicio de acción es pública, de no haber enjuiciamiento, la acción para perseguirlos prescribirá en diez años; tratándose de delitos reprimidos con reclusión mayor especial, la acción para perseguirlos prescribirá en quince años. Tratándose de delitos reprimidos con prisión, la acción para perseguirlos prescribirá en cinco años. El tiempo se contará a partir de la fecha en que la infracción fue perpetrada."

Nota:

Por Disposición Derogatoria de la Constitución de la República del Ecuador (R.O. 449, 20-X-2008), se abroga la Constitución Política de la República del Ecuador (R.O. 1, 11-VIII-1998), y toda norma que se oponga al nuevo marco constitucional.

Inciso sexto.- "Si el indicado se presentare voluntariamente a la justicia en el plazo máximo de seis meses posteriores al inicio de la instrucción, los respectivos plazos se reducirán a diez años en los delitos reprimidos con reclusión mayor especial; a ocho años en los demás delitos reprimidos con reclusión; y, a cuatro años en los delitos reprimidos con prisión. En estos casos, los plazos se contarán desde la fecha del inicio de la instrucción. No surtirá efecto esta regla en caso de reincidencia."

Art. 7.- Sustitúyase el artículo 188, por el siguiente:

"Art. 188.- El delito del plagio se comete apoderándose de otra persona por medio de violencias, amenazas, seducción o engaño, sea para venderla o ponerla contra su voluntad al servicio de otra, o para obtener cualquier utilidad, o para obligarla a pagar rescate o entregar una cosa mueble, o extender, entregar o firmar un documento que surta o pueda surtir efectos jurídicos, o para obligarla a que haga u omita hacer algo, o para obligar a un tercero a que ejecute uno de los actos indicados tendiente a la liberación del plagiado".

Art. 8.- Sustitúyase el artículo 189, por el siguiente:

"Art. 189.- El plagio será reprimido con las penas que se indican en los números siguientes:

1.- Con prisión de seis meses a dos años, si la víctima es devuelta a su libertad espontáneamente por el plagiario, antes de iniciarse procedimiento judicial, sin haber sufrido malos tratos, ni realizándose ninguno de los actos condicionantes determinados en el artículo anterior;

2.- Con prisión de uno a tres años, si la devolución de libertad, con las condiciones del número que precede, se ha realizado después de iniciado el procesamiento no estando detenido o preso el plagiario;

3.- Con reclusión menor ordinaria de tres a seis años, si la liberación se realiza en los términos del número 2 de este artículo, estando detenido o preso el plagiario;

4.- Con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años, si en el caso del número 1, la víctima ha sufrido malos tratos;

5.- Con reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años, en el caso del número 2, si la víctima ha sufrido malos tratos;

6.- Con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años, en el caso del número 3, si hubiere tales malos tratos; y,

7.- Con reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años, cuando la víctima no hubiere recobrado su libertad hasta la fecha de la sentencia, debiendo imponerse el máximo de la pena si antes de la condena la víctima apareciere violada, muerta o falleciere como consecuencia del plagio".

Art. 9.- A continuación del artículo 190, agréguese el siguiente artículo innumerado:

"Art. Innumerado.- Se considerarán agravantes del delito de plagio, además de las circunstancias señaladas en el artículo 30, cuando concurren una o más de las circunstancias siguientes:

Prolongar la privación de libertad del plagiado por un tiempo mayor a quince días.

Cometer la infracción utilizando orden de detención falsa, o simulando tenerla o abusando de autoridad en el caso de los miembros de la fuerza pública o jueces".

Art. 10.- En el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 512 mediante Ley 105, publicada en el Registro Oficial No. 365 de 21 de julio de 1998, sustitúyase la frase: "...artículo anterior", por: "...artículo siguiente".

Art. 11.- Sustitúyase el artículo 513, por el siguiente:

"Art. 513.- El delito de violación será reprimido con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, en el número 1 del artículo anterior; y, con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años, en los números 2 y 3 del mismo artículo".

Art. 12.- Sustitúyase el artículo 514, por el siguiente:

"Art. 514.- Si la violación produjere una grave perturbación en la salud de la persona violada, se aplicará el máximo de las penas indicadas en el artículo anterior; y si le produjere la muerte, la pena será de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años.

Igual pena de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años, se impondrá a los responsables de violación si las víctimas son sus descendientes, ascendientes, hermanos o afines en línea recta; debiendo en su caso, ser condenados, además a la pérdida de la patria potestad".

Art. 13.- Elimínese el inciso segundo del artículo 515; y, sustitúyase el inciso tercero de dicho artículo, por el siguiente:

"Si los responsables son de los que tienen autoridad sobre la víctima."

Art. 14.- En el artículo 551, añádase a continuación de: "...prisión de uno a cinco años", la frase: "...y con reclusión menor de tres a seis años en los casos en que se perpetre con violencia contra las personas....".

Art. 15.- Reformase el artículo 552, de la siguiente manera:

1.- Sustitúyase el primer inciso por el siguiente

"El máximo de la pena establecida en el artículo anterior, se aplicará al responsable si concurre alguna de las siguientes circunstancias:"

2.- En el último inciso, sustitúyase: "...reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años", por: "...reclusión mayor especial de dieciséis a treinta años".

Art. 16.- Sustitúyase: "...reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años", por: "...reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años", en los casos de delitos cometidos con resultado de muerte, siempre que ésta sea atribuible a la conducta dolosa del agente referidos en los artículos 126, 157, 158, 160, innumerado después del 160, 164, 187, 393, 406, 416, 419, 433, 450, 452 y 552 del Código Penal.

Art. 17.- Sustitúyase el primer inciso del artículo 257, por el siguiente:

"Serán reprimidos con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años, los servidores de los organismos y entidades del sector público y toda persona encargada de un servicio público, que, en beneficio propio o de terceros, hubiere abusado de dineros públicos o privados, de efectos que los representen, piezas, títulos, documentos, bienes muebles o inmuebles que estuvieren en su poder en virtud o razón de su cargo, ya consista el abuso en desfalco, disposición arbitraria o cualquier otra forma semejante. La pena será de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años si la infracción se refiere a fondos destinados a la defensa nacional".

Art. 18.- El primer artículo innumerado, agregado a continuación del artículo 296, Capítulo VIII, Título III, sustitúyase por el siguiente:

"Artículo innumerado.- Constituye enriquecimiento ilícito el incremento injustificado del patrimonio de una persona, producido con ocasión o como consecuencia del desempeño de un cargo o función pública, que no sea resultado de sus ingresos legalmente percibidos".

Sustitúyase el segundo artículo innumerado, agregado a continuación del artículo 296, Capítulo VIII, Título III, por el siguiente:

"Artículo innumerado.- El enriquecimiento ilícito se sancionará con la pena de dos a cinco años de prisión y la restitución del duplo del monto del enriquecimiento ilícito, siempre que no constituya otro delito".

Dada, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Congreso Nacional del

Ecuador, a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil uno.

FE DE ERRATAS AL CÓDIGO PENAL (R.O. 439, 24-X-2001)

FE DE ERRATAS

Rectificamos a continuación los errores deslizados en la publicación de la Ley Reformatoria al Código Penal y al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, efectuada en el Registro Oficial No. 422 de 28 de septiembre del presente año, de la siguiente forma:

En el artículo 1, numeral 1 de "Penas comunes a todas las infracciones", en donde dice:

"Multas."

Debe decir:

"Multa."

En el artículo 6, "**Inciso Sexto**", en donde dice:

"Si el indicado...."

Debe decir:

"Si el indiciado..."

LA DIRECCIÓN

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL (Ley No. 2002-67, R.O. 557-S, 17-IV-2002)

Nota:

En la presente edición de la Ley 2002-67 sólo se han incluido las normas que tienen relación con el Código Penal.

CONGRESO NACIONAL

Considerando:

Que el uso de sistemas de información y de redes electrónicas, incluida la Internet, ha adquirido importancia para el desarrollo del comercio y la producción, permitiendo la realización y concreción de múltiples negocios de trascendental importancia, tanto para el sector público como para el sector privado;

Que es necesario impulsar el acceso de la población a los servicios electrónicos que se generan por y a través de diferentes medios electrónicos;

Que se debe generalizar la utilización de servicios de redes de información e Internet, de modo que éstos se conviertan en un medio para el desarrollo del comercio, la educación y la cultura;

Que a través del servicio de redes electrónicas, incluida la Internet se establecen relaciones económicas y de comercio, y se realizan actos y contratos de carácter civil y mercantil que es necesario normarlos, regularlos y controlarlos, mediante la expedición de una Ley especializada sobre la materia;

Que es indispensable que el Estado Ecuatoriano cuente con herramientas jurídicas que le permitan el uso de los servicios electrónicos, incluido el comercio electrónico y acceder con mayor facilidad a la cada vez más compleja red de los

negocios internacionales; y,

En uso de sus atribuciones, expide la siguiente:

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS

Reformas al Código Penal

Art. 58.- A continuación del artículo 202, inclúyanse los siguientes artículos innumerados:

"Art.- El que empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, violentare claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener información protegida, contenida en sistemas de información; para vulnerar el secreto, confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la seguridad, será reprimido con prisión de seis meses a un año y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Si la información obtenida se refiere a seguridad nacional, o a secretos comerciales o industriales, la pena será de uno a tres años de prisión y multa de mil a mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

La divulgación o la utilización fraudulenta de la información protegida, así como de los secretos comerciales o industriales, será sancionada con pena de reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realiza por parte de la persona o personas encargadas de la custodia o utilización legítima de la información, éstas serán sancionadas con pena de reclusión menor de seis a nueve años y multa de dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Art.- Obtención y utilización no autorizada de información.- La persona o personas que obtuvieren información sobre datos personales para después cederla, publicarla, utilizarla o transferirla a cualquier título, sin la autorización de su titular o titulares, serán sancionadas con pena de prisión de dos meses a dos años y multa de mil a dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica."

Art. 59.- Sustitúyase el artículo 262 por el siguiente:

"Art. 262.- Serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor, todo empleado público y toda persona encargada de un servicio público, que hubiere maliciosa y fraudulentamente, destruido o suprimido documentos, títulos, programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de información o red electrónica, de que fueren depositarios, en su calidad de tales, o que les hubieren sido encomendados en razón de su cargo."

Art. 60.- A continuación del artículo 353, agréguese el siguiente artículo innumerado:

"Art.- Falsificación electrónica.- Son reos de falsificación electrónica la persona o personas que con ánimo de lucro o bien para causar un perjuicio a un tercero, utilizando cualquier medio, alteren o modifiquen mensajes de datos, o la información incluida en éstos, que se encuentre contenida en cualquier soporte material, sistema de información o telemático, ya sea:

- 1.- Alterando un mensaje de datos en alguno de sus elementos o requisitos de carácter formal o esencial;
- 2.- Simulando un mensaje de datos en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad;
- 3.- Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido o atribuyendo a las que han intervenido en el acto, declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho.

El delito de falsificación electrónica será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en este Capítulo."

Art. 61.- A continuación del artículo 415 del Código Penal, inclúyanse los siguientes artículos innumerados:

"Art.- Daños informáticos.- El que dolosamente, de cualquier modo o utilizando cualquier método, destruya, altere, inutilice, suprima o dañe, de forma temporal o definitiva, los programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de información o red electrónica, será reprimido con prisión de seis meses a tres años y multa de sesenta a ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

La pena de prisión será de tres a cinco años y multa de doscientos a seis cientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se trate de programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos contenido en

un sistema de información o red electrónica, destinada a prestar un servicio público o vinculada con la defensa nacional.

Art.- Si no se tratare de un delito mayor, la destrucción, alteración o inutilización de la infraestructura o instalaciones físicas necesarias para la transmisión, recepción o procesamiento de mensajes de datos, será reprimida con prisión de ocho meses a cuatro años y multa de doscientos a seis cientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica."

Art. 62.- A continuación del artículo 553 del Código Penal, añádanse los siguientes artículos innumerados:

"Art.- Apropiación ilícita.- Serán reprimidos con prisión de seis meses a cinco años y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, los que utilizaren fraudulentamente sistemas de información o redes electrónicas, para facilitar la apropiación de un bien ajeno, o los que procuren la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos de una persona, en perjuicio de ésta o de un tercero, en beneficio suyo o de otra persona alterando, manipulando o modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas informáticos, sistemas informáticos, telemáticos o mensajes de datos.

Art.- La pena de prisión de uno a cinco años y multa de mil a dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, si el delito se hubiere cometido empleando los siguientes medios:

1. Inutilización de sistemas de alarma o guarda;
2. Descubrimiento o descifrado de claves secretas o encriptadas;
3. Utilización de tarjetas magnéticas o perforadas;
4. Utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia; y,
5. Violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras semejantes."

Art. 63.- Añádase como segundo inciso del artículo 563 del Código Penal, el siguiente:

"Será sancionado con el máximo de la pena prevista en el inciso anterior y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el que cometiere el delito utilizando medios electrónicos o telemáticos."

Art. 64.- A continuación del numeral 19 del artículo 606 añádase el siguiente:

"... Los que violaren el derecho a la intimidad, en los términos establecidos en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos."

Dada, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala de sesiones del Pleno del Congreso Nacional del Ecuador, a los diez días del mes de abril del año dos mil dos.

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL (Ley No. 2002-75, R.O. 635, 7-VIII-2002)

Nota:

En la presente edición de la Ley 2002-75, sólo se han incluido las normas que tienen relación con el Código Penal.

CONGRESO NACIONAL

Considerando:

Que la cuantía de las multas establecidas en el Código Penal, no han sido revisadas en su gran mayoría, desde hace aproximadamente treinta años;

Que dicha omisión ha desvirtuado la función penalizadora y la naturaleza intimidatoria de la multa;

Que es de urgente necesidad revalorizar las cuantías de las multas, para que recuperen su carácter disuasivo;

Que la revisión del valor de las multas producirá un incremento notable de ingresos cuyo destino debe ser distribuido a favor de la Función Judicial, de la Policía Judicial en virtud de la vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal; y, de

los Centros de Rehabilitación de país, ante las recientes reformas al Código Penal para el endurecimiento de las penas; y,

En uso de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente:

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL, AL CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACIÓN SOCIAL, Y ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL Y DE LA POLICÍA NACIONAL

Reformas al Código Penal

Art. 1.- En el artículo 73, sustitúyanse las expresiones: "...y cuarenta sucres..."; y, "...hasta de ochenta sucres...", por las siguientes: "...y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."; y, "... hasta de doce dólares de los Estados Unidos de Norte América, ...", respectivamente.

Art. 2.- En el artículo 75, háganse las siguientes sustituciones:

En el inciso segundo, sustitúyase la expresión "...y multa que no exceda de doscientos sucres;", por la expresión "...y multa que no exceda de treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América;".

En el inciso tercero, sustitúyase la expresión "...y multa que no exceda de ciento cincuenta sucres;", por la expresión "...y multa que no exceda de diecinueve dólares de los Estados Unidos de Norte América;".

En el inciso cuarto, sustitúyase la expresión "...y multa que no exceda de cien sucres;", por la expresión "...y multa que no exceda de dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América;".

En el inciso quinto, sustitúyase la expresión "...y multa que no exceda de ochenta sucres;", por la expresión "...y multa que no exceda de doce dólares de los Estados Unidos de Norte América;".

En el inciso sexto, sustitúyase la expresión "...y multa que no exceda de sesenta sucres;", por la expresión "...y multa que no exceda de nueve dólares de los Estados Unidos de Norte América;".

En el inciso séptimo, sustitúyase la expresión "...y multa de cuarenta sucres;...", por la expresión "...y multa de seis dólares de los Estados Unidos de Norte América;".

En el inciso octavo, sustitúyase la expresión "...y multa de treinta y cinco sucres,...", por la expresión "...y multa de cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América,...".

Art. 3.- En el artículo 101, inciso décimo, sustitúyase la expresión "...con la multa de quinientos a cinco mil sucres,..." por la expresión "...con la multa de cuarenta y cuatro a cuatrocientos treinta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América...".

Art. 4.- En el artículo 128, sustitúyase la expresión "...multa de quinientos a mil sucres.", por la expresión "...multa de cuarenta y cuatro a ochenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América..".

Art. 5.- En el artículo 129, sustitúyase la expresión "...multa de quinientos a mil sucres.", por la expresión "...multa de cuarenta y cuatro a ochenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América..".

Art. 6.- En el artículo 146, háganse las siguientes sustituciones:

En el inciso primero, sustitúyase la expresión "...y multa de doscientos a quinientos sucres.", por la expresión "...y multa de diecisiete a cuarenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de Norte América..".

En el inciso segundo, sustitúyanse las expresiones: "...multa de quinientos a mil sucres;..." y "...multa de mil a dos mil sucres.", por las expresiones: "...multa de cuarenta y cuatro a ochenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América;...", y "...multa de ochenta y siete a ciento setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América.", respectivamente.

Art. 7.- En el artículo 147, háganse las siguientes sustituciones:

En el inciso primero, sustitúyase la expresión "...y multa de mil a dos mil sucres.", por la expresión "...y multa de ochenta y siete a ciento setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América..".

En el inciso segundo, sustitúyase la expresión "...y multa de dos mil a cinco mil sucres.", por la expresión "...y multa de ciento setenta y cinco a cuatrocientos treinta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América..".

Art. 8.- En el artículo 148, sustitúyase la expresión "...y multa de quinientos a mil sucres.", por la expresión "...y multa de cuarenta y cuatro a ochenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América..".

Art. 9.- En el artículo 149, sustitúyase la expresión "...y multa de cien a trescientos sucres.", por la expresión "...y multa de nueve a veinte y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 10.- En el artículo 151, sustitúyase la expresión "...y multa de doscientos a mil sucres,..." , por la expresión "...y multa de diecisiete a ochenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."

Art. 11.- En el artículo 152, sustitúyase la expresión "...y multa de trescientos a ochocientos sucres.", por la expresión "...y multa de veinte y seis a setenta dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 12.- En el artículo 153, háganse las siguientes sustituciones:

En el inciso primero, sustitúyase la expresión "...y multa de cien a trescientos sucres.", por la expresión "...y multa de nueve a veinte y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América."

En el inciso tercero, sustitúyase la expresión "...y multa de doscientos a cuatrocientos sucres,..." , por la expresión "...y multa de diecisiete a treinta y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."

Art. 13.- En el artículo 154, sustitúyase la expresión "...y multa de quinientos a mil sucres.", por la expresión "...y multa de cuarenta y cuatro a ochenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 14.- En el artículo 155, sustitúyase la expresión "...y multa de quinientos a dos mil sucres,..." , por la expresión "...y multa de cuarenta y cuatro a ciento setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."

Art. 15.- En el artículo 156, primer inciso, sustitúyase la expresión "...y multa de cuatrocientos a ochocientos sucres.", por la expresión "...y multa de treinta y cinco a setenta dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 16.- En el artículo 157, háganse las siguientes sustituciones:

En el inciso primero, sustitúyase la expresión "...y multa de ciento a trescientos sucres,..." , por la expresión "...y multa de nueve a veinte y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."

En el inciso segundo, sustitúyanse las siguientes expresiones: "...multa de un mil a tres mil sucres;..." , y "...y multa de tres mil a diez mil sucres.", por las expresiones: "...multa de ochenta y siete a doscientos sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América;..." , y "...y multa de doscientos sesenta y dos a ochocientos setenta y tres dólares de los Estados Unidos de Norte América.", respectivamente.

Art. 17.- En el artículo 158, háganse las siguientes sustituciones:

En el inciso primero, sustitúyase la expresión "...y multa de mil a dos mil sucres,..." , por la expresión "...y multa de ochenta y siete a ciento setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."

En el inciso segundo, sustitúyase la expresión "...y multa de dos mil a cinco mil sucres.", por la expresión "...y multa de ciento setenta y cinco a cuatrocientos treinta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 18.- En el artículo 159, sustitúyase la expresión "...y multa de doscientos a quinientos sucres,..." , por la expresión "...y multa de diecisiete a cuarenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."

Art. 19.- En el artículo 160, háganse las siguientes sustituciones:

En el inciso primero (DL R.O. 36: 1-oct-79), sustitúyase la expresión "...y multa de cinco mil a diez mil sucres.", por la expresión "...y multa de cuatrocientos cuarenta y dos a ochocientos ochenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de Norte América."

En el inciso segundo, sustitúyase la expresión "...diez mil a veinte mil sucres.", por la expresión "...ochocientos ochenta y cuatro a mil setecientos sesenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 20.- En el artículo innumerado, añadido a continuación del artículo 160 (DS 1273, R.O. 705: 19-dic-74), háganse las siguientes sustituciones:

En el inciso primero, sustitúyase la expresión "...y multa de veinte mil a cincuenta mil sucres.", por la expresión "...y multa de mil setecientos sesenta y siete a cuatro mil cuatrocientos dieciocho dólares de los Estados Unidos de Norte América."

En el inciso segundo, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta mil a cien mil sucres.", por la expresión "...y multa de cuatro mil cuatrocientos dieciocho a ocho mil ochocientos treinta y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 21.- En el artículo 161, háganse las siguientes sustituciones:

En el inciso primero, sustitúyase la expresión "...y multa de quinientos a mil sucres.", por la expresión "...y multa de cuarenta y cuatro a ochenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América."

En el inciso segundo, sustitúyanse las expresiones: "...y multa de dos mil a cinco mil sucres;..." y "...y multa de cinco mil a diez mil sucres.", por las siguientes expresiones: "...y multa de ciento setenta y cinco a cuatrocientos treinta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América...." y "...y multa de cuatrocientos treinta y siete a ochocientos setenta y tres dólares de los Estados Unidos de Norte América.", respectivamente.

Art. 22.- En el artículo 162, sustitúyase la expresión "...y multa de cien a quinientos sucres.", por la expresión "...y multa de nueve a cuarenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 23.- En el artículo 163, sustitúyase la expresión "...y multa de cuatrocientos a ochocientos sucres.", por la expresión "...y multa de treinta y cinco a setenta dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 24.- En el artículo 164, háganse las siguientes sustituciones:

En el inciso primero, sustitúyase la expresión "...y multa de mil a dos mil sucres.", por la expresión "...y multa de ochenta y siete a ciento setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América."

En el inciso segundo, sustitúyanse las expresiones: "...y multa de mil a cinco mil sucres." y "...y multa de tres mil a diez mil sucres.", por las siguientes expresiones: "...y multa de ochenta y siete a cuatrocientos treinta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América." y "...y multa de doscientos sesenta y dos a ochocientos setenta y tres dólares de los Estados Unidos de Norte América.", respectivamente.

Art. 25.- En el artículo 165, sustitúyase la expresión "...y multa de cien a quinientos sucres.", por la expresión "...y multa de nueve a cuarenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 26.- En el artículo 167, sustitúyase la expresión "...y multa de cuarenta a cien sucres.", por la expresión "...y multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 27.- En el artículo 174, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a cien sucres.", por la expresión "...y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 28.- En el artículo 175, sustitúyase la expresión "...y multa de ciento a doscientos sucres.", por la expresión "...y multa de dieciséis a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 29.- En el artículo 176, sustitúyase la expresión "...y multa de ochenta a doscientos sucres,....", por la expresión "...y multa de doce a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."

Art. 30.- En el artículo 177, háganse las siguientes sustituciones:

En el inciso primero, sustitúyase la expresión "...y multa de cuarenta a cien sucres.", por la expresión "...y multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América."

En el inciso segundo, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a cien sucres.", por la expresión "...y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América."

En el inciso tercero, sustitúyase la expresión "...y multa de cuarenta a cien sucres.", por la expresión "...y multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 31.- En el artículo 180, primer inciso, sustitúyase la expresión "...y multa de ochenta a doscientos sucres.", por la expresión "...y multa de doce a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 32.- En el artículo 183, sustitúyase la expresión "...y multa de cuarenta a ochenta sucres,..." por la expresión "...y multa de seis a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."

Art. 33.- En el artículo 184, sustitúyase la expresión "...y multa de cuarenta a cien sucres,....", por la expresión "...y multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."

Art. 34.- En el artículo 185, sustitúyase la expresión "...y multa de ciento a trescientos sucres.", por la expresión "...y multa de dieciséis a cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 35.- En el artículo 191, sustitúyase la expresión "...y multa de cuarenta a cien sucres.", por la expresión "...y multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 36.- En el artículo 192, sustitúyase la expresión "...y multa de cuarenta a ochenta sucres,..." por la expresión "...y multa de seis a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."

Art. 37.- En el artículo 193, sustitúyase la expresión "...y la multa de ochenta a doscientos sucres,..." por la expresión "...y la multa de doce a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."

Art. 38.- En el artículo 195, sustitúyase la expresión "...y multa de treinta y cinco a ochenta sucres,..." por la expresión "...y multa de cinco a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."

Art. 39.- En el artículo 197, sustitúyase la expresión "...y multa de cuarenta a cien sucres,..." por la expresión "...y multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."

Art. 40.- En el artículo 198, sustitúyase la expresión "...y multa de cuarenta a ochenta sucres.", por la expresión "...y multa de seis a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 41.- En el artículo 199, sustitúyase la expresión "...y multa de cuarenta a doscientos sucres,..." por la expresión "...y multa de seis a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."

- Art. 42.-** En el artículo 201, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a quinientos sucres.", por la expresión "...y multa de ocho a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América."
- Art. 43.-** En el artículo 208, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a doscientos sucres,...", por la expresión "...y multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América,...".
- Art. 44.-** En el artículo 212, sustitúyase la expresión "...con multa de cuarenta a cien sucres,...", por la expresión "...con multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América,...".
- Art. 45.-** En el artículo 216, sustitúyase la expresión "...con multa de cincuenta a doscientos sucres...", por la expresión "...con de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América...".
- Art. 46.-** En el artículo 223, inciso primero, sustitúyase la expresión "...y multados con cuarenta a cien sucres.", por la expresión "...y multados con seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América."
- Art. 47.-** En el artículo 230, sustitúyase la expresión "...y multa de ciento a quinientos sucres.", por la expresión "...y multa de dieciséis a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América."
- Art. 48.-** En el artículo 231, inciso primero, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a trescientos sucres.", por la expresión "...y multa de ocho a cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América."
- Art. 49.-** En el artículo 235, sustitúyase la expresión "...y multa de cuarenta sucres,...", por la expresión "...y multa de seis dólares de los Estados Unidos de Norte América."
- Art. 50.-** En el artículo 236, sustitúyase la expresión "...y multa de ciento a quinientos sucres.", por la expresión "...y multa de dieciséis a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América."
- Art. 51.-** En el artículo 237, sustitúyase la expresión "...con multa de cincuenta a cien sucres.", por la expresión "...con multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América."
- Art. 52.-** En el artículo 238, primer inciso, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a cien sucres.", por la expresión "...y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América."
- Art. 53.-** En el artículo 239, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a cien sucres,...", por la expresión "...y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América,...".
- Art. 54.-** En el artículo 245, sustitúyase la expresión "...a multa de cuarenta a cuatrocientos sucres.", por la expresión "...a multa de seis a sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América."
- Art. 55.-** En el artículo 248, sustitúyase la expresión "...a multa de cincuenta a cien sucres.", por la expresión "...a multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América."
- Art. 56.-** En el artículo 249, sustitúyase la expresión "...con multa de ciento a doscientos sucres.", por la expresión "...con multa de dieciséis a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América."
- Art. 57.-** En el artículo 253, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a cien sucres...", por la expresión "...y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América...".
- Art. 58.-** En el artículo 254, sustitúyase la expresión "...con multa de cincuenta a doscientos sucres.", por la expresión "...con multa de ocho a treinta un dólares de los Estados Unidos de Norte América."
- Art. 59.-** En el artículo 255, sustitúyase la expresión "...con multa de cincuenta a doscientos sucres.", por la expresión "...con multa de ocho a treinta un dólares de los Estados Unidos de Norte América."
- Art. 60.-** En el artículo 256, sustitúyase la expresión "...con multa de cincuenta a cien sucres.", por la expresión "...con multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América."
- Art. 61.-** En el segundo artículo innumerado agregado a continuación del artículo 257 (L 6. Suplemento del Registro Oficial No. 260 de 29 de agosto de 1985), sustitúyase la expresión "...y multa de diez mil a cincuenta mil sucres.", por la expresión "...y multa de ciento noventa a novecientos cincuenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América."
- Art. 62.-** En el artículo 264, inciso cuarto, sustitúyase la expresión "...con multa de un salario mínimo vital general", por la expresión "...con multa de cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norte América...".
- Art. 63.-** En el artículo 267, sustitúyase la expresión "...con multa de cincuenta a doscientos sucres...", por la expresión "...con multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América...".
- Art. 64.-** En el artículo 280, sustitúyase la expresión "...multa de cincuenta a doscientos sucres...", por la expresión "...multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América...".
- Art. 65.-** En el artículo 284, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a cien sucres...", por la expresión "...y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América...".
- Art. 66.-** En el artículo 285, háganse las siguientes sustituciones:

En el inciso primero, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a cien sucres,...", por la expresión "...y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América,...".

En el inciso segundo, sustitúyase la expresión "...y multa de cuarenta a doscientos sucres,...", por la expresión "...y multa de seis a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América,...".

Art. 67.- En el artículo 286, sustitúyase la expresión "...y con multa de ciento a quinientos sucres,...", por la expresión "...y con multa de dieciséis a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América,...".

Art. 68.- En el artículo 287, sustitúyase la expresión "...y multa de ciento a mil sucres,...", por la expresión "...y multa de

dieciséis a ciento cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."

Art. 69.- En el artículo 289, sustitúyase la expresión "...en ningún caso esta multa podrá ser menor de cincuenta sucres.", por la expresión "...en ningún caso esta multa podrá ser menor de ocho dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 70.- En el artículo 293, sustitúyase la expresión "...con multa de cincuenta a quinientos sucres,..." , por la expresión "...con multa de ocho a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."

Art. 71.- En el artículo 296, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a doscientos sucres.", por la expresión "...y multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 72.- En el artículo 297, sustitúyase la expresión "...y multa de ochenta a doscientos sucres.", por la expresión "...y multa de doce a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 73.- En el artículo 302, sustitúyase la expresión "...con multa de cuarenta a cien sucres.", por la expresión "...con multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 74.- En el artículo 303, sustitúyase la expresión "...y con multa de cincuenta a doscientos sucres,..." , por la expresión "...y con multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."

Art. 75.- En el artículo 313, inciso primero, sustitúyase la expresión "...y multa de ciento a cuatrocientos sucres.", por la expresión "...y multa de dieciséis a sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 76.- En el artículo 314, sustitúyase la expresión "...y multa de ciento a cuatrocientos sucres,..." , por la expresión "...y multa de dieciséis a sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."

Art. 77.- En el artículo 315, háganse las siguientes sustituciones:

En el inciso primero, sustitúyase la expresión "...y multa de ciento a cuatrocientos sucres.", por la expresión "...y multa de dieciséis a sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América."

En el inciso tercero, sustitúyase la expresión "...por multa de cuatrocientos a ochocientos sucres.", por la expresión "...por multa de sesenta y dos a ciento veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 78.- En el artículo 316, inciso primero, sustitúyase la expresión "...y multa de cuarenta a ciento sesenta sucres,..." , por la expresión "...y multa de seis a veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."

Art. 79.- En el artículo 318, háganse las siguientes sustituciones:

En el inciso primero, sustitúyase la expresión "...y multa de ciento a mil sucres,..." , por la expresión "...y multa de dieciséis a ciento cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."

En el inciso segundo, sustitúyase la expresión "...y multa de ciento a quinientos sucres,..." , por la expresión "...y multa de dieciséis a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."

Art. 80.- En el artículo 319, háganse las siguientes sustituciones:

En el inciso primero, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a cuatrocientos sucres.", por la expresión "...y multa de ocho a sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América."

En el inciso segundo, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a doscientos sucres,..." , por la siguiente expresión "...y multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."

Art. 81.- En el artículo 321, háganse las siguientes sustituciones:

En el inciso primero, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a trescientos sucres.", por la expresión "...y multa de ocho a cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América."

En el inciso segundo, sustitúyase la expresión "...y multa de cuarenta a ochenta sucres.", por la expresión "...y multa de seis a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 82.- En el artículo 322, sustitúyanse las expresiones: "...y multa de cincuenta a trescientos sucres;..." y "...y multa de cuarenta a sesenta sucres.", por las expresiones: "...y multa de ocho a cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América;..." y "...y multa de seis a nueve dólares de los Estados Unidos de Norte América.", respectivamente.

Art. 83.- En el artículo 325, sustitúyase la expresión "...con multa de cuarenta a cien sucres..." , por la expresión "...con multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América..."

Art. 84.- En el artículo 326, sustitúyase la expresión "...y multa de ciento a mil sucres..." , por la expresión "...y multa de nueve a ochenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América..."

Art. 85.- En el artículo 328, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a cien sucres.", por la expresión "...y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América..."

Art. 86.- En el artículo 331, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a doscientos sucres.", por la expresión "...y multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 87.- En el artículo 336, sustitúyase la expresión "...con multa de cuarenta a cien sucres:", por la expresión "...con

multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 88.- En el artículo 344, primer inciso, sustitúyase la expresión "...con multa de cuarenta a cien sucres.", por la expresión "...con multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 89.- En el artículo 346, primer inciso, sustitúyase la expresión "...y multa de cuarenta a cuatrocientos sucres.", por la expresión "...y multa de seis a sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 90.- En el artículo 351, sustitúyase la expresión "...y multa de cuarenta a cuatrocientos sucres.", por la expresión "...y multa de seis a sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 91.- En el artículo 361, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a cuatrocientos sucres.", por la expresión "...y multa de ocho a sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 92.- En el artículo 362, primer inciso, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a doscientos sucres...", por la expresión "... y multa de seis a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."

Art. 93.- En el artículo 363, sustitúyase la expresión "...y multa de doscientos a ochocientos sucres:", por la expresión "... y multa de treinta y un a ciento veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América:"

Art. 94.- En el artículo 365, sustitúyase la expresión "...y debiendo ser la multa de quinientos a dos mil sucres.", por la expresión "... y debiendo ser la multa de setenta y siete a trescientos once dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 95.- En el artículo 367, háganse las siguientes sustituciones:

En el inciso primero, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a cien sucres.", por la expresión "...y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América."

En el inciso tercero, sustitúyase la expresión "...y multa de doscientos a mil sucres,..." por la siguiente expresión "...y multa de treinta y un a ciento cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."

Art. 96.- En el artículo 368, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a quinientos sucres...", por la expresión "... y multa de ocho a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."

Art. 97.- En el artículo 377, háganse las siguientes sustituciones:

En el inciso primero, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a cien sucres,..." por la expresión "...y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."

En el inciso segundo, sustitúyase la expresión "...y multa de cuarenta a sesenta sucres.", por la siguiente expresión "...y multa de seis a nueve dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 98.- En el artículo 378, sustitúyase la expresión "...y multa de cuarenta sucres.", por la expresión "... y multa de seis dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 99.- En el artículo 379, sustitúyanse las expresiones: "...y multa de cincuenta a cien sucres,..." y "...y multa de cuarenta a ochenta sucres.", por las expresiones: "...y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América,..." y "...y multa de seis a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América.", respectivamente.

Art. 100.- En el artículo 387, sustitúyase la expresión "...con multa de cincuenta a quinientos sucres...", por la expresión "... con multa de ocho a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América..."

Art. 101.- En el artículo 389, háganse las siguientes sustituciones:

En el inciso segundo, sustitúyase la expresión "...y multa de cuarenta a ciento sesenta sucres.", por la expresión "...y multa de seis a veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América."

En el inciso cuarto, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a doscientos sucres.", por la expresión "...y multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América."

En el inciso quinto, sustitúyanse las expresiones "...y multa de cuarenta a cien sucres;" y "...y multa de cuarenta a sesenta sucres.", por las expresiones: "...y multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América;" y "...y multa de seis a nueve dólares de los Estados Unidos de Norte América.", respectivamente.

Art. 102.- En el artículo 394, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a cien sucres...", por la expresión "... y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América..."

Art. 103.- En el artículo 399, inciso primero, sustitúyase la expresión "...y multa de ciento a quinientos sucres.", por la expresión "... y multa de dieciséis a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 104.- En el artículo 401, inciso primero, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a cien sucres,..." por la expresión "... y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."

Art. 105.- En el artículo 402, inciso segundo, sustitúyase la expresión "...y multa de ciento a quinientos sucres.", por la expresión "... y multa de dieciséis a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 106.- En el artículo 403, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a cien sucres.", por la expresión "... y multa

de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 107.- En el artículo 408, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a cien sucres,..." por la expresión "... y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."

Art. 108.- En el artículo 409, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a cien sucres,..." por la expresión "... y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."

Art. 109.- En el artículo 410, háganse las siguientes sustituciones:

En el inciso primero, sustitúyase la expresión "...y multa de cuarenta a sesenta sucres.", por la expresión "...y multa de seis a nueve dólares de los Estados Unidos de Norte América."

En el inciso segundo, sustitúyase la expresión "...ni de doscientos sucres en cuanto a la multa.", por la expresión "...ni de treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América en cuanto a la multa."

Art. 110.- En el artículo 411, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a cien sucres.", por la expresión "... y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 111.- En el artículo 412, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a cien sucres.", por la expresión "... y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 112.- En el artículo 413, háganse las siguientes sustituciones:

En el inciso segundo, sustitúyase la expresión "...y multa de cuarenta a sesenta sucres;", por la expresión "...y multa de seis a nueve dólares de los Estados Unidos de Norte América;".

En el inciso tercero, sustitúyase la expresión "...y multa de cuarenta sucres;...", por la expresión "...y multa de seis dólares de los Estados Unidos de Norte América;..."

En el inciso cuarto, sustitúyase la expresión "...y la multa de cuarenta a sesenta sucres.", por la expresión "...y la multa de seis a nueve dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 113.- En el artículo 414, sustitúyase la expresión "...y multa de cuarenta a sesenta sucres.", por la expresión "... y multa de seis a nueve dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 114.- En el artículo 416, primer inciso, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a mil sucres,..." por la expresión "... y multa de ocho a ciento cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."

Art. 115.- En el artículo 418, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a quinientos sucres,..." por la expresión "... y multa de ocho a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."

Art. 116.- En el artículo 419, primer inciso, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a mil sucres,..." por la expresión "... y multa de ocho a ciento cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."

Art. 117.- En el artículo 420, primer inciso, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a quinientos sucres,..." por la expresión "... y multa de ocho a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."

Art. 118.- En el artículo 421, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a trescientos sucres,..." por la expresión "... y multa de ocho a cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."

Art. 119.- En el artículo 428, háganse las siguientes sustituciones:

En el inciso primero, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a doscientos sucres.", por la expresión "...y multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América."

En el inciso segundo, sustitúyase la expresión "...y multa de ciento a cuatrocientos sucres.", por la expresión "...y multa de dieciséis a sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 120.- En el artículo 432, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a mil sucres...", por la expresión "... y multa de ocho a ciento cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América..."

Art. 121.- En el artículo 433, primer inciso, sustitúyase la expresión "...y multa de ciento a mil sucres.", por la expresión "... y multa de dieciséis a ciento cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 122.- En el artículo 434, sustitúyase la expresión "...la multa de cincuenta a quinientos sucres,..." por la expresión "... la multa de ocho a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."

Art. 123.- En el artículo 435, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a quinientos sucres,..." por la expresión "... y multa de ocho a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."

Art. 124.- En el artículo 437, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a quinientos sucres,..." por la expresión "... y multa de ocho a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."

Art. 125.- En el artículo 439, sustitúyase la expresión "...y multa de cuarenta a ochenta sucres.", por la expresión "... y multa de seis a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 126.- En el artículo 454, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a quinientos sucres,..." por la expresión "... y multa de ocho a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."

Art. 127.- En el artículo 460, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a doscientos sucres,..." , por la expresión "... y multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América,..." .

Art. 128.- En el artículo 461, sustitúyase la expresión "...y multa de doscientos a quinientos sucres." , por la expresión "... y multa de treinta y un a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América." .

Art. 129.- En el artículo 463, háganse las siguientes sustituciones:

En el inciso primero, sustitúyase la expresión "...y multa de cuarenta a ochenta sucres." , por la expresión "...y multa de seis a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América." .

En el inciso segundo, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a cien sucres." , por la expresión "...y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América." .

Art. 130.- En el artículo 464, háganse las siguientes sustituciones:

En el inciso primero, sustitúyase la expresión "...y multa de ochenta a doscientos sucres." , por la expresión "...y multa de doce a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América." .

En el inciso segundo, sustitúyase la expresión "...y la multa de ciento a trescientos sucres." , por la expresión "...y la multa de dieciséis a cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América." .

Art. 131.- En el artículo 465, háganse las siguientes sustituciones:

En el inciso primero, sustitúyase la expresión "...y multa de ciento a trescientos sucres." , por la expresión "...y multa de dieciséis a cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América." .

En el inciso segundo, sustitúyase la expresión "...y la multa de ciento a cuatrocientos sucres." , por la expresión "...y la multa de dieciséis a sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América." .

Art. 132.- En el artículo 466, háganse las siguientes sustituciones:

En el inciso primero, sustitúyase la expresión "...y multa de ciento a quinientos sucres." , por la expresión "...y multa de dieciséis a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América." .

En el inciso segundo, sustitúyase la expresión "...y la multa de doscientos a ochocientos sucres." , por la expresión "...y multa de treinta y un a ciento veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América." .

Art. 133.- En el artículo 467, háganse las siguientes sustituciones:

En el inciso primero, sustitúyase la expresión "...y multa de doscientos a ochocientos sucres,..." , por la expresión "...y multa de treinta y un a ciento veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América,..." .

En el inciso segundo, sustitúyase la expresión "...y multa de ciento a mil sucres,..." , por la expresión "...y multa de dieciséis a ciento cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América,..." .

Art. 134.- En el artículo 468, sustitúyase la expresión "...y multa de ochenta a doscientos sucres,..." , por la expresión "... y multa de doce a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América,..." .

Art. 135.- En el artículo 470, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a cien sucres." , por la expresión "... y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América." .

Art. 136.- En el artículo 472, sustitúyase la expresión "...y multa de cuarenta a ochenta sucres,..." , por la expresión "... y multa de seis a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América,..." .

Art. 137.- En el artículo 474, sustitúyase la expresión "...y multa de cuarenta sucres,..." , por la expresión "... y multa de seis dólares de los Estados Unidos de Norte América,..." .

Art. 138.- En el artículo 475, sustitúyase la expresión "...y multa de cuarenta a cien sucres,..." , por la expresión "... y multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América,..." .

Art. 139.- En el artículo 476, háganse las siguientes sustituciones:

En el inciso segundo, sustitúyase la expresión "...y multa de cincuenta a doscientos sucres;..." , por la expresión "...y multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América;..." .

En el inciso tercero, sustitúyase la expresión "...y multa de ciento a trescientos sucres." , por la expresión "...y multa de dieciséis a cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América." .

Art. 140.- En el artículo 481, sustitúyase la expresión "...y multa de cuarenta a cien sucres." , por la expresión "... y multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América." .

Art. 141.- En el artículo 483, primer inciso, sustitúyase la expresión "...y multa de ochenta a doscientos sucres." , por la

expresión "... y multa de doce a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 142.- En el artículo 491, primer inciso, sustitúyase la expresión "...y multa de cuarenta a ciento sesenta sucres...", por la expresión "... y multa de seis a veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América..."

Art. 143.- En el artículo 492, sustitúyase la expresión "...y multa de cuarenta a ochenta sucres,..." , por la expresión "... y multa de seis a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."

Art. 144.- En el artículo 493, háganse las siguientes sustituciones:

En el inciso primero, sustitúyase la expresión "...y multa de cuarenta a ciento sesenta sucres;...", por la expresión "...y multa de seis a veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América;..."

En el inciso segundo, sustitúyase la expresión "...y multa de cuarenta a ciento veinte sucres.", por la expresión "...y multa de seis a diecinueve dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 145.- En el artículo 494, sustitúyase la expresión "...y multa de cuarenta a doscientos sucres,..." , por la expresión "... y multa de seis a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."

Art. 146.- En el artículo 495, sustitúyase las expresiones: "... y multa de cuarenta a ochenta sucres;..."y "...y multa de cuarenta sucres.", por las expresiones "... y multa de seis a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América;... " y "... y multa de seis dólares de los Estados Unidos de Norte América.", respectivamente.

Art. 147.- En el artículo 500, inciso segundo, sustitúyase la expresión "...imponerles multa hasta de cien sucres...", por la expresión "...imponerles multa hasta de dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América..."

Art. 148.- En el artículo 501, sustitúyase la expresión "... y multa de cuarenta a ciento veinte sucres;..." , por la expresión "... y multa de seis a diecinueve dólares de los Estados Unidos de Norte América;..."

Art. 149.- En el artículo 529, sustitúyase la expresión "... y multa de cuarenta a cien sucres..." , por la expresión "... y multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América..."

Art. 150.- En el artículo 537, sustitúyase la expresión "... y multa de ciento a mil sucres.", por la expresión "... y multa de dieciséis a ciento cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 151.- En el artículo 538, inciso primero, sustitúyase la expresión "... con multa de cincuenta a quinientos sucres..." , por la expresión "... con multa de ocho a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América..."

Art. 152.- En el artículo 540, sustitúyase la expresión "... y multa de cuatrocientos a mil sucres.", por la expresión "... y multa de sesenta y dos a ciento cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 153.- En el artículo 544, sustitúyase la expresión "... y multa de cuarenta a ochenta sucres.", por la expresión "... y multa de seis a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 154.- En el artículo 545, sustitúyase la expresión "... y multa de cuarenta a sesenta sucres.", por la expresión "... y multa de seis a nueve dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 155.- En el artículo 546, sustitúyase la expresión "... y multa de cuarenta a ochenta sucres..." , por la expresión "... y multa de seis a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América..."

Art. 156.- En el artículo 560, sustitúyase la expresión "... y multa de cincuenta a cien sucres.", por la expresión "... y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 157.- En el artículo 561, sustitúyase la expresión "... y multa de cuarenta a ochenta sucres..." , por la expresión "... con multa de seis a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América..."

Art. 158.- En el artículo 562, inciso primero, sustitúyase la expresión "... con multa de cuarenta a doscientos sucres.", por la expresión "... y multa de seis a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 159.- En el artículo 563, sustitúyase la expresión "... y multa de cincuenta a mil sucres.", por la expresión "... y multa de ocho a ciento cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 160.- En el artículo 564, inciso primero, sustitúyase la expresión "... y multa de cuarenta a trescientos sucres..." , por la expresión "... y multa de seis a cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América..."

Art. 161.- En el artículo 565, sustitúyase la expresión "... y multa de cuarenta a ciento sesenta sucres..." , por la expresión "... y multa de seis a veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América..."

Art. 162.- En el artículo 566, inciso primero, sustitúyase la expresión "... y multa de cuarenta a cien sucres:" , por la expresión "... y multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América:"

Art. 163.- En el artículo 567, sustitúyase la expresión "... y multa de ciento a cuatrocientos sucres,..." por la expresión "... y multa de dieciséis a sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."

Art. 164.- En el artículo 569, sustitúyase la expresión "... y multa de cuarenta a cien sucres.", por la expresión "... y multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 165.- En el artículo 571, inciso primero, sustitúyase la expresión "... y multa de cuarenta a doscientos sucres.", por la expresión "... y multa de seis a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 166.- En el artículo 573, inciso primero, sustitúyase la expresión "... y multa de cuarenta a cuatrocientos sucres..." , por la expresión "... y multa de seis a sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América..."

Art. 167.- En el artículo 574, inciso primero, sustitúyase la expresión "... y multa de cien a cinco mil sucres.", por la expresión "... y multa de nueve a cuatrocientos treinta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América."

Art. 168.- En el artículo 579, inciso primero, sustitúyase la expresión "... y multa de cuarenta a cuatrocientos sucres:", por la expresión "... y multa de seis a sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América:".

Art. 169.- En el artículo 582, sustitúyase la expresión "... y multa de cuarenta a doscientos sucres.", por la expresión "... y multa de cinco a veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América:".

Art. 170.- En el artículo 584, sustitúyase la expresión "... y multa de ciento a dos mil sucres,..."", por la expresión "... y multa de dieciséis a trescientos once dólares de los Estados Unidos de Norte América,..."

Art. 171.- En el artículo 585, sustitúyase la expresión "... y multa de doscientos a dos mil sucres.", por la expresión "... y multa de treinta y uno a trescientos once dólares de los Estados Unidos de Norte América:".

Art. 172.- En el artículo 586, sustitúyase la expresión "... y multa de ciento a mil sucres..."", por la expresión "... y multa de dieciséis a ciento cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América..."

Art. 173.- En el artículo 590, háganse las siguientes sustituciones:

En el inciso primero, sustitúyase la expresión "... y multa de cincuenta a doscientos sucres.", por la expresión "... y multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América:".

En el inciso segundo, sustitúyase la expresión "... y multa de cincuenta a doscientos sucres.", por la expresión "... y multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América:".

Art. 174.- En el artículo 604, sustitúyase la expresión "... con multa de quince a treinta sucres:", por la expresión "... y multa de dos a cuatro dólares de los Estados Unidos de Norte América:".

Art. 175.- En el artículo 605, sustitúyase la expresión "... con multa de treinta y cinco a sesenta sucres:", por la expresión "... con multa de cuatro a siete dólares de los Estados Unidos de Norte América:".

Art. 176.- En el artículo 606, sustitúyase la expresión "... con multa de sesenta y uno a ciento veinte sucres:", por la expresión "... con multa de siete a catorce dólares de los Estados Unidos de Norte América:".

Art. 177.- En el artículo 607, sustitúyase la expresión "... con multa de ciento veintiuno a doscientos cuarenta sucres:", por la expresión "... con multa de catorce a veinte y ocho dólares de los Estados Unidos de Norte América:".

Art. 178.- En el artículo agregado a continuación del artículo 607 (artículo 3.- Ley 99-49.- Registro Oficial No. 2.- 25-I-2000), sustitúyase la expresión "... y multa de cinco a diez salarios mínimos vitales generales:", por la expresión "... y multa de cuarenta y cuatro a ochenta y ocho dólares de los Estados Unidos de Norte América:".

Dada, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Pleno del Congreso Nacional del Ecuador a los treinta y un días del mes de julio del año dos mil dos.

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL (Ley No. 2002-91, R.O. 716, 2-XII-2002)

CONGRESO NACIONAL

Considerando:

Que mediante Registro Oficial No. 110 de 30 de junio del 2000, se publicó la Ley Reformatoria al Código Penal, en lo que se refiere al tráfico ilegal de migrantes;

Que la referida Ley Reformatoria, establece como tipo penal la acción de "facilitar por medios ilegales el tráfico ilegal de personas hacia otros países";

Que dicha norma, es insuficiente para combatir y sancionar ese tipo de prácticas de tráfico ilegal de personas, pues no contempla sanciones para acciones concretas que posibilitan el tráfico ilegal de migrantes, como son la falsificación de pasaportes y documentos de viaje;

Que la reforma no establece responsabilidad alguna, cuando a causa del tráfico ilegal de migrantes, se produce lesiones o la muerte de los mismos, situación que se produce de manera muy frecuente; y,

En ejercicio de la atribución conferida en el numeral 5 del artículo 130 (132) de la Constitución Política de la República, expide la siguiente:

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL

Art. 1.- Sustitúyase el artículo 343 del Código Penal, por el siguiente:

Art. 343.- El que hubiere imitado o falsificado un pasaporte, o cualquier otro documento público de viaje, nacional o extranjero, o hubiese hecho uso doloso de los referidos documentos, será reprimido con la pena de reclusión menor ordinaria de tres a seis años.

No tendrá responsabilidad alguna quien haya sido inducido a utilizar tales documentos, cuando sea víctima del tráfico ilegal de migrantes.

Art. 2.- A continuación del artículo 440-A, introducido al Código Penal, mediante reforma publicada en el Registro Oficial No. 110 del 30 de junio del 2000, agréguese el siguiente artículo

Art. 440 B.- Si a consecuencia de los actos de ejecución del tráfico ilegal de migrantes las víctimas sufrieren lesiones previsibles, de aquellas contempladas en los artículos 465, 466 y 467 de este Código, se impondrá a quienes hayan facilitado las migraciones ilegales, una pena de seis a nueve años de reclusión menor ordinaria, según la gravedad de la lesión y en caso de muerte, la pena será reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años.

Art. 3.- Agréguese al artículo 563 del Capítulo V del Título X del Libro II del Código Penal, el siguiente inciso:

"La pena será de reclusión menor ordinaria de tres a seis años, si la defraudación se cometiera en caso de migraciones ilegales".

Artículo Final.- La presente ley entrará en vigencia, a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dada, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala de sesiones del Congreso Nacional del Ecuador, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil dos.

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL (Ley No. 2002-97, R.O. 733-S, 27-XII-2002)

Nota:

En la presente edición de la Ley 2002-97 sólo se ha incluido el capítulo que tiene relación con el Código Penal.

CONGRESO NACIONAL

Considerando:

Que la Ley Especial de Desarrollo Turístico, promulgada en el Registro Oficial 118 del 28 de enero de 1997, a la fecha se encuentra desactualizada, por lo que es necesario incorporar disposiciones que estén acordes con la vigente Constitución Política de la República;

Que el Plan de Competitividad Turística planteó la necesidad de actualizar la legislación turística ecuatoriana, reincorporando importantes disposiciones de la Ley Especial de Desarrollo Turístico, que no han perdido vigencia en el tiempo a fin de atraer la inversión e inyectar divisas a nuestra economía;

Que el Decreto Ejecutivo 1424, publicado en el Registro Oficial 309 de 19 de abril del 2001, declaró como Política Prioritaria de Estado el desarrollo del turismo en el país; y,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente:

LEY DE TURISMO

Capítulo XI

DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA

Art. 440-B.- La persona o personas que instigaren, promovieren o ejecutaren actividades turísticas con el objeto de cometer o perpetrar el delito de plagio tipificado en el artículo 188 y contemplado en el Capítulo III referido a los "Delitos contra la Libertad Individual", del Título II, Libro Primero del Código Penal; de los delitos contra las personas contempladas en el Título VI y particularmente tipificados en el Capítulo I referido a los delitos contra la vida; en el Capítulo II relacionado con "Las Lesiones" y el Capítulo III relativo al "Abandono de Personas" del Libro II del Código Penal; de los delitos sexuales contemplados en el Título VIII, en los Capítulos II relativo al "Atentado contra el Pudor, de

la violación y del estupro", el Capítulo II atinente a los delitos de proxenetismo y corrupción de menores y Capítulo IV relativo al rapto; el Libro Segundo del Código Penal, de los delitos contra la propiedad contemplados en el Título X y particularmente tipificados en el Capítulo I relacionado con el delito de hurto, el Capítulo II acerca del delito de robo, el Capítulo IV relativo al delito de extorsión y el Capítulo V referido a las estafas y otras defraudaciones del Libro II del Código Penal, se les impondrá el máximo de la pena que corresponda a la naturaleza de la correspondiente infracción. Así mismo, quienes cometieran delitos previstos en este artículo contra personas que tengan la condición de turistas y a sabiendas que tenía tal condición se les impondrá la máxima pena prevista para la infracción perpetrada.

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL (Ley No. 2005-2, R.O. 45, 23-VI-2005)

EL CONGRESO NACIONAL

Considerando:

Que el numeral 5 del artículo 130 (132) de la Constitución Política de la República, establece como uno de los deberes y atribuciones del Congreso Nacional el expedir, reformar y derogar las leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio;

Que es obligación fundamental del Estado, garantizar la vigencia de los derechos humanos, las libertades fundamentales de las personas y la seguridad jurídica;

Que en la actualidad es necesario legislar con la finalidad de incorporar al Código Penal, reformas destinadas a garantizar una adecuada tipificación de los delitos que tienen relación con la explotación sexual de los menores de edad;

Que de conformidad con el numeral 2, del artículo 141 (132, num. 2) de la Constitución Política de la República, se requiere de la expedición de una ley para tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes; y,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente:

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL QUE TIPIFICA LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL DE LOS MENORES DE EDAD

Art. 1.- Sustitúyese el artículo 22, por el siguiente:

"Art. 22.- Tampoco hay infracción alguna cuando una persona mata o causa lesiones a otra en el momento de ser víctima de un delito de abuso sexual o violación".

Art. 2.- A continuación del artículo 29, agrégase uno que dice:

"Art. ... - Para los delitos de trata de personas y delitos sexuales, no se considerarán circunstancias atenuantes, excepto las siguientes:

1. La contemplada en el numeral 5 del artículo 29; y,

2. Que el sospechoso, imputado o acusado colabore eficazmente con las autoridades en la investigación del delito".

Art. 3.- Al final del numeral 4 del artículo 30, suprímese la conjunción: "y"; y, al final del artículo 30, agrégase como numeral 6, el siguiente:

"6. Ejecutar la infracción por motivos de discriminación, referente al lugar de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, posición económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diferencia de cualquier otra índole".

Art. 4.- A continuación del artículo 30, añádese el siguiente innumerado:

"Art. ... - En el caso de delitos sexuales y de trata de personas, se considerarán como circunstancias agravantes, cuando no fueren constitutivas o modificatorias de la infracción y se aplicarán sin perjuicio de las circunstancias agravantes generales señaladas en el artículo anterior, las siguientes:

1. Si la víctima es una persona mayor de sesenta años o menor de dieciocho años de edad, persona con discapacidad o de aquellas que el Código Civil considera incapaces;
2. Encontrarse la víctima, al momento de la comisión del delito, en establecimientos públicos o privados, tales como los de salud, educación, culto, investigación, asistencia o refugio, en centros de rehabilitación social o en recintos policiales o militares, u otros similares;
3. Aprovecharse de que la víctima atraviesa por una situación de vulnerabilidad, extrema necesidad económica o de abandono;
4. Haber contagiado a la víctima con una enfermedad grave, incurable o mortal, o haberle producido lesiones que causen incapacidad permanente, mutilaciones, pérdida o inutilización de órganos, discapacidad física, perturbación emocional, trastorno psicológico o mental;
5. Si la víctima estuviere o resultare embarazada, o si estuviere en puerperio, o si abortare como consecuencia de la comisión del delito;
6. Si la víctima estuviere incapacitada física o mentalmente;
7. Tener el infractor algún tipo de relación de poder y/o autoridad sobre la víctima, o si es adoptante, tutor, curador o si tiene bajo su cuidado, por cualquier motivo, a la víctima;
8. Compartir con la víctima el ámbito familiar;
9. Conocer a la víctima con anterioridad a la comisión del delito;
10. Si el delito sexual ha sido cometido como una forma de tortura, o con fines de intimidación, degradación, humillación, discriminación, venganza o castigo;
11. Si el delito ha sido cometido por funcionarios públicos, docentes o ministros de algún culto, que han abusado de su posición para cometerlo, por profesionales de la salud y personas responsables en la atención del cuidado del paciente; o cualquier otra clase de profesional o persona que hubiere abusado de su función o cargo para cometer el delito; y,
12. Haber utilizado para cometer el delito, alguna sustancia que altere el conocimiento o la voluntad de la víctima."

Art. 5.- Sustitúyese el artículo 31, por el siguiente:

"Art. 31.- Se reputará como circunstancia agravante de la infracción el hecho de ser la víctima cónyuge, conviviente, pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o ser ascendiente o descendiente del ofensor."

Art. 6.- Sustitúyese el artículo 40, por el siguiente:

"Art. 40.- Las personas que no hayan cumplido los 18 años de edad, estarán sujetas al Código de la Niñez y Adolescencia."

Art. 7.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 57, por el siguiente:

"No se interpondrá pena de reclusión al mayor de sesenta años, excepto en los delitos sexuales y de trata de personas, casos en que el sindicado tampoco podrá cumplir prisión preventiva domiciliaria. El que en tal edad cometiere un delito reprimido con reclusión, cumplirá el tiempo de la condena en un establecimiento destinado a prisión correccional."

Art. 8.- A continuación del Capítulo III del Título II del Libro II, agréga-se dos Capítulos, uno denominado: "DEL DELITO RELATIVO A LA TRATA DE PERSONAS"; y, otro denominado: "DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA EXTRACCIÓN Y TRÁFICO ILEGAL DE ÓRGANOS", constituidos por los siguientes artículos:

"Capítulo ...

DEL DELITO RELATIVO A LA TRATA DE PERSONAS

Art. ... - Constituye delito de trata de personas, aunque medie el consentimiento de la víctima, el promover, inducir, participar, facilitar o favorecer la captación, traslado, acogida, recepción o entrega de personas recurriendo a la amenaza, violencia, engaño o cualquier otra forma fraudulenta, con fines de explotación ilícita, con o sin fines de lucro.

Para efectos de esta infracción, se considera explotación toda forma de trabajos o servicios forzados, esclavitud laboral,

venta y/o utilización de personas para mendicidad, conflictos armados o reclutamiento para fines delictuosos.

Art.- La trata de personas será reprimida con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años, siempre que no constituya explotación sexual. Si la víctima fuere una persona menor de dieciocho años, la pena será de reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años.

Art.- La pena será de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años cuando en la comisión del delito establecido en el artículo anterior concurre una o más de las siguientes circunstancias:

1. Que la víctima sea menor de catorce años de edad;
2. Que, como consecuencia del delito, la víctima sufra lesión corporal grave o permanente, o daño psicológico irreversible;
3. Si el infractor es cónyuge, conviviente o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ascendiente o descendiente de la víctima; y,
4. Cuando el infractor se aprovechare de la vulnerabilidad de la víctima o ésta se encontrare incapacitada para resistir la agresión.

Art.- Quien venda, compre o realice cualquier transacción, en virtud de la cual una persona es entregada, por pago o cualquier otro medio, con fines de explotación, será sancionado con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años. Constituye tentativa la oferta en venta.

Si la víctima fuere una persona menor de dieciocho años, la pena será de reclusión mayor extraordinaria de nueve a doce años; y, si fuere menor de doce años, la pena será de doce a dieciséis años de reclusión mayor extraordinaria.

Capítulo ...

DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA EXTRACCIÓN Y TRÁFICO ILEGAL DE ÓRGANOS

Art.- Quien, en forma dolosa, extraiga, trafique, transplante, venda o compre órganos, sustancias corporales o materiales anatómicos de cadáveres humanos, será reprimido con prisión de tres a cinco años.

La pena será de reclusión menor extraordinaria de tres a ocho años, si estos órganos, sustancias corporales o material anatómico provienen de personas vivas.

Si los órganos, sustancias corporales o materiales anatómicos pertenecen a personas menores de dieciocho años de edad o a personas con discapacidad, la pena será de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años.

Si como consecuencia de la extracción de órganos, sustancias corporales o materiales anatómicos, se produjere la muerte o una incapacidad total y permanente, se aplicará la pena de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años.

Si el autor del delito es un profesional médico, obstetra o afín, a más de las penas señaladas en este Capítulo, quedará inhabilitado en forma permanente para el ejercicio de su profesión o actividad."

Art. 9.- Incorpórase como artículo innumerado, al inicio del Capítulo II, del Título VIII, del Libro II, el siguiente:

"Art.- Será reprimido con reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años, quien someta a una persona menor de dieciocho años de edad o con discapacidad, para obligarla a realizar actos de naturaleza sexual, sin que exista acceso carnal."

Art. 10.- Deróganse los artículos 505, 506, 507 y 511.

Art. 11.- Sustitúyese en el artículo 509, la frase: "... con una mujer honesta ...", por: "... con una persona ...".

Art. 12.- Sustitúyese en el artículo 510, la palabra: "... mujer ..."; por: "... víctima ...".

Art. 13.- Sustitúyese el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 511, por el siguiente:

"Art.- Quien solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente, religiosa o similar, con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima, o a su familia, un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación, será sancionado con pena de prisión de seis meses a dos años.

Con la misma pena será reprimido quien, de conformidad con lo previsto en el inciso anterior, actúe prevaliéndose del

hecho de tener a su cargo trámites o resoluciones de cualquier índole.

El que solicitare favores o realizare insinuaciones maliciosas de naturaleza sexual que atenten contra la integridad sexual de otra persona, y que no se halle previsto en los incisos anteriores, será reprimido con pena de prisión de tres meses a un año.

Las sanciones previstas en este artículo, incluyen necesariamente la prohibición permanente de realizar actividades que impliquen contacto con la víctima.

Si el acoso sexual se cometiere en contra de personas menores de edad, será sancionado con prisión de dos a cuatro años."

Art. 14.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 512, por el siguiente:

"Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o, la introducción, por vía vaginal o anal, de los objetos, dedos u órganos distintos del miembro viril, a una persona de cualquier sexo, en los siguientes casos: "

Art. 15.- Derógase el artículo innumerado, agregado a continuación del artículo 512.

Art. 16.- Sustitúyese en el artículo 513, la frase: "reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años", por: "reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años"; y, la frase: "reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años", por: "reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años".

Art. 17.- Sustitúyese el primer inciso del artículo 514, por el siguiente:

"Si la violación produjere una grave perturbación en la salud de la persona violada se aplicará la pena establecida para los numerales 2 y 3 del artículo anterior; y, si le produjere la muerte, la pena será de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años."

Art. 18.- A continuación del Capítulo III, del Título VIII, del Libro II agréganse dos capítulos, uno denominado: "DE LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL"; y, otro denominado: "DISPOSICIONES COMUNES A LOS DELITOS SEXUALES Y DE TRATA DE PERSONAS", constituidos por los siguientes artículos:

"Capítulo ...

DE LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL

Art. ... - Quien produjere, publicare o comercializare imágenes pornográficas, materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato, u organizare espectáculos en vivo, con escenas pornográficas en que participen los mayores de catorce y menores de dieciocho años, será reprimido con la pena de seis a nueve años de reclusión menor ordinaria, el comiso de los objetos y de los bienes producto del delito, la inhabilidad para el empleo, profesión u oficio.

Con la misma pena incurrirá quien distribuyere imágenes pornográficas, cuyas características externas hiciere manifiesto que en ellas sea grabado o fotografiado la exhibición de mayores de doce y menores de dieciocho años al momento de la creación de la imagen.

Con la misma pena será reprimido quien facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico en cuyas imágenes participen menores de edad.

Cuando en estas infracciones, la víctima sea un menor de doce años o discapacitado, o persona que adolece enfermedad grave incurable, la pena será de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, al pago de la indemnización, el comiso de los objetos y de los bienes producto del delito, a la inhabilidad del empleo, profesión u oficio; y, en caso de reincidencia, la pena será de veinticinco años de reclusión mayor especial.

Cuando el infractor de estos delitos sea el padre, la madre, los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, los tutores, los representantes legales, los curadores o cualquier persona del contorno íntimo de la familia, los ministros de culto, los maestros y profesores y, cualquier otra persona que por su profesión u oficio hayan abusado de la víctima, serán sancionados con la pena de dieciséis a veinticinco años de reclusión mayor extraordinaria, al pago de la indemnización, el comiso de los objetos y de los bienes producto del delito, a la inhabilidad del empleo, profesión u oficio.

Si la víctima fuere menor de doce años, se aplicará el máximo de la pena.

Art. ... - Quien con violencia, amenaza, intimidación o engaño utilizare a personas mayores de edad, en espectáculos que impliquen la exhibición total o parcial de su cuerpo con fines sexuales, será reprimido con reclusión mayor ordinaria de

cuatro a ocho años.

Art.- Quien organice, ofrezca o promueva actividades turísticas que impliquen servicios de naturaleza sexual, será sancionado con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años y multa de diez mil a quince mil dólares de los Estados Unidos de América y la extinción de la persona jurídica o el cierre de la empresa, si pertenece a una persona natural.

La pena será de reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años, si la víctima fuere una persona menor de dieciocho años de edad y multa de quince mil a veinte mil dólares de los Estados Unidos de América.

Se aplicará la pena de reclusión mayor extraordinaria de nueve a doce años, en los siguientes casos:

1. Cuando la víctima sea menor de doce años;
2. Cuando el ofensor se aproveche de la vulnerabilidad de la víctima o ésta se encontrare incapacitada para resistir, o se utilice violencia, amenaza o intimidación;
3. Cuando el ofensor sea cónyuge, conviviente o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de la víctima; y,
4. Si tiene el infractor algún tipo de relación de confianza o autoridad, o si es representante legal, padrastro o madrastra de la víctima o ministro de culto.

Art.- El que, por cualquier medio, adquiera o contrate actividades turísticas, conociendo que implican servicios de naturaleza sexual con personas menores de dieciocho años de edad, será sancionado con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años.

Art.- El que promueva, induzca, participe, facilite o favorezca la captación, traslado, acogida, recepción o entrega de personas recurriendo a la amenaza, violencia, engaño o cualquier otra forma fraudulenta con fines de explotación sexual, será reprimido con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años. Si la víctima fuere una persona menor de dieciocho años de edad, se aplicará el máximo de la pena.

Se aplicará la pena de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, cuando concurran una o más de las siguientes circunstancias:

1. Si la víctima fuere una persona menor de doce años;
2. Si hay abuso de autoridad, o de una situación de necesidad o vulnerabilidad de la víctima;
3. Si el ofensor es cónyuge, conviviente o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de la víctima;
4. Si el infractor tiene algún tipo de relación de confianza, autoridad, si es representante legal, padrastro o madrastra de la víctima o ministro de culto; y,
5. Si la víctima, como consecuencia del delito, sufre una lesión física o daño psicológico permanente o contrae una enfermedad grave o mortal.

Art.- En el caso de que por la comisión de cualquiera de los delitos de este Capítulo, se produjera la muerte de la víctima, la pena será de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años.

Art.- El que induzca, promueva, favorezca, facilite la explotación sexual de personas menores de dieciocho años de edad, o de las que tienen discapacidad, a cambio de remuneración o cualquier otra retribución, o se apropie de todo o parte de estos valores, será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de seis a nueve años y el comiso de los bienes adquiridos con los frutos del delito y al pago de la indemnización de daños y perjuicios.

Si la víctima es menor de catorce años, la pena será de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años. En caso de reincidencia, la pena será reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años.

Capítulo ...

DISPOSICIONES COMUNES A LOS DELITOS SEXUALES Y DE TRATA DE PERSONAS

Art. ... - En el caso de concurrencia de delitos sexuales y/o de trata de personas, las penas se acumularán hasta un máximo de treinta y cinco años.

Art. ... - En los delitos contemplados en el Título VIII, del Libro II del Código Penal, la acción penal prescribirá en el doble del tiempo de la pena máxima prevista para cada infracción, sin que el plazo pueda exceder de cincuenta años. La pena prescribirá en un tiempo igual al doble de la condena, pero el plazo de prescripción nunca será mayor de treinta y cinco años ni menor de cinco años.

Art. ... - El comportamiento público no privado de la víctima, anterior a la comisión del delito sexual o de trata de personas, no será considerado dentro del proceso.

Art. ... - En los delitos sexuales, el consentimiento dado por la víctima menor de dieciocho años de edad, será irrelevante. En los delitos de trata de personas, el consentimiento será irrelevante.

Art. ... - Si el autor o responsables de la comisión de delitos sexuales o de trata de personas, al momento de cometerse la infracción, ejerce respecto de la víctima su patria potestad o representación legal, será sancionado, además de la pena correspondiente, con la pérdida indefinida de éstas.

Art. ... - Cuando los medios de comunicación hicieren apología de delitos sexuales y de trata de personas, los respectivos representantes legales serán sancionados con multas de hasta veinte mil dólares de los Estados Unidos de América, sin perjuicio del comiso de los productos o medios empleados para su comisión.

En caso de reincidencia, se procederá a la clausura y reversión de las frecuencias o autorización para su funcionamiento.

Art. ... - Lo relacionado con libertad condicional, reducción de penas, modificación de la pena, suspensión del cumplimiento de la pena, condena condicional y libertad condicional, previstas en el Libro I, Título IV, Capítulo II del Código Penal, no se considerarán ni aplicarán para el caso de los delitos contemplados en el Título VIII del Libro II del Código Penal, cuando hubieren sido cometidos en contra de personas menores de dieciocho años de edad.

Art. ... - El que alterare la identidad de un niño; lo sustituyere por otro; suponga un embarazo o parto; entregue o consigne datos falsos o supuestos sobre un nacimiento; usurpare la legítima paternidad o maternidad de un niño; o, declare falsamente el fallecimiento de un recién nacido, será sancionado con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años y multa de quince mil a veinte mil dólares de los Estados Unidos de América."

Dada en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones del Congreso Nacional, el primer día del mes de junio del año dos mil cinco.

FE DE ERRATAS AL CÓDIGO PENAL (R.O. 96, 5-IX-2005)

CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Servicios Parlamentarios

Quito, agosto 25 del 2005

Oficio No. 1403 DGSP

Doctor

Rubén Espinoza Díaz

DIRECTOR DEL REGISTRO OFICIAL

En su despacho.-

De mi consideración:

Por disposición del señor Presidente del Congreso Nacional, doctor Wilfrido Lucero Bolaños y en atención a la solicitud

formulada por la Diputada Miryam Garcés Dávila, díguese publicar en el Registro Oficial, la siguiente fe de erratas.

En la primera línea del tercer artículo innumerado del CAPÍTULO innumerado DISPOSICIONES COMUNES A LOS DELITOS SEXUALES Y DE TRATA DE PERSONAS, de la Ley Reformatoria al Código Penal que Tipifica los Delitos de Explotación Sexual de los Menores de Edad, publicada en el Registro Oficial No. 45 de 23 de junio del 2005, se ha deslizado el siguiente error:

Donde dice: "El comportamiento público no privado de la víctima", debe decir: "El comportamiento público o privado de la víctima".

Petición que la realizo en base a la correspondiente acta de sesión matutina ordinaria del Congreso Nacional, celebrada el día miércoles 1 de junio del 2005.

Atentamente,

f.) Dr. John Argudo Pesántez, Secretario General del Congreso Nacional.

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL (Ley No. 2005-21, R.O. 154, 28-XI-2005)

EL CONGRESO NACIONAL

Considerando:

Que es deber del Estado velar por la seguridad de los habitantes y de sus bienes, entre otras formas, mediante la expedición de las leyes penales que tipifiquen determinadas conductas delictivas que causan alarma social;

Que en los últimos tiempos determinados sujetos, actuando generalmente en pandilla, se introducen por la fuerza en vehículos motorizados sin el consentimiento de sus propietarios o conductores, forzándolos a que los acompañen bajo amenazas y otros medios ilegítimos, con el fin de utilizar el automotor temporalmente para cometer otros crímenes;

Que esta conducta no se encuentra tipificada expresamente como un delito, sin perjuicio de que, según las circunstancias en cada caso, se pudiera llegar a calificar como robo, plagio o asociación ilícita;

Que es necesario legislar con el fin de que los fiscales y jueces no tropiecen con la carencia de tipos penales al tratar de investigar y sancionar conductas que causan daño material y moral a los perjudicados, además de provocar alarma social; y,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales expide la siguiente,

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL, QUE TIPIFICA EL DELITO DENOMINADO "SECUESTRO EXPRESS"

Art. 1.- A continuación del numeral 3 del artículo 189 del Código Penal, sustituido mediante el artículo 8 de la Ley 2001-47, publicada en el Registro Oficial No. 422 de 28 de septiembre del 2001, agréguese los siguientes numerales:

"... con reclusión menor ordinaria de tres a seis años a quien o quienes, mediante amenazas, violencia, seducción, engaño u otros medios ilegítimos, se apoderasen de un vehículo automotor; reteniendo contra su voluntad a su conductor y/o a sus ocupantes, para asegurar el cometimiento del delito;

... con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años, cuando el infractor, en el caso y circunstancias establecidas en el numeral anterior, ponga en marcha el vehículo u obligue al conductor o a otra de las personas retenidas a hacerlo, con el fin de, en compañía de éstas, aunque sin su participación, utilizar el automotor para cometer o intentar cometer otros delitos".

Art. 2.- A continuación del artículo 552 del Código Penal, agréguese los siguientes artículos innumerados:

"Art. ... Serán reprimidos con reclusión menor ordinaria de tres a seis años quien o quienes, habiendo despojado al

conductor o a los ocupantes de un vehículo automotor, lo utilicen con la finalidad de cometer otros delitos, aunque no exista ánimo de apropiación del vehículo.

Art. ... Si como consecuencia del cometimiento de estos delitos se produjeran lesiones graves físicas o daños psicológicos en la o las víctimas, el o los autores serán sancionados con reclusión mayor extraordinaria de ocho a doce años.

Art. ... Serán reprimidos con reclusión mayor especial de 16 a 25 años quienes en el cometimiento de los delitos tipificados en esta Ley, hayan causado la muerte o la incapacidad permanente de la o las víctimas."

Dada, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Congreso Nacional, a los ocho días del mes de noviembre del año dos mil cinco.

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL (Ley No. 2006-31, R.O. 231, 17-III-2006)

Nota:

En la presente edición de la Ley 2006-31 sólo se han incluido las normas que tienen relación con el Código Penal.

EL CONGRESO NACIONAL

Considerando:

Que el artículo 23 (66) de la Constitución Política de la República garantiza los derechos civiles para todos los ciudadanos que habitan en el Ecuador;

Que la venta indiscriminada de armas de fuego sin el permiso correspondiente contribuye de manera alarmante al incremento de la delincuencia;

Que la ciudadanía en general reclama mayor control por parte de las autoridades llamadas a velar por el orden público;

Que es deber fundamental del Estado garantizar la seguridad ciudadana; y,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente:

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL Y A LA LEY DE FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y TENENCIA DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS

Art. 1.- Refórmese el artículo 149 del Código Penal con el siguiente texto:

"El que establezca o mantenga depósitos de armas o municiones de uso militar o policial, y de cualquier otro tipo similar, sin autorización legal de autoridad competente, será reprimido con reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de mil a cinco mil dólares de los Estados Unidos de América".

Art. 2.- En el inciso primero del artículo 160 del Código Penal, cámbiese la frase: "será reprimido con reclusión menor de 3 a 6 años", por la siguiente: "será reprimido con reclusión mayor ordinaria de 4 a 8 años".

Art. 3.- Sustitúyase el artículo 162 del Código Penal, por el siguiente:

"Art. 162.- Los particulares que sin el permiso necesario y sin debida explicación portaren armas de uso militar o policial y de cualquier otro tipo similar, serán sancionados con prisión de uno a cinco años y multa de nueve a cuarenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América.

La actuación dolosa reiterada de este tipo de conducta, será sancionada con una pena de reclusión de tres a seis años.

Corresponde al Ministerio de Defensa Nacional, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas extender el permiso de portar armas; esta facultad podrá ser delegada de conformidad con el reglamento de la materia.

Esta obligación se extiende a las armas que se empleen en industrias y oficios.

Las autoridades militares y de Policía debidamente autorizadas, están obligadas a decomisar y remitir previo el

levantamiento del correspondiente parte de la acción efectuada, a la Dirección de Logística del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, toda arma o munición de procedencia nacional o extranjera, que no contare con los permisos y (SIC) legalmente otorgados.

Todas las armas decomisadas serán registradas en la Dirección de Logística del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y en caso de no justificar el propietario su procedencia, en un plazo de treinta días, serán entregadas a los depósitos de armas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para ser destruidas.

Las armas decomisadas que sirvieran como evidencia de la comisión de infracciones penales se mantendrán como tales bajo la custodia de la Policía Judicial y una vez terminado el juicio penal respectivo, serán registradas en la Dirección de Logística del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y entregadas posteriormente a la autoridad competente.

En los Comandos Provinciales de la Policía de todo el país se llevará un registro en el que se anote el tipo, calibre y características del arma o armas decomisadas y que han sido enviadas a la autoridad militar correspondiente.

Los fabricantes de armas, explosivos y municiones de cualquier tipo, deben registrar sus fábricas o talleres en la Dirección de Logística del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, e informar mensualmente a esta entidad sobre la cantidad, tipo, calibre y características de las armas producidas y el código asignado a cada una de ellas, las cuales obligatoriamente también deberán ser registradas."

Art. 4.- Sustitúyase el artículo 373 del Código Penal, por el siguiente:

"Art. 373.- Prohíbese terminantemente, a los particulares tener en sus domicilios, bodegas o instalaciones de cualquier tipo materiales y explosivos que constituyan elementos de peligro para las personas y propiedades y que deben ser guardados o almacenados en lugares y sitios técnicamente adecuados."

Art. 5.- Sustitúyase el artículo 374 del Código Penal, por el siguiente:

"Art. 374.- Los que tuvieren dichas materias explosivas en domicilios, bodegas o instalaciones de cualquier tipo, están obligados a entregarlas a las autoridades militares o policiales correspondientes, se exceptúan las actividades artesanales dedicadas a la fabricación de juegos pirotécnicos y actividades mineras, siempre y cuando se encuentren almacenadas en lugares no poblados."

Art. 6.- Sustitúyase el artículo 375 del Código Penal por el siguiente:

"Art. 375.- Los que contravinieren las disposiciones anteriores, serán reprimidos con prisión de 2 a 4 años."

Art. 7.- En el artículo 488 del Código Penal, sustitúyase la frase: "... quince días a un año" por: "... dos años a cinco años".

Art. 8.- Derógase los numerales 15 y 54 del artículo 604; y, 4 del artículo 607 del Código Penal.

Art. 9.- Sustitúyase el artículo 624 del Código Penal, por el siguiente:

"Art. 624.- Queda prohibido el usar o llevar consigo armas de cualquier clase, sin permiso previo otorgado legalmente por la autoridad competente.

En caso de que las autoridades competentes para el juzgamiento de las contravenciones decomisen armas de dudosa procedencia, sin permiso legal vigente, deberán levantar el acta correspondiente, e inmediatamente remitirán el arma requisada a la Dirección de Logística del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y si el arma requisada sirviere como evidencia del delito, será puesta a disposición de la autoridad competente."

Artículo Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dada, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Congreso Nacional, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil seis.

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL (Ley No. 2006-63, R.O. 412, 7-XII-2006)

EL CONGRESO NACIONAL

Considerando:

Que los numerales 1, 2 y 20 del artículo 23 (66, num. 1, 2 y 3) de la Constitución Política de la República señalan que el Estado reconocerá y garantizará a las personas la inviolabilidad de la vida, la integridad personal y el derecho a una calidad de vida que asegure la recreación;

Que el artículo 82 (381) de la Constitución Política de la República garantiza la protección y la promoción de la cultura física, el deporte y la recreación como actividades para la formación integral de las personas, disposición que se ve seriamente afectada por la acción vandálica de sujetos que perturban el ambiente de paz que debe de reinar en la actividad deportiva y otros espectáculos públicos;

Que la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en varias de sus disposiciones, establece la protección de todas aquellas personas que pagan un valor para disfrutar de bienes y servicios, entre ellos el de observar un espectáculo deportivo, cultural, artístico o de cualquier naturaleza pública, y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales expide la siguiente:

LEY REFORMATORIA DEL CÓDIGO PENAL

Art. 1.- A continuación del artículo 405, agréguese un artículo innumerado con el siguiente texto:

"Art. ... La destrucción o el detrimento de bienes muebles o inmuebles de propiedad de terceros, cometidas al interior de escenarios deportivos o en sus inmediaciones o demás lugares que por su capacidad, puedan albergar reuniones masivas de público, será reprimida con la pena de tres a seis años de reclusión menor ordinaria."

Art. 2.- A continuación del artículo 473, agréguese un artículo innumerado con el siguiente texto:

"Art. ... Los incitadores o responsables de hechos de violencia dentro de los escenarios deportivos o en sus inmediaciones o demás lugares que por su capacidad, puedan albergar reuniones masivas de público, antes, durante o después del evento deportivo, artístico u otros espectáculos y que causen lesiones a terceros, serán reprimidos con pena de uno a tres años de prisión."

Art. 3.- La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

Dada, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Congreso Nacional del Ecuador, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil seis.

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL (Ley No. 2006-70, R.O. 427-S, 29-XII-2006)

EL CONGRESO NACIONAL

Considerando:

Que la Constitución Política de la República prohíbe toda forma de esclavitud, trato degradante y tráfico de seres humanos en todas sus formas;

Que el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra Mar y Aire, tiene como objetivo la prevención del tráfico ilícito y la colaboración de los países para reprimir este tipo de delitos;

Que la consecuencia del delito de tráfico ilegal de emigrantes ha tenido como resultado la muerte de centenares de ecuatorianos;

Que es necesario adecuar la legislación con el objetivo de que este tipo de delitos no queden en la impunidad;

Que es necesario proteger al emigrante que ha sido víctima de estas personas inescrupulosas, brindándoles ayuda y protección; y,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente:

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL

Art. 1.- Sustitúyase el artículo 440 A y 440 B del Código Penal por el siguiente:

"El que por medios ilegales, promueva, facilite, induzca, financie, colabore, participe o ayude a la migración de personas, nacionales o extranjeras, desde el territorio del Estado Ecuatoriano hacia otros países, siempre que ello no constituya infracción más grave, será reprimido con la pena de reclusión mayor de cuatro a ocho años y multa de veinte a cuarenta remuneraciones básicas unificadas.

Igual sanción se impondrá a los encargados de la protección y custodia de los niños, niñas o adolescentes, sean éstos padre, madre, abuelos, tíos, hermanos o tutores o cualquier otra persona que faciliten de cualquier modo la ejecución de este ilícito.

El Juez competente ordenará la aprehensión e incautación inmediata del transporte clandestino utilizado, cuando accidentado el mismo, resultaren personas muertas o lesionadas, debiéndose destinar el producto del remate del mismo en la forma prevista en el artículo 186 del Código de Procedimiento Penal.

Por los delitos concurrentes a la infracción de tráfico ilegal de emigrantes se establecerá una acumulación de penas de hasta un máximo de veinticinco años de reclusión mayor especial.

Cuando los actos de ejecución del delito de tráfico de emigrantes produjeran la muerte del emigrante, los culpables serán reprimidos con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años y si se produjeran lesiones previstas en los artículos 465, 466 y 467 de este Código, los culpables serán sancionados con la pena de reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años.

Se considerará circunstancia agravante el hecho de haber conocido, o de que sea algo evidente, que el medio de transporte que utilizaba para el transporte de los emigrantes se encontraba en malas condiciones de uso o que no tenga la suficiente capacidad para el número de personas que transportaba.

Con la misma pena se sancionará a los dueños de los vehículos de transporte aéreo, marítimo o terrestre y a las personas que sean parte de la tripulación o encargadas de la operación y conducción, cuando se estableciere su conocimiento y participación en el ilícito.

Las víctimas que den a conocer la identidad de los involucrados en el cometimiento de este delito, serán protegidos por la autoridad respectiva."

Art. 2.- En el artículo 585, sustitúyase la frase: "... con prisión de uno a tres años y multa de treinta y un a trescientos once dólares ...", por la siguiente: "... con prisión de dos a cuatro años y multa de mil dólares de los Estados Unidos de América...".

Art. 3.- En el artículo 586, sustitúyase la frase: "...con prisión de quince días a seis meses y multa de dieciséis a ciento cincuenta y seis dólares ..."; por la siguiente: "... con reclusión de dos a cuatro años y multa de quinientos dólares de los Estados Unidos de América...".

Dada, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala de sesiones del Congreso Nacional del Ecuador, a los diecinueve días del mes de diciembre del año dos mil seis.

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL (Ley No. 2007-85, R.O. 170-S, 14-IX-2007)

Nota:

En la presente edición de la Ley 2007-85 sólo se han incluido las normas que tienen relación con el Código Penal.

EL CONGRESO NACIONAL

Considerando:

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 (408) de la Constitución Política de la República, es deber del Estado velar por la correcta utilización de los recursos naturales en beneficio de toda la población ecuatoriana;

Que los numerales 3 y 4 del artículo 3 (3, num. 5 y 7) de la Constitución Política de la República, establecen que es deber

primordial del Estado defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger el medio ambiente; y, preservar el crecimiento sustentable de la economía, y el desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio colectivo;

Que el subsidio de los combustibles líquidos derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo, asumido por el Estado, ha provocado que personas inescrupulosas hagan uso indebido de aquel, mediante el comercio ilícito de dichos combustibles, derivados de hidrocarburos, lo cual ha generado y genera grave perjuicio económico al Estado;

Que los últimos años se han efectuado sistemáticamente sustracciones fraudulentas de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo, mediante el uso de diversos métodos y formas; hechos que han sido oportunamente denunciados al Ministerio Público, sin que se hayan obtenido acciones concretas en vista de la falta de legislación penal que tipifique expresamente dichas conductas;

Que además las sanciones y penas existentes no guardan relación con la gravedad de las infracciones cometidas y el perjuicio que para el Estado representa dichas conductas;

Que de igual manera, las sanciones administrativas establecidas en la Ley de Hidrocarburos resultan ineficaces para precautelar los intereses del Estado;

Que los delitos y las penas contemplados en la legislación penal ecuatoriana no guardan relación con la naturaleza de las conductas que se desea reprimir, ni con la gravedad de las mismas, por lo que es necesario establecer tipos penales específicos y sanciones condignas, que le permitan al Estado precautelar sus intereses;

Que es necesario que las sanciones punitivas estén expresamente tipificadas en el Código Penal, en el tráfico de combustibles líquidos, derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles;

Que estas prácticas ilícitas dentro de las actividades hidrocarburíferas generan desequilibrios en la oferta y demanda de los recursos hidrocarburíferos;

Que las operaciones de comercio exterior que realiza PETROECUADOR se deben dar en el ámbito de la celeridad que el sector de los hidrocarburos demanda, vista la importancia que este sector tiene para la economía nacional;

Que parte de los recursos económicos que generen las sanciones y multas por aplicación de la presente Ley, serán destinados al mejoramiento de los sistemas tecnológicos, tales como la telemetría, el método de información geométrica, el SCADA; y,

En ejercicio de sus constitucionales y legales, expide la siguiente:

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE HIDROCARBUROS Y AL CÓDIGO PENAL

Art. ... (1).- **Tráfico ilegal de hidrocarburos, sus derivados, gas licuado de petróleo y biocombustibles.**- (Agregado por el Art. 7 de la Ley 2007-85, R.O. 170-S, 14-IX-2007).- Serán sancionados con pena de tres a seis años de reclusión menor ordinaria, multa de un mil a dos mil remuneraciones básicas unificadas para los trabajadores en general y el comiso especial de los bienes y medios de transporte que sirvieron para la comisión del delito, las personas naturales o los representantes legales de las personas jurídicas que por medios fraudulentos, dolosos o clandestinos, vendan, ofrezcan, distribuyan o comercialicen a cualquier título en las zonas de frontera, en puertos marítimos o fluviales o en el mar territorial, a efectos de sacar ilegalmente del país, cualquier hidrocarburo, sus derivados incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles.

Serán sancionados con una pena de reclusión menor ordinaria de seis a nueve años, multa de un mil a dos mil remuneraciones básicas unificadas para los trabajadores en general y clausura definitiva del establecimiento, el propietario o administrador de plantas de abastecimiento, almacenamiento, envasado, centros de distribución, comercializadoras, estaciones de servicio, que estén autorizados para el almacenamiento, transporte y comercialización de combustibles, y que con su acción u omisión y en forma fraudulenta y dolosa, permitan la perpetración del delito señalado en el inciso precedente.

Art. ... (2).- **Almacenamiento, transportación y comercialización sin la debida autorización.**- (Agregado por el Art. 7 de la Ley 2007-85, R.O. 170-S, 14-IX-2007).- Serán sancionados con una pena de prisión de uno a tres años y multa de quinientos a un mil remuneraciones básicas unificadas para los trabajadores en general y el comiso especial de los bienes utilizados para la ejecución del delito, los que comercialicen, almacenen, transporten ilegalmente derivados de hidrocarburos especialmente en las zonas de frontera y mar territorial, sin autorizaciones, guías de remisión y demás permisos exigidos por la ley para la ejecución de dichas actividades. Con iguales penas, serán sancionados el Director de la DIGMER o sus delegados responsables que ilegal y fraudulentamente emitan tales autorizaciones.

Art. ... (3).- **Adulteración de los derivados de hidrocarburos.**- (Agregado por el Art. 7 de la Ley 2007-85, R.O. 170-S, 14-IX-2007).- Serán sancionados con prisión de dos a tres años y el comiso especial de los bienes utilizados para la ejecución del delito, quien de manera fraudulenta o dolosa para obtener beneficio personal o de un tercero, adulterare la calidad o cantidad de los hidrocarburos, sus derivados incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles.

Art. ... (4).- **Uso indebido de derivados de hidrocarburos.**- (Agregado por el Art. 7 de la Ley 2007-85, R.O. 170-S, 14-IX-2007).- Serán sancionados con prisión de un año y el comiso especial de los bienes utilizados en la ejecución del delito, los que en beneficio propio o de terceros, utilizaren derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, en actividades distintas a las permitidas expresamente en la ley.

Art. ... (5).- **Sustracción de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan.**- (Agregado por el Art. 7 de la Ley 2007-85, R.O. 170-S, 14-IX-2007).- Será sancionado con una pena de reclusión mayor ordinaria de seis a nueve años y multa de dos a tres mil remuneraciones básicas unificadas para los trabajadores en general y el comiso de los bienes utilizados en la ejecución del delito, el que por medios fraudulentos o clandestinos se apoderaren de hidrocarburos, sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, cuando sean transportados a través de un oleoducto, gasoducto, poliducto o a través de cualquier otro medio, o cuando se encuentren almacenados en fuentes inmediatas de abastecimiento o plantas de bombeo.

Art. ... (6).- **Perjuicios al Estado y medio ambiente.**- (Agregado por el Art. 7 de la Ley 2007-85, R.O. 170-S, 14-IX-2007).- Será reprimido con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años, el que de manera fraudulenta destruyere la infraestructura hidrocarburífera y/o causare la destrucción o deterioro del medio ambiente, sin perjuicio de que el causante remedie los daños ambientales y la recuperación de los bienes al Estado.

Art. ... (7).- **Destinación de los bienes objeto de comiso especial.**- (Agregado por el Art. 7 de la Ley 2007-85, R.O. 170-S, 14-IX-2007).- Una vez que el fiscal haya determinado la procedencia ilícita de los hidrocarburos, sus derivados, gas licuado de petróleo o biocombustibles, solicitará al juez la entrega de estos a PETROCOMERCIAL a efectos de que ésta le de el uso conveniente a los intereses del Estado. El juez con la solicitud del fiscal dispondrá la entrega inmediata a PETROCOMERCIAL de los bienes utilizados en la comisión de la infracción.

Art. ... (8).- **Sanciones a funcionarios y miembros de la fuerza pública.**- (Agregado por el Art. 7 de la Ley 2007-85, R.O. 170-S, 14-IX-2007).- Si los delitos previstos en este Capítulo fueren cometidos por funcionarios, empleados, servidores públicos o miembros de la Fuerza Pública, quienes de manera fraudulenta y clandestina o por sus acciones u omisiones permitieran la comisión de dichos delitos, se aplicará el máximo de las penas previstas para cada uno de ellos.

Art. ... (9).- (Agregado por el Art. 7 de la Ley 2007-85, R.O. 170-S, 14-IX-2007).- Quien o quienes paralicen o suspendan de manera injustificada el servicio público de expendio o distribución de combustibles, sean estos gasolinas, diesel, gas licuado y demás productos derivados del petróleo o biocombustibles como el etanol, serán sancionados con multa de quinientas a mil remuneraciones básicas unificadas para los trabajadores en general y la revocatoria definitiva del permiso de expendio u operación, otorgado por la Dirección Nacional de Hidrocarburos, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Competencia.- Tendrán competencia para juzgar los delitos previstos en esta Ley, los jueces y tribunales penales de la jurisdicción donde se cometió la infracción o se aprehendieran los hidrocarburos, sus derivados, gas licuado de petróleo o biocombustibles o mezclas que los contengan, conforme lo determina el Título Primero del Código de Procedimiento Penal.

SEGUNDA.- El Ministerio Público como titular de la acción penal, prevendrá en el conocimiento de las causas, dirigirá y promoverá la investigación de los delitos tipificados y sancionados en los artículos precedentes, para lo cual contará con el apoyo de la Fuerza Pública, especialmente de la Policía Nacional, quienes se someterán a las regulaciones establecidas en el Capítulo Primero del Libro Cuarto del Código de Procedimiento Penal; y, de hallarse fundamento acusará a los presuntos infractores, sujetándose al procedimiento penal vigente y al contemplado en la presente Ley y su Reglamento.

TERCERA.- Los recursos económicos que se generen por la aplicación de las sanciones pecuniarias y multas previstas en esta Ley, ingresarán a una cuenta especial que mantendrá la Dirección Nacional de Hidrocarburos, la misma que estará bajo el control y vigilancia de la Contraloría General del Estado. Dichos recursos serán exclusivamente utilizados para tecnología, monitoreo, control y supervisión establecidos en el artículo innumerado que consta en el artículo 6 de la presente Ley.

CUARTA.- Se concede acción popular para la denuncia de las infracciones establecidas en esta Ley, en cuyo caso se reconocerá al denunciante el 25% de la multa impuesta en firme a los autores de las infracciones. La denuncia acarreará responsabilidades de carácter civil y penal en el caso de que el sujeto de control denunciado obtuviere declaración judicial que la califique de maliciosa o temeraria. El reglamento respectivo definirá los requisitos para el ejercicio de la acción popular, el mismo que será expedido en un plazo máximo de sesenta días, a partir de la vigencia de la presente Ley.

LEY INTERPRETATIVA DEL ARTÍCULO INNUMERADO INCORPORADO POR EL

ARTÍCULO 9 DE LA LEY REFORMATORIA DEL CÓDIGO PENAL, PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL No. 45, DE 23 DE JUNIO DEL 2005 (Ley No. 2006-1953, R.O. 350-S, 6-IX-2006)

EL CONGRESO NACIONAL

Considerando:

Que existen dudas en la aplicación de las reformas realizadas al Código Penal, publicadas en el Registro Oficial No. 45, de 23 de junio de 2005, particularmente del artículo innumerado incorporado por el artículo 9 de dichas reformas;

Que conforme consta en las actas del Congreso Nacional, al aprobarse el artículo innumerado agregado por el artículo 9 de la Ley Reformatoria al Código Penal que Tipifica los Delitos de Explotación Sexual de los Menores de Edad, publicada en el Registro Oficial No. 45, de 23 de junio del 2005, la intención y voluntad de esta reforma y el criterio de los legisladores fue que en este artículo se subsumieron los elementos constitutivos de los tipos penales establecidos en los artículos 505, 506 y 507 del Código Penal;

Que constituye un imperativo del estado social de derecho, garantizar la vigencia plena de los derechos humanos, las libertades fundamentales de las personas en un ambiente de seguridad y certidumbre jurídica;

Que para el juzgamiento de este tipo de delitos, el juez que conozca de la causa, se remitirá a cumplir las reglas de aplicación de la pena contenidas en el numeral 2 del artículo 24 (76, num. 5) de la Constitución Política de la República, la disposición contenida en el inciso cuarto del artículo 2 del Código Penal y aquella contenida en el inciso cuarto del artículo 2 del Código de Procedimiento Penal;

Que el Parlamento demostró interés inequívoco para endurecer las penas y precisar, a través de la reforma al Código Penal, la tipificación de los delitos de explotación sexual de los menores de edad; y,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente:

LEY INTERPRETATIVA DEL ARTÍCULO INNUMERADO INCORPORADO POR EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY REFORMATIVA DEL CÓDIGO PENAL, PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL No. 45, DE 23 DE JUNIO DEL 2005.

Art. 1.- Interpretase el artículo innumerado incorporado por el artículo 9 de la Ley Reformatoria al Código Penal que Tipifica los Delitos de Explotación Sexual de los Menores de Edad, publicada en el Registro Oficial No. 45, de 23 de junio del 2005, en el sentido que: "Los elementos constitutivos de las conductas que estuvieron tipificadas hasta el 22 de junio del 2005, en los artículos 505, 506 y 507 del Código Penal, que sancionaban los actos ejecutados en contra de la integridad sexual de las personas menores de edad, pero sin acceso carnal, consideradas como atentado al pudor, no se han eliminado, están subsumidas en el artículo que se interpreta, desde que éste se encuentra en vigencia. Las palabras "someta"; y, "obligarla", que contiene este artículo, se entenderán como actos momentáneos o permanentes para doblegar la voluntad de la víctima y/o como la realización de acciones con las que se pretende conseguir o se consiga, mediante violencia física, amenazas o cualquier forma de inducción o engaño dirigida a que una persona menor de dieciocho años de edad o discapacitada, acepte u obedezca y realice los actos de naturaleza sexual, sin que exista acceso carnal, sea en el propio cuerpo de la víctima, en el cuerpo de un tercero o en el cuerpo del sujeto activo".

Dada, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Congreso Nacional, a los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil seis.

LEY REFORMATIVA AL CÓDIGO DE EJECUCION DE PENAS Y CODIGO PENAL PARA LA TRANSFORMACION DEL SISTEMA DE REHABILITACIÓN SOCIAL (Ley s/n, R.O. 393, 31-VII-2008)

EL PLENO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Considerando:

Que, mediante Mandato Constituyente No. 1 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 223 de 30 de noviembre de 2007, la Asamblea Constituyente en ejercicio de sus plenos poderes asumió las atribuciones y deberes de la Función Legislativa;

Que, el sistema penal y el internamiento tendrán como finalidad la educación del sentenciado y su capacitación para el trabajo, a fin de obtener la rehabilitación que le permita una adecuada reincorporación social;

Que, el Consejo Nacional de Rehabilitación Social, debe integrarse bajo criterios técnicos-jurídicos, a fin de cumplir con las disposiciones constitucionales y de Derechos Humanos, para lo cual debe modificarse la estructura de dicho Consejo;
Que, la rehabilitación social requiere de estímulos claros y determinados, tales como la reducción de la pena, salvo en ciertos delitos, lo que contribuirá a evitar el problema del hacinamiento carcelario;

Que, es necesario establecer un procedimiento para que los internos se beneficien de las rebajas de sus condenas, aplicando oralidad y el debido proceso;

Que, de conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 748, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 220, con fecha 27 de noviembre de 2007, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene como objetivo coordinar, ejecutar y monitorear los programas y proyectos de las diversas entidades involucradas en el sistema de rehabilitación social; y,

En uso de sus facultades expide la siguiente:

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE EJECUCION DE PENAS Y CODIGO PENAL PARA LA TRANSFORMACION DEL SISTEMA DE REHABILITACIÓN SOCIAL

Art. 6.- Interpretese el artículo 57 del Código Penal, sustituido por el artículo 5 de esta Ley, de la siguiente manera: Se entenderá por "prisión correccional" y "casa de prisión" a lugares especializados para la rehabilitación de adultos mayores, que serán administrados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Art. Final.- La presente Ley entrará en vigencia inmediatamente, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y la Gaceta Constituyente.

Dado y suscrito en el Centro Cívico "Ciudad Alfaro", ubicado en el cantón Montecristi, provincia de Manabí de la República del Ecuador, a los veinte y dos días del mes de julio de dos mil ocho.

**LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL QUE TIPIFICA EL DELITO DE GENOCIDIO Y ETNOCIDIO
(Ley s/n, R.O. 578-S, 27-IV-2009)**

EL PLENO DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN

Considerando:

Que, el artículo 10 de la Constitución prevé que las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales;

Que, el segundo inciso del numeral 21 del artículo 57 de la Constitución dispone que la violación de los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley;

Que, el Ecuador ratificó el Estatuto de Roma de 1998 con fecha 17 de diciembre del 2001 y de acuerdo a la Convención de Viena de 1969 Sobre el Derecho de los Tratados, es obligación de los Estados parte cumplirlos de buena fe; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales expide la siguiente,

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL QUE TIPIFICA EL DELITO DE GENOCIDIO Y ETNOCIDIO

Art. 1.- Agréguese antes del artículo 441 del Código Penal, dentro del Título VI del Libro II, el siguiente Capítulo innumerado:

CAPÍTULO...

DE LOS DELITOS DE GENOCIDIO Y ETNOCIDIO

Art. ...- Quien, con propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, perpetre alguno de los siguientes actos, será sancionado:

1. Quien ocasionare la muerte de sus miembros, será sancionado con pena de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años.
2. Quien ocasionare lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de seis a nueve años.
3. Quien sometiere intencionalmente al grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de seis a nueve años.
4. Quien tomare medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de seis a nueve años. La información o acceso a métodos de planificación familiar, métodos anticonceptivos y servicios de salud sexual y reproductiva, no se considerarán medidas destinadas a impedir nacimientos.
5. Quien traslade por la fuerza a niños y niñas del grupo a otro grupo, será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de seis a nueve años.

Art. ...- Quien irrespetare la autodeterminación de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, o su voluntad de permanecer en aislamiento voluntario, incurrirá en delito de etnocidio y será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de tres a seis años.

Art. ...- Quien realizare, con conciencia de que puede producirse la desaparición total o parcial de grupos humanos, actividades tendientes a influir, alterar, o de cualquier manera cambiar la cultura, forma de vida o identidad de los pueblos en aislamiento voluntario, será sancionado con pena de prisión de dos a cuatro años.

Art. ...- El hecho de que las infracciones tipificadas en este capítulo hayan sido cometidas por un subordinado, no eximirá de responsabilidad penal al superior que la ordenó ni al subordinado que la ejecutó.

En todos estos casos, la tentativa será sancionada con la mitad de la pena prevista para el delito consumado.

Art. ...- Las acciones y las penas por los delitos de los que trata este capítulo serán imprescriptibles.

Art. Final.- Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dada y suscrita en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los seis días del mes de abril del dos mil nueve.

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL (Ley s/n, R.O. 160-S, 29-III-2010)

ASAMBLEA NACIONAL

EL PLENO

Considerando:

Que, el artículo 169 de la Constitución declara que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia, y que las normas procesales deben consagrar los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y hacer efectivas las garantías del debido proceso;

Que, a pesar de que el combate de la delincuencia es un tema complejo que supone la actuación eficiente y coordinada de todos los actores involucrados, hay una demanda de distintos sectores sobre aspectos puntuales de la legislación y, por lo tanto, le corresponde a la Asamblea Nacional dar una respuesta en esta materia; y,

En uso de sus atribuciones expide la siguiente,

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

Capítulo I

DE LAS REFORMAS AL CÓDIGO PENAL

Art. 1.- Añádase como segundo inciso del artículo 78, el siguiente:

"La reincidencia, en el caso de la contravención establecida en el numeral 1 del artículo 607, será considerada como delito, de conformidad con el Capítulo I del Título X del Libro II de este Código".

Art. 2.- Añádase, en el artículo 450, el siguiente numeral:

"11. Si ha sido cometido en contra de miembros de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, fiscales o jueces de garantías penales, en el desempeño de sus funciones".

Art. 3.- Sustitúyase el artículo 569 del Código Penal, por el siguiente:

"Será reprimido con reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de América, quien oculte, custodie, guarde, transporte, venda o transfiera la tenencia, en todo o en parte, los bienes, cosas o semovientes, producto del robo o hurto, o cuya procedencia legal no pueda probarse".

LEY REFORMATORIA AL CODIGO PENAL (Ley s/n, R.O. 196-S, 19-V-2010)

ASAMBLEA NACIONAL

EL PLENO

Considerando:

Que, el artículo 168, numeral 3 de la Constitución establece la unidad jurisdiccional, por la que ninguna autoridad ajena a la Función Judicial puede desempeñar funciones de administración de justicia;

Que, es indispensable garantizar, en el juzgamiento de personas que pertenecen al servicio militar y policial, los principios de igualdad, independencia, imparcialidad y juez natural consagrados en los artículos 11 (2) y 76 (7) (k) de la Constitución;

Que, el artículo 160 de la Constitución establece que las personas militares o policías por la comisión de delitos comunes serán juzgados por los órganos de la Función Judicial, y, en el caso de los delitos propios de su función, por juezas y jueces especializados pertenecientes a la misma Función Judicial;

Que, la legislación penal militar y policial vigente, tanto sustantiva como adjetiva, no responde a los principios constitucionales, ni a la materialización de los instrumentos internacionales de derechos humanos;

Que, el Ecuador ha suscrito los Convenios de Ginebra de 1949, los Protocolos Adicionales de 1967 y otros convenios que desarrollan el Derecho Internacional Humanitario, que obligan al Ecuador a adecuar su sistema jurídico penal;

Que, es ineludible en consecuencia, desarrollar una normativa penal, militar y policial acorde al mandato concreto del numeral 10 de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución de la República; y,

En uso de sus atribuciones y facultades constitucionales y legales,

Expide:

La siguiente:

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL PARA LA TIPIFICACIÓN DE LOS DELITOS COMETIDOS EN EL SERVICIO MILITAR Y POLICIAL

Art. 1.- Añádase a continuación del artículo 29 del Código Penal el siguiente artículo innumerado:

Art.- Atenuantes en delitos de función de servidoras o servidores militares o policiales.- Para la imposición de las penas por los delitos de función de servidoras o servidores militares o policiales, se aplicarán las atenuantes contempladas en este código para los delitos comunes, cuando estas circunstancias concurren en el hecho.

Art. 2.- Añádanse a continuación del artículo 30 del Código Penal los siguientes artículos innumerados:

Art. ...- Son agravantes de los delitos de función de servidoras y servidores policiales, además de las circunstancias señaladas en el artículo 30, las siguientes:

1. Si el delito se comete con el uso de armas, o en grave conmoción interna; o,
2. Si el accionar produjere el fracaso de una operación policial.

Art. ...- Son agravantes de los delitos de función de servidoras o servidores militares, además de las circunstancias señaladas en el artículo 30, cualquiera de las siguientes:

1. Si el delito se comete con el uso de armas o en conflicto armado; o,
2. Si el accionar produjere el fracaso de una operación militar.

Art. 3.- Añádase en el Libro I del Código Penal, a continuación del Título IV "De las Penas", el siguiente Título con el siguiente articulado:

Título V

Normas Comunes para la aplicación de las penas en los delitos de función cometidos por servidoras o servidores militares y policiales.

Art. ... (114.3).- Servidora o servidor militar y policial.- Se considera servidora o servidor militar al personal permanente en servicio activo que consta en los escalafones de las Fuerzas Armadas, a los reservistas incorporados al servicio activo; y los ciudadanos que cumplen el servicio militar voluntario.

Se considera servidora o servidor policial a quien haya adquirido la profesión policial y se encuentre en servicio activo.

En ningún caso las ciudadanas o ciudadanos civiles podrán ser juzgados bajo estas normas.

Art. ... (114.4).- Delitos de función militar o policial.- Delitos de función militar o policial son las acciones u omisiones tipificadas en el presente Código, cometidas por una o un servidor militar o policial en servicio activo, que se encuentre en relación directa, concreta, próxima y específica con su función y posición jurídica de acuerdo a la misión establecida en la Constitución y demás leyes aplicables, que afecten a las personas, a los bienes o a las operaciones de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Los delitos de función pueden cometerse en tiempo de paz o durante conflicto armado internacional o no internacional.

Las servidoras o servidores militares o policiales serán juzgados y sancionados con estricta observancia a los derechos y garantías constitucionales.

Art. ... (114.3).- Operaciones conjuntas de las y los servidores militares y policiales.- Cuando por motivos de conflicto no internacional o internacional, estados de excepción o cualquier otra situación excepcional debidamente establecida en la ley, operasen conjuntamente los servicios militares y policiales y se cometiere algún delito de función, se aplicará la pena que corresponda a la función o servicio encargado de responder ordinariamente en la situación.

Art. ... (114.4).- Responsabilidad subsidiaria del Estado.- Para efectos de la responsabilidad subsidiaria y civil del Estado en los delitos de función cometidos por servidoras o servidores militares o policiales, se aplicarán las disposiciones

generales previstas en la Constitución y la ley.

Art. ... (114.5).- Obediencia debida.- Los mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán responsables por las órdenes que impartan. La obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes las ejecuten. Ningún subordinado o subordinada podrá eludir su responsabilidad penal con la obediencia prestada a su superior en la perpetración de un delito.

Es imputable a todo superior la responsabilidad por las órdenes que imparta y las consecuencias de la omisión en el cumplimiento de sus deberes.

Art. ... (114.6).- Imprescriptibilidad.- Las acciones y penas previstas para los delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, o crímenes de agresión a un Estado son imprescriptibles.

Art. 4.- Añádase en el Libro II del Código Penal, a continuación del Título X "De los delitos contra la Propiedad", el siguiente Título con el siguiente articulado:

Título XI

Delitos de función de servidoras y servidores policiales y militares

Capítulo I

De los delitos comunes de función

Art. ... (602.3).- Insubordinación.- Será sancionado con prisión de tres meses a un año, la servidora o servidor militar o policial que:

1. Rechazare, impidiere, o se resistiere violentamente al cumplimiento de orden legítima del servicio;
2. Hiciere peticiones de forma violenta a un superior;
3. Amenazare, ofendiere o ultrajare a un superior;
4. Hiriere o lesionare a un superior, en actos de servicio; o,
5. Sacare tropa armada de una unidad, reparto o instalación, sin orden superior legítima.

Si la infracción se cometiere con armas, se hiciere publicidad de la misma, se cometiere en combate, estado de excepción u operativo policial respectivamente, la pena será de tres a seis años de reclusión menor ordinaria.

Art. ... (602.4).- Sedición.- Serán sancionados con prisión de uno a tres años, las servidoras o servidores militares o policiales que, mediante concierto expreso o tácito, en número de cuatro o más, realizaren cualquiera de los siguientes actos:

1. Desobedecieren órdenes legítimas recibidas;
2. Incumplieren los deberes del servicio;
3. Amenazaren, ofendieren o ultrajaren a un superior;
4. Pretendieren impedir la posesión de cargo de un superior o lo destituyeren de su función; o,
5. Actuaren violentamente para realizar reclamaciones o peticiones al superior.

Si las servidoras o servidores militares o policiales, realizaren alguno o varios de estos actos en tiempo de conflicto armado, estado de excepción u operativo policial respectivamente, serán sancionados con tres a seis años de reclusión menor ordinaria.

Si los hechos tuvieron lugar en situación de peligro para la seguridad de la unidad o del servicio frente a los sediciosos,

acudiendo a las armas o agrediendo a un superior, serán sancionados con la pena de tres a seis años de reclusión menor ordinaria.

Art. ... (602.5).- Conspiración, proposición y apología de la sedición.- Serán sancionados con prisión de tres meses a un año, las servidoras o servidores militares o policiales que realicen conspiración o proposición para cometer el delito de sedición y quienes incitaran a miembros de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional a cometer este delito o hicieren apología de él o de quienes lo cometen.

Art. ... (602.6).- No evitar o no denunciar sedición.- Será sancionado con prisión de tres meses a un año, la servidora o servidor militar o policial que no adoptare las medidas necesarias o no empleare los medios racionales a su alcance para evitar la sedición en las unidades o servicios a su mando o que, teniendo conocimiento de que se tratare de cometer este delito, no lo denunciare a sus superiores.

Art. ... (602.7).- Falsa alarma.- Será sancionado con prisión de tres meses a un año, la servidora o servidor militar o policial que, sin justificación alguna, y con intención de causar daño, produzca o difunda falsa alarma para la preparación al conflicto.

Art. ... (602.8).- Abuso de facultades.- Será sancionado con prisión de tres meses a un año, la servidora o servidor militar o policial que, en ejercicio de su autoridad o mando:

1. Impusiere contra sus inferiores castigos no establecidos en la ley, o se excediere en su aplicación;
2. Asumiere, retuviere o prolongare ilegal o indebidamente un mando, servicio, cargo o función militar o policial;
3. Hiciere requisiciones o impusiere contribuciones ilegales;
4. Ordenare a sus subalternos el desempeño de funciones inferiores a su grado o empleo; o ajenas al interés del servicio; o instare a cometer un delito que ponga en peligro la seguridad de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas;
5. Obtuviere beneficios para sí o terceros, abusando de la jerarquía, grado, función, nivel o prerrogativas, siempre que este hecho no constituya otro delito;
6. Permitiere a personas ajenas o desvinculadas a la institución ejercer funciones que les corresponden exclusivamente a los miembros del servicio militar o policial;
7. Amenazare, ofendiere o ultrajare a un inferior; o,
8. Impidiere arbitrariamente el ejercicio de sus derechos a un inferior.

Art. ... (602.9).- Desacato militar o policial.- Será sancionado con prisión de tres meses a un año, la servidora o servidor militar o policial que se negare a obedecer o no cumpliera las órdenes o resoluciones legítimas que dicten las autoridades civiles o judiciales, siempre que al hecho no le corresponda una pena superior con arreglo a las disposiciones de este Código.

Este delito también se configura cuando la servidora o el servidor militar o policial desobedezca o se resista a cumplir órdenes o resoluciones legítimas de la Policial Judicial, en su función de agentes de autoridad y auxiliares de la Fiscalía General del Estado. El desacato o la resistencia que opusiere la servidora o el servidor militar o policial fundamentada en el rango o nivel jerárquico que ostente, será considerada como agravante.

Art. ... (602.10).- Destrucción o inutilización de bienes.- Será sancionado con prisión de uno a tres años la servidora o servidor militar o policial que destruya o inutilice bienes destinados a la seguridad pública o la defensa nacional.

La pena será de tres meses a un año, cuando por culpa pierda, destruya o inutilice los bienes señalados en este artículo.

Art. ... (602.11).- Violación de correspondencia.- Será sancionado con prisión de tres meses a un año, la servidora o servidor militar o policial que, sin la debida autorización legal, intercepte, examine, retenga, grabe o difunda correspondencia o comunicaciones privadas o reservadas de cualquier tipo y por cualquier medio.

Art. ... (602.12).- Delitos contra la información pública no clasificada legalmente.- Será sancionado con prisión de tres

meses a un año, la servidora o servidor militar o policial que, utilizando cualquier medio electrónico, informático o afín, obtenga información a la que tenga acceso en su condición de servidora o servidor policial o militar, para después cederla, publicarla, divulgarla, utilizarla o transferirla a cualquier título sin la debida autorización. La misma pena será aplicable a quien destruyere o inutilizare este tipo de información.

Si la divulgación o la utilización fraudulenta son realizadas por parte de la persona o personas encargadas de la custodia o utilización legítima de la información, éstas serán sancionadas con el máximo de la pena.

Art. ... (602.13).- Delitos contra la información pública clasificada legalmente.- Será sancionado con reclusión menor ordinaria de tres a seis años, la servidora o servidor militar o policial que, utilizando cualquier medio electrónico, informático o afín, obtenga información clasificada de conformidad con la ley. La misma pena será aplicable a quien destruyere o inutilizare este tipo de información.

La divulgación o la utilización de la información así obtenida, será reprimida con pena de reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años, siempre que no se configure otro delito de mayor gravedad.

Si la divulgación o la utilización fraudulenta son realizadas por parte de la persona o personas encargadas de la custodia o utilización legítima de la información, éstas serán sancionadas con el máximo de la pena.

Art. ... (602.14).- Hurto de bienes de uso policial o militar.- Será sancionado con reclusión menor ordinaria de tres a seis años, la servidora o el servidor policial o militar que hurte material bélico como armas, municiones, explosivos o equipos de uso policial o militar. En el caso de hurto de medicinas, vestuario, víveres u otras especies que afecten al empleo de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, será sancionado con prisión de uno a tres años.

Art. ... (602.15).- Robo de bienes de uso policial o militar.- Será sancionado con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años, la servidora o el servidor policial o militar que robe material bélico, como armas, municiones, explosivos o equipos de uso policial o militar. En el caso de robo de medicinas, vestuario, víveres u otras especies que afecten al empleo de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, será sancionado con reclusión menor ordinaria de tres a seis años.

Art. ... (602.16).- Compra de bienes de uso policial o militar hurtados o robados.- Será sancionado con reclusión menor ordinaria de tres a seis años, la servidora o el servidor policial o militar que adquiera bienes robados o hurtados pertenecientes a la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas o destinados al empleo de estas.

Art. ... (602.17).- Hurto de bienes requisados.- Será culpable del delito de hurto tipificado en este capítulo, la servidora o servidor policial o militar, que por causa de haber practicado requisiciones, se hubiere apropiado de los bienes requisados.

Capítulo II

Delitos de función de servidoras y servidores policiales

Sección I

De los delitos contra los deberes del servicio policial

Art. ... (602.18).- Actos contra ciudadanas o ciudadanos.- Será sancionado con reclusión menor ordinaria de tres a seis años, la servidora o servidor policial que cometiere deportaciones o traslados ilegales, detenciones ilegítimas, toma de rehenes, coacciones para servir a grupos subversivos o privare a cualquier persona de su derecho a ser juzgado de formar ordinaria e imparcial.

Art. ... (602.19).- Elusión de responsabilidades.- Será sancionado con prisión de tres meses a un año, la servidora o servidor policial que eluda su responsabilidad en actos de servicio, cuando esta omisión cause daños.

Art. ... (602.20).- Alteración de evidencias.- Será sancionado con prisión de tres meses a un año, la servidora o servidor policial que ponga en riesgo la obtención o conservación de vestigios, evidencias materiales u otros elementos de prueba para la investigación de un delito.

La sanción será de prisión de uno a tres años, si la servidora o servidor policial destruyere o produjere cualquier alteración de los elementos de prueba.

Sección II

De los delitos contra los deberes de dirección

Art. ... (602.21).- Abstención de ejecución de operaciones en conmoción interna.- Será sancionado con pena de prisión de uno a tres años, la servidora o servidor policial, jefe de servicio o de unidad policial que en tiempo de conmoción interna y sin que lo justifique la situación, dejare de emprender o cumplir una misión, se abstuviere de ejecutar un operativo debiendo hacerlo, o no empleare en el curso de las operaciones todos los medios que exija el cumplimiento de los preceptos de la ley y órdenes legítimas recibidas.

Sección III

De los delitos contra los bienes públicos o institucionales

Art. ... (602.22).- Delitos contra los bienes institucionales.- Será sancionado con prisión de tres meses a un año la servidora o servidor policial que:

1. Ejecutare o no impidiere, en lugar o establecimiento policial, actos que puedan producir incendio o estragos, u originar un grave riesgo para la seguridad de una unidad o establecimiento de la Policía Nacional; o,
2. Ocultare a sus superiores averías o deterioros graves en instalaciones, aprovisionamiento o material logístico a su cargo que sea de uso del personal policial o de servicio.

Art. ... (602.23).- Extralimitación en la ejecución de un acto de servicio.- Será sancionado con prisión de uno a tres años, la servidora o servidor policial que se extralimitare en la ejecución de un acto del servicio, y que como consecuencia de ello, produjera en una persona lesiones con una incapacidad no mayor a los noventa días. Si las lesiones ocasionadas generan en una persona incapacidad superior a los noventa días o incapacidad permanente, será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de tres a seis años.

Capítulo III

Delitos de función de servidoras y servidores militares

Sección I

De las circunstancias particulares de los delitos de función de servidoras o servidores militares

Art. ... (602.24).- Territorialidad.- Serán sancionados los delitos de la función militar cometidos dentro del territorio de la República o a bordo de naves o aeronaves militares o mercantes movilizados para el servicio.

Los delitos de función cometidos por servidoras o servidores militares en el extranjero, con base en el principio de reciprocidad, serán juzgados por los jueces o tribunales que determinen las leyes ecuatorianas.

Sección II

De los delitos contra la seguridad, la soberanía y la integridad territorial de la República

Art. ... (602.25).- Delitos de traición a la Patria.- Será sancionado con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años en tiempo de paz; y con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años en conflicto armado, la servidora o servidor militar que realice alguno o varios de estos actos, aun contra fuerzas aliadas:

1. Desertar hacia las fuerzas del enemigo;
2. Facilitar a las fuerzas del enemigo el ingreso al territorio nacional o a naves o aeronaves ecuatorianas o aliadas;
3. Efectuar acciones hostiles contra un país extranjero con la intención de causar al Ecuador un conflicto armado internacional;
4. Mantener negociaciones con otros Estados, tendientes a someter de cualquier forma al territorio ecuatoriano;

5. Declararse en rebelión mientras el Estado ecuatoriano enfrenta conflicto armado internacional;
 6. Entregar al enemigo territorio, plaza, puesto, posición, construcción, edificio, establecimiento, instalación, buque, aeronave, armamento, tropas o fuerza a sus órdenes o materiales de la defensa; o inducir u obligar a otro a hacerlo;
 7. Dar noticias falsas o distorsionadas acerca de las operaciones del conflicto armado;
 8. No dar aviso de aproximación del enemigo o de circunstancia que repercuta directamente en el conflicto, o en la población civil;
 9. Impedir que las naves, aeronaves o tropas nacionales o aliadas reciban los auxilios y noticias que se les enviaren, con intención de favorecer al enemigo;
 10. Arriar, mandar a arriar o forzar a arriar la bandera nacional, sin orden del Mando en el conflicto armado;
 11. No cumplir una orden legítima o alterarla arbitrariamente con el propósito de perjudicar a las Fuerzas Armadas del Ecuador o beneficiar al enemigo;
 12. Divulgar noticias con la intención de infundir pánico, desaliento o desorden en las tropas, o ejecutar cualquier acto que pueda producir iguales consecuencias;
 13. Mantener con el enemigo relaciones o correspondencia sobre las operaciones del conflicto armado internacional o de las Fuerzas Armadas del Ecuador o sus aliados; o, sin la debida autorización, entrar en entendimiento con el enemigo para procurar la paz o la suspensión de las operaciones;
 14. Poner en libertad a prisioneros de guerra con el fin de que vuelvan a las fuerzas armadas del enemigo, o devolver equipo militar al enemigo;
 15. Ejecutar u ordenar, dentro o fuera del territorio nacional, reclutamiento de tropas para alistarlas en las filas del enemigo, seducir tropas ecuatorianas para el mismo fin o provocar la deserción de éstas; o,
 16. Ejecutar sabotaje con el propósito de dificultar las operaciones militares nacionales o facilitar las del enemigo.
- Art. ... (602.26).- Tentativa, conspiración y proposición de traición a la Patria.- En los casos de traición a la Patria se sancionará la tentativa de conformidad con este Código; la conspiración y proposición serán sancionados con una pena de dos tercios de la aplicable al autor o autores del delito.
- Art. ... (602.27).- Prolongación de hostilidades.- Será sancionado con reclusión menor ordinaria de tres a seis años, la servidora o el servidor militar que prolongare las hostilidades, pese a haber sido notificado oficialmente de haberse acordado la paz, armisticio o tregua con el enemigo.
- Art. ... (602.28).- Espionaje.- Será sancionado con reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años, la servidora o servidor militar que en tiempo de paz:
1. Obuviere, difundiere, falseare o inutilizare información clasificada legalmente y que su uso o empleo por país extranjero o atentare contra la seguridad y la soberanía del Estado;
 2. Interceptare, sustrajere, copiare información, archivos, fotografías, filmaciones, grabaciones u otros sobre tropas, equipos, operaciones o misiones de carácter militar;
 3. Enviare documentos, informes, gráficos u objetos que ponga en riesgo la seguridad o la soberanía del Estado, sin estar obligado a hacerlo; o, de estar obligado por la fuerza, no pusiere tal hecho en conocimiento de las autoridades inmediatamente;
 4. Ocultare información relevante a los mandos militares nacionales; o,
 5. Alterare, suprimiere, destruyere, desviare, incluso temporalmente, información u objetos de naturaleza militar relevantes para la seguridad, la soberanía o la integridad territorial.

Si la servidora o servidor militar, realizare alguno o varios de estos actos en tiempo de conflicto armado, será sancionado con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años.

Sección III

De los delitos contra la seguridad del Estado

Art. ... (602.29).- Rebelión.- Será sancionado con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años, la servidora o servidor militar que, en tiempo de paz, realice uno o varios de los siguientes actos:

1. Se levantara en armas, para derrocar al gobierno o dificultar el ejercicio de sus atribuciones;

2. Impidiera la reunión de la Asamblea Nacional o la disolviera;

3. Impidiera las elecciones convocadas; o,

4. Promoviere, ayudare o sostuviere cualquier movimiento armado para alterar la paz del Estado.

Si la servidora o servidor militar realiza alguno o varios de estos actos en tiempo de conflicto armado internacional o no internacional, será sancionado con reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años.

Art. ... (602.30).- Omisión en el abastecimiento.- Será sancionado con reclusión menor ordinaria de tres a seis años, la servidora o servidor militar que, estando obligado a hacerlo por su función, se abstenga de abastecer a las tropas para el cumplimiento de acciones militares, poniendo en riesgo la seguridad del Estado.

Sección IV

De los delitos contra las operaciones y seguridad de las Fuerzas Armadas

Art. ... (602.31).- Atentar contra la seguridad de las Fuerzas Armadas.- Será sancionado con prisión de uno a tres años, la servidora o servidor militar que atentare contra la seguridad de las Fuerzas Armadas por incumplimiento de sus deberes u obligaciones en forma dolosa, siempre que el hecho no constituya otro delito.

Art. ... (602.32).- Atentar contra el desenvolvimiento de las operaciones militares.- Serán sancionados con prisión de uno a tres años, las y los reservistas que, en caso de conflicto armado, fueren llamados e injustificadamente no concurrieren dentro de cinco días a desempeñar las funciones militares.

Art. ... (602.33).- Atentado contra la seguridad de las operaciones militares.- Será sancionado con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años, la servidora o servidor militar que, en conflicto armado no internacional, se rinda o huya sin haber agotado los medios de defensa y seguridad que exijan los preceptos militares u órdenes recibidas; y con reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años si se comete en conflicto armado internacional.

Sección V

Del delito de desertión

Art. ... (602.34).- Desertión.- Será sancionado con prisión de tres meses a un año, la servidora o servidor militar que, en conflicto armado, abandonare por más de cinco días el puesto, servicio o función que le hubiere sido designado, de forma ilegal e injustificada.

Art. ... (602.35).- Omisión de aviso de desertión.- Serán sancionados con prisión de tres meses a un año, las o los superiores directos o jefes de unidades o repartos que no dieran parte de la desertión de sus subordinados.

Art. ... (602.36).- Circunstancias especiales de desertión.- A los desertores se les impondrá el máximo de la pena si la desertión se cometiere en complot, en territorio enemigo, hurtando, robando o destruyendo los bienes de las Fuerzas Armadas.

Capítulo IV

Delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario

Art. ... (602.37).- Aplicación de disposiciones en conflicto armado internacional o no internacional.- Las disposiciones relativas al conflicto armado internacional o no internacional son aplicables desde el día en que éste tiene lugar, independientemente de la declaración formal por parte de la Presidenta o Presidente de la República o de que decrete el estado de excepción en todo el territorio nacional o parte de él, de acuerdo con la Constitución y la ley.

Se entenderá concluido el estado de conflicto armado internacional o no internacional una vez terminado el estado de excepción por haber desaparecido las causas que lo motivaron, por finalizar el plazo de su declaratoria, por revocatoria del decreto que lo declaró; o, hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad que hubiesen sido afectadas.

Art. ... (602.38).- Personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario.- Para efectos de este capítulo, se consideran protegidas las personas consideradas como tales por los instrumentos internacionales vigentes del Derecho Internacional Humanitario, y en particular, las siguientes:

1. La población civil;
2. Las personas que no participan en hostilidades y los civiles en poder de la parte adversa;
3. El personal sanitario o religioso;
4. Los periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados;
5. Las personas que han depuesto las armas;
6. Las personas que se encuentran fuera de combate o indefensas en el conflicto armado;
7. Quienes, antes del inicio de las hostilidades, pertenecían a la categoría de apátridas o refugiados;
8. Los asilados políticos;
9. El personal de las Naciones Unidas y personal asociado protegido por la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y del Personal Asociado; y,
10. Cualquier otra persona que tenga esta condición en virtud de los Convenios I, II, III y IV de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales.

Art. ... (602.39).- Homicidio de persona protegida.- Será sancionado con reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, mate a persona protegida.

Art. ... (602.40).- Tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes en persona protegida.- Será sancionado con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, torture o infrinja tratos crueles, inhumanos o degradantes a persona protegida.

Art. ... (602.41).- Castigos colectivos en persona protegida.- Será sancionado con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, infrinja castigos colectivos a persona protegida.

Art. ... (602.42).- Mutilaciones y experimentos en persona protegida.- Será sancionado con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, mutile o realice experimentos médicos o científicos o extraiga tejidos u órganos a persona protegida.

Art. ... (602.43).- Lesión a la integridad física de persona protegida.- Será sancionado con reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, afecte o lesione la integridad física de persona protegida, siempre que no constituya otro delito de mayor afectación a la persona.

Art. ... (602.44).- Atentado a la integridad sexual y reproductiva de persona protegida.- Será sancionado con reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, lesione o afecte la integridad sexual o reproductiva de persona protegida. Este delito comprende la violación y las demás conductas que según este Código afecten la integridad sexual o reproductiva.

Art. ... (602.45).- Privación de la libertad de persona protegida.- Será sancionado con reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, prive de la libertad de persona protegida. Este delito comprende:

1. Toma de rehenes;
2. Detención ilegal;
3. Deportación o traslado ilegal;
4. Desplazamiento forzado; o,
5. Demora o retardo en la repatriación.

Art. ... (602.46).- Reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.- Será sancionado con reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, reclute o aliste niñas, niños o adolescentes en las fuerzas armadas o grupos armados, o los utilice para participar en el conflicto armado.

Art. ... (602.47).- Denegación de garantías judiciales de persona protegida.- Será sancionado con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, prive a una persona de las garantías del debido proceso o imponga o ejecute una pena sin que haya sido juzgada en un proceso judicial.

Art. ... (602.48).- Abolición y suspensión de derechos de persona protegida.- Será sancionado con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, declare abolidos o suspendidos los derechos, garantías constitucionales o acciones judiciales de las personas protegidas.

Art. ... (602.49).- Ataque a persona protegida con fines terroristas.- Será sancionado con reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, realice cualquier forma de ataque a persona protegida cuyo objeto o efecto sea aterrorizar a la población civil.

Art. ... (602.50).- Contribuciones arbitrarias.- Será sancionado con reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, imponga contribuciones arbitrarias.

Art. ... (602.51).- Omisión de medidas de socorro y asistencia humanitaria.- Será sancionado con reclusión menor ordinaria de tres a seis años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, omita las medidas de socorro y asistencia humanitaria a favor de las personas protegidas, estando obligado a hacerlo.

Art. ... (602.52).- Omisión de medidas de protección.- Será sancionado con reclusión menor ordinaria de tres a seis años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, omita la adopción de medidas para la protección genérica de la población civil, estando obligado a hacerlo.

Art. ... (602.53).- Obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias.- Será sancionado con reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, obstaculice o impida al personal médico, sanitario o de socorro a la población civil, la realización de las tareas sanitarias y humanitarias que pueden y deben realizarse de acuerdo con las normas del Derecho Internacional Humanitario.

Art. ... (602.54).- Delitos contra los participantes activos en conflicto armado.- Será sancionado con reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, realice cualquiera de las siguientes conductas en contra de un participante activo:

1. Obligarlo a servir de cualquier modo en las fuerzas armadas del adversario;
2. Privarlo del derecho a tener un juicio con las garantías del debido proceso; o,
3. Impedir o dilatar injustificadamente la liberación o repatriación.

Art. ... (602.55).- Ataque a bienes protegidos.- Será sancionado con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, dirija o participe en ataques

contra los siguientes bienes protegidos:

1. Objetos civiles que no constituyan objetivo militar;
2. Bienes destinados a asegurar la existencia e integridad de las personas civiles, como las zonas y localidades destinadas a separarlas de objetivos militares, y los bienes destinados a su supervivencia o atención;
3. Bienes que hacen parte de una misión de mantenimiento de paz o de asistencia humanitaria;
4. Bienes destinados a la satisfacción de los derechos civiles y políticos de la población civil, como los destinados al culto religioso, las artes, la ciencia o la beneficencia;
5. Bienes que hagan parte del patrimonio histórico, cultural, o ambiental; y,
6. Los demás bienes protegidos según el Derecho Internacional Humanitario.

Art. ... (602.56).- Empleo de métodos prohibidos en la conducción de conflicto armado.- Será sancionado con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, emplee métodos de guerra o conflicto armado prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario, y en particular, los siguientes:

1. El padecimiento de hambre a la población civil, inclusive a través de la obstaculización de los suministros;
2. La muerte o lesión a traición de un combatiente enemigo o a un miembro de la parte adversa que participe en el conflicto armado;
3. La utilización de la presencia de una persona protegida como escudo para poner ciertos puntos, zonas o fuerzas militares a salvo de operaciones bélicas, o para obstaculizar las acciones del enemigo en contra de objetivos militares determinados;
4. La orden de no dar cuartel;
5. El ataque a la población civil en cuanto tal;
6. El ataque de los bienes civiles; o,
7. El ataque indiscriminado con la potencialidad de provocar muerte o lesiones a civiles, daños a bienes protegidos, o daños graves o desproporcionados al medio ambiente.

Art. ... (602.57).- Destrucción o apropiación de bienes de la parte adversa.- Será sancionado con reclusión menor ordinaria de tres a seis años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, destruya o confisque los bienes de la parte adversa, sin necesidad militar imperativa.

Art. ... (602.58).- Utilización de armas prohibidas.- Será sancionado con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, produzca, detente, almacene, utilice o distribuya armas prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario, y en particular las siguientes:

1. Veneno o armas envenenadas;
2. Gases asfixiantes, tóxicos u otras sustancias que produzcan el mismo efecto;
3. Armas biológicas, bacteriológicas o tóxicas;
4. Armas químicas;
5. Balas que se ensanchan o aplastan fácilmente en el cuerpo humano, como las balas de camisa dura que no recubren totalmente la parte interior o que tengan incisiones;
6. Armas cuyo efecto principal es la lesión mediante fragmentos que no puedan localizarse mediante rayos X;

7. Minas, armas trampa y otras armas con el mismo efecto;
8. Armas incendiarias;
9. Armas láser cegadoras;
10. Minas antipersonales, con excepción de las obtenidas por personal autorizado del Ejército ecuatoriano, cuando tengan por objeto desarrollar técnicas de detección, limpieza o destrucción de minas;
11. Municiones de racimo; o,
12. Demás armas que por su propia naturaleza causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios, o que surtan efectos indiscriminados.

Art. ... (602.59).- Técnicas de modificación ambiental con fines militares.- Será sancionado con reclusión menor ordinaria de seis a nueve años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, utilice técnicas de modificación ambiental con fines militares, de combate u otros fines hostiles como medio para producir destrucciones, daños o perjuicios vastos, duraderos o graves al medio ambiente.

Art. ... (602.60).- Empleo de medios prohibidos en la conducción de conflicto armado.- Será sancionado con reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, emplee cualquier otro método de guerra o conflicto prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario.

Art. ... (602.61).- Uso indebido de signos protectores, distintivos y símbolos patrios.- Será sancionado con prisión de tres meses a un año, la servidora o servidor militar que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, simule la condición de persona protegida o utilice indebidamente emblemas, banderas, insignias u otros signos de protección contemplados en instrumentos internacionales vigentes, tales como:

1. Bandera blanca;
2. Bandera Nacional, insignias militares o uniformes del enemigo;
3. Insignias o uniforme de las Naciones Unidas u otros organismos humanitarios reconocidos internacionalmente;
4. Emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de 1949; y,
5. Emblemas, denominaciones, señales distintivas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, de conformidad con los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- El proceso administrativo disciplinario que corresponda al mismo hecho que se está investigando en el proceso penal, podrá seguirse de manera independiente sin necesidad de que exista sentencia ejecutoriada en este último.

Segunda.- Ejecución de penas.- Las medidas cautelares de carácter personal y las penas que se impongan a servidoras o servidores militares o policiales, se cumplirán en lugares que garanticen su seguridad; sin perjuicio de la jurisdicción de los jueces de garantías penitenciarias.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Competencia.- A partir de la publicación de esta ley en el Registro Oficial, las y los jueces y tribunales de garantías penales conocerán los procesos penales por delitos militares y policiales iniciados con anterioridad a la vigencia de la presente ley reformativa, de acuerdo con las competencias establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial; y continuarán sustanciándolos de acuerdo con las normas procesales que estuvieron vigentes cuando se iniciaron y a las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, en lo que fueren aplicables. Dichos jueces conocerán, asimismo, los procesos por delitos penales militares y policiales que se inicien luego de la vigencia de la presente ley reformativa, y los tramitarán de conformidad con el Código de Procedimiento Penal.

La Corte Nacional de Justicia, a través de resolución del Pleno, normará la entrega de las causas pendientes a la jurisdicción ordinaria.

Segunda.- Ingreso a la Función Judicial.- Las y los integrantes de los actuales tribunales y juzgados penales militares y policiales, como el personal administrativo en todos los niveles, podrán ingresar a la carrera judicial en la Función Judicial,

siempre que cumplan con lo previsto en el literal e) de la disposición transitoria quinta del Código Orgánico de la Función Judicial. En todo caso, no se considerará ningún privilegio para el ingreso a dicha carrera.

Tercera.- Órganos colegiados para el juzgamiento militar y policial.- Inmediatamente después de la promulgación de esta ley, el Consejo de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial, deberá establecer en los procesos de formación inicial y permanente de fiscales, juezas y jueces, programas de capacitación sobre derecho policial, militar y Derecho Internacional Humanitario.

Cuarta.- Del personal.- En el plazo de trescientos sesenta y cinco días (365) contados desde la vigencia de esta ley, la Asamblea Nacional deberá aprobar la ley sobre personal policial y militar que incluya una actualización de los catálogos de faltas o contravenciones disciplinarias, así como la autoridad competente para juzgar y los procedimientos, respetuosos del debido proceso, para sancionar administrativamente.

Quinta.- Faltas disciplinarias.- Hasta que la Asamblea Nacional apruebe la ley sobre personal policial y militar que incluya la tipificación y sanción de las faltas y contravenciones disciplinarias, las servidoras y servidores policiales y militares serán juzgados por la comisión de faltas disciplinarias al amparo de las disposiciones actualmente vigentes.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Primera.- Deróguese el Código Penal de la Policía Nacional, promulgado en el Suplemento del Registro Oficial 1202 del 20 de septiembre de 1961, y todas sus reformas.

Segunda.- Deróguese el Código Penal Militar, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 356 del 6 junio de 1961, y todas sus reformas.

Tercera.- Deróguense todas las disposiciones generales y especiales que se opongan a la presente Ley.

Disposición final.- Vigencia.- Esta Ley entrará en vigencia una vez promulgada en el Registro Oficial.

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los veintisiete días del mes de abril de dos mil diez.